

CAPÍTULO 9

DESPERTAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y NACIONALISTAS

La intervención militar de Estados Unidos en varios países de América Central y el Caribe alimentó, desde los inicios del siglo XX, los sentimientos de rebeldía en vastos sectores populares, impulsando el desarrollo de la conciencia nacional y las fuerzas nacionalistas y antimperialistas latinoamericanas. Incluso, en algunos lugares, surgieron espontáneos movimientos de resistencia que obligaron a la retirada de las tropas norteamericanas.

Manifestaciones de este fenómeno fueron la espontánea reacción armada de campesinos pobres en Haití, los llamados *cacós*, encabezados por Charlemagne Peralte, enfrentados a los *marines* estadounidenses que habían invadido su país y, en la vecina República Dominicana, la lucha contra los ocupantes extranjeros desarrollada por los *gavilleros*. Sin duda, la más alta expresión de estos movimientos fue la lucha armada de los seguidores de Augusto César Sandino contra la intervención norteamericana en Nicaragua.

Otra expresión de la resistencia latinoamericana a las descarnadas y brutales agresiones de Estados Unidos provino de los propios sectores gubernamentales, protagonizadas por figuras liberales con un ideario nacionalista y de defensa de la patria. Pueden mencionarse los casos relevantes de los mandatarios Cipriano Castro (1908) en Venezuela, José Santos Zelaya (1909) en Nicaragua, Francisco Henríquez y Carvajal en República Dominicana (1916) y los presidentes mexicanos Francisco I. Madero (1911) y Venustiano Carranza

(1914 y 1917). A ese listado debe agregarse la figura del gobernante chileno José Manuel Balmaceda, que de manera precursora enfrentó en Chile la injerencia imperialista, en este caso del capital británico, en una verdadera guerra civil en defensa de los intereses nacionales (1891) y que fue examinada en el capítulo anterior.

No obstante, lo más significativo de la arrancada del siglo xx fue el desarrollo de nuevos movimientos revolucionarios marcados por un programa social avanzado, de corte social, nacionalista y antimperialista, que sacudieron al continente de un extremo al otro. Uno de los más trascendentes fue la revolución mexicana de 1910, que incorporó a las luchas modernas a los pueblos originarios y a amplias poblaciones campesinas y sectores obreros, detrás de un ideario de justicia social y verdadera independencia.

En el plano de la cultura, el clima de efervescencia nacionalista y social se reflejó en la aparición de varias novelas que expresaban los acuciantes problemas que aquejaban a la sociedad latinoamericana sometida por los monopolios imperialistas y dictaduras entreguistas. Así en *La vorágine* (1924), el colombiano José Eustacio Rivera incurrió con profundidad en el tema de la despiadada explotación soportada por los trabajadores de las grandes plantaciones de caucho situadas en medio de la selva.

Por su parte, el venezolano Rómulo Gallegos recogía en *Doña Bárbara* (1929) toda la dura vida en una hacienda patriarcal de Los Llanos de Venezuela, mientras el argentino Ricardo Güiraldes en *Don Segundo Sombra* (1926) describía con crudeza las actividades del humilde gaucho. Casi en forma paralela, hacía su aparición en el Caribe la poesía *negrista* con las *operas primas* del puertorriqueño Luis Palés Matos y el cubano Nicolás Guillén, a la vez que en el campo de la antropología se realizaban las rigurosas investigaciones dedicadas a los aportes de los esclavos africanos y sus descendientes a la formación nacional de Brasil y Cuba, realizadas por Gilberto Freyre y Fernando Ortiz, respectivamente.

ÁUGE DE LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS Y ANTIMPERIALISTAS

Una expresión más radical del despertar de la conciencia antimperialista se registró con el auge de las luchas obreras y la formación de los primeros partidos comunistas, bajo el impulso que representó la Revolución Rusa (1917), así como con el estallido de airadas revueltas campesinas y populares, entre ellas la revolución mexicana de 1910. Otras manifestaciones de ese fenómeno fueron la creciente radicalización de las capas medias, evidenciada con la reforma universitaria de Córdoba (1918), extendida después por casi toda América Latina, anunciando la incorporación del estudiantado a la lucha antimperialista y antioligárquica al lado de los trabajadores.

También debe mencionarse la fundación en Buenos Aires en 1922, por los socialistas argentinos José Ingenieros y Alfredo L. Palacios de la Unión Latinoamericana, con claros contornos antiimperialistas, y el surgimiento del *tenentismo* brasileño (1922), coronado por la larga marcha por el interior del Brasil, entre 1925 y 1927, de la legendaria columna rebelde de Luis Carlos Prestes. A esa relación debe agregarse la vertebración de movimientos patrióticos como el de Sandino en Nicaragua y la fundación de la Liga Antimperialista de las Américas. Los representantes de estas ligas, el cubano Julio Antonio Mella, el ítalo-argentino Vitorio Codovilla, el mexicano José Vasconcelos y el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, participaron activamente en los trabajos del Congreso internacional de Bruselas contra el imperialismo y la opresión colonial (1927).

Haya fue también el creador en 1924, influido por la revolución mexicana y el Kuomintang de Sun Yat Sen en China, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyo lema original era: «Por el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales contra el imperialismo. Por la unión económica y política de Indoamérica».¹ Uno de los fundadores de este movimiento fue el

¹ Eugenio Chang-Rodríguez, *Opciones políticas peruanas*, Trujillo-Perú, Editorial Normas Legales S.A., 1987, p. 118.

destacado pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui, hasta que en 1927 se separó de esta organización tras condenar su anunciada conversión en un partido político peruano más, con un rumbo claudicante y reformista.

En consecuencia, en octubre de 1928, Mariátegui fundó el Partido Socialista del Perú, devenido después de su muerte en Partido Comunista (1930). Dos años antes Mariátegui había dado a conocer sus conocidos *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, primera obra que se propuso aplicar las ideas de Marx a las peculiares condiciones de América Latina.

Sin duda, la revolución mexicana, iniciada en 1910, fue uno de los acontecimientos que más influyó en el extraordinario desarrollo de los movimientos revolucionarios y antimperialistas de las primeras décadas del siglo xx en América Latina, dominada entonces por regímenes antidemocráticos, plegados al capital extranjero y las oligarquías locales. Las consignas agraristas y de reivindicación nacional, primero, y la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, después, concitaron grandes expectativas en el hemisferio, acompañadas de una gran ola de solidaridad y el despertar de sentimientos revolucionarios en vastos sectores populares.

La huella del imaginario mexicano puede encontrarse en la gesta de Augusto César Sandino en Nicaragua y en otros movimientos revolucionarios de la época y se expresó en la fundación de nuevas organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, entre ellas las ligas antimperialistas y federaciones anticlericales. Varios procesos latinoamericanos de la primera mitad del siglo xx fueron marcados de manera directa por la impronta revolucionaria de México y, muy en concreto, por la reforma agraria y la expropiación de empresas extranjeras.

La influencia de la Revolución Mexicana trascendió más allá del ámbito político y social. El reconocimiento del elemento mestizo e indígena como componente esencial en la formación nacional de América Latina impregnó diferentes manifestaciones de la cultura, expresión de lo cual fue, por ejemplo, el muralismo mexicano, e impulsó también novedosas investigaciones etnológicas, encaminadas al conocimiento de las preteridas poblaciones autóctonas del hemisferio.

Gracias al clima creado por el proceso revolucionario de México, a fines de los años veinte y principios de los treinta, se desarrolló en los países latinoamericanos una nueva novelística, que enfatizó en la crítica social. Una muestra de ello fue el creciente interés por reflejar en la literatura los problemas nacionales y, en particular, el tema de la explotación del campesinado. Las campañas educativas masivas, quedaron como referentes que luego fueron imitados en varios lugares del hemisferio.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA DE 1910

A diferencia de la tendencia que había prevalecido en el resto de América Latina en los inicios de la penetración imperialista, en México fue Estados Unidos y no Inglaterra quien primero dominó sus recursos naturales, la esfera productiva y los medios de transporte con una inversión que casi alcanzaba los 900 millones de dólares –en lo fundamental en ferrocarriles, así como en minas de cobre y plata. Esa cifra representaba casi la mitad de todo el capital norteamericano invertido entonces fuera de sus fronteras.

Sin embargo, en los primeros años del siglo xx, el gobierno de Porfirio Díaz, quizá para balancear la enorme influencia norteamericana en la economía y el comercio de México, otorgó cierta preferencia a los ingleses en la emergente producción petrolera. Ello le permitió al Reino Unido controlar la extracción de hidrocarburos en más del 65% (1910).

Desde ese momento, el volumen del capital británico en México ascendió a los 650 millones de dólares. En consecuencia, se agudizaron las rivalidades interimperialistas entre Inglaterra y Estados Unidos por el control de las enormes y variadas riquezas mexicanas, lo que se expresó en un aumento de las presiones de diversa índole que se hicieron sentir en México durante la última etapa del gobierno de Díaz.

Las causas de la revolución mexicana de 1910 se relacionan con los complejos procesos desatados por la prolongada dictadura de Porfirio Díaz, iniciada en 1876 tras la muerte de Benito Juárez

(1872) y el derrocamiento por la fuerza del presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1876). Durante el porfirismo, la reforma liberal fue desviada en provecho exclusivo de la oligarquía terrateniente exportadora y el capital extranjero.

Durante su largo mandato, extendido hasta 1911, Porfirio Díaz no solo estableció un régimen represivo que acallaba a sangre y fuego cualquier brote opositor –como sucedió con las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco (1906 y 1907)–, sino que también permitió que la propiedad latifundista, tanto nacional como foránea, se ampliara a costa del campesinado y las empobrecidas masas indígenas y mestizas. Como resultado de ese masivo proceso de expropiación, la población de México, estimada en 15 millones de habitantes en 1910, vivía en el campo el 77% y el 96.6% de ellos carecía de tierras.

Ese monumental despojo fue acelerado por la actividad de las llamadas «compañías deslindadoras», que con el pretexto de colonizar áreas despobladas, se apropiaron de tierras indígenas, comunales y de los pequeños campesinos. Por esta vía, y también por compras, trampas y otras ilegalidades, la mayor parte de los campesinos e indígenas fueron expulsados de sus parcelas y ejidos.

De esta manera, los trabajadores sin tierras fueron obligados a laborar en pésimas condiciones en la agricultura o en obras de infraestructura, en particular ferrocarriles, mientras se conformaban inmensas haciendas donde revivían viejos métodos serviles como el de los peones *acasillados*. Todo esto explica que en los años que anteceden al estallido de 1910, el campo mexicano fuera sacudido por una oleada de protestas campesinas, rebeliones y la proliferación de bandas armadas.

Contra el régimen porfirista no solo se producían las huelgas y protestas obreras, junto a los espontáneos levantamientos campesinos e indígenas, sino también se erguía la oposición de otros sectores sociales, en particular ciertos estratos de la burguesía y las capas medias. En este sentido, se fueron configurando entre 1900 y 1910 tres líneas principales de oposición: una organizada por el Partido Liberal Mexicano (PLM) –fundado en 1901– de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón; otra en torno a los partidarios del general Bernardo Reyes; y, la tercera, vertebrada en torno al

Partido Antirreleccionista de Francisco I. Madero, creado el 15 de abril de 1910.

El gran descontento que el porfirismo generó en los más disímiles sectores de la sociedad mexicana con su política entreguista y antipopular estalló en 1910. La revolución comenzó cuando Francisco I. Madero, un terrateniente ligado a la relegada burguesía nacional –derrotado en la última reelección fraudulenta de Díaz en junio de ese año– proclamó el Plan San Luis Potosí que llamaba a la insurrección nacional contra la dictadura.

Este programa, elaborado en octubre de 1910, desconocía al gobierno de Díaz, esgrimía la «no reelección» presidencial, ofrecía la igualdad de derechos de mexicanos y extranjeros e incluía vagas promesas de devolución de tierras a los campesinos e indígenas. Además, convocaba para un levantamiento armado que debía estallar el 20 de noviembre de ese mismo año.

Entre los principales jefes surgidos en esta fase inicial de la revolución mexicana se encontraban Emiliano Zapata en Morelos, así como Pascual Orozco y Francisco, *Pancho*, Villa en Chihuahua. Para intentar mellar el filo social de la insurrección, que rápidamente se extendía por todo el país, la oligarquía porfirista –conocida como *científica* por su apego a la filosofía positivista entonces en boga– y los intereses extranjeros obligaron al viejo caudillo a firmar con los representantes de Madero los acuerdos de ciudad Juárez (mayo de 1911).

Este pacto entre los contendientes allanó el camino para entregar el gobierno al líder opositor, a cambio de desmovilizar sus ejércitos campesinos y de mantener intactos el aparato burocrático y las fuerzas represivas porfiristas. Sobre la base de esta transacción interburguesa, Madero pudo ocupar la presidencia –tras el breve interinato de Francisco León de la Barra– el 6 de noviembre de 1911, luego de unos comicios electorales en que no tuvo oposición.

La promesa incumplida de devolver las tierras usurpadas a los campesinos, contenida en el Plan San Luis Potosí, pronto le enajenó a Madero el apoyo de Zapata, quien terminó por enarbolar en Morelos su conocido Plan de Ayala, donde exigía una inmediata reforma agraria (25 de noviembre). Casi a la par, Orozco se volvió a sublevar en Chihuahua (marzo de 1912), mientras Ricardo Flores

Magón daba a conocer un manifiesto anarquista en el que se pronunciaba contra el capital, la autoridad, el clero y la propiedad privada.

Otros levantamientos antimaderistas, claramente identificados con el viejo porfirismo, ocurrieron casi en el mismo lapso protagonizados por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. El primero se produjo a partir del regreso a México del general Reyes, luego de los acuerdos de Ciudad Juárez, aunque este alto oficial fue capturado y enviado a prisión (diciembre de 1911). Por su parte, el general Félix Díaz, sobrino del ex dictador, sublevó el 16 de octubre de 1912 a la guarnición de Veracruz, pero el movimiento fue revertido y encarcelados sus principales jefes.

Estas intentonas reaccionarias contra Madero estaban también motivadas por las medidas nacionalistas y democráticas de su gobierno –que permitieron la fundación en la capital de la Casa del Obrero Mundial– y, sobre todo, por su tolerancia con las protestas obreras y campesinas que sacudían al país. Todo esto fue lo que condujo, el 9 de febrero de 1913, a la «decena trágica» –como fueron denominados los enfrentamientos armados en la capital entre las tropas gubernamentales, divididas en leales y contrarias a Madero–, que culminó con el sangriento golpe de Estado del general Victoriano Huerta, resultado de una descarnada conspiración fraguada en la propia sede de la Embajada de Estados Unidos en ciudad México.

El régimen de Huerta, erigido sobre los cadáveres de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez –asesinados impunemente el 25 de febrero–, fue una reedición, corregida y aumentada, de la dictadura de Porfirio Díaz, quien murió exiliado en Francia a los 85 años de edad (1915). Contra ella se levantaron en armas Zapata en Morelos, donde operaba su denominado Ejército Libertador del Sur, y los titulados *constitucionalistas* de Venustiano Carranza, ex ministro de Madero y gobernador del estado de Coahuila.

Carranza enarboló el Plan de Guadalupe donde se proclamaba continuador del ideario maderista y fue secundado por las fuerzas rebeldes organizadas por los generales Álvaro Obregón, Pablo González y Pancho Villa, este último situado al frente de la poderosa División del Norte. La ofensiva militar contra Huerta se libró en lo fundamental por las tropas de Villa y Obregón, que se desplazaban

por las líneas de los ferrocarriles del centro y el oeste, respectivamente. Por su parte, el Ejército del Noreste, al mando del general Pablo González, desarrollaba una lucha incierta y marginal en los territorios de Tamaulipas, Nuevo León y otras zonas adyacentes a la costa atlántica.

El constante deterioro de la situación política mexicana y la postura pro europea de Huerta condujo en definitiva a los capitalistas estadounidenses –sobre todo los intereses financieros y ferrocarrileros– a pedir desde julio de 1913 una intervención militar en el vecino país. De ahí en adelante, la política de Estados Unidos se dirigió, al margen de algunas incongruencias y vacilaciones, a avivar la guerra civil en México, con la esperanza de que este paso debilitaría los bandos contendientes y facilitaría una solución favorable a sus intereses. El colofón fue el desembarco de tropas norteamericanas en Veracruz el 21 de abril de 1914.

En ese mismo mes los constitucionalistas, en su inexorable avance hacia la capital, tomaron Torreón, mientras por todo México se extendía la insurrección. Pero Huerta resistía más que Porfirio Díaz, pues las clases dominantes tradicionales comprendían que ahora no era posible una componenda como la vez anterior y presentían una mayor amenaza a sus privilegios y propiedades. Aunque Carranza, a diferencia de Zapata y Villa, se había opuesto a incorporar reivindicaciones sociales radicales en su Plan de Guadalupe, estaba decidido a rechazar las dos exigencias fundamentales de la vieja oligarquía: la conservación del ejército federal y la disolución de las fuerzas revolucionarias.

La estrepitosa caída de Huerta, acelerada por los efectos de la ocupación norteamericana de Veracruz, puso de nuevo sobre el tapete las latentes contradicciones entre los componentes burgués y campesino de la revolución. El primero, representado por Carranza y buena parte de sus generales; el segundo, por la División del Norte de Villa y el movimiento zapatista.

Carranza era continuador de la política liberal de Madero, pues se negaba a poner en vigor un programa de reivindicaciones populares fundamentales, mientras se rodeaba de un gabinete formado por intelectuales y figuras representativas de la burguesía, excluyendo en

la práctica a sus propios jefes militares de una participación efectiva en el gobierno. A pesar de ello, la composición social del movimiento constitucionalista se diferenciaba radicalmente del que apoyara a Madero, pues en este no ejercían influencia los viejos hacendados del porfiriato –derrotados y desalojados del poder–, sino un emergente grupo de políticos y oficiales, casi todos procedentes de las heterogéneas capas medias.

Este sector se había ido apoderando de muchas haciendas y negocios de la antigua oligarquía y, por tanto, tenía mucho que perder de retornar el antiguo régimen. Por eso, a diferencia de lo que hizo Madero, ahora se disolvió sin contemplaciones al ejército federal –acuerdos de Teoloyucan, 13 de agosto de 1914– y se expulsó a la burocracia porfirista de sus posiciones en el aparato estatal.

El 10 de octubre de 1914, con el propósito de definir el curso de la revolución, según lo acordado en el Pacto del Torreón (8 de julio), se reunió la Convención Militar de Aguascalientes. Aquí afloraron rápidamente las divergencias que separaban al ejército *constitucionalista* entre un ala campesina (Villa) –que pronto se alió a los representantes del ejército zapatista, invitados al cónclave– y otra burguesa (Carranza-Obregón) de la revolución mexicana.

El gobierno de la convención, encabezado por el general Eulalio Gutiérrez, que había nombrado a Villa comandante en jefe de las fuerzas militares y establecido su sede en la ciudad de México, no era un verdadero poder revolucionario y carecía de capacidad de gestión y autoridad, consecuencia directa de la incoherencia del movimiento campesino para vertebrar una política propia. Ni Villa ni Zapata tenían una proyección nacional de gobierno y solo se preocupaban del tema de los repartos agrarios, con agendas puramente regionales.

Tampoco pudieron establecer un clima de estabilidad en la capital, agobiada por una severa escasez de alimentos, agravada por comerciantes inescrupulosos, y una ola de extorsiones, saqueos y asesinatos. Por si esto fuera poco, los dos líderes campesinos abandonaron la ciudad de México entre los días 9 y 10 de diciembre de 1914.

Mientras los convencionistas controlaban por el momento la capital, además de la mayor parte del territorio nacional, y demostraban su incapacidad para gobernar el país, los seguidores de

Carranza fijaban en Veracruz la sede de un poder alternativo. Desde el principal puerto mexicano, los carrancistas aprobaban apresuradamente decretos sociales, adicionados al Plan de Guadalupe, y una ley agraria (6 de enero de 1915) para dejar sin programa a sus contrincantes.

En gran medida, este era resultado también de la creciente presión ejercida sobre Carranza por la oficialidad nacionalista, que lo obligaron a adoptar disposiciones sociales que terminarían por inclinar la balanza a su favor. Sin duda, ello facilitó después la toma de Puebla y la posterior ocupación de ciudad México por las fuerzas comandadas por Obregón (28 de enero de 1915).

Con su política reformista, los partidarios de Carranza lograron en esa difícil coyuntura atraerse también el apoyo de un amplio sector de la clase obrera. A lograrlo no solo contribuyó la postura nacionalista de Carranza y su respaldo a la formación de sindicatos en el territorio ocupado por sus fuerzas, sino también las contribuciones extraordinarias y requisas impuestas a ricos propietarios y comerciantes por Obregón, tras recapturar la ciudad de México, que aliviaron las penurias de la población urbana.

A partir de ese momento, el avance carrancista fue indetenible. Después de la recuperación de Puebla y la capital, la campaña del Ejército de Operaciones se extendió hacia el centro-norte del país (10 de marzo), en persecución de las fuerzas villistas, mientras las zapatistas quedaban aislados en su bastión de Morelos. Esa ofensiva culminó a mediados de 1915 cuando Obregón derrotó en cuatro grandes batallas –dos de ellas en Celaya (6-7 y 13 de abril) y las otras en Trinidad y Aguascalientes– a la División del Norte, que determinó el repliegue y la disolución de sus efectivos.

A este desenlace contribuyó la llamada invasión punitiva del ejército de Estados Unidos por la frontera norte, en marzo de 1916, enfilado contra los restos de las antiguas fuerzas del jefe de la División del Norte. No obstante, las tropas norteamericanas no pudieron cumplir sus objetivos –entre ellos la captura de Villa– y debieron retirarse de México un año después, ante las protestas de Carranza por esta injerencia extranjera en territorio mexicano y la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.

A mediados de 1916, Pancho Villa reapareció al frente de sus huestes. Ya en octubre hacía un nuevo llamado a la resistencia nacional contra los invasores norteamericanos. Convertida otra vez Chihuahua en el centro de sus operaciones, y con un ejército estimado en más de cinco mil hombres, Villa devino en un verdadero azote a la estabilidad del gobierno carrancista. En noviembre y diciembre de ese año logró incluso tomar transitoriamente las ciudades de Torreón y Chihuahua.

Pero esta vez, el vertiginoso ascenso del villismo no duraría mucho tiempo. Su decadencia comenzó tras ser sorprendido por fuerzas carrancistas en la hacienda Babicora, en abril de 1917, aunque gracias a su experiencia guerrillera logró mantenerse en actividad hasta 1920, cuando finalmente depuso las armas. Tres años después fue asesinado. Sin duda en la derrota de Villa tuvo mucho que ver el cierre de la frontera decretado por Estados Unidos a principios de 1917, que cortó su fuente tradicional de aprovisionamiento.

Casi a la par proseguía en el sur la guerra genocida de Pablo González contra los seguidores de Zapata, que se transformaba otra vez en una campaña de exterminio contra la población campesina. Mediante una proclama, emitida el 11 de noviembre de 1916, González decretó el fusilamiento de todos los zapatistas y a quienes los apoyaran.

Pese a estas duras medidas, se consolidaban las bases campesinas del Ejército Libertador del Sur, pues el antiguo aparato estatal estaba destruido, las haciendas expropiadas y repartidas e instituido un sistema democrático basado en órganos electivos municipales. En esas circunstancias, Zapata pudo pasar a la ofensiva, hasta recuperar su dominio absoluto sobre el territorio de Morelos en febrero de 1917.

Por esta época, Zapata había devenido en un dirigente de estatura nacional, proclamando su solidaridad con los sindicatos –ya reprimidos duramente por Carranza– y ofreciendo todo su apoyo a las reivindicaciones económicas y sociales fundamentales de la clase obrera: derecho de asociación, de huelga, jornada de ocho horas y beneficios sociales. Además, el líder agrarista de Morelos no se limitaba a organizar eficientemente la administración de los territorios liberados, sino que llegó a

incursionar en asuntos de política exterior como ocurrió al saludar la revolución rusa, a la que comparó con la mexicana.

A pesar de que Zapata se esforzaba, en medio de grandes dificultades –agravadas por las crecientes disensiones internas de su movimiento–, por reconstruir la economía y la vida política de los pueblos en Morelos, su aislamiento se acentuaba, sobre todo, tras la promulgación de la constitución de 1917. A fines de ese año, cortadas sus vías de comunicación y aprovisionamiento con el exterior, las tropas de González lograron empujar otra vez a las fuerzas zapatistas hacia las montañas, donde siguió librándose la lucha guerrillera.

En esas condiciones Zapata, engañado por una argucia de las fuerzas enemigas guiadas por el coronel carrancista Jesús Guajardo, a las órdenes del sanguinario Pablo González, fue asesinado a traición en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. El asesinato de Zapata, casi coincidente con la captura, enjuiciamiento y ejecución del lugarteniente de Villa, Felipe Ángeles, en noviembre de 1919, fue precedido de la puesta en vigor de la constitución de Querétaro; acontecimientos que sin duda contribuyeron a consolidar el triunfo carrancista y a estabilizar su dominio sobre el país.

La constitución de 1917, elaborada por una convención constituyente reunida en Querétaro desde el 21 de noviembre de 1916, fue posible por la presión ejercida sobre Carranza por amplios sectores de sus propias fuerzas, que exigían el cumplimiento de las promesas y programas revolucionarios. En la flamante ley fundamental, aprobada el 31 de enero de 1917, fueron incluidos dos célebres artículos (27 y 123) destinados a asegurar a las nuevas clases dominantes, en un momento de agudas confrontaciones internas y externas, el indispensable respaldo popular para consolidarse en el poder.

El artículo 27 declaraba el derecho de los campesinos a la tierra y limitaba las prerrogativas del capital extranjero, al establecer claramente la potestad de la nación para confiscarla en su beneficio. Esto creaba el precedente constitucional para anular el derecho de las grandes compañías foráneas a explotar el hidrocarburo mexicano y abría la posibilidad de su expropiación legal.

Por su parte, el artículo 123 de la constitución de 1917 recogía toda una serie de reivindicaciones de los trabajadores, como el

derecho de sindicalización y huelga, la jornada de ocho horas en la industria y la seguridad social, que la hicieron la más avanzada del planeta. Otras disposiciones progresistas, en su mayoría tomadas de la plataforma de 1906 del Partido Liberal, fueron incluidas en otros artículos, como el 3 referido a la educación y el 130 sobre la secularización de los bienes de la Iglesia. Muchos de ellos fueron adoptados gracias a la actuación en la convención constituyente de figuras del ala nacionalista y de izquierda del carrancismo, entre ellos Francisco J. Mujica y Heriberto Jara.

Con la adopción de la constitución de 1917, se considera terminada la fase armada de la revolución mexicana. Ella recogió un avanzado articulado de corte social y antimperialista, entre ellos la proscripción del latifundio y la nacionalización del subsuelo, aunque más que un compendio de conquistas alcanzadas era todo un programa para las luchas futuras. A pesar de sus limitaciones, y la trágica desaparición del sector más avanzado del campesinado –representado por Zapata y Villa–, la revolución mexicana de 1910 fue el movimiento político-social más radical que hasta ese momento se había producido en el continente americano.

REFORMISMO DEMOCRÁTICO-BURGUÉS EN ARGENTINA Y URUGUAY

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, Argentina y Uruguay consiguieron ciertas ventajas en el proceso de su incorporación a la división internacional de trabajo creada a fines del siglo XIX y principios del XX, que les permitió ir conformando un sector popular urbano con niveles de ingresos más altos que en el resto de América Latina. Ello sentó las bases para que en las primeras décadas de esta última centuria surgieran regímenes políticos que, en cierta forma, se apartaron de la tradicional dependencia y sumisión a los dictados de las grandes potencias.

Factores de diversa índole favorecieron en Argentina y Uruguay el desarrollo de relaciones capitalistas más profundas y extendidas, en el contexto de un tipo de dominación menos directa que no anulaba,

como en las clásicas «repúblicas bananeras» de América Central, la relativa autonomía del estado nacional. En el caso argentino, ello se evidenció con el ascenso al poder en 1916 de Hipólito Irigoyen, candidato de un partido fundado en las postrimerías del siglo XIX: Unión Cívica Radical.

Los radicales, favorecidos por la reforma electoral de 1912 que implantó el sufragio universal masculino y el voto secreto (ley Sáenz Peña), gobernaron el país hasta 1930, cuando la oposición oligárquica, a través de un golpe militar, los sacó del poder. Irigoyen, presidente radical entre 1916 y 1922 y otra vez de 1928 a 1930, realizó una política contradictoria y zigzagueante.

Por un lado, realizó concesiones al movimiento obrero, como el establecimiento de la jornada de ocho horas. Por el otro, daba rienda suelta a la represión, de lo que fue muestra la violencia de la llamada «semana trágica» de diciembre de 1918, mientras ofrecía estímulos a la industria ligera nacional y daba rienda suelta al capital extranjero, salvo en el ramo del petróleo, donde fundó una empresa estatal (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

Otros ejemplos fueron la de entrega de tierras estatales a inmigrantes y campesinos medios, a través de la denominada ley del hogar de 1917, así como su relativa pasividad ante los privilegios de los grandes propietarios; de decidida condena a las intervenciones norteamericanas en el Caribe y Centroamérica y completa abulia frente a la desenfrenada penetración de los capitales de Estados Unidos en diversas ramas de la economía nacional. A su favor, sin embargo, debe mencionarse la digna postura asumida por su gobierno durante la Primera Guerra Mundial y el rechazó el nuevo reparto del mundo propugnado por las potencias imperialistas en la Liga de las Naciones.

Terminado su mandato, en 1922 se impuso la llamada tendencia «antipersonalista» del radicalismo, representada por Marcelo T. de Alvear, quien intentó acercarse a la derecha oligárquica y favoreció en forma más descarnada a los monopolios norteamericanos. El regreso de Irigoyen al poder en 1928, ya anciano y con el radicalismo muy debilitado, junto a la crisis económica de 1929, facilitaron el golpe de Estado militar que abrió la llamada «década infame» en

Argentina, poniendo al país bajo control de los militares al servicio del gran capital nacional y extranjero.

En Uruguay, por su parte, este proceso reformista adquirió sus propios contornos, a causa de la labor desplegada por un hábil político liberal, José Batlle y Ordóñez, líder del tradicional Partido Colorado. Desde su primera administración, de 1903 a 1907 –la segunda transcurrió entre 1911 y 1915, aunque su influencia en la política uruguaya se extendió hasta su muerte en 1933–, Batlle comenzó a echar las bases de la renovación de las instituciones estatales.

Tras liquidar el alzamiento de sus opositores del Partido Blanco (conservador) en 1904, el presidente colorado inauguró toda una era de profundas transformaciones democrático-burguesas que, sin afectar el gran latifundio exportador, impulsaron cierto desarrollo interno. Para ello implantó un capitalismo de estado, fundamentado en ciertas nacionalizaciones, proteccionismo aduanero, impulso a la actividad industrial y la creación de «entes autónomos», como las Usinas Eléctricas del Estado (1911).

También Batlle y Ordóñez promovió un novedoso sistema de gobierno de carácter colegiado inspirado en el de Suiza, sostenido por un Consejo Nacional de Administración para el manejo de todos los asuntos económicos internos. A ello hay que sumar la adopción de una legislación social progresista, que incluía jubilaciones, pensiones, jornada de ocho horas, enseñanza gratuita, descanso semanal y salario mínimo. Gran parte de estas conquistas fueron plasmadas en la constitución de 1917, que incluyó el voto secreto y universal, así como la separación de la Iglesia del Estado.

No obstante, en política exterior el batllismo se manifestó totalmente pronorteamericano, a diferencia de lo que hizo Irigoyen en la Argentina, contrario a las intervenciones de Estados Unidos en América Central y el Caribe. Esta postura de Batlle estaba en consonancia con su apertura al capital y al comercio de Estados Unidos en detrimento del británico: en el quinquenio 1889-1893 Inglaterra vendió a Uruguay entre un 27% y un 32% de sus importaciones y Estados Unidos solo entre el 4% y el 9%, mientras en 1920 las ventas inglesas eran solo 17% y las norteamericanas más del 35%.

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COMUNISTA EN AMÉRICA LATINA

A esa altura de los años veinte el movimiento comunista latinoamericano ya había alcanzado cierto desarrollo. El triunfo de la revolución rusa de 1917 impulsó en los pocos países donde existían partidos socialistas de cierta envergadura, en primer lugar Argentina, Uruguay y Chile, la diferenciación entre elementos radicales (leninistas) y moderados (socialdemócratas) que ya se venía registrando, como eco de los problemas que aquejaban a la II Internacional.

Al mismo tiempo, en varios países latinoamericanos se iban debilitando las fuerzas reformistas y anarquistas en el movimiento obrero organizado, mientras ascendían las influencias marxista bajo el influjo de la revolución bolchevique. Los acontecimientos rusos también encontraron partidarios y propagandistas en diversos periódicos y revistas de izquierda o progresistas e incluso en la propia prensa anarquista, apareciendo en ellos decretos y artículos de Lenin y otros dirigentes comunistas. Incluso figuras revolucionarias como el caudillo agrarista Emiliano Zapata, el pensador socialista argentino José Ingenieros o el líder anarquista Ricardo Flores Magón, saldaroz entusiasmados la revolución de Rusia.

En los países latinoamericanos donde existían agrupaciones socialistas, como el cono sur o México, estas se dividieron o radicalizaron entre 1918 y 1920, y de los sectores partidarios de Lenin surgieron partidos de nuevo tipo (comunistas) que enseguida se afiliaron a la III Internacional. En forma parecida surgieron, a fines de los años veinte y principios de los treinta, aunque en otro contexto histórico-mundial, los partidos comunistas en Colombia, Perú y Ecuador.

En otras repúblicas del continente, en cambio, como Brasil, Paraguay y las repúblicas de América Central, la aparición de partidos comunistas fue el resultado de la radicalización de pequeños núcleos de obreros e intelectuales anarquistas, en un proceso más distendido en el tiempo. Formas intermedias caracterizó la formación de la primeras organizaciones marxistas-leninistas en Cuba (1925), Bolivia (1928), Panamá (1930), Venezuela (1931), Puerto

Rico (1933) y Haití (1934), países donde fueron fruto de la unión de dirigentes obreros revolucionarios e intelectuales de izquierda, proceso promovido por la activa presencia de representantes de la III Internacional. Personalidades latinoamericanas descollantes en este proceso fundacional fueron Luis Emilio Recabarren, en todo el cono sur, José Carlos Mariátegui en Perú y Julio Antonio Mella en Cuba y México.

EL TENENTISMO

El período de la llamada *República Velha* (1889-1930) en Brasil estuvo marcado por grandes turbulencias sociales y políticas, siendo el movimiento *tenentista* el de mayor repercusión. A fines del siglo XIX, la inestabilidad comenzó por las pugnas entre los partidarios de la defenestrada monarquía, los jefes militares artífices de la caída de Pedro II y las distintas tendencias republicanas, ejemplo de lo cual fue la rebelión federalista de Rio Grande do Sul (1892-1897).

Al margen de esos conflictos de las clases dominantes, se produjeron brotes de violencia campesina e intensas luchas obreras, expresión de las reivindicaciones insatisfechas de la mayoría del pueblo brasileño. Entre ellas pueden citarse la actividad de las bandas de asaltantes conocidas como *cangaceiros* —el más famoso fue Lampeao—, que lo mismo robaban en las haciendas que servían de *guardia de corps* de los *coroneles*. La lucha campesina que mayor conmoción causó en esos años fue la de Canudos (Bahía), un movimiento de carácter místico religioso, en ebullición de 1893 a 1897, y que serviría al escritor peruano Mario Vargas Llosa como tema de su novela *La Guerra del Fin del Mundo* (1981).

Brasil tampoco estuvo ajeno a las profundas consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial. Ello se expresó en la eclosión de grandes huelgas obreras en los años de 1917 a 1920 dirigidas por el anarco-sindicalismo local en Rio de Janeiro y Sao Paulo; la fundación del Partido Comunista (1922) por un grupo de intelectuales y dirigentes obreros encabezados por Astrogildo Pereira; el estallido de revueltas campesinas como las del Contestado (1912-1915) en

Santa Catarina, así como a través de la radicalización de sectores de las capas medias que pretendían superar el obsoleto régimen de la oligarquía cafetalera con ciertas reformas nacionalistas y democráticas.

Eso fue precisamente el *tenentismo*, un movimiento militar que dejaría profunda huella en la historia contemporánea de Brasil. El 5 de julio de 1922 comenzó la sublevación de un grupo de jóvenes oficiales que deseaban impedir el acceso al poder de un nuevo representante de la oligarquía, Artur da Silva Bernardes, escogido como primer mandatario por el sistema del «café con leche», como se llamaba con fina ironía a la hegemonía de los ricos ganaderos de Rio Grande do Sul aliados a los poderosos cafetaleros de Sao Paulo.

Bajo el mando del capitán Hermes Rodrigues da Fonseca –hijo del Mariscal de Hierro–, los jóvenes oficiales, en su mayoría tenientes, se apoderaron del fuerte de Copacabana en Rio de Janeiro y la Escuela Militar del Realengo. La rebelión castrense se extendió a otras unidades del ejército, aunque pronto fue aplastada por el ejército.

La última resistencia la escenificó un grupo de 17 oficiales inmolados en la playa de Copacabana. Solo dos tenientes, Antonio Siquiera Campos y Eduardo Gomes, sobrevivieron. Por su parte, las tropas sublevadas en Minas Geraes se rindieron al enterarse del fracaso de la sublevación capitalina.

Al conmemorarse el segundo aniversario de estos sucesos, el 5 de julio de 1924, brotó de nuevo la sublevación *tenentista*, mucho mejor organizada que la anterior, pues logró el control de la populosa ciudad de Sao Paulo. Los rebeldes dieron a conocer un manifiesto donde abogaban por un nuevo gobierno, la elección de una constituyente y reformas políticas, entre ellas el voto secreto y la prohibición de la reelección presidencial.

Cuando fue imposible a los militares rebeldes continuar en Sao Paulo, se retiraron por tren a las zonas boscosas del Paraná, donde resistieron atrincherados por siete meses, rodeados por tropas varias veces superiores. Aunque la rebelión de la armada fracasó, en Paraná se les unieron las fuerzas sublevadas por el joven capitán Luis Carlos Prestes en Rio Grande do Sul, quien terminaría por imponer su tesis de la guerra móvil por el interior del país.

La marcha de la invicta columna Prestes duró varios meses y terminó en marzo de 1927 tras recorrer, a caballo o a pie, trece estados brasileños –más de 26 mil kilómetros– y de celebrar decenas de combates victoriosos contra las fuerzas regulares y bandas de *cangaçeiros* guiadas por 18 generales. Incapacitados para incorporar a las masas populares a un movimiento que se mantenía en los estrechos límites castrenses, sin inscribir en su lucha las reivindicaciones de las clases oprimidas, la columna estaba condenada al fracaso. Pero el recorrido sirvió para que muchos *tenentistas*, conmovidos por la terrible miseria del campo, se radicalizaran.

Incapacitados por sus prejuicios de casta y clase de incorporar a las masas a un movimiento exclusivamente militar, sin inscribir en sus objetivos las demandas económicas y sociales de las masas populares oprimidas, la columna Prestes quedó aislada con sus abstractos objetivos de democratización política. No obstante, muchos *tenentistas*, como el propio Prestes, terminarían radicalizándose y todos, de una u otra manera, estarían llamados a desempeñar un papel destacado en la sociedad y la política brasileñas.

REVERDECER DEL UNIONISMO CENTROAMERICANO

El ideal de la unidad de la América Central, por el que murieron en el siglo XIX figuras como el hondureño Francisco Morazán y el guatemalteco Justo Rufino Barrios, reverdeció con gran fuerza a principios del siglo XX. Ahora el movimiento unionista centroamericano tenía por eje a Guatemala, donde crecía la oposición a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, iniciada en 1898.

El eje del movimiento antidictatorial era la debilitada oligarquía conservadora, que había sido desalojada del poder a partir de la revolución liberal de 1871. También participaban en la lucha anticabrerista algunos representantes de la incipiente burguesía nacional, cuyos negocios se limitaban a una fábrica de cervezas y otra de cemento en la capital, así como ciertas industrias textiles en Quezaltenango. Sus líderes eran figuras prominentes de familias

acaudaladas, entre ellos, Manuel Cobos Batres, el obispo José Piñol y Batres, Emilio Escamilla y Rafael Aycinena.

El movimiento opositor no alcanzó verdadera fuerza hasta que se incorporaron las masas populares y sobre todo los reducidos núcleos de obreros y artesanos. De esta forma, la lucha contra el régimen cabrerista fue también la primera acción importante del naciente proletariado guatemalteco que, por primera vez en la historia, participaba en contiendas políticas.

La utilización de los trabajadores como tropa de choque por los círculos oligárquicos opositores fue posible dada la escasa conciencia clasista de la naciente clase obrera guatemalteca, todavía agrupada en organizaciones mutualistas. Entre estas pueden mencionarse la Sociedad Joaquina (1898), La Gremial de Albañiles, la Sociedad de Tipógrafos, la Central de Artesanos y Albañiles, la Fraternidad de Barberos (1908) y la Federación de Sociedades Obreras (1912).

De todas las organizaciones proletarias, la más influyente era la Federación Obrera de Guatemala para la Protección Legal del Trabajo (FOG), fundada en 1918, que se hallaba dominada por agentes del gobierno y solo tímidamente planteaba algunas reivindicaciones. El predominio de la corriente mutualista en el movimiento obrero, junto a la unificación de las incipientes organizaciones ya existentes en una central «apolítica», determinó que los trabajadores más activos en la lucha anticabrerista, como Silverio Ortiz, Bernabé Salazar y Eusebio Castillo, vertebraran su propia asociación. Así nació, en julio de 1919, el Comité Patriótico Obrero, que más tarde se convirtió en la Liga Obrera.

Por su parte, los grupos burgueses y conservadores opuestos al régimen de Estrada Cabrera también creaban en 1919 su propia organización: el Partido Unionista. La agrupación adoptó un programa que giraba en torno a la reconstrucción de la unidad centroamericana en el centenario de la independencia. La plataforma incluía, junto a ciertas invocaciones religiosas, la demanda de elevar el nivel de vida de la población y de mejorar la instrucción pública, así como el derrocamiento de la dictadura y la formación, mediante elecciones libres, de un gobierno democrático de tipo parlamentario.

Con estas banderas, el movimiento anticabrerista creció en forma extraordinaria, mientras se incrementaba el descontento popular debido al incesante deterioro de la economía. Huelgas obreras –como la ferroviaria–, manifestaciones populares, protestas públicas y motines, pusieron en crisis a la dictadura que, tras resistir estos embates durante toda una semana, cayó finalmente el 9 de abril de 1920. Estrada Cabrera fue declarado «enfermo mental» y encarcelado –moriría en prisión tres años después– y en su lugar asumió la presidencia el magnate azucarero Carlos Herrera.

El gobierno de Herrera constituyó un breve paréntesis democrático. Durante su mandato, fue disuelto el abyecto congreso cabrerista y el 23 de junio se convocó a una Asamblea del Estado, llamada así pues Guatemala, siguiendo el ideario unionista, pasaba a integrarse en una federación con el nombre de República Mayor de Centroamérica, a la que también se habían adherido El Salvador y Honduras.

Otras medidas del gobierno de Herrera, dictadas bajo la presión parlamentaria, fueron la anulación de los contratos realizados en 1908 por la dictadura con la United Fruit Company (UFCO), cancelándose además la bochornosa concesión de la antigua planta eléctrica alemana, expropiada por Guatemala durante la Primera Guerra Mundial, a la Electric Bond and Share. Las medidas soberanas del presidente, quien tampoco aceptó las recomendaciones de la comisión presidida por Edwin Kemmerer para una reforma monetaria, le granjearon la hostilidad de Estados Unidos y sus aliados internos.

Para hacer más difícil la estabilidad gubernamental, la economía continuaba empeorando ante la indetenible caída de los precios del café en los mercados internacionales. Cuando Herrera se negó a contraer un nuevo empréstito con la banca norteamericana el ejército no esperó más y lo derrocó el 5 de diciembre de 1921.

El golpe de Estado contra el gobierno de Herrera estaba encabezado por militares de filiación liberal positivista. Ellos eran José María Orellana, Miguel Larrave y José Miguel Lima. La jefatura del nuevo régimen quedó en mano del general Orellana, ratificado por la disuelta asamblea cabrerista. Fue este mismo órgano el que

sancionó, el 14 de enero de 1922, la salida de Guatemala del efímero Pacto Federal.

Por su parte, el general Orellana derogó las disposiciones nacionalistas y democráticas de Herrera, aplicó la cuestionada reforma bancaria –fundación del Banco Central de Guatemala con capital mixto y establecimiento del quetzal como moneda oficial– y pagó una generosa compensación de un millón de dólares a la International Railway of Central America (IRCA), a cambio de una hipotética participación estatal en las utilidades de la empresa. Además, exoneró de impuestos a la UFCO y legalizó (1924) sus plantaciones en el litoral atlántico (Izabal).

Las luchas obreras contra la dictadura de Estrada Cabrera y las frustraciones posteriores, estimularon la radicalización de un grupo de vanguardia de la clase obrera guatemalteca. Ello ya pudo advertirse en el propio 1921, cuando en medio del clima democrático creado por Herrera aparecieron los primeros sindicatos, todavía con apreciables contingentes de artesanos en sus filas. Como parte de este proceso de concientización surgió Unificación Obrera, que poco después adoptaría el nombre de Unificación Obrera Socialista, clara muestra de su inclinación política.

Esta organización, en la que ejercían cierta influencia las ideas marxistas, quedó disuelta a raíz del golpe militar del general Orellana. Atacada por el aparato represivo del gobierno, la Unificación Obrera Socialista se fragmentó. Los más moderados terminaron atrapados por la maquinaria de los partidos tradicionales. Otro sector fundó una débil agrupación socialdemócrata llamada Partido Laborista. En cambio, un tercer grupo participó activamente en 1922 en la fundación de la sección guatemalteca del Partido Comunista de Centroamérica.

LA MATANZA DE LAS BANANERAS EN COLOMBIA

El principal problema que debieron enfrentar en Colombia los gobiernos conservadores y pronorteamericanos que dominaban la política nacional fue el despertar de las luchas sociales, en particular

de la clase obrera. El número de trabajadores había crecido en forma significativa como resultado de la modernización del país, el desarrollo de la infraestructura –puertos, ferrocarriles, electricidad, etc.–, la expansión de la economía de enclave –bananos y petróleo– y el despegue de la industria, particularmente en Antioquia, Barranquilla y Bogotá.

Fiel reflejo de ello, fue que los periódicos obreros se multiplicaron, entre ellos *El Ideal Obrero*, *El Socialista* y *El Obrero Moderno*, algunos bajo el influjo del pensamiento revolucionario del general Rafael Uribe Uribe. Este prestigioso líder liberal de inclinaciones socialistas, había sido asesinado en 1914, casi al mismo tiempo que se producían los primeros intentos de formar un partido marxista en Colombia.

En ese contexto, el 3 de enero de 1918, se inició una de las primeras grandes huelgas de Colombia, al parar en sus labores los obreros portuarios de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, movimiento que se repitió al año siguiente en Girardot y Honda. La huelga fue dirigida por trabajadores ya permeados por ideas marxistas, pues a diferencia de otros países latinoamericanos la presencia anarco-sindicalista en el movimiento obrero colombiano era relativamente menor, debido quizás a la escasa influencia de inmigrantes.

A principios de 1919, se produjeron airadas protestas públicas en Bogotá por un contrato suscrito por el gobierno para adquirir en el extranjero los uniformes del ejército. La represión gubernamental contra los trabajadores y artesanos urbanos provocó la muerte de varias personas y el encarcelamiento de otras.

Al año siguiente, hubo nuevas huelgas en fábricas de Medellín, encabezados por Betsabé Espinosa, una activa líder femenina, en reclamos de aumentos salariales, al tiempo que se realizaban paros en el ferrocarril de La Dorada, propiedad de una compañía inglesa, y entre los trabajadores portuarios de Barranquilla y Puerto Colombia. En medio del ascenso de las protestas obreras, aparecieron los primeros sindicatos colombianos, favorecidos por las leyes que el gobierno se vio obligado a adoptar entre 1919 y 1920, entre ellas el reconocimiento del derecho de huelga de los trabajadores.

Ya a fines de 1918 había surgido la Confederación de Acción Social, algunos de cuyos dirigentes organizaron un partido obrero

de tendencia socialista, permeado por el liberalismo. Ya en las elecciones de 1921, el Partido Socialista logró en los barrios obreros de Medellín el 23% de los votos, mucho más que el alcanzado por el Partido Liberal (15%). En los comicios de 1922, los socialistas, encabezados por Juan de Dios Romero, Jorge Uribe y Salvador Murcia, apoyaron la candidatura del general liberal Benjamín Herrera.

En 1924 se celebró en Bogotá el primer congreso obrero, dominado por la ideología liberal, al que asistió el propio presidente de la República. Aprovechando las sesiones de este congreso de trabajadores reunido en la capital, y con algunos de los mismos delegados, se celebró la conferencia socialista nacional. El 5 de mayo de ese año, ella aprobó por amplia mayoría la adhesión del Partido Socialista a la Internacional Comunista de Moscú.

El tercer congreso obrero, celebrado en 1926 –dirigido por el sindicalista Ignacio Torres Giraldo y la líder antioqueña María Cano–, se produjo en medio de una marcada radicalización de las luchas populares, de marcado carácter antimperialista. Prueba de ello fue la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR), pese a la resistencia de los líderes anarquistas Carlos F. León y Juan de Dios Romero.

El PSR, encabezado por Tomás Uribe Márquez, tenía entre sus miembros a figuras destacadas en las luchas obreras como Torres Giraldo, María Cano, Raúl E. Mahecha y Francisco de Heredia. En el proceso de acercamiento al marxismo leninismo de muchos de estos líderes socialistas había influido la prédica revolucionaria del emigrado ruso Silvestre Savitski, que fue expulsado del país en agosto de 1925.

En forma simultánea se iban organizando los estudiantes, que celebraron su primer congreso en Medellín en 1922, de donde saldría la Federación Nacional de Estudiantes. También en el seno del movimiento estudiantil se desarrollaría, desde 1927, un sector proclive al marxismo, donde figuraba Diego Montaña Cuellar.

En forma simultánea se intensificaban las huelgas y paros obreros. En octubre de 1924, los trabajadores de la Tropical Oil Company fueron a la huelga, llegando a ocupar la ciudad de Barrancabermeja. Este movimiento se extendió a Magdalena, Ambalema, Beltrán,

Girardot y La Dorada, así como a los trabajadores que construían un oleoducto.

Pero la huelga fue reprimida con gran violencia por el gobierno conservador, lo que no impidió que en 1927 se produjera otro intento similar contra la Tropical Oil Company, en esta ocasión con el saldo de dos obreros muertos. La huelga petrolera de 1927 y los paros de solidaridad de otros sectores proletarios fueron un verdadero hito en la historia del movimiento obrero colombiano.

El cuatrienio presidencial de Nel Ospina –y la primera etapa de su sucesor Miguel Abadía Méndez, extendida de 1926 a 1930– estuvo caracterizado por una bonanza económica que algunos llamaron la «danza de los millones». Entre los factores que la propiciaron estaban los altos precios del café en el mercado mundial –extendidos hasta fines de esa década–, y el inusitado crecimiento de las exportaciones colombianas, triplicadas entre 1923 y 1928, sobre todo de café, que llegó a representar más del 70% de ellas.

Al mismo tiempo fue implantada una nueva política financiera, propuesta por el técnico norteamericano Edwin Kemmerer, quien trasplantó a Colombia los modelos impositivos y financieros de Estados Unidos. Bajo su orientación, se constituyeron el Banco de la República –único autorizado para emitir papel moneda– y la Contraloría, se adoptó una ley bancaria, acompañada de una completa reforma del sistema fiscal y contable del Estado, a la vez que se otorgaban garantías a los inversores estadounidenses.

Como resultado de ello, la dependencia de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. En 1928 los préstamos norteamericanos superaban los 200 millones de dólares, a los que deben sumarse el monto del capital de Estados Unidos ubicado en el petróleo, banana, ferrocarriles y servicios públicos, calculado en unos 180 millones de dólares (1928). Por añadidura, la participación estadounidense en el comercio colombiano pasó de un valor de 61 millones de dólares en 1913 a 200 millones en 1929.

Fue en esas condiciones que las luchas sociales llegaron a su clímax. A esto contribuyó que en 1928 el Partido Socialista Revolucionario, que aglutinó a los primeros núcleos marxistas-leninistas colombianos, fuera admitido en la Internacional Comunista,

lo que impuso en esta organización la línea insurreccional conocida de «clase contra clase».

El conflicto de las bananeras se desató el 6 de octubre de 1928 en la provincia de Santa Marta, en contra del enclave agrícola de la United Fruit Company, empresa que violaba de manera sistemática las leyes laborales colombianas. La lucha obrera contra el monopolio frutero alcanzó grandes proporciones, pues los trabajadores agrícolas contaban con el apoyo de comerciantes y agricultores de la región, también afectados por el poderío y los métodos monopólicos de la empresa norteamericana.

La huelga fue encabezada por el comunista Raúl Eduardo Mahecha y José Russo y comprendió a los 20 mil obreros de costa atlántica colombiana. Durante tres semanas, los trabajadores de la United Fruit abandonaron pacíficamente sus labores, mientras el gobierno de Abadía Méndez establecía el estado de sitio.

Los obreros bananeros, dirigidos por la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena, exigían entre otras reivindicaciones, un contacto colectivo de trabajo, jornada de ocho horas, descanso dominical, aumento de los salarios y la superación de pago en vales. La unión de los obreros y la incapacidad gubernamental para quebrar la huelga, provocó que el general Carlos Cortés Vargas se decidiera a reprimir de forma sangrienta a los trabajadores.

El 6 de diciembre las tropas masacraron en forma indiscriminada a los obreros en la estación del ferrocarril de Ciénega, dejando en la zona a varias decenas de trabajadores muertos, entre ellos el líder del movimiento, Erasmo Coronel. La brutal acción gubernamental levantó protestas por todo el país.

La violencia de la represión gubernamental provocó sublevaciones populares, encabezadas por los dirigentes comunistas. Estas rebeliones alcanzaron grandes proporciones en Líbano, Santander, Tolima, San Vicente y Valle, en las que se destacaron los trabajadores ferroviarios.

En 1929, los dirigentes del Partido Socialista Revolucionario se reunieron en Bogotá, luego de las protestas populares de principios de junio de ese año por la destitución del alcalde de Bogotá Luis A. Cuervo, y continuaron adelante con sus planes insurreccionales,

produciéndose infructuosos levantamientos armados en varios lugares del país. El gobierno contrató entonces en la Italia fascista una misión para que asesorara a las fuerzas gubernamentales en métodos represivos más efectivos y regímenes carcelarios rigurosos.

En medio de la efervescencia revolucionaria, sobrevino la inesperada crisis económica capitalista de 1929 que derrumbó los precios del café y agravó repentinamente la ya difícil situación de los trabajadores. En estas circunstancias, el Partido Liberal se reestructuró, incorporó en su programa algunas demandas populares y cierta orientación nacionalista, y con estas características se presentó a las elecciones de 1930.

El Partido Liberal trató de canalizar en su favor los desmanes del gobierno conservador y las crecientes inquietudes e insatisfacciones populares, por lo que desplegó una campaña antigubernamental por la masacre de Santa Marta que fue dirigida por el joven líder Jorge Eliécer Gaitán. Como resultado de todo esto, el régimen conservador se desplomó, pues en las elecciones presidenciales triunfó el antioqueño Enrique Olaya Herrera, candidato de los liberales.

NUEVOS AVANCES DE LA DOMINACIÓN IMPERIALISTA

Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial tuvieron un profundo significado, pues se ahondaron las diferencias entre los intereses de las grandes potencias imperialistas y el de los pueblos explotados de este continente. Al mismo tiempo, Estados Unidos devino centro financiero de todo el planeta y sus monopolios intensificaron la penetración económica en América Latina, lo que trajo aparejado la agudización de las pugnas interimperialistas en la región, preludio de una nueva conflagración mundial.

La terminación de la Primera Guerra Mundial no produjo de inmediato el fin de la bonanza en la economía latinoamericana, aun cuando se registró una paulatina y cada vez más sensible caída de los precios de sus exportaciones y la quiebra de muchas industrias sustitutivas después del restablecimiento de las importaciones de manufacturas y productos fabriles. Pero en 1920 sobrevino de nuevo

una crisis de superproducción, que liquidó de golpe las ilusiones de un ininterrumpido proceso de prosperidad, aunque sin evidenciar todavía la caducidad de las viejas estructuras como se pondría de manifiesto a fines de esa misma década.

En consecuencia, entre 1914 y 1929, los ritmos de crecimiento de las inversiones norteamericanas en América Latina superaron de manera considerable a las inglesas, pues mientras estas pasaban en ese lapso de 5,589 a 4,983 millones de dólares, las de Estados Unidos lo hacían de 1,242 a 5,587 millones de dólares. Además, la tercera parte de todas las inversiones norteamericanas en el extranjero se concentraba en este hemisferio.

Otra prueba de la creciente superioridad de Estados Unidos estaba en el terreno financiero. En los años veinte los bancos estadounidenses concedieron empréstitos a las repúblicas latinoamericanas por un monto de 2,175 millones de dólares, mientras los ingleses se limitaban a 650 millones. También en la esfera mercantil, Estados Unidos aventajaba a Inglaterra: en 1929, el 34% de las exportaciones y el 39% de las importaciones de América Latina eran con los norteamericanos, mientras la proporción inglesa era del 19% y el 15%, respectivamente.

La creciente influencia de Estados Unidos en la región también puede medirse por la fuerza que iba cobrando el panamericanismo. Sus viejos planes de institucionalizar la alianza con los países latinoamericanos, para dejar fuera del juego a las otras potencias imperialistas, rindieron sus primeros frutos durante la década del veinte en las conferencias de Santiago de Chile (1923) y, sobre todo, de La Habana (1928), donde se aprobó una convención diseñada para regularizar el funcionamiento de la Unión Panamericana.

De esta forma, los países latinoamericanos, y en primer lugar los de Centroamérica y el Caribe, terminaron atrapados en las redes del capital foráneo, fundamentalmente norteamericano, que los convirtió en verdaderos prolongaciones o enclaves de su economía. Los monopolios de Estados Unidos se fueron apoderando de la producción, el transporte y la comercialización de los principales rubros de estos débiles y atrasados países, liquidando cualquier posibilidad de desarrollo propio y restringiendo al máximo sus soberanía; esto

es, las famosas «repúblicas bananeras» de las que se burlara el escritor humorista norteamericano O. Henry, por lo general coronadas con un dictador como especie de monarca tropical.

Para el gobierno de Estados Unidos, la existencia de dictaduras, respaldadas por un ejército organizado, entrenado y equipado por sus *marines*, se convirtió en la mejor garantía a sus intereses y en instrumento privilegiado para sostener su dominación en la región. Eso explica que ninguno de estos tiranos hubiera podido consolidarse en el poder sin la bendición norteamericana.

No por casualidad, casi todos los países centroamericanos y caribeños que fueron dominados por dictaduras habían sido víctimas de intervenciones militares, ocupación de territorios y despojos por parte de Estados Unidos, lo que fue el caldo de cultivo de estos regímenes tiránicos. Varios de los clásicos sátrapas caribeños de principios del siglo XX fueron fruto directo de la intervención militar norteamericana, que resguardó sus intereses mediante un nuevo cuerpo armado moldeado por Estados Unidos, haciendo innecesaria por más tiempo la presencia de los *marines*.

Esa tesis la enunció en 1928 el presidente electo estadounidense Herbert C. Hoover, quien declaró en Buenos Aires en ocasión de su recorrido por América Latina: «En el futuro, el gobierno norteamericano nunca intervendrá en los asuntos internos de otros países y respetará su soberanía».² Aunque el propio Hoover inició esa práctica, la misma fue consagrada por su sucesor en la primera magistratura de Estados Unidos Franklyn D. Roosevelt durante su mandato de 1933 a 1945 y fue conocida como la política del «buen vecino».

Desde entonces, el dictador caribeño devino en una especie de administrador local del capital norteamericano –aunque en determinados casos hicieron gala de cierta autonomía y de alguna resistencia a las decisiones imperiales que atentaban contra sus propios intereses–, el cual contribuía a despejar el camino hacia una modernización restringida de las relaciones socioeconómicas, acorde a las

² En Frank Moya Pons [Coordinador]: *Historia de la República Dominicana*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Academia Dominicana de la Historia/Ediciones Doce Calles, 2010, p. 465.

necesidades de los monopolios estadounidenses. Para afianzar ese papel, favorecieron los planes de introducir los adelantos técnicos de la época y movilizar los recursos productivos en aras de la expansión primario exportadora, promoviendo la inmigración de fuerza de trabajo barata y haciendo concesiones impositivas, legales, y otras, que estimularan la inversión extranjera.

Pero todo ello, sin permitir una democratización real de las relaciones sociales y políticas y de eliminar realmente, y no solo en lo nominal, las prácticas precapitalistas, que el bajo nivel de las fuerzas productivas convertía en mecanismo insustituible de la acumulación originaria. Así, en las primeras décadas del siglo xx, Centroamérica y el Caribe fueron dominadas por una generación de dictadores, algunos de los cuales sirvieron de fuente de inspiración a las obras *El recurso del método* (1974) del cubano Alejo Carpentier, *El otoño del patriarca* (1975) del colombiano Gabriel García Márquez y *La fiesta del Chivo* (2000) del peruano Mario Vargas Llosa.

A pesar de estar emparentadas por una serie de rasgos comunes, de desenvolverse en escenarios históricos parecidos, así como por su casi completa subordinación al capital estadounidense, los dictadores centroamericanos y caribeños de principios del siglo xx se diferenciaron entre sí por muchos elementos que les dieron sus propias singularidades y matices. Las primeras de estas dictaduras entreguistas fueron la de Juan Vicente Gómez en Venezuela y Gerardo Machado en Cuba, aunque la de Trujillo en República Dominicana y los Somoza en Nicaragua se convirtieron en las expresiones clásicas de estos regímenes tiránicos.

LA DICTADURA DE JUAN VICENTE GÓMEZ EN VENEZUELA

La primera de las dictaduras caribeñas que cumplimentó las características enunciadas fue la del general Juan Vicente Gómez en Venezuela, aun cuando en sentido estricto su régimen tiránico fuera una especie de transición de los viejos estilos caudillistas decimonónicos a los que vendrían después. El ascenso al primer plano de

Gómez estuvo asociado a la denominada revolución liberal restauradora que llevó al gobierno al general Cipriano Castro en 1899, de la que fue segundo jefe.

Desde ese momento, los caudillos andinos procedentes del Táchira, zona montañosa colindante con la República de Colombia, se hicieron del poder, rompiendo la tradicional procedencia regional de los gobernantes venezolanos, oriundos siempre de otras zonas del país. Pero el gobierno de Castro, que había golpeado duramente al viejo caudillismo regional y liquidado los desprestigiados partidos tradicionales, que tanto daño habían hecho al país, terminó expulsado por su compañero de armas y compadre Juan Vicente Gómez, quien inició entonces su larga dictadura en el país que duraría 27 años. El desplazamiento comenzó cuando Castro viajó a Europa en noviembre de 1908 y dejó a Gómez encargado de la presidencia.

Aprovechando su ausencia, Gómez se las arregló, con el apoyo de las potencias europeas y Estados Unidos –atraídas por el petróleo venezolano–, así como de las emergentes élites mineras que servían de testaferros a empresas foráneas, los terratenientes, grandes comerciantes y propietarios del país, para hacerse con el poder absoluto el 19 de diciembre de ese año.

Prueba de que una política diferente a la de su antecesor comenzaba fue el inmediato restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Además, se solicitó abiertamente la protección norteamericana, prometiendo a cambio abrir de par en par las puertas al capital foráneo y reconociendo todas las exigencias de Estados Unidos a Castro. Una nueva etapa en la historia de Venezuela se inauguraba, caracterizada por la política entreguista en materia petrolera de la dictadura gomecista.

El 13 de febrero de 1909 fueron firmados en Caracas los protocolos Buchanan-Gómez, que aceptaban todas las peticiones hechas por Estados Unidos a Venezuela, incluida la anulación de la indemnización a que había sido condenada por un tribunal venezolano la New York and Bermúdez Company. Eso explica que el gobierno norteamericano impidiera el regreso del ex presidente Castro a su tierra natal, quien se vio obligado a residir en Puerto Rico, donde murió en 1925. En esas condiciones, un dócil congreso nombró de

manera oficial al general Gómez como presidente de la república para el período 1909-1913.

Durante ese primer mandato, Gómez, favorecido por el mejoramiento de la situación económica –gracias a la recuperación de los volúmenes y precios de los productos de exportación–, terminó el proceso de liquidación de los caudillos liberales regionales, que históricamente desafiaban la autoridad del poder central, a la vez que permitió cierto ejercicio de las libertades públicas. Como disponía de mayores recursos que su antecesor, pudo regularizar los pagos de la deuda externa, cumpliendo los compromisos con los acreedores europeos y norteamericanos. Ese relativo crecimiento de la economía se vio estimulado por la eliminación de los impuestos a la exportación de café, cacao y cueros.

Entretanto, se dedicó también a fortalecer y modernizar al ejército, manteniendo en sus manos en forma férrea, hasta su muerte, la máxima jefatura militar. Al margen del ejército, Gómez creó un cuerpo especial armado denominado *La Sagrada*, compuesto en lo fundamental por hombres de su absoluta confianza provenientes del Táchira.

Al aproximarse el fin de su primer período presidencial, Gómez comenzó a maniobrar para perpetuarse en el poder, lo que trajo aparejado las primeras protestas estudiantiles contra su régimen y la clausura, por una década, de la Universidad Central de Caracas. En 1913, abortó la conspiración del general Román Delgado Chalbaud, encarcelado, con grilletes en sus pies, en la siniestra prisión de La Rotunda, durante catorce años.

Para facilitar su continuidad en la presidencia, Gómez colocó a sus acólitos en los cargos más importantes, a la vez que perseguía a los opositores, como al periodista Rafael Arévalo González, así como a los aspirantes a la sucesión, entre ellos el doctor Félix Montes, que fue obligado a exiliarse por 22 años. Con el pretexto de supuestas conspiraciones para derrocarlo o asesinarlo, suspendió las garantías constitucionales e impuso una reforma en la constitución, mientras promovía un movimiento nacional que reclamara su permanencia en el poder.

Entre 1915 y 1922 la presidencia fue ocupada formalmente por Victorino Márquez Bustillos, a quien siguió Juan Bautista Pérez,

de 1929 a 1931, y a continuación, en forma interina, el historiador José Gil Fortoul. Como Gil Fortoul, varios otros intelectuales de renombre sirvieron al dictador en diferentes puestos gubernamentales y/o diplomáticos, como fueron los casos de Román Cárdenas, Gumersindo Torres, César Zúmeta, Rubén González, Pedro M. Arcaya y Laureano Vallenilla Lanz, entre otros.

Ahora bien, lo que en definitiva garantizó la permanencia en el poder de la dictadura de Juan Vicente Gómez fue el auge de las exportaciones petroleras, que se convertiría en poco tiempo en el principal producto de exportación del país. El proceso de desplazamiento de los tradicionales rubros agropecuarios por el petróleo estuvo precedido de la crisis de la agricultura, desatada por la caída de los precios y las dificultades para las exportaciones que trajo aparejada la Primera Guerra Mundial.

El resultado inmediato fue la sensible disminución de las recaudaciones de aduana, principal fuente hasta entonces de los ingresos fiscales. Esta situación se prolongó con altibajos hasta la depresión capitalista de 1929, cuando el auge petrolero sepultó en forma definitiva a los productos agropecuarios de exportación.

Fue precisamente en esa coyuntura que se intensificó la extracción petrolera comercial a gran escala, iniciada por la Royal Dutch Shell en 1917, aunque los hidrocarburos no ocuparon el primer puesto en las exportaciones venezolanas hasta 1926, cuando su valor fue de 247 millones de bolívares. Esa cifra se duplicaría en pocos años, superando en forma amplia a los 149 millones reportados como ingresos por las exportaciones de los productos agropecuarios. En 1928 ya Venezuela se había convertido en el segundo productor mundial de petróleo –solo superado por los Estados Unidos– y en su primer exportador.

El *boom* petrolero facilitó también el debilitamiento de las arruinadas clases dominantes tradicionales, muchas de cuyas propiedades y haciendas fueron a manos del dictador, sus familiares y allegados. Este proceso estuvo asociado al desarrollo de nuevos sectores burgueses y de las capas medias y la aparición de un proletariado vinculado en lo fundamental a la extracción del petróleo.

Pero la tiranía gomecista no estuvo exenta de oposición, pues varios movimientos revolucionarios y conspiraciones se prepararon

en su contra. El primero de ellos fue el alzamiento en 1914 de Emilio Arévalo, casi al mismo tiempo del vertebrado por el general José Rafael Gabaldón y de la entrada por el oriente venezolano de un tercer grupo rebelde encabezado por Horacio Ducharne –quien fue asesinado tras ser hecho prisionero–, intentos todos fracasados.

En 1918 penetró por el Táchira procedente de Colombia otro contingente opositor comandado por el general Juan Pablo Peñaloza, también aniquilado; mientras al año siguiente se frustraba una conspiración militar vertebrada por el capitán Luis Rafael Pimentel. Muchos de los participantes en este último movimiento opositor murieron torturados en la mencionada cárcel gomecista de La Rotunda en Caracas. Entre 1919 y 1921 se produjeron otros intentos de derrocar a la dictadura protagonizados por viejos generales como Matías Peñuela, Constantino Pérez, Jesús Matamoros y Francisco Linares Alcántara, entre otros.

A la oposición tradicional pronto se unieron nuevos sectores sociales. Expresión de ello fueron las airadas manifestaciones estudiantiles que sacudieron la capital en 1919 y entre cuyos dirigentes se destacaron Gustavo Machado, Salvador de la Plaza y Pedro Zuloaga, los tres jóvenes procedentes de familias encumbradas de la antigua oligarquía. El gobierno de Gómez clausuró varias veces la Universidad Central de Caracas. Algunos de los participantes, como Gustavo Machado, estuvieron también complicados en la mencionada conspiración del capitán Pimentel y debieron abandonar el país.

También estallaron protestas y paros entre los artesanos y obreros, como la de los trabajadores tranviarios de la capital en 1921, que fueron respaldados por los estudiantes universitarios y que llevó otra vez a la clausura de la principal casa de estudios hasta 1925. Algunos de los líderes estudiantiles huyeron del país y se refugiaron en Cuba y México, país este último donde fueron acogidos con simpatía por el presidente Álvaro Obregón, lo que llevó a Gómez en 1923 a romper relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano.

Fue precisamente en México donde se fundó en 1926 el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) –núcleo inicial del Partido Comunista Venezolano–, entre cuyos organizadores estaban Gustavo y Eduardo Machado, Miguel Zúñiga, Julio Martínez y

Pedro Brito. El PRV adoptó un programa democrático liberal y de modernización del país, que incluía vigorizar el papel del Estado y regular al capital extranjero.

En julio de 1929 se creó en París la Junta de Liberación de Venezuela, en la que ocuparon sitio, entre otras figuras, Santos Dominici, Alberto Smith, José Rafael Pocaterra y el historiador Rufino Blanco Fombona, quien había puesto al dictador venezolano el mote de Juan *Bisonte* Gómez. Esta Junta llegó a organizar una expedición que desembarcó en Cumaná, pero que fue neutralizada por efectivos gubernamentales.

En 1927, después de reabierto la Universidad Central de Caracas, se fundó la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), que a principios del año siguiente organizó protestas contra la dictadura gomecista, que llevaron a la cárcel a sus principales figuras, entre ellos Jóvito Villalba, Pío Tamayo, Antonio Arráiz, Rómulo Betancourt y Guillermo Prince Lara, la llamada «generación de 1928». El respaldo de la población al movimiento estudiantil y a las manifestaciones contestatarias fue de tal magnitud que significó el más serio desafío registrado hasta entonces a la dictadura venezolana.

Una muestra de ello fue que la juventud opositora ganó simpatías en amplios sectores de la oposición. Incluso su influencia llegó hasta el propio hijo del dictador, José Vicente Gómez –que era Inspector General del Ejército y segundo vicepresidente de la república– y a algunos oficiales, que el 7 de abril de 1928 protagonizaron un conato de rebelión militar en dos cuarteles de la capital. Relacionado con estos sucesos, parece que estuvo el nunca esclarecido asesinato, ocurrido en sus habitaciones palaciegas en Caracas, el 30 de julio de 1923, de su tío Juan Crisóstomo (Juancho) Gómez, que era entonces primer vicepresidente de la república.

En medio de la más profunda crisis de la dictadura –que llevó a Gómez mediante una reforma constitucional a eliminar el cargo de vicepresidente y a establecer que la sede del gobierno se hallaría en el lugar donde él estuviera–, fracasó al año siguiente una nueva expedición armada que desembarcó por las costas orientales del país. El grupo revolucionario se había organizado en Curazao por Gustavo Machado, Ramón Torres y Rafael Simón Urbina, quienes

el 9 de junio de 1929 asaltaron el fuerte Amsterdam para obtener armas para la invasión de Venezuela.

A continuación, unos 250 revolucionarios, entre los cuales estaban también Miguel Otero Silva y Guillermo Prince Lara, tras apoderarse de una embarcación, desembarcaron en el occidente venezolano el 9 de julio de ese mismo año, donde fueron derrotados. Casi en forma simultánea, aparecía en el estado de Sucre la expedición de los generales Román Delgado Chalbaud y Pedro Elías Aristeguieta, mientras el general José Rafael Gabaldón se sublevaba en Portuguesa y Norberto Borges en el estado Miranda.

A la par se iban vertebrando otras fuerzas opositoras con aspiraciones socialistas, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Asociación Revolucionaria de Izquierda (ARDI). El 17 de diciembre de 1930, al conmemorarse el centenario de la muerte de Simón Bolívar, se efectuó en Caracas una gran manifestación popular contra la dictadura que fue disuelta a sangre y fuego, con el saldo de varios muertos y heridos.

Sin embargo, ninguno de estos movimientos y protestas sociales, que como hongos brotaban por todas partes, lograron derribar a la dictadura, que en los siguientes años logró estabilizarse. A ello contribuyó, sin duda alguna, que la economía venezolana, gracias a las crecientes exportaciones del petróleo, estaba en mejores condiciones que sus vecinos del Caribe para resistir los embates de la crisis capitalista de 1929.

En esas condiciones, el 17 de diciembre de 1935, murió Juan Vicente Gómez, uno de los pocos dictadores del Caribe que lo hicieron en el ejercicio del poder. Se calcula que, al morir, su fortuna era de unos 40 millones de dólares. Para sucederle fue designado otro de los integrantes del grupo militar originario del Táchira, compañero de Gómez y Cipriano Castro en la revolución de fines del siglo anterior, el también general Eleazar López Contreras.

El nuevo mandatario debió concluir el período presidencial que se extendía hasta el 19 de abril de 1936. Ese año, por decisión confiscatoria del Congreso de la república, la inmensa fortuna y propiedades del dictador fallecido pasaron al patrimonio nacional.

EL MACHADATO EN CUBA

La dictadura del general Gerardo Machado en Cuba, extendida de 1925 a 1933, tiene en varios aspectos muchas similitudes con la de Juan Vicente Gómez en Venezuela, además de ser contemporáneas. El machadato se desarrolló cuando ya Estados Unidos había convertido a Cuba en un verdadero protectorado norteamericano, pues como se ha mencionado desde 1901 regía una constitución a la que el gobierno de Washington había impuesto un apéndice –la enmienda Platt–, que permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la isla.

Desde principios del siglo xx, el capital norteamericano, aprovechando las facilidades dadas primero por los gobiernos interventores de Estados Unidos y, después, por los sucesivos primeros presidentes cubanos, invadió los principales sectores de la depauperada economía isleña. Así, las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1896 apenas ascendían a 50 millones de dólares, se elevaron a 160 millones en 1906, a 205 millones en 1911 y a 1200 millones en 1923 –que situó a la Mayor de las Antillas en el primer lugar entre los países latinoamericanos receptores de capital estadounidense–, año en que ya controlaban más del 70% de la producción azucarera, principal renglón de la economía nacional.

La penetración de Estados Unidos fue favorecida por los regímenes corruptos que llegaron al poder en las primeras décadas del siglo xx, encabezados por figuras del Partido Liberal o Conservador que se habían destacado en la guerra de independencia: los civiles Tomás Estrada Palma (1902 a 1906) y Alfredo Zayas (de 1921 a 1925) y los generales de la última contienda contra España José Miguel Gómez (1913-1921) y Mario García Menocal (1913-1921). En mayor o menor medida, todos facilitaron que las mejores tierras, fábricas, bancos, minas, medios de transporte y de comunicaciones, así como otras instalaciones de infraestructura, quedaran en manos norteamericanas.

De este modo, la economía de la isla cayó rápidamente en una absoluta dependencia de Estados Unidos, con el cual se realizaba la mayor parte del comercio, aunque teniendo como contrapartida

un significativo crecimiento y la relativa modernización del país. De ello fueron muestras, suntuosas construcciones, muchas de las cuales endeudaron a Cuba con la banca norteamericana. La época de mayor bonanza de la economía cubana se alcanzó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que abrió un extraordinario auge económico.

A pesar de que era visible el progreso material –que atrajo casi dos millones de inmigrantes, sobre todo gallegos, asturianos y antillanos, estos últimos como braceros para las extensas plantaciones y enormes fábricas de azúcar ubicadas ahora, sobre todo, en el oriente de la isla–, el desarrollo económico fue unilateral, pues el sector productivo principal se hipertrofió, estancándose desde fines de los años veinte, sin poder resolver las necesidades vitales de la población.

El gobierno de Zayas fue la antesala de la dictadura del general Gerardo Machado, cuando el control político y económico estadounidense llegó a niveles sin precedentes, mientras el embajador de Estados Unidos, Earl Crowder, se había convertido en un verdadero procónsul. El representante norteamericano intervenía en las principales decisiones gubernamentales y hasta participó en la selección del llamado irónicamente «gabinete de la honradez». Los mayores excesos del presidente Zayas tuvieron que ver con los fraudes vinculados a la ley Tarafa o de subpuertos, que beneficiaba a muchas compañías azucareras norteamericanas; y los oscuros negocios tejidos en torno a la pretendida compra del convento de Santa Clara.

El fin de la llamada «danza de los millones», dio paso a la inesperada crisis de 1920-1921 que arruinó a una parte importante de la burguesía cubana, lo que casi coincidió con el despertar de significativos movimientos sociales, enfilados a la búsqueda de la igualdad ciudadana y contra la opresiva dominación extranjera. Manifestaciones de ello fueron el surgimiento del feminismo, expresado primero en la aparición del Partido Nacional Femenino (1912) y después en el Primer Congreso Nacional de Mujeres (1923); la vertebración de los excombatientes de las guerras de independencia, indignados por los turbios negocios gubernamentales, en la Asociación de Veteranos y Patriotas (1923-1924) y el nacimiento, entre 1920 y 1925, de la mayor agrupación de trabajadores, la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC).

También debe mencionarse en esta relación, la irrupción de jóvenes intelectuales en la lucha cívica, como Rubén Martínez Villena, puesta de relieve con la denominada «protesta de los trece» (1923), y de estudiantes, que exigían la autonomía universitaria y constituyeron la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en 1923, encabezada por Julio Antonio Mella, fundador dos años después del Partido Comunista (1925).

Ese era el convulso panorama nacional cuando el general Gerardo Machado llegó a la presidencia en los comicios celebrados el 1 de noviembre de 1924, gracias al apoyo financiero recibido y, en particular, de un generoso donativo de medio millón de dólares de la Electric Bond and Share. La oligarquía nacional y Estados Unidos esperaban que este militar se convirtiera en el hombre fuerte que estabilizara el país y metiera en cintura la ascendente intranquilidad ciudadana. El apoyo obtenido durante su campaña electoral era la mejor prueba de las expectativas despertadas por su candidatura a la primera magistratura del país.

Machado, que era un destacado líder del Partido Liberal y había sido general de la guerra de independencia de 1895 –también jefe del ejército nacional y ministro de Gobernación–, tenía fama de ser un hombre de mano de hierro, ganada por sus actividades represivas. Su gobierno, iniciado el 20 de mayo de 1925, se convertiría en poco tiempo en una descarnada y terrible dictadura, lo que ya se vislumbraba cuando declaró que bajo su gobierno ninguna huelga duraría más de quince minutos.

Durante la primera parte de su mandato, Machado intentó desarrollar un novedoso programa económico –que incluía una reforma arancelaria en 1927 favorable a la producción autóctona–, que permitiera impulsar la precaria industria nacional y promover el desarrollo de la infraestructura, aprovechando sus excelentes relaciones con Washington y el mejoramiento de los precios del azúcar que se observaba desde 1923. Pero las restricciones gubernamentales a la cosecha azucarera, con vistas a equilibrar oferta y precios, solo trajo como consecuencia la reducción de la participación cubana a escala mundial –junto a la caída sostenida su valor–, pues los competidores no disminuyeron su producción.

Por otro lado, la reforma arancelaria de 1927 no logró sus objetivos. Aunque se desarrollaron parcialmente algunos rubros de la industria ligera, como textiles, jabonería, lácteos, pinturas y otros, el aumento de los aranceles a productos foráneos, para incentivar la producción interna, no pudo alterar en forma sustancial lo convenido en el Tratado Comercial de 1902 con Estados Unidos.

Para desarrollar el costoso plan de obras públicas del gobierno, que contemplaba terminar la sede del Legislativo en un monumental Capitolio –que sería inaugurado en enero de 1928, en la VI Conferencia Panamericana, con la presencia del mandatario estadounidense Calvin Coolidge–, ampliar la Universidad de La Habana, extender el malecón habanero y remodelar varias zonas de la capital y, sobre todo, trazar la carretera central de Cuba, Machado obtuvo empréstitos de la banca norteamericana que superaban los contraídos por todos los gobiernos anteriores juntos, endeudando aún más al país.

Desde los inicios de su gestión, Machado con el apoyo de los sectores oligárquicos, de los grupos políticos y de los partidos tradicionales –el liberal y el conservador, así como sus desprendimientos–, respaldó el proyecto del «cooperativismo» para mantenerse en el poder, a la vez que reprimía con crudeza cualquier síntoma de oposición. Una temprana expresión de esto último fue el asesinato, el 20 de agosto de 1925, del conocido opositor Armando André, director del periódico *El Día*.

A un intenso ritmo avanzaba también la represión contra el naciente movimiento obrero mediante la deportación de trabajadores extranjeros –como el canario José Miguel Pérez, primer secretario del Partido Comunista–, la prisión o la muerte de dirigentes sindicales, entre estos Enrique Varona, José Cuxart y Alfredo López.

En 1927 surgió en la Universidad de La Habana el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) contra la prórroga de poderes, de poca duración. Julio Antonio Mella, expulsado de la universidad dos años antes, realizó una huelga de hambre que movilizó en su favor a diferentes sectores nacionales. Obligado a exiliarse desde enero de 1926, Mella, que había calificado al dictador cubano de Mussolini tropical, fue asesinado en México por sicarios enviados por Machado (1929).

No obstante el significativo crecimiento del movimiento opositor, la dictadura de Machado se legitimó en una convención constituyente, reunida solo unas semanas entre abril y mayo de 1928, que modificó la constitución de 1901 para permitir la reelección del mandatario por un período de seis años que debía concluir en 1935. Los espurios comicios se celebraron el 1 de noviembre 1928 y en ellos el gobernante figuró como único candidato. Tomó posesión el 20 de mayo de 1929, cuando estaba a punto de estallar el *crack* capitalista mundial que agudizaría la profunda depresión que venía atravesando la economía cubana ante el sostenido deterioro de los precios del azúcar.

La crisis política y económica en que se iba hundiendo la dictadura machadista propició el crecimiento acelerado desde 1930 de las protestas, huelgas y manifestaciones populares, combinadas con actividades terroristas, conspiraciones y alzamientos armados. Prácticamente todos los sectores de la sociedad salieron a enfrentar la cada vez más represiva dictadura de Machado con proyectos revolucionarios, derechistas y nacional-reformistas.

Muchos de los políticos que habían apoyado el *cooperativismo* se fueron alejando del régimen. La oposición se nutrió de figuras de los partidos tradicionales, como el coronel Carlos Mendieta –líder de la recién creada Unión Nacionalista–, el ex mandatario conservador general Mario García Menocal y el hijo del desaparecido presidente liberal, José Miguel Gómez, Miguel Mariano. Ellos mismos encabezaron la formación de la Junta Revolucionaria de Nueva York, a la que se adhirió el DEU, y que promovía el derrocamiento de la dictadura por la vía armada y buscaba el respaldo de Estados Unidos.

Estos grupos políticos tradicionales encabezados por Menocal y Mendieta, realizaron un simulacro de alzamiento en Río Verde, en agosto de 1931, el que fue velozmente sofocado por las tropas de Machado. Como parte de esta intentona, ocurrieron también levantamientos armados en varias localidades del país.

Entre estos movimientos opositores pueden mencionarse el del general Francisco Peraza en Pinar del Río –que le costó la vida– y el dirigido por el joven Antonio Guiteras en Oriente –quien luego de este fracaso crearía su propia organización: Unión Revolucionaria–;

al que debe sumarse la expedición que desembarcó en el norte de la provincia oriental encabezada por Emilio Laurent. En ese contexto, apareció la organización secreta, de estructura celular y de marcado carácter terrorista, denominada ABC, conformada mayormente por personas de las capas medias.

Los universitarios, por su parte, restablecieron, en 1930, el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), mucho más fuerte que el anterior, y del que se desprendería en 1931 el Ala Izquierda Estudiantil, que sostenía vínculos con el partido comunista. El 30 de septiembre de 1930, en una manifestación multitudinaria atacada por el régimen, y en la que hubo algunos heridos, cayó muerto el dirigente estudiantil Rafael Trejo, con lo que la lucha de los universitarios se recrudeció.

Para contrarrestarla, el dictador cerró la Universidad de La Habana, estableció la censura de prensa y designó supervisores militares en casi todas las provincias del país. Por su parte, el DEU y el ABC unieron desde 1932 sus recursos para impulsar la actividad terrorista y los atentados, como los que realizaron con éxito contra el jefe de la policía Miguel Calvo y el presidente del Senado, Clemente Vázquez Bello.

Además, en torno al partido comunista, se vertebró una red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, como la CNOC, que pusieron en jaque a la dictadura con sus protestas y huelgas. Entre ellas estuvo el paro general obrero del 20 de marzo de 1930, encabezado por Rubén Martínez Villena, quien había calificado a Machado de asno con garras.

Ante la gravedad de la situación cubana, Estados Unidos decidió enviar a La Habana a un nuevo embajador, Benjamín Sumner Welles, en mayo de 1933, para poner de acuerdo a los diversos sectores y buscar una salida negociada a la crisis que se conoce como la mediación. El enviado del presidente Franklyn D. Roosevelt pretendió lograr el consenso entre los grupos políticos, que en su mayoría pasaron a cooperar con el funcionario norteamericano, aunque ni los estudiantes ni los comunistas lo aceptaron. Tampoco los seguidores de Guiterras se sumaron a la mediación norteamericana, la que consideraban injerencista en los asuntos internos de Cuba.

Aunque Machado se vio obligado a participar en la mediación de Welles y forzado a liberar presos políticos y a restablecer las garantías, se negó a abandonar el poder. En medio de estas intensas gestiones del enviado diplomático norteamericano, estalló una huelga general en agosto de 1933, que a pesar de la sangrienta represión, culminó con la caída del dictador –el ejército, presionado por Welles, le retiró su apoyo–, el 12 de agosto de 1933.

GUERRA DEL CHACO

Los años entre las dos conflagraciones mundiales fueron también de agudización de las rivalidades interimperialistas. Ello se puso de relieve, en forma trágica, en la lucha de los monopolios petroleros ingleses y norteamericanos por la región del Chaco que condujo a fines de los años veinte a un sangriento conflicto entre países latinoamericanos prolongado hasta los primeros años de la década siguiente.

Como ya había ocurrido a fines del siglo XIX, las contradicciones entre las potencias imperialistas llevaron a un conflicto fratricida entre naciones latinoamericanas. Nos referimos a la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que eran los países más pobres del continente.

Las compañías petroleras norteamericanas e inglesas, empeñadas en consolidar sus respectivas zonas de influencia en la América del Sur, lanzaron a Bolivia –que en 1903 había perdido otra porción del territorio nacional (El Acre) en un breve conflicto con Brasil– a una contienda bélica con el vecino Paraguay, aprovechando la situación desesperada de la república del altiplano y la disposición de su oligarquía a «pisar fuerte en el Chaco»,³ región donde se suponía existían fabulosos yacimientos petrolíferos. Para ello, la banca de Estados Unidos concedió a Bolivia 23 millones de dólares destinados a la compra de armamentos (1927).

Para esta época, Bolivia había caído en la órbita de la dependencia de Estados Unidos, mientras la situación del país se agravaba

³ Julio César Chaves, *Compendio de Historia Paraguaya*, Buenos Aires, Talleres Gráficos Lumen, 1958, p. 240.

según descendía el precio del estaño, proceso al que contribuyó la llegada al poder del líder del Partido Republicano: Bautista SAVEDRA. En el propio 1920, los republicanos concertaron el empréstito Ullen Contracting, para después contratar, en 1923, el famoso préstamo Nicolaus –por treinta y tres millones de dólares al 8%–, que hipotecaba las acciones del gobierno en el Banco de la Nación y la casi totalidad de los ingresos públicos.

A semejanza de lo que ocurría en el Caribe, se creó una comisión fiscal con representantes de los prestamistas. Pero la cosa no quedó ahí: SAVEDRA cedió a la Standard Oil Company de California en ese mismo año, los recursos petrolíferos bolivianos.

Meses más tarde –en 1924– se «internacionalizó» la empresa Patiño en los Estados Unidos. Los accionistas norteamericanos concentraron y controlaron entonces las cuatro firmas más grandes del país: Patiño Mines; Bolivia Tin and Tungsten Mining; Compañía Agrícola Oploca de Bolivia y Sociedad Empresa Estaño Araca.

A continuación, el gobierno contrajo un nuevo empréstito con la Glyn Mills and Company, comprometiendo los impuestos que la Patiño Mines debía pagar. La condición exigida por los banqueros y aceptada, fue no elevar los derechos de exportación de los minerales. Y así, tres préstamos más hasta 1930, por un total de 29 millones de dólares.

Al mismo ritmo que se endeudaba la nación, crecía el descontento social. Ello obligó a SAVEDRA a reconocer algunas demandas populares en 1924, lo cual no fue óbice para que las protestas obreras pagaran un precio de sangre, como ocurrió en Uncía. En 1926 se produjo el estreno de otro presidente republicano, Hernando SILES, digno continuador de la política entreguista de SAVEDRA. Durante su gobierno, el capital norteamericano en Bolivia pasó de cien millones de dólares; de los cuales cuarenta millones eran obligaciones del Estado y el resto inversiones en minas y petróleo.

En las condiciones de dependencia económica y financiera que se encontraba Bolivia, la gran crisis capitalista de 1929 afectó directamente los ingresos del Estado y, sobre todo, los de las clases trabajadoras de los centros urbanos y las minas. En otras palabras, se proyectó sobre aquellos sectores sociales vinculados a la actividad exportadora, o subordinados de una manera u otra dentro de la

economía interna al nivel de los precios del estaño, que pasaron de 289 libras por tonelada en 1927 a 141 en 1930.

Sobre el gobierno de turno –Hernando Siles– se comenzó a ejercer presión desde dos direcciones distintas: mientras los obreros y la pequeña burguesía exigían una política protectora de los intereses populares, «la rosca», como se denominaba a la élite minera, procuraba descargar sobre el pueblo y el estado nacional todo el peso de la crisis. Asumiendo una actitud agresiva, los «barones del estaño», como también se le llamaba a la oligarquía, organizaron en 1930 un golpe de Estado antes de que el gobierno decretara una nueva legislación fiscal –elevación de impuestos a la minería–, al tiempo que se pretextaba defender la constitución frente a las intenciones de Siles de prorrogar su mandato.

Los políticos antigubernamentales agitaron, por su lado, el problema de la autonomía universitaria, y provocaron una sublevación de estudiantes y militares que echó por la borda al presidente. Hasta el 5 de marzo de 1931 una junta militar se hizo cargo de la dirección estatal y, en esa fecha, entregó el poder a Daniel Salamanca y a Luis Tejada Sorzano, candidatos victoriosos en unos comicios arreglados por el «pacto sagrado» entre los liberales y las dos ramas de republicanos escindidos.

La economía boliviana se encontraba completamente en ruinas desde 1930. En 1932, la libra fina de estaño llegó a valer 22 centavos de dólar, menos de la mitad que en 1929; el país había perdido casi toda su capacidad de importar y las empresas mineras no reconocían la autoridad del gobierno.

Paraguay, por su parte, había caído de lleno bajo la dependencia de Inglaterra por intermedio de sus socios argentinos. Desde 1913, 68 compañías anglo-argentinas poseían 10 millones de hectáreas en el Chaco Boreal, dedicadas a la explotación ganadera y madera (incluido el quebracho), y los primeros frigoríficos funcionaban como simple prolongación de los existentes en Argentina, país que ya acaparaba el 90% del comercio exterior paraguayo. Aunque las inversiones inglesas no superaban los 16 millones de dólares –tres millones las norteamericanas–, Paraguay se encontraba en las mismas manos que dominaban el resto de la región.

Los esfuerzos paraguayos por elegir una barrera frente a las pretensiones bolivianas fomentando la colonización del Chaco –con el asentamiento de inmigrantes menonitas– acercaron el conflicto en lugar de alejarlo. La cuestión de la frontera común entre los dos países había surgido a finales del siglo XIX, cuando en gobierno de La Paz trató de compensar la pérdida del litoral del Pacífico con la adquisición de una franja del litoral fluvial de Paraguay.

Los dos primeros tratados se firmaron en 1879 y 1887, pero ninguno fue ratificado por el Congreso de Asunción, como tampoco el de 1894. La ocupación paraguaya en 1888 de la población de Bahía Negra, fundada poco antes por los bolivianos, dio lugar a una violenta protesta del país vecino y a agudizar la disputa por todo el territorio del Chaco.

El conflicto alcanzó su clímax a fines de la década del veinte, unos años después de que la Standard Oil Company se apoderara de grandes concesiones otorgadas allí por el gobierno boliviano (1922).

La expansión de la empresa norteamericana, necesitada de hallar una vía de salida para los hidrocarburos de Tarija y Santa Cruz, no tardó en suscitar la firme resistencia de los intereses petroleros ingleses, representados por la Royal Dutch Shell, afincados en Argentina y Paraguay. Ello explica la negativa paraguaya –en 1928 Inglaterra rebajó la suma de la deuda de este país para facilitar la compra de armas– a autorizar el libre paso del petróleo boliviano a través de su territorio, con destino a un puerto del Atlántico, y la decisión del gobierno de La Paz de responder con la guerra a su vecino, confiando en una supuesta superioridad militar.

En febrero de 1927 comenzaron los primeros enfrentamientos militares entre los dos países, aunque el verdadero detonante fue el ataque boliviano al fortín Carlos Antonio López el 15 de junio de 1932. Las grandes operaciones bélicas en el Chaco comenzaron en 1932 y se extendieron hasta fines de 1935. La primera gran batalla tuvo por escenario a Boquerón, en septiembre de 1932, que dejó un saldo de miles de muertos y 500 prisioneros bolivianos.

La región donde se libraba la lucha era el territorio predesértico del Chaco Boreal, con una forestación espinosa, sin agua, donde llegaron a combatir 150 mil soldados semidesnudos, con

ametralladoras, obuses y carros blindados. El 10 de mayo de 1933 Paraguay declaró el estado de guerra con Bolivia, mientras su ejército, guiado por el general José Félix Estigarribia, vertebraba un largo sistema de trincheras, cuyo más alto exponente fue la línea Nanawa-Gondra-Arce-Herrera-Toledo. Por su parte, las fuerzas bolivianas, mandadas por el general alemán Hans Kundt, apelaron a concentradas ofensivas contra las fortificaciones enemigas.

Siguiendo los patrones de la guerra convencional, Kundt atacó infructuosamente Nanawa en julio de 1933 y el fortín Gondra. Una nueva ofensiva de Bolivia –sus tropas estaban mucho mejor equipadas que las de Paraguay– se efectuó en agosto de ese año. Nueve meses resistieron los paraguayos las furiosas embestidas bolivianas, hasta que el 11 de diciembre de 1933 pasaron a la ofensiva, destrozaron el regimiento de Ayacucho e hicieron rendirse a dos selectas divisiones del altiplano, con el saldo de más de diez mil prisioneros.

Estos acontecimientos y el conato de rebelión de los regimientos bolivianos Junín y Azurduy, además del que estalló en el fortín de Savedra, determinaron una petición de tregua solicitada por el gobierno de La Paz. Aquello era suficiente y Kundt fue relevado de su cargo por el boliviano Enrique Peñaranda. Los paraguayos, por su lado, ascendieron a José Félix Estigarribia a general.

Terminado este paréntesis de paz, el año 1934 se inició con una coordinada progresión paraguaya en tres direcciones: Muñoz-Magariños, Platanillos-Cabezón, Camacho-Cañada Tarija. A pesar de los continuos contrataques bolivianos, la ofensiva, sobre todo en la zona meridional del Chaco Boreal, no pudo ser detenida. Las acciones de Ballivián, Fortín Ingaví y Cañada del Carmen, empujaron a los bolivianos hasta los contrafuertes andinos.

Peleando en su propio territorio, los soldados del país andino se crecían e infringían grandes pérdidas a los atacantes, como la sufrida por los paraguayos en el Camino Lobrego, su peor revés en toda la contienda. No obstante, el 15 de agosto de 1934, el ejército de Paraguay se impuso en Picuiba, lo que le permitió llegar hasta la sierra de Carandaity, preludio de otras victorias a fines de ese año que obligaron a los bolivianos a retirarse hacia el Pilcomayo y Villa Montes.

El 16 de enero de 1935, las tropas de Estigarribia llegaban a las márgenes del Parapeto, poniendo en peligro, no solo Villa Montes, sino Camiri y Santa Cruz. Miles de hombres combatían y morían en la zona donde se alzaban, como testigos mudos de aquel desastre, los primeros pozos de la Standard Oil Company.

En ese momento empezó a dar frutos la mediación internacional. Los poderosos «padrinos» de Bolivia propiciaron un acuerdo –confirmado en 1938 con la firma del tratado de paz– que salvaba el petróleo de la Standard Oil y satisfacía, al mismo tiempo, el orgullo nacional paraguayo: las dos terceras partes del Chaco quedaban en manos del tácito vencedor, mientras Bolivia mantenía los territorios donde se hallaban los yacimientos petrolíferos explorados y obtenía, además, una salida al río Paraguay: Puerto Suárez.

La guerra del petróleo, formalmente una guerra de fronteras, dejaba un saldo calculado en ciento veinte mil víctimas, setenta mil bolivianos y cincuenta mil paraguayos, y un clima de efervescencia nacionalista en los dos países. De ello serían exponentes los héroes del conflicto del Chaco, los coroneles Germán Busch (Bolivia) y Rafael Franco (Paraguay), llegados al poder en sus respectivos países a fines de los años treinta, en la llamada década de las revoluciones frustradas.



CAPÍTULO 10

LA CRISIS DE 1929 Y LAS REVOLUCIONES FRUSTRADAS

La crisis capitalista de 1929 abrió una nueva etapa en la historia de América Latina. En octubre de ese año estalló de improviso una de las mayores conmociones que haya sufrido el capitalismo en toda su historia. Desde la década del veinte las potencias industriales europeas se venían recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y ya hacia 1925 habían alcanzado los niveles productivos de 1914. La producción fabril de Estados Unidos no cesaba su intenso crecimiento. La lucha por el dominio de los mercados mundiales se agudizó de nuevo y sobrevino una inevitable crisis de superproducción.

Así comenzó la gran depresión económica mundial. La caída de los precios en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, el viernes 24 de octubre de 1929, fue su inicio, desatando el pánico en sus similares europeas. El colapso se sintió, de una u otra manera, en todas partes.

Caracterizada por su extensión y profundidad, la crisis de 1929 afectó al conjunto del sistema capitalista. Muchos bancos quebraron, las fábricas cerraban y los obreros eran despedidos en masa. En tres o cuatro años la producción industrial cayó entre 30% y 40%, retrocediendo a los niveles de 1908-1909.

Solo en Estados Unidos, entre 1929 y 1932, el ingreso nacional declinó de 82 mil millones a 40 mil millones –el rural se contrajo a menos de la mitad– y los salarios bajaron en el mismo período de 17 mil millones de dólares a 7 mil millones, mientras se registraba una

caída de cerca del 50% en los precios de los productos de consumo. El índice de ocupación (base 1923-1925=100) descendió de 106 a 66 puntos –los parados pasaron de 1.6 millones de personas en 1929 a 12.8 millones en 1933– y el valor conjunto de las exportaciones e importaciones se redujo de 9640 a 2933 millones de dólares. La producción de hierro y de acero retrocedió 28 y 31 años respectivamente. De cinco millones de automóviles en 1929, la fabricación de estas máquinas bajó a solo un millón.

Los acontecimientos de 1929 marcaron un punto de viraje para la economía y la sociedad de América Latina. Lo más notable fue la prolongada pérdida de dinamismo en la demanda de los productos primarios que acompañó a la pronunciada disminución de la producción industrial en Estados Unidos (46%), Alemania (40%), Francia (33%), Inglaterra (24%) y otras metrópolis. Sus efectos se hicieron sentir en forma directamente proporcional a las deformaciones sufridas por los distintos países latinoamericanos en el proceso de su integración a la división internacional del trabajo.

REVOLUCIONES DE LOS AÑOS TREINTA

El desempleo, la ruina y el hambre afectaron a las masas populares de América Latina, mientras los golpes de Estado y la proliferación de situaciones revolucionarias pusieron de manifiesto la crisis de las estructuras establecidas por los mecanismos de la dominación imperialista. El descalabro reveló en toda su crudeza los límites del régimen de *laissez faire* y las consecuencias de minimizar el papel del Estado en la economía, políticas adoptadas por las repúblicas latinoamericanas como parte de las reformas liberales instauradas desde la segunda mitad del siglo XIX.

La gran hecatombe financiera, industrial y comercial afectó sobre todo a los países de América Latina más estrechamente vinculados al mercado internacional. Las repúblicas latinoamericanas orientadas a la exportación de materias primas y alimentos, mono-productoras, fueron las más golpeadas por la brutal contracción del mercado. La caída del precio y del volumen de las exportaciones

tradicionales, la aguda disminución en la capacidad de importar y la consiguiente bancarrota fiscal, conmovieron los cimientos de un orden socioeconómico basado en los privilegios de las élites agroexportadoras.

Por añadidura, el flujo de capital extranjero hacia América Latina se detuvo casi por completo. En consecuencia, las exportaciones latinoamericanas se redujeron en un 65% y su capacidad de importar en un 37% durante los años duros de la crisis, lo que obligó no solo a reducir los presupuestos estatales, sino a suspender el pago de la deuda externa en 1934, con solo dos o tres excepciones, entre ellas Argentina.

Los sectores burgueses exportadores trataron de retener el poder estatal recrudesciendo la represión y patrocinando una serie de maniobras golpistas, destinadas a liquidar experiencias reformistas y detener la democratización emprendida por determinados exponentes de la burguesía nacional en algunos países (Argentina, Uruguay) o recomponer, con la ayuda del ejército, la alianza entre las oligarquías nacionales y el capital extranjero (Perú, Cuba, Colombia y parte de Centroamérica).

La parálisis del sector exportador y el abrupto retroceso en los ingresos del Estado golpearon muy en particular a la clase obrera, al campesinado y las capas medias: cundió el desempleo y la disminución salarial de la población económicamente activa. A partir de entonces aumentó una literatura y un arte latinoamericanos de hondas preocupaciones sociales, como se pudo apreciar en las obras de César Vallejo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Enrique Gil Gilbert y José de la Cuadra.

La característica principal de estos narradores fue la de señalar que la explotación económica de los trabajadores era la causa fundamental de los problemas sociales del continente. Exponentes de esta novedosa literatura comprometida con las causas populares fueron *Mamita Yunai* (1941) de Carlos Luis Fallas, o *Metal del diablo* (1946) de Augusto Céspedes; mientras, José Revueltas se valía del monólogo interior para expresar los sentimientos de un grupo de campesinos pobres en su novela *El luto humano* (1943). Paralelamente, se desarrollaban otras vigorosas manifestaciones artísticas en América

Latina de contenido social como el muralismo mexicano, entre cuyos continuadores estaría más adelante la relevante obra pictórica del ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.

Al calor de los efectos de la depresión, y de determinados factores internos que agudizaban la situación en determinados países, florecieron en América Latina una serie de movimientos nacionalistas, sublevaciones populares, revueltas campesinas y fallidos intentos revolucionarios que estremecieron al continente de un extremo al otro. Entre ellos se pueden mencionar la sublevación de los trabajadores salvadoreños en 1932, encabezado por el Partido Comunista y su secretario general Agustín Farabundo Martí; los experimentos revolucionarios de Chile, bajo la égida del coronel Marmaduke Grove, que condujeron a la implantación de la efímera *República Socialista*; así como la huelga general obrera que derribó en Cuba la dictadura de Machado y desencadenó un proceso de luchas populares, conocido como la revolución del treinta, que tuvo entre sus representantes más radicales a Rubén Martínez Villena y Antonio Guiteras.

A esta relación de movimientos revolucionarios pueden añadirse la sublevación aprista de 1932 en Trujillo (Perú), que provocó sangrientos choques con el ejército; las victorias del movimiento liberador en Nicaragua contra la ocupación norteamericana, que se desarrolló hasta el asesinato de Augusto César Sandino (1934); las luchas por la independencia de Puerto Rico dirigidas por don Pedro Albizu Campos y la revuelta armada de la Alianza Nacional Libertadora de Brasil (1935), organizada por Prestes y el Partido Comunista.

También deben agregarse las fracasadas expediciones armadas dirigidas a derrocar la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela (1929), en la que participaron entre otros Rafael Urbina, Carlos Aponte y Gustavo Machado; el movimiento militar progresista en Ecuador que el 24 de agosto de 1929, encabezado por el coronel Luis A. Larrea, estableció un efímero gobierno popular; así como los del mismo corte que se desarrollaron en Paraguay y Bolivia, dirigidos por los coroneles Rafael Franco, David Toro y Germán Busch, como parte de las secuelas de la Guerra del Chaco. Algunos de estos procesos de cambios, que contaron con el apoyo

de ciertos sectores burgueses nacionales, guardan puntos en común, en cuanto a características y objetivos, con gobiernos nacionalistas burgueses, también calificados de populistas, que se desarrollaron en los años treinta (México), cuarenta e incluso en los cincuenta, como los casos de Brasil y Argentina.

LA EFÍMERA *REPÚBLICA SOCIALISTA* DE CHILE

Chile fue uno de los países latinoamericanos más golpeados por la gran crisis de 1929. La caída vertical de sus exportaciones –disminuyeron en un 85%– afectó la balanza de pagos y anuló prácticamente su capacidad para importar. Los artículos esenciales –azúcar, combustible– comenzaron a escasear y fue necesario utilizar las reservas del Banco Central para adquirirlos en el exterior.

Las ventas del salitre, que en 1929 habían alcanzado 3 millones 200 mil toneladas, se redujeron a unas 700 mil y a solo 400 mil en 1933. El descenso del cobre no fue tan acentuado, pero este rubro no ocupaba en aquella época el lugar privilegiado que le correspondería después en el comercio exterior chileno.

En estas circunstancias, se extendió un amplio movimiento de repulsa al régimen del general Carlos Ibáñez, establecido en 1927 con el apoyo de la banca norteamericana, que había endeudado el país con préstamos por valor de unos 250 millones de dólares. El 26 de julio de 1931, en medio de grandes tensiones sociales, Ibáñez debió renunciar.

A pesar de las maniobras electoreras urdidas desde el gobierno, el 23 de agosto comenzó una huelga general convocada por la Federación Obrera de Chile (FOCH), organización que entonces dirigía el comunista Elías Lafferté. Unos días más tarde, al paro se sumó la imprevista sublevación de la marina de guerra.

La escuadra chilena anclada en el puerto de Coquimbo se rebeló el 1 de septiembre de 1931 y el movimiento pronto se extendió al resto de la flota estacionada en Talcahuano y Valparaíso. Reprimida por efectivos gubernamentales, los marinos capitularon el 5 del mismo mes. No obstante, durante la primera mitad de 1932 la nación siguió conmovida por las continuas huelgas obreras, los motines y

conspiraciones militares, así como los movimientos de ocupación de tierras protagonizados en el sur por los hambreados campesinos y mapuches expulsados de las haciendas.

A mediados de ese año cobró fuerza un complot militar encabezado por el comodoro del aire coronel Marmaduke Grove, nombrado jefe de la aviación luego de los sucesos de Coquimbo. Su objetivo era instaurar un sistema de gobierno que permitiera al Estado dirigir la anarquizada economía nacional y mejorar la terrible situación de los trabajadores. Por ello, Grove estableció contactos con los nacientes grupos socialistas.

Enterado de la conspiración, el gobierno destituyó a Grove el 3 de junio de 1932, lo que precipitó el estallido del movimiento revolucionario. Al día siguiente se constituyó una junta que por un decreto estableció la *República Socialista* de Chile.

Entre las primeras medidas del gobierno *socialista* estuvo la prohibición al desalojo de los vecinos que tuvieran una renta inferior a 200 pesos y se ordenó la devolución a sus dueños de objetos y utensilios indispensables para la vida y el trabajo que estuvieran empeñados en la caja de créditos. También se repuso a los maestros cesanteados y se permitió el regreso de los alumnos a sus aulas, así como se promulgó una amplia amnistía.

Decidida a acabar con el experimento de la *República Socialista*, que ya perfilaba nuevas medidas para crear un área estatal en la economía y establecer el control gubernamental sobre el comercio, la reacción interna encabezada por el vetusto Partido Conservador llegó a pedir públicamente la intervención de Estados Unidos. Atacado por la derecha y la izquierda –pues el poderoso Partido Comunista desconocía al gobierno *socialista* y llamaba a la formación de *soviets* de obreros, soldados y campesinos–, el 16 de junio se produjo el contragolpe militar encabezado por Carlos Dávila.

Grove y otros líderes de la efímera *República Socialista* fueron apresados en el Palacio de La Moneda, cuando dirigían una alocución radial al pueblo, y enviados al campo de prisioneros establecido en la isla de Pascua. El reaccionario gobierno de Dávila persiguió con saña a los dirigentes populares y tomó severas medidas represivas contra la población. La ciudad de Santiago fue puesta bajo la

ley marcial y se implantó el toque de queda. Fue dictada una rígida censura de prensa y derogadas las libertades sindicales y políticas.

SUBLEVACIÓN DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS EN 1932

La insurrección salvadoreña fue también consecuencia directa de la gran crisis capitalista de 1929, que llegó a esta nación ampliada por las conexiones del comercio internacional. Estados Unidos dominaba la economía y la mayor parte de la producción cafetalera de este pequeño país centroamericano. La caída del poder adquisitivo del mercado estadounidense afectó con fuerza la endeble economía de este país.

La depresión mundial provocó una caída del 65% en los precios del café y de 74% en el valor de las exportaciones de El Salvador, así como en un 66% las importaciones, fundamentalmente de materias primas y alimentos. La crisis del café provocó la quiebra de dos de los cuatro bancos nacionales y redujo a la mitad los ingresos estatales. En consecuencia, miles de trabajadores y, en especial, los vinculados a la recolección cafetalera, quedaron sin trabajo, pues en el campo el desempleo abarcó a casi la mitad de la población.

Desde finales de 1931 los trabajadores cafetaleros del occidente del país, desesperados ante los efectos de la depresión económica, comenzaron a pasar de las protestas y manifestaciones a un movimiento huelguístico e insurreccional de vastas proporciones. La oligarquía salvadoreña, alarmada ante la magnitud del movimiento popular, y descontenta con la política vacilante del gobierno de Arturo Araujo, propició el 2 de diciembre de 1931 un golpe militar.

Como resultado de la asonada castrense se instaló una férrea dictadura encabezada por el general Maximiliano Hernández Martínez. *El Brujo* Martínez, como fue apodado, adoptó un programa represivo dirigido a acallar las crecientes protestas y demandas de las masas hambreadas de trabajadores, campesinos e indígenas.

Ante el inminente estallido de la sublevación popular, el Partido Comunista, que había sido organizado en marzo de 1930,

hizo ingentes esfuerzos por encauzar el movimiento espontáneo de los desesperados obreros y campesinos salvadoreños, entre cuyos líderes figuraba el indígena José Feliciano Ama. El secretario general del Partido era entonces Agustín Farabundo Martí, quien acababa de regresar a El Salvador, luego de combatir a los norteamericanos a las órdenes directas de Sandino.

Martí y otro dirigente comunista salvadoreño, Miguel Mármol, se reunieron en secreto el 7 de enero de 1932 con otros líderes populares para confeccionar los planes de la rebelión, fijada para el día 16 de ese mes. Luego la fecha del levantamiento se aplazó para el 19 y después para el 22.

Al parecer, la postergación de la sublevación dio margen suficiente al gobierno para conocer parte de los preparativos y pasar a la ofensiva. La represión, que desde diciembre de 1931 se había iniciado, se desató ahora en gran escala.

Miles de campesinos y obreros fueron detenidos, torturados y asesinados. El propio Farabundo Martí fue capturado en compañía de dos estudiantes, Alfonso Luna y Mario Zapata, responsables de la edición del periódico *Estrella Roja*, y fusilados (1 de febrero).

De todas formas, la incontenible revolución popular estalló los días 22 y 23 de enero en la región occidental del país. Gobiernos de obreros, campesinos e indígenas (*soviets*) se instalaron durante varios días en los pueblos de Juayúa, Izalco, Nahuizalco, Sonzacate, Salcoatitán y otros. En muchos sitios los encolerizados trabajadores quemaban alcaldías, oficinas de correos y puestos militares. El ejército y la aviación del régimen aplastaron la rebeldía popular, valiéndose de todos los recursos militares a su alcance.

Alarmados ante el curso de los acontecimientos, barcos ingleses y norteamericanos se presentaron en el puerto de Acajutla para ayudar al dictador a controlar la situación. Miles de trabajadores fueron masacrados por las fuerzas gubernamentales, calculándose en 30 mil las víctimas de aquellas trágicas jornadas. El Partido Comunista y las organizaciones sindicales cayeron bajo los brutales golpes gubernamentales de los que no se repondrían hasta varios lustros después.

EL EJÉRCITO SANDINISTA DEFENSOR DE LA SOBERANÍA DE NICARAGUA

La lucha de los nicaragüenses contra la intervención de Estados Unidos fue una de las grandes epopeyas de esta convulsa década, aunque la resistencia sandinista contra los invasores norteamericanos se había iniciado con anterioridad al estallido de la gran crisis capitalista. En 1926 los *marines* habían ocupado otra vez Nicaragua con el pretexto de detener los enfrentamientos armados entre liberales –apoyados por el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles– y conservadores, para lo cual impusieron el Tratado de Tipitapa (4 de mayo de 1927).

Este acuerdo puso al descubierto la traición de los liberales a los intereses nacionales y despertó el descontento en la mayoría de la población. Uno de los generales liberales más prestigiosos que aún combatía contra los conservadores, Augusto César Sandino, entonces con 32 años de edad, se negó a aceptar el tratado y con sus partidarios inició la resistencia en las zonas boscosas de las Segovias, al norte de Nicaragua. Ya el 19 de mayo de ese año Sandino daba a conocer un manifiesto donde llamaba a la lucha contra el ocupante extranjero, pues los norteamericanos «pretenden privarnos de nuestra Patria y nuestra Libertad».¹

En respuesta, comenzó a formarse un verdadero ejército popular. El 2 de septiembre de ese año se aprobaron los estatutos del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua. Esta fuerza se convirtió muy pronto en todo un símbolo para los pueblos latinoamericanos amenazados por el imperialismo norteamericano, levantando una ola de solidaridad que abarcó a todo el hemisferio. En casi todos los países de América Latina se organizaron comités ¡*Manos fuera de Nicaragua!*, al mismo tiempo que las filas sandinistas se nutrían de combatientes de las más diversas procedencias.

En reacción a los avances del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua, el gobierno títere de Adolfo Díaz declaró el estado

¹ J. Bosch, *De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial*, La Habana, Casa de las Américas, 1981, p. 325.

de sitio, mientras el arzobispo de Managua excomulgaba a todos los seguidores de Sandino y las tropas norteamericanas incrementaban su capacidad combativa con el empleo de artillería y aviación. Estas y otras medidas represivas no pudieron impedir el aumento de las acciones armadas de los sandinistas y el crecimiento de sus fuerzas en 1928.

A mediados del año siguiente, como resultado de la maniobra electoral fraguada por los norteamericanos y que llevó a la presidencia al antiguo jefe liberal José María Moncada, Sandino se vio obligado a abandonar Nicaragua. Durante un tiempo residió en México, cuyo gobierno, emanado de la revolución mexicana de 1910, había condenado la intervención de Estados Unidos.

El 7 de mayo de 1930 Sandino regresó a su patria y reinició la lucha de liberación nacional, en medio de los desastrosos efectos de la crisis económica que comenzó el año anterior. La segunda etapa que se abrió entonces se caracterizó por operaciones militares de mayor envergadura, ampliando los sandinistas su control a zonas de los departamentos de León y Chinandega y librando acciones en la costa atlántica del país. Incluso, en octubre de 1932, los sandinistas llegaron a las puertas de Managua, la capital.

El empantanamiento de la guerra en Nicaragua, la propia evolución de la situación interna de Estados Unidos, sumados a las crecientes protestas internacionales, obligó al gobierno norteamericano a buscar fórmulas más sofisticadas para acabar con la lucha de los sandinistas. Con ese propósito crearon una Guardia Nacional, anunciaron la retirada de sus fuerzas militares y realizaron nuevas elecciones que llevaron al poder al liberal Juan Bautista Sacasa (1933-1936).

De inmediato, el nuevo mandatario propuso a Sandino iniciar conversaciones para terminar la guerra. El 8 de enero de 1933, seis días después de la retirada del último *marine* norteamericano, se iniciaron las negociaciones entre Sandino y los representantes de los partidos tradicionales. En ellas el *General de Hombres Libres*, como le había llamado Henri Barbusse, aceptó desarmar su ejército y retirarse con sus tropas a las tierras que se le ofrecían junto al río Coco.

Traicionado por sus interlocutores, Sandino fue emboscado y asesinado en la noche del 21 de febrero de 1934, por órdenes expresas

del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, y del embajador norteamericano en Nicaragua Arthur Bliss Lane. Al fusilamiento de Sandino siguió pocas horas después la masacre de sus compañeros acantonados, sin armas, junto al río Coco.

A pesar de su trágica desaparición, el nombre del *General de Hombres Libres* devino bandera del movimiento de liberación nacional en América Latina y forzó a Estados Unidos, entonces gobernado por el presidente Franklyn D. Roosevelt, a reexaminar las formas y métodos de su dominio en la región. Ello no impediría al propio Roosevelt recibir en Washington cinco años después, con todos los honores, al principal responsable directo del asesinato de Sandino, Anastasio Somoza, convertido ya en dictador de Nicaragua (1937).

ALBIZU CAMPOS Y LAS LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

En la década del treinta también en Puerto Rico se radicalizaron las luchas populares, en este caso dirigidas a la obtención de la independencia de Estados Unidos, que se había apoderado de la isla como botín de la guerra ganada a España en 1898. Al frente de este movimiento se encontraba ahora don Pedro Albizu Campos, fundador en 1922 del Partido Nacionalista de Puerto Rico.

En la coyuntura de los años treinta, bajo los efectos de la crisis económica de 1929, las luchas por la independencia de la isla se redoblaron. En 1930 Albizu Campos, después de peregrinar durante cinco años por países de América Latina, abogando por la liberación de su patria, pasó a presidir el Partido Nacionalista, al que imprimió una línea revolucionaria, de resistencia al colonialismo norteamericano y de no colaboración con el régimen político impuesto a su país.

Para ello proclamó la necesidad de la lucha armada para alcanzar la emancipación y organizó, desde el 1 de enero de 1936, al Ejército Libertador de la República de Puerto Rico. Desde su misma aparición pública, el Partido Nacionalista fue víctima de las represalias del gobierno colonial norteamericano. El 16 de abril de

1932, más de 20 mil personas enarbolaron en las calles de San Juan la bandera de Puerto Rico, en protesta por la ofensa legislativa que pretendía convertirla en enseña colonial.

Otra manifestación cívica fue bárbaramente atacada por la policía en las inmediaciones de la ciudad universitaria el 24 de febrero de 1936. Este día, las fuerzas represivas del régimen colonial, encabezadas por el coronel norteamericano Elisha Francis Riggs, perpetraron una sangrienta matanza en la localidad de Río Piedras que dejó un saldo de cuatro nacionalistas muertos y más de cuarenta heridos.

Al año siguiente, el 26 de febrero, dos jóvenes militantes del Partido Nacionalista ejecutaron en las calles de San Juan al asesino coronel Riggs, en represalia por la masacre de Río Piedras. Capturados, estos militantes fueron fusilados, sin juicio previo, en un cuartel policial de la capital, y unas semanas después arrestados varios dirigentes nacionalistas, entre ellos el propio Albizu Campos, acusado de conspirar para derrocar por la fuerza y la violencia al gobierno colonial norteamericano. El legendario líder independentista fue finalmente condenado a catorce años de prisión y destierro, con trabajos forzados, en la prisión federal de Atlanta (Georgia).

La ola represiva de las autoridades estadounidenses en la isla no se detuvo y el 21 de marzo de 1937, por orden del gobernador colonial Blanton D. Winship, fue brutalmente reprimida en Ponce otra manifestación pacífica de los independentistas, que reportó más de veinte muertos y dos centenares de heridos. La respuesta de los patriotas a estas bárbaras agresiones no se hizo esperar: en 1938 los nacionalistas realizaron un fracasado atentado contra el odiado gobernador colonial, preludio de nuevas acciones armadas por la independencia de Puerto Rico.

REBELIÓN APRISTA EN PERÚ

El 24 de agosto de 1930 un movimiento militar puso fin al largo gobierno de Augusto B. Leguía, iniciado en 1919. Como en otros países de América Latina, la crisis mundial del capitalismo

se traducía en el desplome del gobierno peruano y el incremento de la intranquilidad social. Pero aquí venía precedida de protestas de los estudiantes universitarios –entre cuyos dirigentes se encontraba Víctor Raúl Haya de la Torre, ex presidente de la recién creada Federación de Estudiantes (1919-1920) y organizador de la Universidad Popular González Prada (1921)–, movimientos campesinos y sublevaciones indígenas.

La revuelta castrense había comenzado el 22 de agosto de 1930 en los cuarteles de Arequipa, segunda ciudad del país, y representó el advenimiento de un nuevo gobierno militar. El flamante presidente de la junta que envió a la cárcel a Leguía y lo dejó morir olvidado en prisión, era el comandante Luis M. Sánchez Cerro.

El golpe de este jefe militar avivó en lugar de apaciguar las tensiones sociales. Por todos lados estallaban sublevaciones populares y rebeliones de sectores del ejército y la marina. En el propio 1930 centenares de indígenas desesperados atacaron en septiembre el centro minero de La Oroya, perteneciente a la Cerro de Pasco Corporation.

El amenazador clima político provocó varios cambios efímeros de gobierno entre el 28 de febrero y el 8 de diciembre de 1931, cuando una nueva junta, presidida por el civil Elías Sámanez Ocampo, entregó el poder otra vez a Sánchez Cerro, elegido presidente en unos comicios amañados celebrados tres meses antes. Las mencionadas elecciones se efectuaron en medio de una atmósfera revolucionaria que presagiaba constantes movimientos contra las clases privilegiadas y el gobierno.

En una hábil maniobra destinada a neutralizar la actividad conspirativa de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en 1924 por Haya de la Torre, se había permitido el regreso de los exiliados políticos, ofreciendo a su dirigencia la plena participación en el juego electoral. Dispuesto a participar en la justa, el APRA, que desde septiembre de 1930 había abandonado sus pretensiones de organización continental, con un programa antimperialista que además ponía el acento en el indigenismo, se convirtió en un partido nacional más. Con el nombre de Partido Aprista Peruano (PAP), se orientó a afianzar sus bases populares haciendo

proselitismo en los medios urbanos y entre los trabajadores agrícolas de las haciendas azucareras del norte.

El triunfo de Sánchez Cerro burló las aspiraciones de la máxima dirigencia aprista e hizo víctima una vez más a la organización de una feroz persecución. El 23 de diciembre de 1931 las oficinas centrales del APRA fueron clausuradas y el 20 de febrero de 1932 tuvieron que salir expulsados del país los 27 diputados apristas electos en septiembre del año anterior.

Por último, el 5 de marzo de 1932, se ordenó el arresto de Haya de la Torre y de todo el comité ejecutivo del APRA. Al día siguiente, un joven aprista hirió a Sánchez Cerro en un atentado. Pocas semanas después, el 6 de mayo, Haya de la Torre fue detenido por efectivos gubernamentales en los suburbios de Lima.

Como respuesta del APRA, o en muchos casos obedeciendo a la espontánea rebeldía popular, las sublevaciones, sabotajes y conspiraciones contra el régimen se pusieron a la orden del día. La acción aprista más importante se desarrolló en Trujillo, del 7 al 11 de julio de 1932, y fue dirigida por Manuel *Búfalo* Barreto. En esa ciudad, verdadera plaza fuerte de la organización, los militantes del APRA se apoderaron de la alcaldía, la prefectura y las instalaciones militares, provocando la muerte de decenas de oficiales del ejército que residían en el cuartel O'Donovan.

Sánchez Cerro movilizó a todas las fuerzas gubernamentales para aplastar la revuelta popular en Trujillo, a pesar de que se agudizaba un conflicto limítrofe con Colombia que llevaría a la guerra entre los dos países (1932-1934). La resistencia de la ciudad terminó por ceder al bombardeo aéreo y naval y los ataques terrestres del ejército. Entre las víctimas de estos acontecimientos –que se contaron por miles– estuvieron varios cientos de jóvenes apristas fusilados en las ruinas de la ciudad preincaica de Chan Chan.

Sumidos los apristas en la actividad clandestina –que se prolongaría hasta 1945– o la prisión, el 9 de abril de 1933 Sánchez Cerro hizo promulgar una nueva constitución, para caer abatido a balazos 21 días más tarde a la salida del hipódromo. Inmediatamente, la propia convención constituyente designó al jefe del ejército, general Oscar R. Benavides, para que ocupara el gobierno. La vieja pugna

entre civilistas y militaristas, ya casi olvidada, cedía el paso a la nueva animadversión entre el APRA y el ejército.

LA REVOLUCIÓN DEL TREINTA EN CUBA

Tras la huida del dictador Gerardo Machado, el 12 de agosto de 1933, y sus principales personeros –cuyas propiedades fueron saqueadas por turbas populares–, buques de guerra norteamericanos se presentaban en la bahía de La Habana. A duras penas se establecía un débil gobierno, conformado a la carrera por los participantes de la mediación entre el régimen defenestrado y una parte de la oposición –desarrollada por el embajador de Estados Unidos Benjamín Sumner Welles– y encabezado por Carlos Manuel de Céspedes, hijo del Padre de la Patria, tras el fracasado intento de dejar en el poder al jefe del ejército, general Alberto Herrera.

El gobierno del presidente Céspedes, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, la oligarquía y los políticos que habían participado en la mediación de Sumner Welles, fue derrocado el 4 de septiembre de 1933 por los sargentos, cabos y alistados encabezados por Fulgencio Batista. La sublevación militar, enfilada inicialmente a demandas castrenses, fue aprovechada por algunos sectores revolucionarios, como los estudiantes del Directorio Estudiantil Universitario (DEU), descontentos con la injerencia norteamericana y la continuación del machadato sin Machado, para deponer al gobierno de Céspedes.

Pero el inoperante gobierno colegiado que le sucedió –la Pentarquía– apenas duró unos días, después de que uno de sus integrantes, Sergio Carbó, de manera inconsulta, designara al sargento Batista como jefe del ejército, con el grado de coronel, ante el desacato de la vieja oficialidad a aceptar el nuevo orden. Por la misma razón, todos los jefes y oficiales del ejército, muchos de ellos desprestigiados por su apoyo a la dictadura de Machado, fueron sustituidos por sargentos, cabos y soldados.

En lugar de la Pentarquía ocupó la presidencia, desde el 10 de septiembre de 1933, el prestigioso profesor universitario Ramón

Grau San Martín. En el autotitulado *Gobierno Revolucionario* de Grau actuaba un ala antimperialista, encabezada por el ministro Antonio Guiteras, que impulsó medidas nacionalistas y de corte social.

Combatido por la oligarquía y los Estados Unidos –que no otorgó su reconocimiento diplomático y mantuvo la isla rodeada con sus barcos de guerra–, e incomprensido por el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, el llamado «gobierno de los cien días» cayó finalmente el 15 de enero de 1934 víctima de sus propias contradicciones. Un papel central en ese desenlace correspondió a la traición del jefe del ejército, el ex sargento devenido coronel, Fulgencio Batista, convertido en el hombre fuerte de Cuba, quien pasaba a ser el agente de la reacción y el imperialismo norteamericano para aplastar el proceso revolucionario cubano y restablecer el viejo orden de dominación.

Ese resultado fue también favorecido por la desmovilización de la vieja oficialidad del ejército, que fracasó en un postrero e inútil esfuerzo de resistencia desesperada en el Hotel Nacional de La Habana, de donde fue desalojada a cañonazos por el propio Batista el 2 de octubre de 1933, ya puesto a las órdenes de la embajada de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con el alzamiento de ex oficiales, la aviación y parte de la policía el 7 y 8 de noviembre de ese año.

A partir de estos sucesos, Batista quedó convertido en el verdadero poder en Cuba, dominando el panorama nacional durante toda una década, lo que puede considerarse, en la práctica, el comienzo de su dictadura, aun cuando todavía actuaba tras bambalinas. Con el apoyo del nuevo representante de Estados Unidos en la Isla, Jefferson Caffery, y de la alta burguesía cubana, el papel de Batista fue decisivo en el derrocamiento del presidente Grau –una manifestación en su apoyo fue reprimida por las tropas batistianas frente al Palacio Presidencial, con un saldo de varios muertos y heridos– y la designación de un nuevo mandatario, Carlos Mendieta, típico representante de la vieja política.

En apoyo a Mendieta, no solo fue reconocido de inmediato por Estados Unidos, sino que poco después el gobierno norteamericano firmó un nuevo tratado de reciprocidad comercial con Cuba (mayo de 1934) y fijó una cuota para el azúcar cubano en su mercado. Además, eliminó la aborrecida enmienda Platt, que lesionaba la soberanía

cubana, concesión esta inscrita en la política del «buen vecino» preconizada por el presidente Franklyn D. Roosevelt. Pero las medidas dirigidas a estabilizar la situación nacional no consiguieron su propósito, pues siguió la agitación popular y los movimientos contestatarios de distinto signo político dirigidos a alterar el *status quo*.

Para garantizar la fidelidad de las fuerzas armadas, Batista obligó al presidente Mendieta a incrementar los salarios de sus miembros y convalidar ascensos a oficiales, junto con otras prebendas y concesiones a los militares. También comenzaron a edificarse nuevas estaciones de policías y cuarteles militares, mientras Estados Unidos ofreció su apoyo a la modernización del ejército cubano, proporcionando asesoría técnica y adiestramiento.

Con estos recursos, Batista, en su condición de jefe del ejército, fue el encargado de reprimir en forma brutal a las fuerzas revolucionarias, el movimiento obrero y los brotes opositores procedentes de sectores burgueses y pequeño burgueses. Para facilitar estas operaciones, fueron creados tribunales de urgencia –que en procesos sumarios podían emitir condenas por simples presunciones–, establecida la pena de muerte para los que sabotearan la cosecha azucarera, abolida la autonomía universitaria, restringidos los derechos ciudadanos y suspendidas las garantías constitucionales.

Aplastada la huelga general de marzo de 1935 –y asesinado el líder de Joven Cuba,² Antonio Guiteras, junto al revolucionario venezolano Carlos Aponte–, se logró el llamado pacto institucional, entre las fuerzas más derechistas del país, para realizar unas elecciones que crearan la sensación de normalidad en el país y que se efectuaron en enero de 1936. En estos comicios, de escasa representatividad, se impuso el líder liberal Miguel Mariano Gómez, que era el candidato de Estados Unidos y el ejército.

Sin embargo, el flamante mandatario, que ocupó su cargo el 20 de mayo de 1937, solo pudo estar en el gobierno hasta fines de ese mismo año, pues entró en abierta pugna con el coronel Batista por el uso de recursos estatales. Bajo la amenaza de un golpe militar si el primer mandatario no era sustituido, el Congreso depuso a Miguel

² Organización revolucionaria de lucha contra los gobiernos que respondían a los intereses de los Estados Unidos. (Nota del editor).

Mariano Gómez el 24 de diciembre de 1937 y lo sustituyó por el dócil vice presidente Federico Laredo Brú, lo que demostraba el poder omnímodo que ya había alcanzado Batista.

Prueba de que la verdadera autoridad del país la ejercía Batista fue la adopción, en agosto de 1937, de un demagógico *Plan Trienal* dirigido a impulsar el desarrollo socio-económico de las zonas rurales, mediante 176 promesas a cumplir en tres años, y que demostraba el insistente propósito batistiano de crearse una base social entre el empobrecido y atrasado campesinado cubano. Pero la única materialización de orden práctico de este programa fue la ley de Coordinación Azucarera –solo beneficiaba a los campesinos medios y pobres dedicados al cultivo de la caña de azúcar–, dirigida a regular la principal industria cubana en sus tres factores esenciales; el fabril, el agrícola y la fuerza de trabajo.

El abandono oficial del *Plan Trienal* por parte de Batista, en mayo de 1938, indicaba que el astuto jefe del ejército iba a realizar un cambio de política que lo desmarcara de proyectos de inspiración fascista, acorde a las nuevas circunstancias internacionales, y que, al mismo tiempo, le permitieran modificar su imagen de militar represivo y despótico por una más democrática, despejando el camino a la primera magistratura del país.

NACIONALISMO POPULISTA

La crisis capitalista de los años treinta, además de favorecer el estallido de movimientos sociales y revoluciones populares, propició el desarrollo de movimientos nacionalistas burgueses de distinto signo, que alcanzaron mayor concreción en aquellos países latinoamericanos que habían logrado vertebrar una cierta industria. En estos casos, los sectores emergentes, que representaban los intereses de la naciente burguesía nacional, alcanzaron o compartieron el poder e impusieron nuevas políticas orientadas a promover el desarrollo interno sobre la base de una serie de medidas proteccionistas y nacionalistas, típicas del capitalismo de estado.

De esta manera, aumentó sensiblemente la participación gubernamental en la economía y la sociedad, controlando los recursos

naturales y revirtiendo al patrimonio nacional importantes ramas productivas y de servicios, dominadas hasta entonces por el capital extranjero, creándose con ellas grandes monopolios estatales. Antecedentes de estos gobiernos nacionalistas fueron, en cierta forma, los de Balmaceda en Chile, Irigoyen en Argentina y Batlle y Ordóñez en Uruguay.

Para las repúblicas de América Latina que contaban con índices relativamente altos de urbanización y crecimiento industrial, el desarrollo de un capitalismo de estado comenzó o cobró un segundo impulso con la crisis capitalista de 1929-1933. Se trataba de un grupo de países latinoamericanos en los cuales la burguesía nacional era más o menos fuerte, como Brasil, Argentina, México y, en menor medida, Colombia, Chile y Uruguay.

Al contrario de lo ocurrido con el resto de los países al sur del río Bravo, en donde la depresión económica se trató de resolver mediante la recuperación de los mercados perdidos, acentuando el libre comercio y con una mayor entrega al capital foráneo —el llamado «crecimiento hacia afuera»—, en aquel grupo de países los efectos del *crack* bancario de 1929 se combatieron de una manera muy diferente. Así, los países latinoamericanos con mayor desarrollo industrial apostaron por una política económica basada en una mayor participación estatal en la economía, esto es, el «crecimiento hacia adentro».

Entre las medidas adoptadas por este grupo de países estaban la promoción de mecanismos inflacionarios, tarifas proteccionistas y, la adopción de controles cambiarios, que permitieran equilibrar la balanza comercial y de pagos, devaluando la moneda. Además, impulsaron una mayor intervención estatal en la infraestructura, la esfera productiva y los gastos sociales. El movimiento obrero fue reorganizado por el Estado a través de estructuras sindicalistas y se promovió una legislación laboral paternalista que incluía beneficios sociales y el derecho de huelga.

La política de «crecimiento hacia adentro» y de sustitución de importaciones, puesta en práctica en América Latina por los gobiernos nacionalistas populistas para beneficio de la burguesía industrial, terminó por alterar la tradicional división internacional

del trabajo impuesta a finales del siglo XIX por las grandes potencias. Los representantes de estas corrientes auspiciaron distintas formas de participación popular, introduciendo la incorporación de sectores tradicionalmente excluidos en la actividad política, a través de mecanismos de movilización controlados por el Estado.

Uno de sus principales rasgos fue el carácter parainstitucional de la movilización popular, con gran variedad de símbolos, estilos e incluso ideologías, que los sociólogos bautizaron de populistas. Sin embargo, ello no impidió que en la mayoría de estos países las reformas se detuvieran en ciertos límites y que los sectores industriales llegaran a un compromiso con la oligarquía agro-exportadora, para no afectar su principal fuente de recursos en divisas.

Ejemplo de ello fue el régimen de Getulio Vargas en Brasil, quien a fines de los años treinta implantó un gobierno nacionalista burgués de corte fascista, apoyado tanto por la emergente burguesía industrial como por la oligarquía tradicional. En cambio, México fue el paradigma de un nacionalismo de un signo político y social completamente diferente.

Nos referimos, en particular, al gobierno del general Lázaro Cárdenas, desarrollado entre 1934 y 1940, que puso fin al período caudillista de la revolución mexicana, poniendo sobre el tapete los principales objetivos postergados de esa epopeya, que hasta entonces habían quedado en la letra muerta de la constitución de Querétaro. La política cardenista adoptó una línea abiertamente revolucionaria y popular, al extremo de atreverse a nacionalizar el petróleo e impulsar una reforma agraria radical.

EL CARDENISMO

Tras la promulgación en México de la constitución de 1917 y los asesinatos de Emiliano Zapata (1919) y Pancho Villa (1923), el gobierno nacional continuó en manos de Venustiano Carranza, quien congeló cualquier posibilidad de llevar adelante los objetivos de la revolución mexicana, hasta que murió en 1920 luego de un levantamiento militar encabezado por el general Álvaro Obregón.

Aunque durante el mandato de Obregón, extendido hasta 1924, se adoptaron algunas disposiciones revolucionarias, en realidad pocos avances se consiguieron en las metas plasmadas en la constitución de 1917.

No obstante, en esos años se inició un gran renacimiento cultural promovido por José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública –entre sus colaboradores figuraban la joven poetisa chilena Gabriela Mistral, que ya había dado a conocer sus *Sonetos de la muerte* (1915), y el líder peruano Haya de la Torre– que tuvo importantes expresiones en la novelística, como las obras de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán sobre la revolución y cuyo punto culminante se alcanzó con el muralismo mexicano. Esta reconocida corriente pictórica, que llenó de inmensos y sugerentes murales los principales edificios públicos de la capital, rescató el papel de las masas populares, y especialmente a los pueblos originarios, como factor decisivo en la historia y, tuvo entre sus figuras descolantes a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco.

El indigenismo también alcanzaría gran resonancia en la novelística mexicana y de otros países latinoamericanos. Entre sus primeras expresiones literarias pueden citarse *El Indio* (1935) del mexicano Gregorio López y Fuentes, *Huasipungo* (1934) del ecuatoriano Jorge Icaza y *El mundo es ancho y ajeno* (1941) del peruano Ciro Alegría.

A partir de 1924, el poder en México pasó a manos de Plutarco Elías Calles, titulado Jefe Máximo de la Revolución, quien dominó el escenario político durante una década, afianzado en el poder tras el asesinato de Obregón (1928), etapa denominada el *Maximato*. Durante ese período se sucedieron en la presidencia, bajo la sombra de Elías Calles, Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934).

Fueron también los años en que se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), devenido en el gran partido oficial del sector triunfador en la revolución mexicana y que fue concebido originariamente por Calles para manejar a su antojo la política del país. Además, se rompieron las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (URSS) –establecidas por Obregón, lo que había convertido a México en el único país latinoamericano que lo hizo–, mientras

las conquistas de la revolución eran paralizadas y se acentuaba la tendencia derechista, favoreciendo abiertamente la entrada masiva del capital extranjero y los intereses de los emergentes sectores burgueses.

El general Lázaro Cárdenas, llegado a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1934, debió comenzar su gestión, para poder desarrollar un gobierno verdaderamente independiente, libre de ataduras y compromisos con el pasado reciente, distanciándose de las figuras vinculadas al *Maximato* de Elías Calles. Por eso alejó a poderosos caudillos –como Saturnino Cedillo y Juan Andrew Almazán– y, finalmente, expulsó del país al propio Plutarco Elías Calles (1936) y sus más cercanos secuaces, entre ellos Luis N. Morones –que controlaba el movimiento sindical oficialista.

El motivo de la sanción al antiguo Jefe Máximo de la revolución era su constante intención de inmiscuirse en asuntos de gobierno, tras las numerosas huelgas que estallaron en la primavera de 1935. Poco antes, el Ejecutivo había decretado una amplia ley de indultos, a la vez que moderaba la campaña antirreligiosa de sus predecesores en el cargo –que había dado lugar a levantamientos armados fanáticos en la llamada guerra cristera– y legalizaba al Partido Comunista.

Con estas medidas, el mandatario puso fin a la hegemonía militar, a las endémicas querellas parlamentarias y fortaleció la centralización política, a la vez que despejaba el camino para la radicalización de su gobierno. Además, Cárdenas tuvo también que propiciar la reorganización del movimiento obrero, lo cual consiguió con la creación, en 1936, de la unitaria Confederación de Trabajadores de México (CTM) –que declaró su aspiración de lograr una sociedad sin clases–, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, quien había dirigido con anterioridad la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM).

Con el apoyo gubernamental –Cárdenas había prometido que las conquistas obreras podrían llegar hasta donde dieran la capacidad productiva y financiera de las empresas– las huelgas obreras se multiplicaron –se calculan unas 900 entre 1935 y 1939–, lo que permitió la obtención de muchas reivindicaciones y la significativa elevación del nivel de vida de los trabajadores. Además, el mandatario mexicano

reestructuró al propio partido de gobierno, transformándolo en uno nuevo de estructura corporativista, con un programa nacionalista y de justicia social mucho más acentuado y con mayores vínculos y representatividad populares, que desde 1938 se denominó Partido de la Revolución Mexicana (PRM).

Los grandes hitos del gobierno de Cárdenas estuvieron relacionados con su política soberana e independiente: asilo concedido a León Trotsky (9 de enero de 1937), condena a las agresiones fascistas en África y Europa, así como de la invasión de Finlandia por la Unión Soviética (URSS), respaldo a los judíos perseguidos por los nazis y defensa del derecho de no intervención en foros panamericanos. Esa postura alcanzó su cenit, en materia de política exterior, con el comprometido respaldo de México a la república española. Gracias a ello, más de 20 mil republicanos españoles obtuvieron cálido refugio en México.

También durante su mandato se dio gran impulso a la educación popular, que por su sentido social había sido tildada, desde la reforma realizada en diciembre de 1934 al artículo tercero constitucional, de *socialista*. La educación *socialista* pronto se convirtió en piedra angular del gobierno de Cárdenas, al mismo tiempo que se inauguraba una Universidad Obrera (1936).

Una de las medidas revolucionarias de mayor significación del período cardenista fue sin duda la reforma agraria, destinada a resolver lo que el mandatario consideraba el problema social más grave de México. A la llegada al poder de Cárdenas, los terratenientes todavía poseían el 83.4% de la tierra laborable y solo poco más de medio millón de campesinos se habían beneficiado hasta entonces con los exiguos repartos agrarios, unos siete millones de hectáreas entre 1915 y 1934, en su mayoría realizados a costa de las tierras estatales. La única excepción era por supuesto el estado de Morelos, único lugar del país donde los hacendados habían sido realmente afectados por la aplicación zapatista del Plan de Ayala.

Para llevar adelante una verdadera reforma agraria fue necesario expropiar a los latifundistas nacionales y extranjeros –más de 18 millones de hectáreas–, lo que en gran medida fue posible por la debilidad en que se encontraba este sector como resultado del

proceso revolucionario. Ese proceso abrió el camino para la creación de algunos ejidos colectivos –esto es, entrega de tierras a un pueblo o núcleo de población, el cual no podía venderla, rentarla o enajenarla de ninguna forma–, revitalizando las ancestrales comunidades aborígenes. Preocupado por el secular abandono de los pueblos originarios, el mandatario mexicano fundó en enero de 1936 el Departamento de Asuntos Indígenas.

De 1935 a 1938 el presidente Cárdenas promulgó también una amplia legislación para proteger a la industria nacional en desarrollo de la competencia extranjera. Especial importancia tuvo la ley de 1938 que estableció aranceles proteccionistas –después se pondría en vigor el impuesto a la renta (1939)– para la importación de todas aquellas mercancías que se produjeran en México. La aplicación de esta disposición, junto con los créditos y el apoyo brindado a la inversión privada y estatal –que creció de 377 millones a 773 millones de pesos–, permitió que la manufactura que representaba el 13.7% del ingreso nacional en 1935 llegara al 24.2% en 1940.

En el mismo lapso, las empresas industriales aumentaron de 6,916 a 13 510, incrementándose el valor de la producción en las 24 ramas fabriles más importantes del país: pasó de 598 millones de pesos en 1930 a 1526 millones de pesos en 1940. Fue también entonces que alcanzó gran desarrollo la industria tipográfica y comenzó a fomentarse, con apoyo gubernamental, la producción de películas, creando las bases para la llamada época dorada del cine mexicano que se alcanzaría en los años cuarenta.

En la legislación nacionalista adoptada en este período ocupó un lugar destacado la ley sobre expropiación en beneficio de la nación, firmada por Cárdenas en noviembre de 1936, según la cual el Estado tenía pleno derecho a confiscar bienes de particulares en provecho de la sociedad y que iba mucho más lejos de lo establecido en el artículo 27 de la constitución. Gracias a estas disposiciones, fueron recuperados también los ferrocarriles (junio de 1937) que estaban en manos del capital extranjero desde los tiempos de Porfirio Díaz.

A las profundas transformaciones realizadas durante su presidencia, que coronaron la revolución mexicana iniciada en 1910 –estatización de los ferrocarriles, reforma agraria, organización del

movimiento obrero, educación *socialista*, política soberana e independiente— se sumó la valiente expropiación petrolera efectuada el 18 de marzo de 1938: sin duda la más radical medida antimperialista adoptada hasta entonces en toda la atribulada historia de América Latina. Para adoptar esta histórica decisión, Cárdenas, demostrando una audacia y valentía muy superior a todos sus predecesores, aprovechó la existencia de un insoluble conflicto obrero con los monopolios petroleros y la compleja correlación de fuerzas existentes a escala internacional con el ascenso del fascismo en Alemania e Italia.

Las represalias de los monopolios petroleros fueron duras: impusieron un boicot mundial que dejó a México desprovisto de financiamiento, técnicos, transportes, piezas de repuesto y mercados para sus hidrocarburos. Para complicar más las cosas, a los tres meses de la expropiación estalló la rebelión de Saturnino Cedillo —un antiguo líder campesino devenido en hacendado—, caudillo de San Luis Potosí, aupado por todas las fuerzas internas y externas contrarias a Cárdenas y que fue aplastada por el gobierno en enero de 1939. Otro síntoma del incremento de la oposición derechista fue la aparición de la Unión Nacional Sinarquista (1937) y del Partido Acción Nacional (PAN), este último fundado en 1939 en la sede del Banco de Londres y México por Manuel Gómez Morín.

En respuesta a la presión de las empresas petroleras expropiadas, amparadas por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, Cárdenas pidió un esfuerzo a la nación en su discurso del 23 de marzo de 1938 ante una gigantesca concentración popular reunida frente al Palacio Nacional. La mayor intensidad del conflicto se alcanzó con Inglaterra, pues tras la ruptura de las relaciones diplomáticas (3 de mayo de 1938), el gobierno de Londres adoptó medidas para aislar económica y políticamente a México.

A partir de abril de 1938, el gobierno de Cárdenas lograba romper el bloqueo y realizar significativas exportaciones de petróleo mexicano, mientras la producción alcanzaba los 176 mil barriles (1939). Al final, las empresas confiscadas se vieron obligadas al reconocimiento de la soberanía mexicana y a aceptar la indemnización por sus propiedades.

Sin duda, las leyes revolucionarias del gobierno de Cárdenas constituyeron el punto más alto alcanzado por la revolución mexicana. Después de más de un siglo de independencia, fue el primer intento serio de transformación radical de las relaciones económicas de un país de América Latina, sacudió hasta sus raíces las arcaicas estructuras agrarias y desafió a las cada vez más agresivas potencias imperialistas. Todo ello convirtió al régimen cardenista en un profundo movimiento nacionalista de izquierda, que inauguró una nueva época de luchas populares contra las oligarquías y la dominación extranjera en todo el continente, dejando su impronta en el imaginario revolucionario del pueblo mexicano.

ESTADO NOVO BRASILEÑO

La otra cara del nacionalismo burgués fue Brasil con el *Estado Novo*, implantado por Getulio Vargas en 1937, tras el breve ensayo corporativo establecido por la constitución de 1934. El *Estado Novo*, inspirado en el modelo fascista y erigido sobre las cenizas de la insurrección comunista de 1935, era un nacionalismo de corte conservador y antidemocrático, muy diferente al cardenismo, cuyos rasgos autoritarios se fueron atemperando en los años de la Segunda Guerra Mundial.

Detrás de ese esquema totalitario, se ocultaba también una estrategia de desarrollo integral y la búsqueda de independencia económica y política. La estabilidad del sistema no solo se fundamentaba en la alianza de la oligarquía exportadora y la emergente burguesía industrial, sino en un nuevo tipo de relaciones con el proletariado, el cual se encuadraba en organizaciones sindicales manejadas por el Estado mediante líderes corruptos, a cambio de ciertas concesiones derivadas de una legislación social bastante avanzada.

Este resultado fue posible porque las insurrecciones *tenentistas* contribuyeron a resquebrajar la vieja república oligárquica, proceso que se conjugó con los efectos de la gran crisis económica capitalista de 1929 que contribuyó a crear una situación revolucionaria. En esas condiciones, se había producido la llamada revolución de 1930.

Dirigida por Getulio Vargas, un pragmático hacendado y gobernador de Rio Grande do Sul, la rebelión de 1930 triunfó con el apoyo de importantes grupos de la emergente burguesía industrial y la pequeña burguesía, descontentos con el régimen oligárquico, y dispuestos a encontrar una solución nacional a la crisis capitalista de 1929. Invitado Luis Carlos Prestes a adherirse al movimiento, que contaba con el respaldo de los *tenentistas* y la mayor parte del ejército, se negó con el argumento de que era una revuelta burguesa que no resolvería los problemas del proletariado y el pueblo.

Ya para entonces el legendario comandante de la columna a la que dio nombre, Prestes, había sido captado por el dirigente comunista Astrogildo Pereira y viajado a la Unión Soviética. Condicionado por las consignas sectarias de la III Internacional –que también provocaron en América Central la ruptura de Farabundo Martí y Sandino–, el *caballero de la esperanza* –como lo denominó el famoso escritor brasileño Jorge Amado– rompió con sus antiguos compañeros de armas, sumados al movimiento de Vargas, perdiendo la posibilidad de influir en la llamada revolución de 1930.

Gracias a esa insurrección, se hizo del poder ese año un sector marginado de la propia oligarquía y la emergente burguesía industrial, representado por Getulio Vargas, quien de forma ininterrumpida mantuvo el control del gobierno hasta 1945. La primera etapa de su mandato fue convulsa, no solo como resultado de las agitadas luchas políticas, sino también por la sublevación del poderoso estado de Sao Paulo en 1932 –centro de la producción cafetalera y de la naciente industria–, sometido finalmente por la fuerza.

Hasta 1937 Vargas introdujo ciertas reformas democráticas y sociales que quedaron incorporadas a la constitución de 1934, una especie de compromiso entre las viejas fuerzas oligárquicas y los núcleos burgueses en ascenso. En esa coyuntura, comenzaron a actuar los grupos profascistas brasileños –como los integralistas– para detener el auge del movimiento de masas, estimulados por el clima internacional –ascenso de Hitler al poder en Alemania. Simultáneamente, crecían los vínculos económicos y comerciales entre la Alemania nazi y el gobierno de Vargas.

Para luchar contra la arrolladora influencia fascista surgió, en marzo de 1935, la Alianza Nacional Libertadora (ANL), dirigida tras bambalinas por el Partido Comunista del cual Luis Carlos Prestes era ahora su secretario general. Perseguida implacablemente por el gobierno, la ANL promovió la sublevación de algunas guarniciones militares (Rio Grande do Norte, Recife, Rio de Janeiro) en noviembre de ese año para crear *soviets* de obreros, soldados y campesinos, pero fueron aplastados en un verdadero baño de sangre.

El fracaso del levantamiento comunista facilitó los planes de Vargas para acentuar los rasgos autoritarios y represivos de su gobierno, proceso que culminó en 1937 con la instalación del *Estado Novo*. La represión desarticuló a las organizaciones democráticas y posibilitó un repunte de los partidos tradicionales con vistas a las elecciones de 1938.

Los comicios abrían la posibilidad de un regreso al esquema de la *Republica Velha*. Este factor, unido a los obstáculos para la reelección presidencial, llevó a Vargas a urdir una asonada militar. Para completar los planes golpistas, Vargas encomendó a Francisco Campos, conocido simpatizante del nazifacismo, la tarea de confeccionar una constitución autoritaria y centralista, que garantizara la prolongación del régimen y permitiera controlar al movimiento popular.

La atmósfera para la asonada fue preparada en septiembre de 1937 con la divulgación de una falsa conspiración comunista: el *Plan Cohen*. El supuesto proyecto revolucionario, elaborado en realidad por los integralistas, proporcionó a Vargas el pretexto que necesitaba para declarar el estado de guerra interno. El 10 de noviembre, con la activa colaboración de los integralistas, convertidos en verdaderas tropas de choque, Vargas clausuró el Congreso, disolvió los partidos y destituyó a los gobernadores opositores.

Esa noche, el flamante dictador anunció por la radio el contenido de la nueva constitución del *Estado Novo*. El llamado Nuevo Estado, basado en una constitución de tipo fascista, significó la implantación de un régimen dictatorial y centralista. El Congreso, las cámaras estaduais y los gobiernos locales, que habían quedado disueltos tras el golpe de Estado, dejaron de funcionar y se atribuyeron poderes excepcionales al Ejecutivo.

Otra faceta del *Estado Novo* fue encuadrar al movimiento obrero en una estructura burocrática, calcada de la carta del trabajo de Mussolini (1927), dirigida a convertir las combativas organizaciones proletarias en sindicatos de patronos y empleados, que fomentaran la colaboración de clases. A los sindicatos, encabezados por líderes designados por el gobierno (*pelegos*), se les prohibieron las huelgas o cualquier tipo de protesta, así como firmar contratos colectivos de trabajo, reduciéndose su gestión a actividades recreativas y de asistencia social. De forma parecida se organizó a los alumnos de la enseñanza secundaria y superior en la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), creada en 1937.

La implantación del *Estado Novo* vino también acompañada de una férrea censura, la creación de un aparato oficial de propaganda –que presentaba a Vargas como «el padre de los pobres»–, la designación de nuevas autoridades en los distintos cargos públicos y la clausura de todos los partidos, incluido el integralista, que finalmente se sublevó contra el gobierno y fue aplastado. El desesperado levantamiento fascista no fue suficiente para impedir la consolidación de Vargas, gracias al apoyo que recibió de la oligarquía agroexportadora, la burguesía industrial y ciertos sectores de las capas medias, satisfechos con la estabilidad alcanzada.

La oligarquía fue neutralizada por el mandatario al respetar la gran propiedad rural –solo el 3% de los hacendados poseían el 60% de la tierra– y apoyar la exportación de los productos tradicionales. Por su parte, los industriales, reunidos en la Confederación Industrial Brasileña recibieron del *Estado Novo* oportunidades para ampliar el campo de sus negocios, mientras las capas medias eran contentadas con empleos bien remunerados en el dilatado aparato estatal.

La coyuntura económica internacional fue un factor adicional que contribuyó a cimentar la dictadura. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial los precios del café y las materias primas subieron de manera significativa, mientras la creciente orientación bélica de la industria europea y norteamericana creaba posibilidades inesperadas para el aumento y diversificación de la producción autóctona. Ello permitió que se ampliaran o fundaran fábricas de papel y celulosa, de motores de camiones y de aviación, de cemento, material ferroviario,

aluminio, vidrios, máquinas de coser, productos químicos y bienes de consumo.

El centro de ese brote industrial era Sao Paulo, que ya en 1938 concentraba el 60% de la actividad fabril, atrayendo a miles de trabajadores y campesinos que se radicaban en su periferia, dando origen a las tristemente célebres *favelas* o villas miseria. La gran beneficiaria con las transformaciones económicas del *Estado Novo* fue la industria.

En 1940 los bienes de capital ya representaban el 38% del total de la producción fabril y tres años después los tejidos ocupaban el 13% de las exportaciones brasileñas. Por entonces existían más de 600 mil obreros industriales, cuando la población total del país sobrepasaba los 40 millones de habitantes.

El crecimiento industrial estaba avalado por el apoyo gubernamental, que posibilitaba la acumulación privada de capital con créditos –el *mil reis* fue remplazado por el *cruzeiro* (1942)–, aranceles, control de precios y salarios, exenciones fiscales y la propia política cambiaria. Vargas fundó empresas estatales en sectores claves –acero, energía, transporte, etc.–, que no eran atractivos para los capitalistas privados o tenían una importancia estratégica y recuperó otros con las divisas acumuladas en Europa –especialmente en Inglaterra–, durante la conflagración mundial. Los dos proyectos de desarrollo más ambiciosos, correspondieron a la compañía minera del valle del Rio Doce y a los altos hornos de Volta Redonda.

La Segunda Guerra Mundial puso fin a los coqueteos de Vargas con los regímenes fascistas. A partir de ese momento, el gobierno norteamericano volvió a ofrecer a los brasileños préstamos, armamentos y la construcción de bases militares. En consecuencia, en 1940 el comercio brasileño con el Reich fue prácticamente nulo –menos del 2%–, mientras con los norteamericanos alcanzaba el 50%.

La política de Vargas en contra del fascismo se acentuó desde 1942, acelerada por el curso adverso a los nazis que tomaba el conflicto y por los indiscriminados ataques alemanes a los mercantes de Brasil. Después de romper relaciones con el Eje, fueron desarticulados varios centros de espionaje alemán y japonés en Sao Paulo, Rio de Janeiro y Santa Catarina.

Desde ese momento, Brasil obtuvo un tratamiento privilegiado de los Estados Unidos. En ese clima, comenzó la revitalización de los sectores de oposición, que exigían una amplia amnistía, la democratización, el desmantelamiento del *Estado Novo* y la entrada de Brasil en el conflicto mundial.

El 21 de agosto de 1942, Vargas declaró la guerra al Eje fascista. Las propiedades alemanas fueron confiscadas, entre ellas la compañía Cóndor, con cuyos aeroplanos se constituyeron las empresas estatales VASP y VARIG. Al año siguiente, el gobierno de Vargas decidió formar una Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB), mientras con ayuda norteamericana se construía un triángulo defensivo en Natal, Recife y la isla Fernao de Noronha.

Entretanto, la presión opositora sobre el gobierno no amainaba. El 24 de octubre de 1943, un grupo de noventa intelectuales y políticos de Minas Geraes, en su mayoría vinculados al extinguido régimen del «café con leche», dio a conocer el Manifiesto de los *Mineiros*. En ese documento, plagado de referencias a la *Carta del Atlántico* de Roosevelt y Churchill, se pronunciaban a favor de reformas democráticas, pero sin mencionar los acuciantes problemas económicos y sociales del país. En los meses siguientes, arreció la campaña contra el *Estado Novo* por parte, sobre todo, de los más destacados personeros de la *Republica Velha*.

Poco a poco la prensa rompió las ataduras de la censura. El 22 de enero de 1945 destacados intelectuales emitieron una declaración favorable a la democratización y un mes después el periodista Carlos Lacerda daba a conocer una entrevista a un conocido político que pedía elecciones sin Vargas como candidato. Al día siguiente, el influyente periódico *O Globo* anunció la postulación del brigadier Eduardo Gomes, ex *tenentista* y uno de los pocos oficiales superiores que se había opuesto al *Estado Novo*.

Detrás de esa nominación estaban los intereses de la oligarquía y otros sectores vinculados a la *Republica Velha* que darían vida a la Unión Democrática Nacional (UDN). Su programa, definitivamente anticomunista, propugnaba el establecimiento de un gobierno liberal burgués, opuesto a la ampliación del área estatal de la economía.

La reacción de Vargas fue la firma, el 28 de febrero, del Acta Adicional No. 9 a la constitución de 1937 y fijar un plazo de noventa días para anunciar la fecha de las elecciones. En abril, cuando el Ejército Rojo irrumpía en Berlín, Vargas estableció relaciones con la Unión Soviética, permitió el regreso de los exiliados y concedió la libertad a más de 600 presos políticos, entre ellos a Prestes. En mayo, esta organización fue legalizada, mientras el gobierno emitía un nuevo código electoral que establecía el voto obligatorio, directo y secreto, aunque se mantenía la restricción a los analfabetos (50% de la población).

La negativa de Vargas a postularse allanó el camino al general Eurico Gaspar Dutra, cuya candidatura estaba respaldada por las dos fuerzas políticas adictas al gobierno: el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Trabalhista Brasileño (PTB). El primero estaba dominado por los representantes de los sectores burgueses ligados al *Estado Novo*, mientras el otro era de base sindicalista, dirigido por líderes *pelegos* y otras figuras gubernamentales.

A deslindar los campos entre los partidarios de la vieja oligarquía asociada al capital extranjero y los defensores de los intereses nacionales contribuyó la firma por el presidente Vargas –convertido ahora en campeón de la democracia y el antimperialismo–, el 21 de junio de 1945, del decreto *antitrust* No. 7666. La *Ley Malaia*, como se le llamó, limitaba las actividades de las empresas extranjeras, lo que provocó la airada reacción de Estados Unidos.

La posibilidad de una convención constituyente, antes de los esperados comicios presidenciales, caldearon los ánimos de los candidatos ya nominados, que en complicidad con los tres principales partidos, los mandos militares y la embajada norteamericana, decidieron derrocar a Vargas ante el temor de que la constituyente le permitiera prolongarse en el poder. El 29 de octubre de 1945, Vargas fue depuesto por el ministro de guerra Goes Monteiro y el jefe del estado mayor, Osvaldo Cordeiro de Farias.

LA REVOLUCIÓN EN MARCHA DE LÓPEZ PUMAREJO EN COLOMBIA

Una manifestación morigerada del nacionalismo populista se desarrolló en Colombia durante los años treinta. Aquí también su vertebración estuvo asociada a los efectos de la crisis económica capitalista de 1929 que produjo una brutal caída de la cotización del café en los mercados internacionales.

El descenso del valor de las exportaciones cafetaleras redujo los ingresos por este concepto de 122 millones de pesos en 1929 a solo 67 millones tres años después –el propio presupuesto estatal pasó de 75 millones de pesos a 35 millones en el mismo lapso–, lo que agudizó los problemas sociales existentes, entre ellos el desempleo, el hambre y la miseria de amplios sectores de la población. La crisis fomentó protestas obreras, que obligaron al gobierno al reconocimiento de los sindicatos en 1931, y alentó levantamientos campesinos en varias regiones, sobre todo en las muy golpeadas zonas cafetaleras de Tolima y Cundinamarca.

En medio de esa inestabilidad, las fuerzas que se inclinaban a proteger los intereses nacionales y sacar al país del atolladero mediante la adopción de reformas económicas y sociales –inspiradas en el *New Deal* de Franklyn D. Roosevelt– se impusieron en los comicios de 1934. En esas elecciones se produjo el triunfo arrollador –obtuvo la mayor votación en la historia de Colombia– del candidato liberal progresista Alfonso López Pumarejo.

Favorecido por la abstención de sus opositores conservadores, López ganó además la mayoría en el Congreso, cosa que no había podido lograrse en el período anterior. En la contienda electoral, el Partido Comunista, fundado en 1931, encabezado ahora por Luis Vidales, se opuso a la candidatura liberal con su propio aspirante, el líder indígena Eutiquio Timoté.

La política reformista desarrollada por el gobierno de López desde el 7 de agosto de 1934 se caracterizó, en términos generales, por una mayor intervención estatal en la economía y cierta orientación social en beneficio de las masas populares, que el propio mandatario denominó *la revolución en marcha*. Las transformaciones

abarcaron disímiles aspectos, llegando incluso a formar con Ecuador y Venezuela un bloque de intereses comunes a favor del desarrollo económico.

Un énfasis especial puso el presidente López en la protección de la naciente industria nacional, lo que fue combinado con la elevación de los salarios de los trabajadores, ampliando la capacidad de consumo del mercado. Ello se tradujo, entre 1933 y 1938, en una tasa de crecimiento del 10.8%, mientras se duplicaba el número de establecimientos industriales y se triplicaba la inversión pública. A estos resultados también contribuyó la recuperación de los precios del café y el crecimiento de la extracción de petróleo, que alcanzó entre 1925 y 1939 sus más altos niveles, cuando llegó a representar el 20% de las exportaciones colombianas.

Como parte de su acción gubernamental, el presidente López se propuso limitar los privilegios de la vieja oligarquía, estableciendo impuestos directos y progresivos sobre el patrimonio y el exceso de ganancias, para lo cual adoptó una reforma tributaria por la ley 78 de diciembre de 1935. La puesta en vigor del impuesto sobre la renta permitió al Estado realizar grandes gastos sin tener que acudir a la ayuda exterior, pues los ingresos fiscales por este concepto pasaron de representar el 4.5% en 1934 al 21% en 1938. En materia educativa, por otro lado, López no solo limitó la intervención de la Iglesia católica en la educación, sino que estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

En 1936 se realizó una importante reforma integral a la carta magna de 1886 que fortaleció el Poder Ejecutivo, la participación gubernamental en la economía, la separación de la Iglesia y el Estado y otras cláusulas nacionalistas y de contenido social. Entre estas pueden mencionarse el reconocimiento del derecho de huelga, la libertad de enseñanza y la introducción de la noción de la función social de la propiedad. Además, se estableció el sufragio universal.

Otra legislación sin precedentes fue la adoptada en materia agraria. Nos referimos a la ley 200 de 1936 que se propuso atacar el latifundio improductivo e impulsar las relaciones capitalistas en el campo. Este decreto presidencial estableció que los predios no explotados pasaran a manos del Estado a los diez años de promulgada

la ley y daba la posibilidad de que terrenos en arriendo –o que hubiese sido explotados durante cinco años– pasaran a propiedad del inquilino.

Al mismo tiempo, el movimiento obrero se fortaleció con el apoyo del gobierno y el impulso dado por el Partido Comunista. Prueba de ello fue la creación en 1935 de la primera central obrera del país, la Confederación Sindical de Trabajadores (CST). En 1938 se transformaría en la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que llegó a agrupar unos novecientos sindicatos, influidos por liberales y comunistas.

Las medidas de *la revolución en marcha* despertaron la virulenta oposición del clero, los latifundistas y los comerciantes, así como de los grandes monopolios extranjeros –que tildaban de socialista a López–, contexto en el que se inscribe la aparición en 1934 de la Asociación Patriótica Económica Nacional (APEN). Esta organización tuvo su órgano de expresión en el periódico *La Razón* y de principal dirigente a Juan Lozano y Lozano.

La conformación de un clima de confrontación, unido a la persistente campaña opositora de la Iglesia católica, facilitó a los sectores de ultraderecha, encabezados por el político conservador de ideas fascistoides Laureano Gómez –para cuyos fines fundó el periódico *El Siglo*–, desatar en 1936 una ola de atentados. Entre las organizaciones fascistas que la promovían estaba la llamada Acción Intrépida y el grupo conocido como los *leopardos*, dirigidos por Silvio Villegas. Este individuo, junto a Álzate Avendaño, promovería poco después un partido de matriz falangista: Acción Nacionalista Popular, salido de la derecha conservadora.

El crecimiento de la propaganda fascista y anticomunista, los desembozados ataques al gobierno de López y la creciente violencia contra las organizaciones democráticas y populares llevó al Partido Comunista –siguiendo al pie de la letra las directrices del VII Congreso de la Internacional Comunista de noviembre de 1935– a proponer infructuosamente a López y al Partido Liberal la formación de un frente popular. Sin el concurso liberal, la amplia coalición antifascista quedó organizada de todos modos en la primera mitad de 1936 con la participación de sindicatos, ligas campesinas,

figuras de la izquierda liberal y representantes de la organización Vanguardia Socialista, de corta vida –fue sustituida por la Liga de Acción Política–, que tenía entre sus dirigentes a Gerardo Molina.

La muerte de Olaya Herrera, en febrero de 1937, despejó el camino a la primera magistratura a Eduardo Santos, dueño del periódico liberal *El Tiempo* y ubicado más a la derecha que Darío Echandía, el aspirante de su propio partido a la presidencia promovido por el Frente Popular. Santos, que ocupó el Ejecutivo el 7 de agosto de 1938, gozaba del apoyo de sectores conservadores y del propio liberalismo, deseosos de poner fin a la *revolución en marcha* de López. En determinados momentos de su mandato, extendido hasta 1942, liberales como Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo y Luis López de Mesa formaron parte del gabinete ministerial del presidente Santos.

Durante su período estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que facilitó al mandatario sacar a relucir su vocación pronorteamericana. En el clima internacional creado por el conflicto, el gobierno de Santos contrajo dos nuevos empréstitos con Estados Unidos, uno de ellos para la adquisición de material bélico, mientras la economía registraba un descenso del volumen de las exportaciones y de la extracción de petróleo. Esta última descendió de 23 millones de barriles en 1939 a 13 millones en 1943.

Probablemente lo más positivo del gobierno de Santos fue la creación del Instituto de Fomento Industrial (IFI). Esta entidad gubernamental patrocinó la creación de una serie de industrias esenciales –favorecidas por la disminución de las importaciones provocada por el conflicto mundial y las medidas proteccionistas adoptadas con anterioridad–, lo que permitiría al país alcanzar, entre 1945 y 1950, la tasa de crecimiento fabril más alta registrada hasta entonces: 11.5%.

No obstante, la escasez de artículos básicos derivadas de los efectos de la contienda bélica, unido a la inestable situación económica nacional de esos años, propiciaron el regreso al poder, el 7 de agosto de 1942, con un explícito apoyo popular, del ex presidente López. Combatido tenazmente por los conservadores, que amenazaban con levantarse en armas si el propulsor de *la revolución en marcha* volvía al gobierno, y una parte del propio liberalismo –que

propulsó la candidatura opositora de Carlos Arango Vélez-, López logró vencer en los comicios con el inesperado apoyo de última hora del presidente saliente y del Partido Comunista.

Al segundo mandato de López, mucho más apagado que el anterior en materia de reformas y realizaciones, se le enfrentaron los mismos intereses oligárquicos y antinacionales que en el primero, a lo que hubo que sumar cierta erosión del prestigio gubernamental por las campañas sobre supuestas corrupciones, sobre todo tejidas en torno al destino de una empresa expropiada a los alemanes. En 1943, el presidente López formalizó las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, enfrentada entonces a la Alemania nazi, aunque ya durante su anterior gobierno se había producido el reconocimiento diplomático (1935).

También durante su segundo período fue promulgada la ley 100 de 1944, creada para amparar a los aparceros, dos años después de creada la primera organización campesina de carácter nacional: la Federación Campesina e Indígena, afiliada a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). También surgió la Federación Agraria Nacional (1946), bajo el influjo de la Iglesia católica, y aparecieron asociaciones gremiales como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).

En un ambiente muy adverso, orquestado por la oposición derechista con sus campañas de prensa e injurias al gobierno, al que se atribuían hechos de corrupción, se produjo el golpe de Estado militar –López fue apresado en la ciudad de Pasto–, dirigido por el coronel Diógenes Gil, el 10 de julio de 1944. La inmediata sustitución del mandatario por su ministro Darío Echandía –quien ya lo había remplazado durante sus cuatro meses de estancia en Estados Unidos a fines de 1943 y principios de 1944– y, sobre todo, la amplia reacción popular –que unió a liberales, sindicatos, estudiantes, etc.– hizo fracasar la asonada militar y López tuvo que ser liberado.

El mandatario decretó entonces el estado de sitio, mientras algunos de sus más acérrimos opositores, como Laureano Gómez, huían del país. Aprovechando la reacción popular a su favor, López suspendió las sesiones del Congreso y dictó nuevos decretos beneficiosos para los trabajadores, entre ellos el pago de horas extras,

salarios mínimos, contratación colectiva, etc. (decreto 2350) y de prohibición de expulsión de los campesinos de las tierras que trabajaban (decreto 1788).

Pero las nuevas disposiciones gubernamentales encrespaban todavía más a la oposición, lo que llevó finalmente al presidente a renunciar el 19 de julio de 1945. Para terminar su mandato, que concluía al año siguiente, López fue sustituido por uno de sus ministros: Alberto Lleras Camargo.

El mandatario liberal interino debió enfrentar la grave crisis política existente, en medio de la agitación popular –incluido un fracasado intento de huelga general en noviembre de 1945– y el cada vez más violento enfrentamiento de los partidos tradicionales. Para tratar de salir de la peligrosa situación fue promulgada una nueva reforma constitucional (1945) y dio participación en su gobierno a los conservadores. Ese fue el prelude del retorno del Partido Conservador al poder en la persona de Mariano Ospina Pérez, miembro de una familia de la rancia aristocracia colombiana y descendiente de los ex presidentes Ospina Rodríguez y Nel Ospina.

De esta manera se abrió, en agosto de 1946, otro período de hegemonía conservadora que llevaría directamente a una franca y abierta represión a las instituciones democráticas y progresistas, mientras se dilapidaban las divisas acumuladas durante la guerra mundial –más de 128 millones de dólares– y las obtenidas por las crecientes exportaciones cafetaleras, cuyo valor se triplicaría entre 1945 y 1950. Al mismo tiempo, aumentaba la presencia del capital norteamericano en el país, en particular en la industria, cuyo monto pasó en el mismo lapso de 117 millones a 193 millones de dólares.

MOVIMIENTOS NACIONALISTAS DE POSGUERRA EN PARAGUAY Y BOLIVIA

De manera todavía más pálida se expresó el nacionalismo populista en Paraguay y Bolivia, donde tuvo como protagonistas a sectores militares descontentos con la recién terminada Guerra del Chaco. La

frustración dejada en Bolivia y Paraguay por el conflicto fratricida del Chaco, concluido en 1935, junto a las revelaciones de la prensa internacional del oscuro papel jugado por los monopolios petroleros en la contienda, sumado al ascenso en el escalón militar de oficiales jóvenes no comprometidos con la oligarquía, abrió el camino al poder de gobiernos nacionalistas en estos dos países. Uno de ellos fue la revolución febrerista en Paraguay.

Este movimiento militar estalló el 17 de febrero de 1936 encabezado por el coronel Rafael Franco, quien disolvió el parlamento y creó entonces un gobierno provisional respaldado por algunas figuras civiles del Partido Colorado. Desde el poder, el jefe nacionalista paraguayo trató de organizar a sus seguidores en un nuevo partido: la Unión Nacional Revolucionaria –más conocida como febrerista–, ilegalizó el liberalismo y derogó la constitución de 1870. El nuevo fervor patriótico se manifestaba también en actos solemnes: la población asunceña fue testigo de la consagración de un monumento destinado a guardar las cenizas del mariscal López junto a los restos del soldado desconocido de la guerra en el Chaco.

Además, los febreristas se dispusieron a llevar a cabo un programa de modernización del país, dando respuesta a algunos de los más urgentes reclamos populares, poniendo fin, según las declaraciones de sus dirigentes, «al régimen y a la política de las oligarquías tradicionales que rigieron los destinos de la nación durante más de 60 años».³ Entre las primeras medidas adoptadas por los febreristas estuvo una reforma agraria democrática –los soldados exigían recuperar las tierras enajenadas entre 1883 y 1885– que pusiera en manos del campesinado paraguayo, empezando por los veteranos del Chaco, un lote de tierra donde trabajar y erigir su casa.

La organización de crédito agrícola y la fijación de precios justos para los productos del campo completaban el plan. Se quería atraer de paso a la mayor parte de los 200 mil emigrados que el latifundio había obligado a refugiarse en las naciones vecinas. También el febrerismo reafirmó su orientación progresista inicial decretando la jornada de ocho horas, la asistencia médica obligatoria en los

³ Víctor Jacinto Flecha, *Breve historia del Paraguay*, Asunción, FONDEC, 2012, p. 209.

centros fabriles, sustanciales aumentos salariales y favoreciendo la organización sindical.

Pero la vieja oligarquía maquinaba junto a sectores del ejército ligados al general José Félix Estigarribia. Además, las propias vacilaciones del gobierno febrerista y sus coqueteos con las ideas fascistas, facilitaron que el 13 de agosto de 1937 el coronel Franco fuera derrocado.

Bajo el influjo del estratega del Chaco, la constitución de 1870 quedó restablecida y un civil, Félix Paiva, ocupó la presidencia provisional. La gravitación de los militares sobre la vida nacional se hizo explícita dos años después con la elección del propio Estigarribia, que ocupaba la jefatura del ejército, como candidato del liberalismo, bajo el estado de sitio y la exclusión de colorados y febreristas.

La historia de Bolivia en esos años siguió un derrotero semejante a la de Paraguay. Terminada la Guerra del Chaco, diversas acusaciones públicas provocaron un escándalo en la república del altiplano sobre la participación de la Standard Oil en el desencadenamiento de la contienda fratricida que había estremecido al país.

Tratando de atajar la situación, el gobierno de José Tejada Sorzano ordenó una amplia investigación sobre la actuación de la poderosa compañía imperialista. Las indagaciones demostraron el sucio papel de la Standard Oil durante la contienda, violando los contratos firmados con el gobierno y defraudando al fisco.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por detener el descontento popular, las huelgas y manifestaciones no parecían tener fin. El 10 de mayo de 1936 se produjo incluso una huelga general. En forma paralela, crecían las contradicciones en el seno de la élite minera, denominada *la rosca*, como resultado de la política aplicada por el Comité Internacional del Estaño (CIE) –creado en 1930– de asignar cuotas a los países productores. Ello ahondaba las diferencias entre los grupos mineros que rivalizaban por recibir los mayores cupos de exportación.

Pero los acontecimientos se escaparon, sorpresivamente, al control de los *barones del estaño*. La corriente nacionalista había calado en las filas de la joven oficialidad, arrebatando la iniciativa política a la vieja oligarquía y a sus representantes tradicionales. Los grupos

nacionalistas se nucleaban en logias fundadas en los propios campamentos de prisioneros bolivianos del Paraguay. La más influyente organización de este tipo era la logia militar «Mariscal Santa Cruz», integrada por oficiales dispuestos a encabezar un movimiento de renovación nacional y de rescate de las riquezas naturales del país.

El 17 de mayo de 1936 los militares complotados contra el gobierno, encabezados por el coronel Germán Busch, burlando los designios del alto mando y de la oligarquía, colocaron en lugar del presidente Tejada Sorzano al coronel David Toro, en tanto Busch conservaba el control del estado mayor. Con este golpe, concluía el predominio de los partidos oligárquicos, sepultados junto con la llamada «república liberal».

En su calidad de jefe del gobierno, Toro solo se atrevió a realizar algunas tímidas innovaciones administrativas dirigidas a calmar el descontento de los trabajadores, como la creación de la Secretaría de Trabajo. Enredado en los manejos de *la rosca*, específicamente el grupo de Aramayo, Toro otorgó una participación mayoritaria a este magnate en las cuotas de exportación del estaño; llevó algunos de sus acólitos al gabinete y le entregó concesiones auríferas en la rica región de Tipuana.

Bajo presión de los oficiales nacionalistas que lo habían llevado al poder, Toro tuvo que decretar las primeras disposiciones contra la Standard Oil Company, así como varias medidas sociales y políticas insólitas en la historia del país. Fue cancelada, por ejemplo, la existencia jurídica de los partidos de la oligarquía y se autorizó el funcionamiento de una organización política única: el Partido Socialista de Gobierno, dirigido por militares y civiles de la nueva «generación del Chaco». Al amparo de la legislación de agosto de 1936, nacieron los primeros sindicatos obreros y campesinos.

El 21 de diciembre de 1936, Toro aprobó la medida nacionalista de mayor trascendencia hasta entonces: la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Significativamente, este decreto fue firmado en la casa del millonario Aramayo, lo cual revelaba la fuerza y a su vez la debilidad que tenían entonces los *barones del estaño*.

Presionado por la oficialidad joven, Toro fue aún más lejos: decretó la caducidad de todas las concesiones que violaran las

estipulaciones de la ley del 20 de junio de 1921, que restringía su otorgamiento a un máximo de cien mil hectáreas por un plazo no mayor de 55 años. Por último, el 13 de marzo de 1937, firmó la *Resolución Suprema*, mediante la cual se declaraban caducas las concesiones de la Standard Oil en Bolivia y se disponía la intervención de todas sus propiedades por el Estado. La compañía poseía 31 pozos de petróleo, dos destilerías y siete millones de hectáreas.

Hasta entonces, los intereses de *la rosca* no habían sido tocados, y sus buenas relaciones con el coronel Toro no auguraban la realización de una política que modificara su absoluto control sobre la economía del país. Ello precipitó un segundo golpe de Estado que llevó al coronel Busch al poder, en el instante cuando se desarrollaba un poderoso movimiento huelguístico.

Durante los primeros meses de su gestión, Busch se dedicó a liberarse de los comprometedores nexos que lo unieron al consorcio Patiño en su acción contra el gobierno de Toro. Poco tiempo más tarde, convocaba a una convención (1938) que lo proclamó presidente de la república y emitió una constitución de inspiración nacionalista.

La nueva carta magna reivindicaba el derecho inmanente del Estado sobre todas las riquezas naturales de la nación, se aludía a la función social de la propiedad y se reconocía, por primera vez, el derecho de los campesinos a sus tierras comunales. Asimismo, Busch promulgó el primer Código de Trabajo y creó el Banco Minero – presidido por Víctor Paz Estenssoro –, encargado de proteger y fomentar la pequeña minería.

El turbulento ambiente político favoreció la aparición de dos nuevos partidos: la Falange Socialista Boliviana (FSB), agrupación derechista al servicio de los terratenientes, y el Partido Obrero Revolucionario (POR), producto de la labor proselitista desarrollada por el líder trotskista Tristán Marof. Por su parte, el Congreso Nacional, controlado por la élite minera, se opuso enseguida a la política nacionalista de Busch y aprovechando la creciente demanda de estaño en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, promovió medidas liberales sobre impuestos y transferencias de divisas.

La respuesta del coronel Busch fue la disolución del cuerpo legislativo, asumiendo plenos poderes. El 7 de junio, dispuso la

entrega obligatoria al Estado del ciento por ciento de las divisas provenientes de la exportación de minerales y un férreo control fiscal sobre el comercio exterior.

Herida en su punto más vulnerable, la gran minería se apresuró a aislar al audaz oficial nacionalista cuando este no había logrado aún crearse una base social. El ejército lo abandonó y dos meses después de su acción más radical, el 23 de agosto de 1939, fue encontrado muerto de un balazo en su residencia.

Gracias a la inesperada muerte de Busch, *la rosca* recuperó su absoluto control sobre el Estado boliviano. Como había sucedido en Paraguay, en Bolivia se cerraba el paréntesis nacionalista volviendo al mismo punto de partida.

ASCENSO DEL FASCISMO EN AMÉRICA LATINA

La llamada década de las revoluciones frustradas y el desarrollo de movimientos nacionalistas favorecieron la eclosión de las más diversas y encontradas tendencias políticas e ideologías, entre ellas las impulsadas por el apogeo del falangismo y el nazismo. El fascismo europeo ejerció cierta influencia en los países latinoamericanos en los años que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial.

Desde finales de los veinte se hizo sentir en todo el continente el ascenso del régimen de Benito Mussolini, sobre todo por la actividad proselitista desplegada por algunos asesores contratados por gobiernos conservadores y oligárquicos de América del Sur. Sin duda, la mayor resonancia de esta corriente ultraderechista europea se alcanzó en los años treinta, luego del profundo impacto de la crisis capitalista de 1929.

Tributarias de la versión hispana del fascismo fueron aquellas agrupaciones, como la Falange Nacional de Chile (1937) y la Falange Socialista Boliviana (1938), surgidas en el contexto de la guerra civil que estremecía a España y que, en cierta medida, se nutrieron de la emigración. Por su parte, las apegadas al hitlerismo aparecieron asociadas a los avances de la penetración nazi en América Latina y también a los núcleos de inmigrantes germanos.

Uno de los elementos que explica la influencia alcanzada entonces por estas corrientes reaccionarias era la atracción ejercida en muchos sectores de la sociedad latinoamericana por la revalorización ultranacionalista del fascismo. La defensa y exaltación de los valores nacionales sin duda levantó simpatías en países sometidos históricamente por las grandes potencias como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, traumatizada por su aplastante derrota en la reciente Guerra del Chaco.

Como se ha visto, bajo los gobiernos bolivianos de los coroneles Toro y Busch, la defensa de los intereses patrios –expropiación de los bienes de la Standard Oil– y ciertas preocupaciones sociales –recogidas en la constitución de 1938–, dirigidas a alcanzar lo que llamaron «la libertad económica de Bolivia»,⁴ aparecieron envueltas en proyectos e ideas de cierta matriz fascista, lo que explica alguna de las medidas adoptadas por esos regímenes militares y la fundación del llamado Partido Socialista de Gobierno. Lo mismo vale para algunas otras experiencias de ese período en América Latina, como el Plan Trienal de Batista en Cuba o el *Estado Novo* brasileño.

Sin duda, fue en los países del cono sur donde mayor arraigo alcanzaron las agrupaciones de corte fascista, particularmente en Chile y Brasil, debido a la existencia de numerosas colonias de emigrados alemanes. También en esto influyó que esa región estaba todavía fuera de la órbita de influencia de Estados Unidos, lo que favoreció la considerable penetración económica, comercial e ideológica de la Alemania nazi.

Sin duda, la mayor amenaza a la preponderancia norteamericana en este continente, en los años que anteceden a la Segunda Guerra Mundial, provino de la expansión del comercio y las inversiones del *Reich* hitleriano. En 1938 esta potencia ocupaba el segundo lugar en el mercado latinoamericano, solo detrás de Estados Unidos.

En ese año, Alemania exportó el 16.9% de todos los artículos consumidos por América Latina e importó el 17.9% de materias primas y productos agropecuarios de este hemisferio, cifras alcanzadas en gran medida gracias al comercio de trueque (marcos *aski*). Incluso el capital alemán llegó a controlar todo el transporte aéreo en la América del Sur.

⁴ Citado por Dardo Cúneo en su prólogo al libro de Carlos Montenegro, *Nacionalismo y colonización*, Buenos Aires, Pleamar, 1967, p. 3.

En algunos países este intercambio comercial fue aún mayor, pues Brasil llegó a consumir el 37% de mercancías alemanas y Chile un 26%. Guatemala fue un caso especial de la penetración nazi, pues existía desde principios de siglo una activa colonia de alemanes dedicados al negocio del café, lo que explica que el comercio con Alemania llegara a significar el 32.4% del total en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

Para su actividad conspirativa y propagandística en América Latina los alemanes se apoyaron en grupos filofascistas como la Unión Nacional Sinarquista de México, el Movimiento Nacional Socialista de Chile o el Partido Integralista de Brasil. Quizás el punto culminante de la actuación de los simpatizantes del nazismo en los países al sur del río Bravo se alcanzó en 1938, cuando los grupos fascistas intentaron hacerse del poder en Brasil y Chile, lugares donde estas fuerzas actuaban amparadas por los gobiernos derechistas de Getulio Vargas y Arturo Alessandri.

En el primero de ellos, el Partido Integralista de Plinio Salgado —cuyos seguidores inclusive usaban camisa verde y un brazal con la letra sigma—, que había servido de fuerza de choque al presidente Vargas en noviembre de 1937 para la instalación del *Estado Novo*, intentaron su propio *putsch*. El cierre de los clubes integralistas abrió desde principios de 1938 el enfrentamiento entre esta organización fascista y el gobierno.

Finalmente, el 11 de mayo de ese año, los integralistas atacaron el Ministerio de Marina, la Radio Mayrink Veiga y el Palacio de Guanabara, donde estuvieron a punto de apresar a Vargas y su familia. Tras cinco horas de intenso tiroteo, los fascistas fueron derrotados. En consecuencia, el embajador del *Reich* en Río de Janeiro fue declarado *persona non grata* y expulsado del país.

En el caso de Chile, los acontecimientos fueron bastante parecidos. El Partido Nacional Socialista chileno, dirigido por un descendiente de alemanes, Jorge González von Marees, se lanzó con sus adeptos al asalto del gobierno, sin ningún éxito, en septiembre de 1938. El resultado fue la muerte de 75 jóvenes fascistas masacrados en el edificio de la Caja del Seguro Obrero.

Estas peligrosas circunstancias condujeron a las fuerzas progresistas a intentar la unidad del movimiento obrero para detener

los avances del fascismo. El camino en esta dirección había sido abonado por los acuerdos de la segunda conferencia de los partidos comunistas de América Latina, que apareció fechada en Montevideo en octubre de 1934 –la primera se había efectuado en Buenos Aires (1929)– y, particularmente, por los del VII Congreso de la III Internacional (*Komintern*) reunido en Moscú en julio de 1935.

En ese marco, a raíz de la sublevación falangista en España, los trabajadores y partidos democráticos latinoamericanos se pronunciaron resueltamente en defensa de la república española, recaudando fondos, enviando medicinas y alimentos y organizando brigadas que marcharon a la península ibérica a enfrentar al fascismo, como hicieron mil cubanos, más de cien mexicanos y decenas de voluntarios de otros países del hemisferio. Uno de esos heroicos combatientes que ofrendó su vida en España fue el poeta y periodista cubano Pablo de la Torriente Brau.

Como parte de este extendido movimiento antifascista, en varios países de América Latina surgieron entonces centrales sindicales unitarias. Trece de ellas se integraron en México, en septiembre de 1938, en la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), a la vez que en diferentes partes del hemisferio se intentaban organizar frentes populares, aunque el de Chile fue el único verdaderamente exitoso.

En la tierra austral, el Frente Popular se vertebró en 1937 al incorporarse el Partido Radical al bloque de izquierda integrado por comunistas y socialistas, con vistas a los comicios presidenciales del año siguiente. Su candidato, el radical Pedro Aguirre Cerda, ganó las elecciones con el 50.3% de los votos, lo que le permitió hacerse cargo del gobierno, a fines de 1938, con un gabinete compuesto por ministros de su partido y socialistas, entre estos últimos el doctor Salvador Allende.

Durante el mandato de Aguirre Cerda, extendido hasta su inesperada muerte en 1941, las libertades públicas alcanzaron plena vigencia y se incrementó el control estatal de la economía. Lo más significativo del gobierno del Frente Popular en Chile, además de los progresos en el campo de la asistencia social, fue el desarrollo de industrias nacionales, apoyadas por la recién creada

Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), que propició la creación o la expansión de fábricas de neumáticos, manufacturas de cobre, talleres textiles y de otros rubros.

POLÍTICA DEL «BUEN VECINO»

Ante el desarrollo de los movimientos fascistas, la vertiginosa penetración económica y comercial de la Alemania nazi, las crecientes protestas antimperialistas, el auge antifascista y los movimientos nacionalistas que sacudían América Latina, al calor de las secuelas de la crisis capitalista, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos políticos, económicos y militares para contrarrestarlos.

Las repercusiones de la profunda crisis económica de 1929–1933, los cambios ocurridos en los propios Estados Unidos, así como en la correlación de fuerzas a escala internacional, unido a la tenaz resistencia de Sandino, que había desatado como nunca antes los sentimientos antimperialistas de un extremo a otro del hemisferio, precipitaron cambios cosméticos de la tradicional política de Estados Unidos hacia América Latina.

Esbozada por el presidente Herbert Hoover en Buenos Aires a fines de los años veinte, la adopción de la nueva política correspondió a su sucesor, Frankllyn Delano Roosevelt, quien ocupó la primera magistratura norteamericana desde el 4 de marzo de 1933. A la llegada de Roosevelt al poder los sentimientos antimperialistas en América Latina habían alcanzado magnitudes sin precedentes. El descontento no se limitaba a los sectores populares y elementos nacionalistas, sino también se había extendido a amplios círculos de la propia burguesía latinoamericana afectada por la ley Smoot-Hawley, que estableció una de las más altas tarifas arancelarias de la historia norteamericana.

De este modo, frente a la creciente penetración alemana y el incremento del repudio latinoamericano a las intervenciones militares de Estados Unidos y, al mismo tiempo, con el propósito de estimular las relaciones económicas y comerciales con los países del hemisferio, deterioradas por los efectos de la crisis de 1929, la Casa

Blanca impulsó una nueva política hacia el continente. Denominada del «buen vecino», fue dada a conocer en el mensaje enviado por el presidente Roosevelt a la VII Conferencia Panamericana de Montevideo (1933).

En esta misma reunión interamericana los países de América Latina propusieron una moratoria de las deudas y la reducción de las tasas de interés. En el cónclave diplomático de Uruguay, Estados Unidos se vio obligado, ante la formidable presión de las repúblicas latinoamericanas encabezadas por México, Haití, Nicaragua y Cuba a aceptar «con reservas» la convención sobre los derechos y deberes de los estados. Esta incluía el principio de la igualdad jurídica entre ellos, la no intervención en los asuntos internos o externos de otros países, la inviolabilidad territorial y la necesidad de proscribir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Otro hito en la política panamericana del período fue la celebración en Buenos Aires (1936), auspiciada por Estados Unidos, de una conferencia especial para el mantenimiento de la paz. El objetivo era la creación de un bloque político-militar con los países latinoamericanos, a fin de asegurarse la retaguardia ante la peligrosa situación que se configuraba a escala internacional.

De esta forma, Estados Unidos introdujo en la titulada *Convención para el mantenimiento, preservación y restablecimiento de la paz* el principio de consulta, elemento vital a la hora de agilizar la participación de América Latina en la estrategia internacional de la Casa Blanca. Para hacer operativo el nuevo mecanismo, se reunió la VIII Conferencia Panamericana en Lima, en diciembre de 1938, donde se propuso una alianza defensiva de las naciones hemisféricas contra la agresión externa, pues ya el gobierno de Roosevelt vislumbraba la posibilidad de un enfrentamiento armado con Alemania y Japón.

En correspondencia con la política del «buen vecino», impulsada por el presidente Roosevelt, y ante los constantes reclamos del pueblo cubano, fue eliminada en 1934 la llamada enmienda Platt, impuesta a la constitución de Cuba en 1901, que daba derecho a Estados Unidos a intervenir en la isla, y retiradas las tropas

norteamericanas que ocupaban Haití. En 1936, el gobierno de Roosevelt se vio obligado también a abstenerse de derechos semejantes a los de la mencionada enmienda con relación a Panamá, que databan de principios de siglo.

Para ello el nuevo Tratado Arias-Roosevelt reinterpretaba el espíritu de las relaciones entre las dos naciones y se derogaban dos oprobiosos artículos que durante años habían lacerado la vida de la república istmeña. Nos referimos a la cláusula en virtud de la cual Estados Unidos se comprometía a garantizar la independencia de Panamá como estado soberano y el que permitía a los norteamericanos intervenir en la vida interna de la nación cuando lo creyeran necesario.

Aunque no resolvía la cuestión de los derechos panameños sobre la zona del canal –que fraccionaba el territorio istmeño en dos mitades, con una virtual colonia norteamericana en el medio–, el tratado de 1936 constituyó sin duda un paso adelante en el camino de la recuperación de la total soberanía de Panamá. Además, el gobierno norteamericano respondió con cierta cautela a la expropiación de sus compañías petroleras y ferrocarrileras en México durante el gobierno de Cárdenas y aceptó una indemnización casi simbólica por esos intereses (1942).

Para entender la nueva política del «buen vecino» en sus aspectos económicos, al margen de las implicaciones diplomáticas y políticas de la «no intervención», hay que tomar en consideración la relativa disminución de la influencia estadounidense en la región como resultado de la crisis económica. En 1935 el capital norteamericano invertido en América Latina había descendido a 4,555 millones de dólares, de los 5,429 millones que tenían en 1929. Al mismo tiempo, la participación de Estados Unidos en el comercio exterior del continente descendió entre 1929 y 1937 del 38.5% al 33.9%.

Un porcentaje similar afectó a los ingleses, cuyo comercio con América Latina bajó del 15 al 13.2%, mientras que el de la Alemania nazi pasaba en el mismo lapso del 10.8% al 15.4%. La creciente competencia de los alemanes –también de los japoneses, que aumentaron en esos años 2.5 veces su comercio con los países

latinoamericanos, en especial con Perú-, hizo que Roosevelt adoptara una serie de iniciativas en el terreno económico como parte de su política de «buena vecindad».

Una de ellas fue el establecimiento de un sistema de cuotas para las exportaciones de América Latina, firmas de «tratados de reciprocidad» –11 en total, solo de 1934 a 1940, que conllevaba la renuncia a todo desarrollo industrial independiente por la contraparte-, estímulos a las inversiones del capital norteamericano y la fundación en febrero de 1934 de una entidad crediticia: el Banco de Exportación e Importación (EXIMBANK).

Los verdaderos objetivos de este banco eran reactivar la economía de Estados Unidos. Los países latinoamericanos, seriamente afectados por la crisis, carecían de recursos para importar las mercancías norteamericanas. Los créditos del banco –solo en sus primeros cinco años fueron del orden de los 306 millones de dólares-, al restaurar en parte su capacidad de compras, le prestaban una ayuda indispensable a la industria estadounidense, tan necesitada de reactivarse. De este modo, el EXIMBANK se convirtió en un decisivo instrumento de la dominación norteamericana en este hemisferio.

Por otra parte, con las inversiones mixtas Estados Unidos buscaba neutralizar los intentos de los gobiernos latinoamericanos para desarrollar su industria, como eran los casos de México, Chile, Brasil, Colombia y otros, ampliar su base social y asegurar sus inversiones contra posibles medidas nacionalistas o expropiaciones. Fue sobre la base de esta política, de fines del período de entreguerras, que Estados Unidos creó las premisas para el desplazamiento definitivo de Inglaterra y demás competidores europeos de América Latina, al mismo tiempo que se acentuaba la dependencia neocolonial de los países situados al sur del río Bravo.

Ello traería aparejado, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, los años del absoluto predominio norteamericano en lo económico, político, militar e institucional en la región, que le permitiría crear un verdadero bloque latinoamericano al servicio de sus intereses mundiales de dominación.

AMÉRICA LATINA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se produjo el consiguiente alineamiento de la mayoría de los países latinoamericanos con Estados Unidos, en particular desde el momento en que este país se involucró en la conflagración tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Como consecuencia, la influencia fascista entró en rápida decadencia.

En realidad, el continente americano no fue escenario de los grandes enfrentamientos bélicos que caracterizaron la contienda mundial. La única excepción fue el aparatoso combate naval entre ingleses y alemanes, el 18 de diciembre de 1939, que arrojó el hundimiento del *Graff Spee* en la desembocadura del Río de la Plata en los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los pocos casos de no alineamiento con la política norteamericana fue Argentina, donde un grupo de militares de derecha simpatizantes de la Alemania nazi se hizo del poder en junio de 1943, adoptando una serie de medidas autoritarias y ratificando la neutralidad argentina en el conflicto mundial. En represalia, una escuadra de guerra de Estados Unidos bloqueó el puerto de Buenos Aires en enero de 1944, hasta obligar a la junta militar a romper con el eje fascista y convocar a elecciones.

Hacia 1945 todos los países de América Latina habían declarado la guerra a las potencias fascistas, aunque solo México y, sobre todo, Brasil participaron de manera efectiva en la conflagración mundial. El gigante sudamericano declaró la guerra al Eje el 21 de agosto de 1942, después de que submarinos nazis –en solo cinco días– hundieron varios indefensos mercantes brasileños con más de 600 personas a bordo.

Las propiedades alemanas –tal como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial– fueron confiscadas y se constituyó en 1943 la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB). A fines del año, Brasil desembarcó a los 25 mil integrantes de su ejército en el frente italiano, donde brindaron una destacada contribución a los aliados.

La Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso a la economía latinoamericana, valorizando sus exportaciones y permitiendo

la creación de cuantiosas reservas en oro y divisas, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de la región aceptaron su papel de simple retaguardia aliada, proporcionando materias primas y alimentos a bajos precios con la promesa de un futuro trato preferente. Además, se acordó la creación de una hipotética zona de seguridad de 300 millas, dentro de la cual reclamaba que los países beligerantes se abstuvieran de actos de guerra, así como la concesión a Estados Unidos, mientras durase el conflicto, de numerosas bases militares en el hemisferio.

Como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, la disminución de los vínculos económicos con los países directamente involucrados en el conflicto, junto a la reconversión bélica de la industria norteamericana, permitieron a algunas naciones, en primer lugar México, Brasil y Argentina, acelerar los ritmos de su desarrollo industrial. Otra consecuencia económica del conflicto mundial fue el incremento del comercio entre los propios países latinoamericanos, que antes de la guerra era insignificante. Desde el punto de vista político, la lucha antifascista a nivel mundial estimuló las luchas y reivindicaciones populares en América Latina, que dieron lugar a una oleada democratizadora por todo el hemisferio.

CAPÍTULO 11

FRACASO DEL NACIONALISMO POPULISTA

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la bancarrota del fascismo a escala internacional estimuló la rebeldía popular en América Latina y provocó la caída sucesiva de dictaduras y regímenes tiránicos avalados con largos años de represión y terror. Con intensas jornadas revolucionarias y populares se puso de manifiesto el significativo crecimiento de las organizaciones de izquierda, de las fuerzas obreras y del movimiento democrático.

Entre 1944 y 1947 las masas populares, de un extremo al otro del continente, se lanzaron enardecidas con consignas antioligárquicas y antifascistas, en reclamo de una mayor democratización de la sociedad, de elecciones libres, en favor de las plenas actividades de los partidos y sindicatos, así como por la satisfacción de reivindicaciones sociales y nacionales de envergadura y contra la asfixiante dominación de las grandes potencias capitalistas. Los cambios trajeron aparejado un nuevo impulso al nacionalismo populista, cuyas últimas manifestaciones cayeron a mediados de los cincuenta, víctima de sus propias debilidades e inconsecuencias, así como de la intolerancia de Estados Unidos sumido en la Guerra Fría con la Unión Soviética.

OLEADA DEMOCRATIZADORA DE POSGUERRA

La magnitud del movimiento democratizador de mediados de los años cuarenta, a pesar de su carácter espontáneo, obligó a

la oligarquía, aliada al capital norteamericano, a hacer en muchos lugares importantes, concesiones a los trabajadores y al pueblo en general, restableciendo las libertades e implantando una legislación social que a veces excedía sus intereses clasistas. En varios países, los partidos comunistas salieron de la clandestinidad, en algunos casos por primera vez, al mismo tiempo que se constituían sindicatos legales de proyección nacional.

A la par se fortalecía el movimiento obrero a escala continental. Ya el segundo congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) pudo reunir en Colombia (1944) a centrales sindicales que representaban a buena parte del proletariado de quince naciones latinoamericanas.

El basamento de muchos de estos cambios políticos se encontraba en el relativo auge que experimentaba la economía de América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Incentivado por un inusitado crecimiento de la demanda externa, el sector agropecuario se reanimó –hasta cierto punto también el minero– luego de la prolongada recesión derivada de la crisis capitalista de 1929-1933. Desde entonces, y hasta el fin de la Guerra de Corea, se registró un notable incremento de las exportaciones de materias primas y productos alimenticios latinoamericanos.

También se producía un sensible mejoramiento coyuntural en los términos de intercambio, que contribuyó a propiciar esta ola de relativa prosperidad, la cual se hizo sentir mediante cierta elevación del nivel de vida de la población. Incluso, algunos países europeos tuvieron que liquidar muchas de sus inversiones en América Latina para saldar la deuda adquirida durante la contienda bélica mundial con varias de las repúblicas al sur del río Bravo.

En estas condiciones favorables, la burguesía latinoamericana amplió su acumulación de capital, que fue canalizado en los países con un desarrollo económico relativamente mayor (Brasil, México, Argentina y, en menor medida, Colombia, Chile y Uruguay) hacia el proceso de industrialización que se venía registrando, con más o menos intensidad, desde finales del siglo XIX y principios del XX. De este modo, en varias de estas naciones pudo observarse a mediados de los años cuarenta un aumento de su producción industrial estimado en un 50%.

No obstante, Estados Unidos trató de fortalecer sus posiciones económicas en América Latina, al mismo tiempo que se intensificaban las críticas de derecha a la política del «buen vecino». Ello se reflejó en el *Plan Clayton*, presentado en la Conferencia Panamericana de Chapultepec, celebrada en México entre febrero y marzo de 1945.

Clayton propuso eliminar el nacionalismo económico, extender la colaboración con el capital estadounidense y promover un desarrollo industrial basado en la empresa privada y la libre competencia. Mediante el *Acta de Chapultepec*, todos los países latinoamericanos representados en la reunión, con la solitaria excepción de Argentina que no asistió, quedaron comprometidos a dar su apoyo al orden económico impuesto por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Los renovados aires democráticos de posguerra alcanzaron diferente intensidad de un país a otro. Sus primeros efectos se advirtieron en Centroamérica desde principios de 1944, donde se creó una verdadera situación revolucionaria. Las luchas comenzaron por El Salvador en abril de ese año, cuando se desató una incontrolada sublevación popular que exigía la renuncia de Maximiliano Hernández Martínez, verdugo de miles de campesinos en 1932.

En el movimiento revolucionario participaban los trabajadores, representantes de las capas medias, jóvenes oficiales del ejército y hasta elementos de la propia oligarquía. Una huelga estudiantil, seguida por imponentes manifestaciones callejeras y una paralización total de actividades, obligó al tirano a huir en mayo de 1944.

Los acontecimientos salvadoreños repercutieron en Honduras y Guatemala, gobernadas a su vez por las dictaduras bananeras de Tiburcio Carias y Jorge Ubico. Si bien el movimiento hondureño no pudo conseguir sus objetivos, a pesar de las impresionantes acciones de las masas populares en mayo y julio de 1944, en Guatemala, en cambio, dio lugar a un proceso de cambios revolucionarios extendidos durante una década, la que el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón llamara, parafraseando al Barón de Humboldt, los diez «años de primavera en el país de la eterna tiranía».¹

¹ Luis Cardoza y Aragón, *La revolución guatemalteca*, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1956, p. 51.

LA REVOLUCIÓN GUATEMALTECA DE 1944

El movimiento revolucionario guatemalteco de 1944 puso fin a la dictadura oligárquico-proimperialista de Jorge Ubico, iniciada en 1931. Los factores que aceleraron la caída de este viejo régimen represivo estaban relacionados con las transformaciones económicas, sociales y políticas que a escala nacional e internacional se produjeron con la Segunda Guerra Mundial.

Al margen de esos cambios, el clima internacional adverso a los regímenes fascistas y dictatoriales, estimuló la rebeldía del pueblo guatemalteco y despertó las inquietudes y aspiraciones democráticas de amplios sectores populares. Los primeros brotes opositivos aparecieron en 1942 en la Universidad San Carlos de Guatemala, donde se organizaron los estudiantes encabezados por Mario y Julio César Méndez Montenegro, José Manuel Fortuny, Alfonso Marroquín y Manuel Galich. Las protestas universitarias detonaron finalmente como repercusión de la caída en el vecino El Salvador de la dictadura de Hernández Martínez.

La tarde del 24 de junio de 1944 los estudiantes, maestros y profesionales guatemaltecos se lanzaron a las calles, amenazando al gobierno de Ubico con una huelga general si no aceptaba las reivindicaciones académicas y magisteriales, entre ellas la autonomía universitaria y otras peticiones democráticas. A estas protestas, el dictador respondió de la forma acostumbrada.

La dictadura implantó el estado de sitio y suspendió las inexistentes «garantías constitucionales», bajo cuyo amparo se inició la persecución contra estudiantes y maestros, muchos de los cuales tuvieron que refugiarse en embajadas extranjeras y abandonar el país. La brutalidad de la reacción gubernamental alentó nuevas protestas en otros sectores de la población capitalina, manifestaciones que fueron acalladas brutalmente por el ejército (25 de junio), ocasionando la muerte de la joven maestra María Chinchilla.

Ese mismo día, algunos de los participantes en las manifestaciones redactaron un histórico documento conocido, por el número de firmantes, como el *Memorial de los 311*, que exigió la inmediata renuncia de Ubico. Al día siguiente, se desencadenó una inesperada

huelga general que paralizó el país durante una semana, hasta que el 1 de julio de 1944 el dictador tuvo que dimitir.

El vasto movimiento opositor, en el que ocupaban sitio no solo representantes de las capas medias y los trabajadores urbanos sino también elementos progresistas de la burguesía, obligó a un relevo de figuras en la conducción del gobierno. Por ello, desde el 4 de julio el general ubiquista Federico Ponce ocupó la presidencia.

Para tranquilizar al país, el nuevo gobierno militar puso en vigor ciertas concesiones a la oposición, haciendo algunas reformas que no alteraban la esencia del sistema de dominación oligárquico-imperialista que apoyara a Ubico. De esta manera, el general Ponce autorizó la libre actividad de los partidos políticos, eliminó la censura y convocó a elecciones generales. En estas circunstancias, los exiliados pudieron regresar, se reanimó la lucha política y se fundaron nuevos partidos.

Los más importantes eran aquellos que aglutinaron a las figuras que habían sobresalido en la campaña antidictatorial. Nos referimos al Frente Popular Libertador (FPL), formado por estudiantes y profesionales jóvenes de ideas democráticas y el Partido de Renovación Nacional (PRN), integrado por otros elementos de las capas medias y la intelectualidad, en particular maestros, los cuales también pretendían modificar el asfixiante régimen político. Ambos partidos postularon como candidato a las elecciones fijadas para diciembre de 1944 a Juan José Arévalo, un carismático profesor universitario radicado en Argentina.

Las exiguas conquistas democráticas arrancadas por el pueblo al general Ponce comenzaron a resquebrajarse cuando los altos mandos militares comprendieron que el movimiento de masas escapaba a su control y que peligraban las posibilidades de supervivencia del régimen. A las pocas semanas de su llegada al poder, el general Ponce desató una escalada represiva contra los partidos democráticos y fuerzas revolucionarias, cuyo punto culminante fue el asesinato del director del diario opositorista *El Imparcial*.

El intento de Ponce de establecer un ubiquismo sin Ubico fue respondido por las fuerzas revolucionarias el 16 de octubre de 1944 con un llamado a la huelga general. Por añadidura, en la madrugada

del 20 de octubre, parte de la Guardia de Honor se insurreccionó cumpliendo órdenes del mayor Francisco Javier Arana y de un audaz capitán de solo 29 años: Jacobo Arbenz.

Aunque algunos cuarteles mantuvieron su obediencia al general Ponce, la victoria estaba de parte de los rebeldes pues contaban con el decisivo respaldo popular y el apoyo de la únicas fuerzas blindadas del ejército (12 tanques). El triunfo de lo que desde entonces se conoce como la revolución de octubre de 1944, llevó al poder a una junta integrada por los militares Arana y Arbenz y el líder del Movimiento Cívico Jorge Torriello. El alzamiento cívico-militar que derrocó al gobierno de Ponce se fundamentaba en un heterogéneo frente policlasista, encabezado por la pequeña burguesía, las capas medias y una fracción progresista de la burguesía, forjado al calor de ideales liberal-democráticos y que produjo la más profunda grieta en el orden oligárquico-imperialista de toda la historia guatemalteca.

Entre las primeras disposiciones del gobierno provisional merecen destacarse la disolución del desprestigiado parlamento ubiquista y el descabezamiento del ejército –fueron separados más de 60 generales y abolido este grado militar–, junto a la creación de una Guardia Cívica nutrida de estudiantes, maestros y obreros. Los objetivos de la revolución de octubre fueron recogidos y ampliados por la Asamblea Constituyente, formada el 9 de enero de 1945, que sustituyó a la anacrónica carta magna liberal por una nueva. La flamante constitución, de corte democrático-burgués avanzado, incorporó a su texto el reconocimiento de la función social de la propiedad y la necesidad de transformar la anquilosada estructura agraria del país.

En las elecciones presidenciales venció arrolladoramente Juan José Arévalo, quien logró el 83,6% de los sufragios, con lo cual superó ampliamente a sus más cercanos adversarios. La aplastante victoria de Arévalo fue también la del FPL y RN, coaligados en el Frente Unido de Partidos Arevalistas (FUPA), que dominaron el Congreso Nacional y las municipalidades.

La puesta en vigor en 1947 del Código del Trabajo alentó las adormecidas reclamaciones obreras, abriéndose un período de conflictos y huelgas laborales a lo largo y ancho de la república que, por

lo general, terminaban con la obtención de las principales demandas sindicales. La mayor resistencia patronal se produjo donde operaban empresas extranjeras y, en particular, en las áreas dominadas por la UFCO, ya que el monopolio frutero estaba habituado a explotar a los trabajadores guatemaltecos sin ninguna regulación.

En 1948, la empecinada negativa de la UFCO a aceptar las reclamaciones de sus obreros desencadenó un conflicto que se extendió a las dos divisiones de la empresa (Atlántico y Pacífico). Para respaldar al consorcio imperialista, la embajada norteamericana se valió de los servicios del coronel Arana, a la sazón jefe de las fuerzas armadas, quien envió tropas a las plantaciones para reprimir a los trabajadores, maniobra que fracasó ante la oportuna intervención del presidente Arévalo. Tras la retirada de los soldados, el conflicto terminó cuando el ministro del Trabajo, Alfonso Bauer Paiz, logró que el 7 de mayo de 1949 la UFCO aceptara un contrato colectivo que satisfizo las principales exigencias obreras.

Este tipo de reveses, junto a la imposibilidad de suceder a Arévalo en la presidencia, empujó al coronel Arana a los brazos de la contrarrevolución. Alentado por la UFCO, la alta jerarquía eclesiástica, la oligarquía y un grupo de políticos derechistas agrupados en el Frente Unido Aranista, el jefe militar fraguó un golpe de Estado –el número 28 de los registrados contra Arévalo– para el cual contaba con el respaldo de algunas guarniciones y las armas de la Legión del Caribe que había incautado.

Advertido el gobierno de sus trajines conspirativos, Arana fue muerto al resistir su detención el 18 de julio de 1949. De todas formas, la Guardia de Honor y otras unidades comprometidas, orientadas por Mario Méndez Montenegro, atacaron al Palacio Presidencial, pero fueron aniquiladas el día 20 por las fuerzas civiles y militares leales al coronel Arbenz, ministro de Defensa, al costo de más de 150 muertos y cientos de heridos.

El período de Arévalo (1945-1951), fase inicial de la revolución guatemalteca, supo aprovechar una coyuntura internacional favorable, creada por los excelentes precios del café, para vertebrar un régimen democrático que consagró ciertos derechos a los trabajadores, dio por resultado una efectiva elevación del nivel de vida de

la población y permitió la ampliación de las relaciones capitalistas. Entre los logros de esta etapa pueden mencionarse la formulación de una política exterior independiente y la puesta en vigor de una avanzada legislación contenida en la constitución de 1945, el Código del Trabajo (1947) y el del Seguro Social (1948).

Además, se efectuaron importantes reformas económicas, como la ley de bancos de 1946, que dinamizó los créditos a los pequeños productores, se creó una banca nacional estatal y congelaron los precios y la renta de viviendas, todo lo cual le trajo aparejado la hostilidad del gobierno de Estados Unidos. Pero a la terminación del mandato de Arévalo, el proceso guatemalteco se encontraba ante la alternativa de conformarse con estas reformas o pasar a cambios más profundos, que transformaran la atrasada estructura económica y social del país y crearan una nación verdaderamente independiente.

Esta perspectiva se abrió con la victoria electoral del coronel Jacobo Arbenz, en las elecciones presidenciales del 12 de noviembre de 1950, en las que obtuvo el 66% de los sufragios con el respaldo del Frente Democrático Nacional, integrado por agrupaciones políticas y organizaciones sindicales, incluido el Partido Comunista, refundado el 28 de septiembre de 1949. Desde fines de 1952 la organización comunista, encabezada por Fortuny, pasó a actuar en plena legalidad con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), fortalecida con el reingreso de los seguidores de Víctor Manuel Gutiérrez, el más prestigioso líder sindical de Guatemala, que había conseguido el 12 de octubre de 1951 la reunificación del movimiento obrero en la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

Durante la segunda etapa de la revolución guatemalteca, bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, de 1951 a 1954, el proceso se radicalizó. Cediendo a los reclamos de las clases oprimidas, el gobierno se orientó hacia el nacionalismo revolucionario, adquiriendo un definido contenido agrario, antifeudal y antimperialista. En este período no solo se puso mayor énfasis en la modernización y diversificación de la agricultura, así como en el desarrollo económico del país, sino también se implantó una avanzada legislación revolucionaria que incluía beneficios a los pueblos originarios y la quiebra del dominio oligárquico-imperialista mediante una audaz redistribución agraria.

Por eso se inició la construcción de la carretera del Atlántico y el puerto nacional de Santo Tomás y se concibió el proyecto de la hidroeléctrica Junun-Marinalá, con los cuales se pretendía romper el monopolio norteamericano en los transportes y la electricidad. Sin duda, la medida más avanzada del gobierno de Arbenz fue la ley de reforma agraria del 17 de junio de 1952, que expropiaba las áreas ociosas de los latifundios para intentar dar una solución democrática al problema de la tierra, dominada por los terratenientes nacionales y extranjeros.

La aplicación de la ley no solo afectó a los grandes propietarios guatemaltecos, sino también a los extranjeros y entre estos a la UFCO. Tan solo al monopolio frutero le fueron confiscadas 1,859 caballerías en el Pacífico y 1,558 en el Atlántico. En los dos años de ejecución de la inconclusa reforma agraria fue expropiada la cuarta parte de las tierras cultivables y repartidas a más de 100 mil familias –beneficiando a medio millón de habitantes–, de las cuales 30 mil lo habían sido con propiedades del Estado.

La creciente agitación obrero-campesina y las expropiaciones de tierras eran más de lo que podía aceptar la vieja oligarquía y el imperialismo norteamericano. Las conquistas de la revolución guatemalteca y la influencia de su ejemplo alarmaron a los enemigos del proceso. Así, mientras se iba cerrando el cerco contra Guatemala organizado por Estados Unidos, las fuerzas progresistas encabezadas por Arbenz se perfilaban como la única alternativa consecuente en lo que constituía ya una nueva fase de la revolución de carácter democrático-popular.

La hostilidad de Estados Unidos contra la revolución guatemalteca se hizo más descarnada cuando Washington, el 14 de octubre de 1953, emitió una declaración en la que atacaba al gobierno de Arbenz. Ella formaba parte de un plan intervencionista confeccionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –denominado PBSUCCESS– que incluía, en su primera etapa, la firma de un rosario de pactos militares con los gobiernos títeres del área centroamericana –a la vez que se prohibían las ventas de armas al de Arbenz–, para dar la impresión de que estos países eran amenazados por Guatemala. A la par, en estas repúblicas vecinas –donde incluso funcionó una radio

contrarrevolucionaria–, se entrenaban grupos mercenarios que en pocos meses deberían invadir el territorio guatemalteco y derrocar al gobierno revolucionario.

El 17 de junio de 1954, haciendo caso omiso a las denuncias de Guatemala en los foros internacionales –como la realizada en la conferencia interamericana de Caracas por el ministro de Exteriores, Guillermo Toriello–, se inició la agresión imperialista. Un llamado Ejército de Liberación, concentrado en Nicaragua y Honduras, invadió Guatemala bajo la dirección del ex coronel Carlos Castillo Armas, mientras barcos norteamericanos se aproximaban a sus aguas jurisdiccionales.

En su avance, los invasores ocuparon las poblaciones de Bananera y Morales, aprovechando las instrucciones dadas por Arbenz a sus fuerzas de evitar choques en la zona limítrofe con Honduras, para no dar pretexto a una guerra con este país. Mientras esto ocurría en la zona por donde habían penetrado los «liberacionistas», aviones mercenarios suministrados por la CIA bombardeaban los días 25 y 28 de junio la capital y otras ciudades guatemaltecas.

Cuando la invasión parecía flaquear, y la CGT llamaba al pueblo a formar comités de defensa, se produjo la traición de los desmoralizados mandos militares complotados con la contrarrevolución. Ya unas semanas antes de la intervención, el 15 de mayo de 1954, la jefatura del ejército había cuestionado a Arbenz sobre los alcances de su programa y sus vínculos con el PGT, aprovechando la llegada a un puerto guatemalteco del barco sueco *Alfhem*, portador de armas compradas a Checoslovaquia.

Puesto entre la espada y la pared, el presidente Arbenz se opuso a las exigencias de los altos mandos y prefirió renunciar (27 de junio), considerando erróneamente que su permanencia al frente del gobierno era el obstáculo para liquidar a los invasores y preservar los logros de la revolución. Pero la junta militar que le sustituyó, pronto sustituida por otra más a la derecha, ilegalizó al PGT, persiguió a sus dirigentes y comenzó a negociar con los invasores (30 de junio), mientras Arbenz se asilaba en la embajada de México. Para consolidar su victoria, desde el 3 de julio de 1954 Castillo Armas se posesionaba de ciudad Guatemala con sus huestes a sueldo.

La caída de Arbenz, y la instauración de un gobierno hechura de la oligarquía y Estados Unidos, cerró el breve y único capítulo de serias transformaciones revolucionarias en la historia contemporánea de Guatemala. A partir de entonces reaparecieron en toda su intensidad el autoritarismo y la represión sin límites que habían caracterizado al estado oligárquico hasta 1944.

OTROS CAMBIOS DEMOCRÁTICOS A MEDIADOS DE LOS CUARENTA

Como ocurrió en Guatemala, en otros países latinoamericanos también se produjeron importantes transformaciones democráticas en la coyuntura favorable de mediados de los cuarenta. Así en Ecuador, las fuerzas progresistas se unieron en un amplio frente policlasista, la llamada Alianza Democrática, que reunió a conservadores, liberales, socialistas y comunistas.

El frente ecuatoriano se oponía a la política arbitraria y reaccionaria de Carlos Alberto Arroyo del Río, cuyo régimen había adquirido un claro perfil dictatorial. Multitudinarias manifestaciones públicas, seguidas de una huelga nacional y de un levantamiento del ejército, en mayo de 1944, en contra del odiado cuerpo de carabineros terminaron por derribarlo.

La llamada revolución gloriosa, como se le denominó, llevó a la presidencia a un hábil y carismático líder que tendría una larga trayectoria política: José María Velasco Ibarra. Gracias a aquellas intensas jornadas, los trabajadores ecuatorianos consiguieron importantes reivindicaciones, entre ellas la creación, en julio de 1944, de una confederación obrera unitaria.

Un proceso parecido al de Ecuador se desarrolló también en Venezuela. Aquí un grupo de oficiales jóvenes, entre los cuales sobresalían Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez, en complicidad con la dirigencia del recién creado Partido Acción Democrática (AD), Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni, entre otros, derrocaron al gobierno el 17 de octubre de 1945 en un proceso que denominaron la revolución de octubre.

A pesar de la connotación que pudiera atribuirse a su denominación, el movimiento cívico militar solo se proponía realizar elecciones inmediatas, con la única novedad que incluyeran la votación universal, directa y secreta del presidente. El golpe de Estado derrocó al gobierno del general Isaías Medina Angarita, en el poder desde 1941, poniendo fin a casi medio siglo de ininterrumpido caudillismo militar andino.

Aunque en honor a la verdad, el gobierno de Medina Angarita se había desmarcado de los regímenes que le habían precedido: Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Para ello, Medina Angarita promulgó en 1943 una legislación nacionalista en materia petrolera, otra de reforma agraria y leyes democráticas que permitieron el regreso de los exiliados y la legalización de los partidos de oposición, entre ellos el Partido Comunista (1945).

El nuevo gobierno provisional, encabezado por Rómulo Betancourt, satisfizo algunas exigencias populares al democratizar el ejercicio del sufragio y organizar la elección de una asamblea constituyente en diciembre de 1946. Aprobada la nueva carta fundamental, una abrumadora mayoría electoral llevó a la presidencia, en febrero de 1948, al candidato adeco (AD): el célebre novelista Rómulo Gallegos.

En la pequeña República de Haití también se desbordaron incontenibles las masas, ahora contra la dictadura entreguista de Elie Lescot, respaldada por la oligarquía mulata. Los gobiernos haitianos, en manos de la élite mulata desde la retirada de los ocupantes norteamericanos en 1934, habían alentado los prejuicios y la represión contra las prácticas religiosas de origen africano —el vudú—; así como externado su menosprecio por la intelectualidad negra, que esgrimía la defensa de los derechos sociales y las ideas renovadoras de la negritud, como en 1928 ya había hecho Jean Price-Mars con su célebre libro *Así habló el tío*.

Desde 1945 la resistencia al régimen venía creciendo, en particular entre los estudiantes. El 11 de enero de 1946 una huelga de este sector atrajo el apoyo de las capas medias, sobre todo de origen negro, convirtiéndose en un paro nacional que obligó a Lescot a dimitir bajo la presión de los jefes militares Frank Lavaud, Antoine Levelt y Paul Magloire.

Pese a los obstáculos interpuestos por la junta que le sucedió en el poder, la democratización se impuso. En los comicios celebrados

en agosto de 1946 triunfó Dumarsais Estimé, quien se vio obligado a legalizar los partidos Comunista y Socialista Popular, a permitir la organización de sindicatos y a dictar medidas de beneficio social, entre ellas el salario mínimo.

En otros países del continente, el proceso de apertura democrática de la posguerra fue menos espectacular, aun cuando también se caracterizó por un notorio ascenso político de las masas y el repliegue de las fuerzas oligárquicas. En Brasil, por ejemplo, la oleada mundial antifascista obligó al presidente Getulio Vargas, quien desde 1937 gobernaba en forma dictatorial, a desmontar su represivo *Estado Novo* y conceder amplias libertades.

En febrero de 1945 los presos políticos fueron excarcelados y se convocó a elecciones generales. Estas disposiciones no lograron apaciguar la desconfianza del ejército y de la oposición oligárquica, que obligaron al presidente Vargas a dimitir en octubre de ese año. En los comicios fue elegido a la primera magistratura Eurico Gaspar Dutra, junto a una asamblea constituyente en la que figuraban catorce diputados comunistas, entre ellos Luis Carlos Prestes y Carlos Marighela.

Tendencias democráticas semejantes se observaron en países del continente donde las condiciones eran mucho más favorables. Nos referimos a Chile, México, Colombia, Panamá, Uruguay y Costa Rica. En México, por ejemplo, el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), para fortalecer su imagen democrática, concedió registro oficial al Partido Comunista.

Incluso en aquellas naciones donde las dictaduras tradicionales lograron sobrevivir a la ofensiva democrática de la posguerra, como ocurrió con Anastasio Somoza en Nicaragua o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, ello se logró a costa de hacer concesiones a la oposición y tras realizar maniobras cosméticas que les permitieron ciertos retoques de fachada. En cierta forma, fue también el caso de Fulgencio Batista en Cuba.

El general Batista, convertido en el verdadero poder tras el trono desde la caída del gobierno de Ramón Grau San Martín en enero de 1934, comenzó a dar pasos a fines de la década del treinta hacia una apertura democrática. Para ello, su presidente títere Federico Laredo Bru dictó una ley de amnistía, que liberó a más de tres mil

presos políticos y permitió el regreso de los exiliados, reconoció la autonomía universitaria, la libre actividad de los partidos políticos –incluido el Comunista–, contexto en el que se fundó, en enero de 1939, una gran central sindical nacional.

Durante todo este período, Batista se las arregló para tejer alianzas políticas que viabilizaran su aspiración de acceder a la primera magistratura sin abandonar su base militar. Lo más insólito fue el apoyo del Partido Comunista, que desde octubre de 1935 habían asumido como propia la táctica de los frentes populares orientadas por la Internacional Comunista de Moscú y que, ante la imposibilidad de concertar una alianza con otras fuerzas políticas, terminaron concretándolas con el jefe del ejército.

Tras la aprobación de la carta magna de 1940, Batista consiguió su elección como presidente de la república, luego de derrotar a su oponente y líder del Partido Auténtico, Ramón Grau San Martín. De esta forma, Batista pudo ser presidente constitucional hasta octubre de 1944, lo que coincidió con los años de la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de Batista tuvo el respaldo del Partido Comunista, fuertemente imbuido del browderismo –corriente que preconizaba la colaboración de clases promovida por Earl Browder, entonces máximo líder de los comunistas norteamericanos–, lo que le permitió tener a dos de sus miembros dentro del gabinete, algo que no se repitió entonces en ningún otro país de América Latina. Por otro lado, durante este período de 1940 a 1944, Batista adoptó una política liberal que permitió la obtención de conquistas democráticas y sindicales, en sintonía con la alianza a escala internacional de Estados Unidos con la Unión Soviética –con la que se establecieron relaciones diplomáticas en octubre de 1942– para la derrota del fascismo.

A pesar de que el conflicto mundial favoreció las exportaciones cubanas, sacando a la economía de la isla de su prolongada crisis, las interrupciones de las transportaciones marítimas crearon cierta escasez que afectó a los sectores populares. Además, la corrupción administrativa, las violaciones de los preceptos constitucionales y el ambiente violento que siguió existiendo en el país, llevaron al

desprestigio gubernamental y facilitaron la resonante victoria de la oposición en los comicios presidenciales del 14 de julio de 1944.

A la resonante victoria de Grau y los auténticos en esas elecciones se le llamó la «jornada gloriosa», cercenando toda posibilidad de continuación de Batista y sus seguidores en el poder. Atrapado en sus propias maquinaciones, Batista esta vez sin alternativas para prolongar su mandato, debió entregar el poder, aunque dejando la puerta abierta para un futuro regreso.

También en Paraguay el dictador Higinio Morínigo, en el gobierno desde 1940, propició una apertura democrática. En la coyuntura de la posguerra, Morínigo permitió la libre actividad de sus opositores y, en febrero de 1946, formó un gabinete en el que tuvieron cabida figuras de los partidos tradicionales y del febrerismo.

En el Caribe, también la situación posbélica dejó su impronta, estimulando aquí los diversos movimientos autonomistas que actuaban en las colonias holandesas (Aruba, Curazao y Surinam) y francesas (Guayana, Martinica y Guadalupe). En estas dos últimas posesiones de Francia, las fuerzas de izquierda –en lo fundamental socialistas y comunistas– consiguieron una redoblada presencia política favorecida por el gobierno popular establecido en París tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ello permitió que en 1946 a Martinica y Guadalupe se les reconociera el *status* de departamentos franceses de ultramar.

El período democrático que siguió a la terminación de la Segunda Guerra Mundial no duró mucho tiempo. Erosionado por un limitado desplazamiento oligárquico, sucumbió ante los primeros embates del enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.

EL PRESIDENTE AHORCADO Y EL MNR EN BOLIVIA

En Bolivia, como también en Perú, se promulgaron reformas democráticas y se celebraron elecciones presidenciales en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este último país, en junio de 1945, el candidato del Frente Democrático Nacional –respaldado

por los apristas—, José Luis Bustamante, venció y se integró un congreso en el cual había siete parlamentarios comunistas. Un ambiente de ascenso democrático favoreció la formación de sindicatos y organizaciones estudiantiles independientes.

A diferencia de lo sucedido en la vecina república peruana, en Bolivia este proceso fue mucho más complejo. Se había iniciado en diciembre de 1943, cuando jóvenes oficiales nacionalistas apoyados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), liderado por Víctor Paz Estenssoro, dieron un golpe de Estado, derrocaron al gobierno oligárquico y nombraron presidente al mayor Gualberto Villarroel.

Realizadas elecciones parlamentarias se constituyó un congreso en julio de 1944 con predominio del MNR que seleccionó al propio Villarroel como presidente. En esa situación, se dictaron una serie de leyes progresistas en materia social, muchas de las cuales fueron recogidas en la constitución de 1945.

Los Estados Unidos no tardaron en declarar una cerrada oposición al nuevo gobierno boliviano. Sus principales ataques se dirigieron, sin embargo, contra el partido que constituía la fuerza fundamental dentro del gabinete de Villarroel: el MNR. Acusando de «pro-nazis» a sus integrantes, Washington puso en movimiento el sistema panamericano y logró que 19 países de la América Latina aprobaran, en enero de 1944, un *Memorando Confidencial* del Departamento de Estado en el que se sindicaba a los miembros del régimen boliviano como «francamente hostiles a los propósitos de la defensa interamericana».²

Todos los gobiernos del hemisferio, con la solitaria excepción de Argentina, decidieron no reconocer oficialmente a Villarroel. La segunda andanada de Estados Unidos fue suspender el intercambio comercial y cancelar las negociaciones sobre futuras ventas de estaño.

Atrapado en la red de estas presiones, Villarroel decidió ganarse la confianza de Estados Unidos y expulsó de su gabinete a los miembros del MNR. Al mismo tiempo, ordenó represalias contra los residentes japoneses y alemanes, invitó a colaborar a los llamados «políticos independientes» y recibió a una misión norteamericana en La Paz.

² Alberto Ostria Gutiérrez, *Un pueblo en la cruz. El drama de Bolivia*, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956, p. 25.

Los reconocimientos diplomáticos a su gobierno comenzaron entonces a llegar. Dispuesto a encontrar un lugar entre los presidentes «democráticos» del hemisferio, Villarroel llamó a elecciones generales el 2 de julio de 1944. El triunfo del MNR –sobre todo en Oruro y Potosí– sobre la Unión Democrática Bolivia resultó arrollador. Integrado mayoritariamente por diputados del MNR, el nuevo congreso eligió a Villarroel como presidente de la república. A continuación, se dictaron leyes de beneficio social y se reconoció a la Unión Soviética (URSS), aun cuando no llegaron a establecerse relaciones diplomáticas.

Además, se expropiaron los yacimientos auríferos de Carlos V. Aramayo. El recién fundado Ministerio de Trabajo y Previsión Social creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Encabezada por un ex-perforista de Catavi, Juan Lechín Oquendo, pronto sería esta la más fuerte y combativa organización obrera del país.

Por su lado, el ministro de Hacienda, Víctor Paz Estenssoro, aumentó el porcentaje de divisas que debía entregar al Estado los grandes exportadores de minerales y preparó el primer Plan de Desarrollo Económico de Bolivia. Al concluir el primer congreso indígena, reunido en abril de 1945, Villarroel decretó la supresión oficial de los servicios personales que todavía se veían obligados a prestar los pueblos originarios. En ese mismo mes, ofreció a los campesinos de Tarbucó realizar una redistribución general de tierras. Todas estas innovaciones progresistas fueron recogidas en el texto de una nueva constitución, dictada en 1945.

Mientras tanto, la oposición se reorganizaba y arreciaba su campaña contra el gobierno. La Unión Democrática Boliviana se transformó en el llamado Frente Democrático Antifascista, aglutinador de toda una constelación de agrupaciones políticas de diversas tendencias: los partidos Liberal, Republicano Socialista, Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), Socialista y Republicano Genuino; además de algunas organizaciones sindicales, la Unión Cívica Femenina y la Federación Universitaria de Bolivia.

La complicada situación financiera no solo se debía al hecho de que las limitadas transformaciones sociales no habían estado

acompañadas por sustanciales reformas económicas. Carentes de divisas, desacreditado a nivel internacional por las campañas norteamericanas en su contra, impotente para resolver la escasez de alimentos, el gobierno de Villarroel se fue quedando sin apoyo, sobre todo en los más importantes núcleos urbanos.

El 13 de junio de 1946, un grupo armado de derecha, financiado por la élite minera conocida como *la rosca*, atacó el cuartel de Calama y la base aérea de El Alto. Frustrado el asalto, el gobierno expropió los diarios *La Razón* y *Última Hora*. Pocos días más tarde, el 8 de julio, los maestros se lanzaron a la huelga. Cuando los estudiantes se sumaron al paro, la Universidad fue asaltada por el ejército.

Una manifestación iniciada en el barrio aristocrático de Sopocachi, el 19 de julio, fue dispersada a balazos por los soldados. Las calles aledañas a la Plaza Murillo quedaron salpicadas de cadáveres. Finalmente, el domingo 21 se produjo el desenlace. El presidente fue obligado a sacar a los ministros del MNR, primero, y a renunciar a favor del general Dámaso Arenas, después. Cuando Villarroel preparada su dimisión, llegó frente al Palacio Quemado una gran manifestación opositora a la cual se habían sumado algunas unidades militares.

A las dos de la tarde, el edificio fue asaltado por la multitud. Al penetrar al recinto, individuos armados ametrallaron al presidente y a varios de sus ayudantes. El cadáver de Villarroel fue arrastrado hasta uno de los balcones, lanzado a la vía pública y después colgado por los amotinados en una de las farolas de la Plaza Murillo.

PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA

A partir de 1947 se desató en América Latina una furiosa oleada antidemocrática y anticomunista promovida directamente desde Estados Unidos. Su principal objetivo era frenar las ostensibles conquistas populares, conseguidas al calor de la victoria sobre el fascismo, y alinear a los países latinoamericanos en el enfrentamiento con la Unión Soviética y los emergentes países socialistas.

Aunque algunos de los primeros atisbos de la Guerra Fría y de la histeria anticomunista eran visibles a escala internacional desde antes de 1947, sin duda la señal para la oficialización en este continente de la nueva doctrina diseñada por los círculos más reaccionarios de Estados Unidos provino de la reunión de cancilleres de las repúblicas americanas efectuada en Río de Janeiro. En septiembre de ese año se aprobó en la capital brasileña el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Poco después, la conferencia panamericana celebrada en Bogotá en abril de 1948 sirvió para impulsar los planes norteamericanos de conformación de un bloque político-militar al servicio de Estados Unidos y definir la línea de «contención del comunismo». En ella participó el propio secretario de Estado norteamericano, general George C. Marshall, uno de los artífices de la Guerra Fría.

En esta ocasión se condenó, por primera vez de manera explícita, al comunismo, en el marco del interés norteamericano por imponer a los países de América Latina la doctrina estadounidense de las fronteras ideológicas. A partir de entonces, uno tras otro, los gobiernos latinoamericanos fueron obligados a alinearse con el anti-sovietismo, a romper sus vínculos comerciales y diplomáticos con la URSS y el naciente campo socialista y a desatar, en el plano interno, una feroz campaña anticomunista que nada tenía que envidiar a la del senador Joseph McCarthy dentro de Estados Unidos.

Poco después, en 1951, se fundó con financiamiento norteamericano, la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT), para contraponerla a la CTAL. La ORIT pronto se constituyó en instrumento para la persecución de los sindicatos progresistas.

Esta fue precisamente la política que se siguió en México durante el gobierno de Miguel Alemán de 1946 a 1952, quien en 1947 expulsó de la Central de Trabajadores de México (CTM) a los líderes obreros comunistas y a los seguidores de Vicente Lombardo Toledano e instauró un sindicalismo oficialista sometido a un férreo control gubernamental (*charrismo*). Al mismo tiempo, se acentuaban los rasgos autoritarios del Estado, después que el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), fundado por Cárdenas, había sido sustituido en 1946 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Algo semejante sucedió en Cuba durante los años finales del gobierno de Ramón Grau San Martín (1944-1948) y durante el de Carlos Prío Socarrás (1948-1952). Aquí los dirigentes obreros comunistas no solo fueron desalojados de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), sino que varios de ellos murieron asesinados a manos de los agentes a sueldo de la reacción, como ocurrió con el líder azucarero Jesús Menéndez y el portuario Aracelio Iglesias.

La extensión a Chile de esta rabiosa política anticomunista dio lugar a un sorpresivo viraje del presidente Gabriel González Videla, del Partido Radical, quien acababa de ganar las elecciones en 1946 gracias a su oportunista alianza con el Partido Comunista, que tenía un caudal electoral superior al 12% de la votación. En abril de 1947, y para ponerse a tono con las orientaciones de Washington, el mandatario chileno expulsó a los tres ministros comunistas de su gabinete.

Unos meses más tarde, en septiembre de 1948, González Videla firmó la llamada «ley de defensa de la democracia» que oficializó la persecución contra los comunistas tras arrogarse «facultades extraordinarias». El Partido Comunista quedó ilegalizado, sometidas las organizaciones sindicales al control policial, anuladas las libertades constitucionales y el derecho de huelga, y rotas las relaciones con la URSS.

A la vez, cientos de comunistas y dirigentes obreros fueron conducidos al campo de concentración instalado en Pisagua. La víctima más connotada de la histeria anticomunista en Chile fue el afamado autor de *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924), el poeta y senador comunista Pablo Neruda, obligado a huir al exterior clandestinamente.

También en Ecuador, como en Cuba, Chile y México, el inicio de la despiadada política anticomunista no requirió derrocar a los gobiernos establecidos. En el país ubicado en la línea ecuatorial, el presidente Velasco Ibarra se proclamó dictador en marzo de 1946, pretextando su desacuerdo con la constitución democrática aprobada un año antes. Ello le permitió reprimir a la izquierda y dictar una nueva carta fundamental más a su gusto. La creciente inclinación derechista en Ecuador se agudizó a raíz de la caída del gobierno de Velasco Ibarra, en agosto de 1947, expulsado por los militares.

Una evolución parecida a la ecuatoriana tuvo lugar en Haití. En agosto de 1946, a pocos meses de estrenado su gobierno, el presidente Estimé mostró su cara represiva y antidemocrática persiguiendo a comunistas y socialistas. El golpe de Estado de mayo de 1950, perpetrado por el coronel Paul Magloire, le dio acceso a la presidencia desde el 6 de diciembre de ese año, acrecentando la política represiva y pronorteamericana del régimen depuesto.

En Puerto Rico este proceso se expresó mediante la adopción del llamado Estado Libre Asociado (ELA) entre 1950 y 1952. Los años de la Segunda Guerra Mundial habían aupado al Partido Popular Democrático (PPD) y su principal líder Luis Muñoz Marín, tras abandonar el ideal independentista y aplicar una serie de reformas de corte populista, entre ellas repartos agrarios (1941) y fomento industrial.

En la coyuntura de la Guerra Fría, el PPD retomó la vieja fórmula autonómica del ELA, que le convenía al gobierno norteamericano para contrarrestar los ataques procedentes del proceso mundial de descolonización auspiciado por las recién creadas Naciones Unidas (ONU). La constitución del ELA, elaborada por una asamblea puertorriqueña dominada por los seguidores de Muñoz Marín, fue finalmente aprobada en un referéndum en febrero de 1952.

Estos cambios cosméticos, en esta isla convertida en colonia de Estados Unidos desde 1899, fueron antecidos por un verdadero levantamiento popular ocurrido en 1950. Organizado por el Partido Nacionalista, el estado independiente fue proclamado en Jayuya, mientras la bandera nacional era enarbolada por Blanca Canales al grito de ¡Viva la República de Puerto Rico! Como parte de la brutal represión, trece nacionalistas fueron masacrados.

La insurrección independentista de 1950 terminó con el violento asalto, el 2 de noviembre de ese año, de la casa de don Pedro Albizu Campos, quien fue encarcelado de nuevo y solo saldría de la cárcel para morir, el 21 de abril de 1965. Como colofón de la lucha armada independentista, el 1 de marzo de 1954 se produjo el ataque a la Casa Blair, y al propio Congreso norteamericano en Washington, por tres patriotas puertorriqueños encabezados por Lolita Lebrón.

En varios países latinoamericanos, la oligarquía y Estados Unidos aprovecharon la coyuntura para favorecer el acceso al poder de regímenes militares de derecha –como ocurrió en Ecuador y Haití–, encargados de llevar adelante el plan de eliminar muchas de las reivindicaciones populares del período anterior, sin la resistencia de algunos de los gobiernos democráticos. Por eso, otra de las características de esta oleada derechista residió en que no solo se proyectó contra el movimiento obrero y comunista, sino que también causó estragos entre los partidos democráticos y reformistas, como Acción Democrática (AD) y el APRA. Esto fue lo que sucedió en 1948, cuando los militares depusieron sucesivamente a los gobiernos de José Luis Bustamante Rivero en Perú (octubre) y Rómulo Gallegos en Venezuela (noviembre).

En Paraguay, Costa Rica y Colombia la contraofensiva reaccionaria de finales de los años cuarenta estuvo vinculada a una guerra civil. En Paraguay, el dictador Morínigo, para ponerse a tono con la Guerra Fría, protagonizó en enero de 1947 una especie de autogolpe de Estado: eliminó a los representantes del Partido Febrerista de su gabinete, implantó el estado de sitio y lanzó una violenta represión contra sus opositores, encubriéndola con los ropajes de un burdo anticomunismo.

Pero el 7 de marzo de ese mismo año, los oficiales «institucionalistas» decidieron sublevarse. Encabezados por el teniente coronel Fabián Saldívar Villagra, soldados y marinos, apoyados por estudiantes y militares de los partidos Comunista, Febrerista y Liberal, convirtieron a la ciudad de Concepción en el centro de la rebelión.

Con el respaldo de una parte del ejército, el gobierno de Asunción empujó al país a una larga guerra civil. Las vacilaciones e inútiles controversias dentro del comando rebelde permitieron a las tropas de Morínigo –asesoradas por un oficial norteamericano y sostenidas con dólares y armas desde la embajada de Estados Unidos– poner fin a la insurrección en agosto de 1947. Atemorizados por la bárbara represión, una serie de líderes liberales y febreristas se acogieron a la amnistía decretada por el dictador, mientras otros se refugiaban en Argentina, abandonando a sus aliados revolucionarios.

A diferencia del Paraguay, la guerra civil de Costa Rica estuvo motivada por causas diferentes. En esta pequeña república centroamericana, de bases democráticas más sólidas, los gobiernos liberales de Rafael Ángel Calderón Guardia, de 1940 a 1944, y Teodoro Picado, de 1944 a 1948, habían promulgado una avanzada legislación social con el entusiasta respaldo de los comunistas (Vanguardia Popular), partido que poseía una pequeña pero activa representación parlamentaria.

Sin embargo, en marzo de 1948 estalló un levantamiento armado promovido por los opositores al gobierno, que rechazaban la anulación de las recientes elecciones presidenciales que los favorecía. La breve guerra civil concluyó en abril con el triunfo de los partidarios del líder reformista José Figueres, devenido fundador de la llamada segunda república.

Esto trajo consigo la ruptura de relaciones con la URSS, la ilegalización de Vanguardia Popular –situación que se prolongó hasta 1974– y de la confederación de trabajadores, muchos de cuyos dirigentes debieron pasar a la clandestinidad o salir del país. Para alcanzar su triunfo Figueres contó con el abierto respaldo de la Legión del Caribe y los dirigentes políticos reformistas y anticomunistas de la región como Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt.

EL BOGOTAZO

En Colombia la guerra civil tuvo sus peculiaridades y estuvo originada por un período de hegemonía conservadora, abierto en agosto de 1946, que conduciría a una franca y abierta represión a las instituciones democráticas y progresistas. El impopular régimen de Mariano Ospina, presionado por la derecha conservadora y Estados Unidos, enrareció todavía más el ya tenso ambiente político apoyando persecuciones *macarthistas*, junto con una violenta represión en las zonas rurales y de liquidación de las organizaciones obreras, calificadas de comunistas y anticristianas.

La mayoría liberal en el parlamento, guiada por Jorge Eliécer Gaitán desde junio de 1947, rompió toda colaboración con el

gobierno y frente al creciente clima de violencia optó por hacer un llamado a la movilización popular. En la multitudinaria marcha del silencio, el 7 de febrero de 1948, Gaitán desafió al régimen conservador y advirtió que «un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa».³ Gaitán se venía radicalizando después de las elecciones de mayo de 1946, de lo que era prueba su lenguaje antimperialista y los llamados a la movilización de los trabajadores.

El visible auge de la lucha popular, y las consignas revolucionarias agitadas por Gaitán, alarmaban a la oligarquía, que solo buscaba una provocación para dar rienda suelta a la violencia. Este pretexto se encontró con el *bogotazo*. El 9 de abril de 1948, cuando en Bogotá sesionaba la IX Conferencia Panamericana, que daría nacimiento a la Organización de Estados Americanos (OEA), Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá por un fanático conservador.

El airado pueblo capitalino, volcado espontáneamente a las calles, dio muerte de inmediato al criminal y emprendió el ataque al Palacio Presidencial, pues por instinto y acumulados rencores responsabilizó al gobierno conservador con lo sucedido. Ante la frustración de las ansias renovadoras de las masas, que se canalizaban en torno a Gaitán, se desató incontrolable una verdadera insurrección urbana (el *bogotazo*), con apoyo de la principal central sindical e incluso de la policía capitalina, que puso al gobierno oligárquico al borde del colapso.

En algunos sitios, como en Barrancabermeja, se formaron juntas revolucionarias que por varias semanas desafiaron al gobierno conservador, mientras en zonas rurales brotaban bandas armadas que se proponían vengar a sus víctimas y defenderse de la represión. Para intentar acallar las protestas y levantamientos armados, el presidente Ospina, luego de largas sesiones con la directiva liberal en el virtualmente sitiado Palacio Presidencial, nombró algunos ministros del partido opositor en su gabinete, entre ellos Darío Echandía, quienes hicieron llamados a la calma.

El *bogotazo* abre el período conocido en la historia de Colombia como «la violencia», que vino acompañado de una bárbara represión

³ Medófilo Medina, *Historia del Partido Comunista*, tomo I, Bogotá, Centro de Estudios de Investigaciones Sociales, 1980, p. 558.

de tipo fascista que dejaría un saldo de miles de muertos. Ya el 18 de octubre de 1948 el gobierno puso en funcionamiento tribunales militares, los consejos de guerra, y la censura a la prensa. La policía fue depurada, junto a ciertos sectores militares proclive a los gaitanistas.

También el *bogotazo* facilitó los planes de la ultraderecha conservadora. Así, el presidente Mariano Ospina, tras romper relaciones con la URSS y producirse la retirada de los ministros liberales del gabinete, en mayo de 1949, clausuró el Congreso (noviembre), suspendió las garantías constitucionales y traspasó el poder el 7 de agosto de 1950, en unos comicios sin oposición, a un correligionario de ideas fascistoides: Laureano Gómez, quien regresó de su exilio dorado en la España de Franco.

Bajo un estado de sitio perpetuo se implantó una verdadera dictadura, que sirvió para aplastar mediante la intimidación y otros crueles métodos –hubo secuestros y asesinatos masivos–, al liberalismo radical y las organizaciones de izquierda. Al mismo tiempo, el gobierno se encaminaba sin tapujos a la erección de un estado corporativo de partido único, calcado del falangismo español, mediante una pretendida reforma constitucional.

En el campo de la represión sobresalieron las famosas bandas conocidas como los *pájaros*, lideradas por León María Lozano, alias *El Cóndor*. Entre sus víctimas estaba el Partido Comunista que, bajo la dirección de Gilberto Vieira, había recuperado, en julio de 1947 su nombre histórico y expulsado de su seno a los browderistas, que habían llevado en la práctica a la disolución de esta agrupación.

El gobierno fascista de Gómez subordinó totalmente los intereses nacionales a la política de Estados Unidos, una de cuyas peores expresiones fue el envío de tropas colombianas a la Guerra de Corea, único país latinoamericano que lo hizo. Además de favorecer la inversión norteamericana –cuyo capital alcanzó en 1955 los 274 millones de dólares–, se negociaron grandes préstamos en Estados Unidos, a pesar de los buenos precios que entonces tenía el café.

Gómez solo pudo gobernar poco más de un año, hasta el 31 de octubre de 1951, fecha en que entregó el mando al «presidente designado» Roberto Urdaneta Arbolález, mientras el Congreso se reinstalaba con pleno dominio conservador ante el retraining

electoral de los liberales. Los perseguidos por la reacción, liberales y comunistas, respondieron con huelgas y paros, mientras las zonas rurales se inundaban con miles de guerrilleros que combatían la represión gubernamental. En particular, la resistencia a la violencia conservadora se centró en los Llanos Orientales, dominados por grupos liberales armados, o en las zonas campesinas de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Valle y otros departamentos del área andina.

El 6 de septiembre de 1952 la violencia se apoderó de nuevo de Bogotá, cuando sectores de la derecha conservadora sembraron el pánico en las calles, agrediendo a los periódicos liberales *El Tiempo* y *El Espectador* y las casas de sus líderes Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo. En estas condiciones, varios líderes liberales se vieron obligados a abandonar el país, camino seguido más tarde por algunos conservadores.

Ante la inminencia de una verdadera guerra civil –aumentaban las luchas populares, la crisis del sistema bipartidista crecía, mientras se generalizaba la violencia en el campo–, junto a la posibilidad del regreso al poder de Gómez, se produjo el golpe de Estado militar del 13 de junio de 1953. Apoyado por los conservadores ospinistas, los mandos militares y un sector de la propia jerarquía liberal, se abrió de 1953 a 1957 el paréntesis de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.

DICTADURA DE ANASTASIO SOMOZA

Otra de las características de la Guerra Fría en América Latina fue el establecimiento de dictaduras como la de Rojas Pinilla o la consolidación de otras más añejas, como la de Trujillo en República Dominicana y la dinastía de los Somoza en Nicaragua. El prolongado reinado del régimen militar patrimonial de los Somoza se había iniciado el 1 de enero 1937, después de que en mayo del año anterior el presidente Juan Bautista Sacasa fuera sacado del Palacio de Tiscapa por un golpe de Estado dirigido por el ambicioso jefe de la Guardia Nacional.

El gobierno de Anastasio Somoza García fue el fruto de unas amañadas elecciones, realizadas el 8 de diciembre de ese año, que

contaron con el aval de Estados Unidos. Además de estas importantes apoyaturas, Somoza contaba con el respaldo de un sector de la clase dominante nicaragüense, con la que terminó organizando una nueva agrupación política: el Partido Liberal Somocista. Desde los primeros momentos, el régimen de Somoza, que nació bañado en sangre con el asesinato de Sandino y la masacre de sus hombres, se caracterizó por su carácter represivo y violento.

También desde el principio el dictador nicaragüense se dedicó a enriquecerse. Con esa finalidad, expropió a los alemanes radicados en el país aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, apoderándose de los bienes de la familia Bahkle, dueña de las mejores haciendas cafetaleras, además de otras propiedades agrícolas y urbanas.

Ya en 1946 Somoza figuraba entre los más acaudalados exportadores de café de Nicaragua. Otras fuentes de sus ingresos fueron las comisiones recibidas de empresas norteamericanas por las concesiones otorgadas para la explotación de yacimientos auríferos o la exportación de maderas y caucho, así como el contrabando, junto a pagos recibidos por tolerar los juegos de azar, la producción y la fabricación y venta de alcohol.

También durante la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el dictador simuló una apertura democrática, para ponerse a tono con la alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a pesar de que con anterioridad había manifestado sus simpatías por el fascismo y reconocido a Francisco Franco antes de su victoria sobre los republicanos. Para mejorar su imagen, el dictador nicaragüense permitió el funcionamiento del recién creado Partido Socialista Nicaragüense (PSN), que en agradecimiento respaldó al gobierno cuando en 1944 fuerzas del Partido Conservador intentaron organizar una huelga en su contra.

Al año siguiente, el dictador reciprocó el gesto promulgando un Código de Trabajo (12 de enero de 1945) que recogía muchas de las demandas del naciente movimiento obrero nicaragüense y de los propios socialistas. Pero en 1948, en el contexto de la Guerra Fría, y tras lograr un entendimiento preliminar con la oposición conservadora, Somoza desató una violenta represión contra el Partido

Socialista, desarticulando las organizaciones obreras que habían surgido en los años anteriores.

En el ínterin de sus mandatos, pues Somoza gobernó de 1937 a 1947 –tras una reforma constitucional en 1939– y de 1951 a 1956 –hasta que fue asesinado–, dejó en la presidencia, para darse un barniz democrático, a sus acólitos Leonardo Argüello, Benjamín Lacayo Sacasa, ambos en 1947, y de 1948 a 1950 a Víctor M. Román y Reyes.

Pero uno de estos presidentes intentó no ser una marioneta. Fue el caso de Leonardo Argüello, quien solo pudo gobernar unas semanas, tras desafiar a Somoza. Hay que decir que el dramático desenlace del caso Argüello tenía que ver también con el cambio del clima político que estaba teniendo lugar a escala mundial, al terminar la luna de miel democrática que había dejado la Segunda Guerra Mundial y comenzaba el *macarthismo* en Estados Unidos. El día de su toma de posesión, el 1 de mayo de 1947, el efímero presidente Argüello, con el respaldo del Partido Socialista, el Liberal Independiente, la Confederación del Trabajo y los estudiantes, se había atrevido a anunciar sus intenciones del librarse del yugo económico norteamericano.

Quizás por eso el golpe de Estado fue respaldado por los opositores de Somoza, Carlos Cuadra Pasos y el líder conservador Emiliano Chamorro, y entre sus consecuencias estuvo la abolición del Código de Trabajo y una nueva modificación de la constitución. La desorganizada resistencia popular fue aplastada por los efectivos de la Guardia Nacional y las brigadas somocistas paramilitares llamadas *Cascos de Acero*.

La distensión con sus tradicionales adversarios del Partido Conservador se consolidó en la década del cincuenta a partir del llamado «pacto de los generales». Este acuerdo, firmado con el anciano general Emiliano Chamorro, líder histórico del Partido Conservador, aseguró a Somoza la primacía a cambio de una participación minoritaria de sus adversarios políticos en el aparato del Estado.

Sin embargo, la oposición contra la dictadura siguió adelante. En 1948 se registró un levantamiento guerrillero, organizado por el veterano general sandinista Ramón Raudales, quien repitió una

década después su intentona revolucionaria, cuando ya el aborrecido dictador Somoza había sido eliminado.

En septiembre de 1956 el patriarca de la familia gobernante, Anastasio Somoza García, fue ajusticiado por Rigoberto López Pérez, cuando ya era el más grande terrateniente ganadero, cafetalero y productor de caña de azúcar del país. Sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, se encargaron de la sucesión, el primero entre 1956 y 1963 y el segundo desde 1967, tras abandonar formalmente la jefatura de la Guardia Nacional.

LA ERA DE TRUJILLO

En el caso de la República Dominicana, la historia de la dictadura trujillista comenzó un poco antes, en febrero de 1930, cuando estalló una exitosa revuelta, encabezada por el general Rafael Estrella Ureña contra el presidente Horacio Vázquez que pretendía reelegirse con el apoyo del dictador cubano Gerardo Machado. A este movimiento opositor se unió Rafael Leónidas Trujillo, que era el jefe de la Guardia Nacional formada por Estados Unidos tras abandonar los *marines* el país seis años atrás.

Esa posición le allanó el camino a la primera magistratura, el 16 de mayo de 1930, en unos comicios fraudulentos en donde figuraba como único candidato: era el inicio de la terrible *Era de Trujillo*, que se extendería por tres décadas. Para lograrlo, Trujillo se convirtió en protector y garante de las inversiones norteamericanas en el país, particularmente en el azúcar, eliminando todas aquellas disposiciones gubernamentales que pudieran afectar los intereses de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, siguió desarrollando su fortuna personal, en particular con negocios en el comercio y seguros, base del futuro crecimiento de su patrimonio. Una de las características que desde muy temprano distinguió al régimen trujillista fue la utilización indiscriminada del aparato y los recursos del Estado para su enriquecimiento personal.

Sobre estas bases, en los primeros diez años de su mandato, Trujillo se convirtió en dueño de grandes estancias ganaderas, de industrias de leche, carne y otras ramas alimenticias. Además, operaba

exitosas compañías comerciales, entidades financieras y empresas de seguros, obligando a los particulares a contraer préstamos y pólizas, lo que se convertiría en una práctica aplicada en todas esferas económicas a lo largo de su dictadura. También monopolizó ramas enteras de la economía nacional.

Valiéndose de un plan de austeridad que impuso a la administración pública, Trujillo consiguió en 1935 reanudar el pago de la deuda externa, a la vez que trataba de renegociar la convención de 1924 con Estados Unidos para recuperar el control de las aduanas del país. El 24 de septiembre de 1940, con la firma del Tratado Trujillo-Hull, Estados Unidos devolvió las aduanas a la República Dominicana, lo que posibilitaría al ambicioso dictador aumentar los ingresos fiscales, que combinado con una política proteccionista, y en medio de la favorable coyuntura para los precios del azúcar creada por la Segunda Guerra Mundial, permitió liquidar la deuda externa (21 de julio de 1947) junto al despegue de una modesta industria, buena parte de ella de su propiedad.

También Trujillo llegó a apoderarse del 70% de la producción azucarera nacional –pues llegó a ser dueño de 10 de los 14 ingenios del país–, adquiriendo a las compañías norteamericanas sus fábricas y tierras, lo mismo que sucedió con la empresa productora de electricidad. Como resultado de este proceso, en las postrimerías de la dictadura (1961), el 51% de la inversión industrial era de la familia Trujillo y del Estado –que era prácticamente lo mismo–, el 42% de extranjeros y solo el 7% de nacionales, concentrados en las actividades comerciales, de servicios y agrícolas.

Otro de los rasgos del régimen trujillista fue la brutal represión contra la oposición, la que se manifestó desde los inicios de la dictadura. Una de sus primeras expresiones fue el asesinato de los generales opositores Alberto Larancuent, Cipriano Bencosme y Desiderio Arias, como parte de su plan para meter en cintura a todos los caudillos que dominaban distintas regiones del país antes de su ascenso al poder.

Esto explica que Trujillo sobre dimensionara sus fuerzas armadas, convertidas en una de las más poderosas del Caribe. La militarización estuvo acompañada de la erección de una industria militar

propia, como la fábrica de armas emplazada en la ciudad natal del dictador: San Cristóbal.

La recuperación de la soberanía nacional sobre las aduanas sirvió también a la dictadura para darse una imagen nacionalista que legitimara su dominación, la que estuvo acompañada de una campaña mesiánica y de exaltación del pasado hispano de la nación, de corte racista, claramente enfilada contra Haití. La política antihaitiana de Trujillo se fundamentaba en que la República Dominicana había obtenido su independencia en 1844 de su vecino, con el cual sostuvo varias guerras durante el siglo XIX.

En 1937, motivado por la entrada masiva de haitianos para trabajar como braceros en la cosecha azucarera dominicana, muchos de los cuales no regresaban después a su patria, Trujillo desató, entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de ese año, una terrible masacre. En la llamada «reconquista de la frontera», fueron asesinados a machetazos varios miles de indefensos trabajadores negros del país vecino.

En cambio, para fortalecer el hispanismo y blanquear al país, Trujillo acogió republicanos españoles, que permanecieron poco tiempo en la isla. Dos de esos exiliados se destacaron como asesores personales del dictador: el vasco Jesús de Galíndez y el gallego José Almoína. Una vez fuera del país, ambos se volvieron acerbos críticos del régimen trujillista, denuncias que les costaría la vida en 1956 y 1960 respectivamente.

A esta altura, Santo Domingo, la ciudad primada de América, había sido redominada desde 1936 como Ciudad Trujillo –al pico más alto del país también se le puso el apellido del dictador–, mientras pueblos, calles, ciudades y provincias recibían el nombre del sátrapa o sus familiares. El tirano era adulado como el primer médico, trabajador, abogado, intelectual, periodista y otros epítetos, como también benefactor, generalísimo, libertador, san Rafael, restaurador de la independencia financiera y padre de la patria nueva. A partir de 1940, en todos los documentos oficiales, después de día, mes y año, debía aparecer la frase: *Era de Trujillo*.

La coyuntura creada a escala internacional por la Segunda Guerra Mundial, contra los regímenes autoritarios y fascistas, obligó

a Trujillo, como a los demás dictadores de la región, a hacer ciertos cambios cosméticos. Por ello abandonó formalmente el poder en 1940 y lo entregó a uno de sus testaferros, Francisco J. Peynado, artífice del repetido lema «Dios y Trujillo», y del ascenso del hijo preferido del dictador (Ramfis), de nueve años de edad, del rango de coronel –conferido a los 4 años– a general de brigada.

Tras la inesperada muerte del presidente títere Peynado, y el consiguiente interinato de Manuel de Jesús Troncoso, Trujillo volvió a ocupar el Poder Ejecutivo hasta 1942, aunque esta maniobra de distracción la repitió en 1952 con la entrega formal de la presidencia a su hermano Héctor Bienvenido (*Negro*) y a su amanuense Joaquín Balaguer. Además de *Negro*, todos los hermanos de Trujillo, así como tíos y su propio padre, ostentaron importantes cargos públicos.

Para completar la remodelación de su imagen, ofreció en mayo de 1945 garantías a los exiliados y opositores, favoreciendo la creación de nuevos partidos. Uno de ellos fue el Partido Trujillista, desprendimiento del Partido Dominicano –fundado en 1931–, el único existente hasta entonces. Incluso estimuló la fundación de un partido marxista a mediados de 1946, denominado como en Cuba, del que recibió asesoramiento, Partido Socialista Popular (PSP).

La distensión, que incluyó el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, duró muy poco tiempo. Al compás de la Guerra Fría, Trujillo abolió desde noviembre de 1946 estas mínimas concesiones y retornó a su acostumbrada postura represiva e intolerante, la que se incrementó con los intentos de sus opositores desde el exterior de derrocar al régimen por la vía armada.

Las diversas expediciones organizadas en esos años contra la dictadura trujillista contaron con el respaldo de los gobiernos de Ramón Grau San Martín en Cuba, Juan José Arévalo en Guatemala y Rómulo Betancourt en Venezuela. Las más importantes fueron la de Cayo Confites, frustrada en septiembre de 1947, junto a la que logró llegar a las costas dominicanas por Luperón en 1949, que fue aniquilada por el ejército. El notable crecimiento del descontento y de las actividades revolucionarias en su contra, obligaron a la dictadura a desatar una brutal represión, lo que unido al apoyo

de Estados Unidos le permitieron a Trujillo consolidar su dictadura durante toda la década del cincuenta.

DETERIORO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA

Hacia los años de 1952 y 1953 se inició una nueva y profunda crisis de la economía latinoamericana. La estabilización de los mercados internacionales hizo caer los precios de las materias primas, junto a un sensible deterioro en los términos de intercambio.

Este proceso vino aparejado con la ruina de muchas empresas nacionales, desgastadas por la desigual competencia de los grandes consorcios foráneos y el cada vez mayor desangramiento de recursos hacia los países industrializados. El ligero crecimiento económico registrado en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial se había realizado, en lo fundamental, sobre la base de una agricultura extensiva tradicional, por lo que no logró un salto cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Esta adversa coyuntura afectó sensiblemente los salarios y, en general, las condiciones de vida de los trabajadores –no solo en forma relativa sino absoluta–, situación agravada por las superganancias de los monopolios trasnacionales y la transferencia de los efectos del agudo deterioro económico a los sectores populares. De esta manera, la desocupación, el hambre y la miseria se hicieron aún más visibles en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.

Además, desde mediados de los años cincuenta se agravaron repentinamente las condiciones del comercio exterior de las repúblicas de América Latina. La crisis de las exportaciones latinoamericanas fue provocada por la reducción de la demanda de materias primas naturales en los países capitalistas desarrollados debido a la creciente utilización de materiales sintéticos.

Para completar este panorama desolador, habría que añadir que la crisis estructural en la agricultura, dominada por formas atrasadas de tenencia de la tierra y explotación de la fuerza de trabajo, generaba una superpoblación crónica en los campos. Ese era la génesis de

las migraciones masivas hacia las ciudades, la sobreproducción de las ramas de exportación y el déficit crónico de alimentos.

En consecuencia, los precios de los productos alimenticios subieron en los mercados internacionales afectando las balanzas de pago de los países latinoamericanos, obligados a importar muchos de ellos. Paralelamente, se intensificó la fuga de capitales de América Latina: solo entre 1946 y 1963 los monopolios norteamericanos extrajeron de la región 11 mil millones de dólares.

En estas circunstancias, también entró en crisis el proyecto de industrialización que se llevaba adelante en varias naciones de América Latina, al agotarse las posibilidades del proceso de «sustitución de importaciones» debido a las limitaciones del mercado interno y la falta de capitales para continuar adelante con las gigantes inversiones que requería la industria pesada. El desarrollo de este sector era imprescindible para disminuir la dependencia externa y reducir las importaciones de medios de producción.

A la significativa disminución del ingreso en divisas, consecuencia de la caída de los precios de las exportaciones latinoamericanas que permitían la adquisición de las maquinarias e insumos que requería la emergente industria nacional, habría que añadir la continuada descapitalización. Esta tenía sus causas en la constante remesa de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices.

La única alternativa para mantener la expansión industrial, en un momento de acelerada concentración monopolista de la economía, dependía de la capacidad de la burguesía de América Latina para asociarse al capital foráneo. Para lograrlo, era necesario abandonar la política nacionalista que auspiciaban los llamados regímenes populistas o nacionalistas burgueses. Esta solución condujo a un mayor desarrollo de una nueva modalidad: la penetración del capital foráneo (las «inversiones mixtas»), que permitió dominar «por dentro» la economía latinoamericana e impulsar el proceso de monopolización.

A partir de entonces, los recursos financieros que necesitaba la industria de América Latina procedieron de indiscriminadas emisiones monetarias estatales y de descomunales préstamos extranjeros. Pero ello condujo a una espiral inflacionaria de proporciones

incalculables y a la acumulación de una voluminosa e insoportable deuda externa, que unida a la prolongada caída del valor de las exportaciones, provocaron crónicos déficits en la balanza de pagos.

Esta fase crítica que se iniciaba para la economía latinoamericana, coincidió con la llegada al gobierno de Estados Unidos, en enero 1953, de los republicanos, con Dwight D. Eisenhower y Richard M. Nixon al frente, que rompieron veinte años consecutivos de presidencias demócratas. El gobierno de Eisenhower fue el patrocinador de una agresiva e intolerante política internacional, ideada por el secretario de Estado John Foster Dulles.

En ese enrarecido clima se estableció en América Latina un verdadero rosario de modernos sátrapas como Fulgencio Batista en Cuba (marzo de 1952), Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (enero de 1953), Gustavo Rojas Pinillas en Colombia (junio de 1953) y Alfredo Stroessner en Paraguay (mayo de 1954). A estas dictaduras se sumaron las de Manuel A. Odría en Perú (1948-1956), Paul Magloire (1950-1956) en Haití y, sobre todo, las ya añejas de Trujillo en República Dominicana y Somoza en Nicaragua, purgadas desde 1947 de cualquier apariencia democrática.

Todas ellas tenían en común, más allá de alguna que otra diferencia formal, el apoyo irrestricto a Estados Unidos en correspondencia con su absoluta sumisión a los intereses norteamericanos. Además, todas estas florecientes dictaduras se caracterizaron por el empleo permanente de la represión física y la casi total ausencia de derechos democráticos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos organizaba la intervención mercenaria contra la revolución guatemalteca. Como ya se mencionó, la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala determinó la caída del gobierno popular y democrático de Jacobo Arbenz y su sustitución por la dictadura títere de Carlos Castillo Armas, encaramada en el poder en julio de 1954.

Ese fue el mismo clima de histeria anticomunista que llevó a la intervención militar británica en Guyana, en octubre de 1953, para deponer al gobierno local de Cheddi Jagan, líder del Partido Popular Progresista (PPP), el cual defendía un programa avanzado

que rechazaba el colonialismo y abogaba por la inmediata independencia. Fueron además los años en que el gobierno de Eisenhower hostilizó descarnadamente a los regímenes nacionalistas de Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina hasta llevarlos a abandonar el poder, proceso acelerado en cada caso por sus propias debilidades e inconsecuencias.

TRÁGICO FIN DEL NACIONALISMO EN BRASIL

El nuevo gobierno de Getulio Vargas en Brasil, iniciado en enero de 1951, tuvo características muy distintas al de su mandato anterior, tanto por su redoblado nacionalismo, que adquirió tintes antimperialistas, como por su inesperada vocación democrática. Tras su obligada salida de la presidencia en 1945, Vargas permaneció apartado de la política, recluso en su estancia de Sao Borja, en Rio Grande do Sul.

Su voluntario aislamiento solo fue interrumpido en contadas ocasiones para participar en las campañas del Partido *Trabalhista* (PTB) o en determinadas sesiones del Congreso del cual era senador. Durante ese período, Getulio Vargas pronunció fogosos discursos en los cuales reafirmó su convicción sobre la necesidad de realizar profundas transformaciones en Brasil.

Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1950, Vargas, con 67 años de edad, se presentó como candidato por el PTB, con un programa bastante avanzado, dirigido a continuar el desarrollo industrial, que recogía una serie de demandas populares, entre ellas la reforma agraria. En los comicios, Vargas se impuso con el 48,7% de la votación.

Gracias al respaldo de masas –obtenido de sectores que añoraban la época de esplendor del sector estatal de la economía y las medidas sociales del varguismo– y a la división de sus contrincentes, Vargas pudo regresar al gobierno. Desde el principio de su segundo mandato, la política de Getulio se orientó a proseguir el desarrollo industrial brasileño, junto al propósito de preservar los sectores claves de la economía en manos del capital nacional, privado o estatal.

De ahí que su gobierno diera prioridad a la inversión en áreas básicas: ampliación de la siderurgia de Volta Redonda, construida en su anterior presidencia, creación de una gran usina hidroeléctrica y expansión de la red de infraestructura. Para regular la economía y financiar a las empresas nacionales fundó en 1952 el Banco Nacional de Desarrollo Económico. Estas medidas gubernamentales –además de la política inflacionaria– y la coyuntura favorable a las exportaciones brasileñas creada por la Guerra de Corea dieron por resultado que ya a comienzos de la década del cincuenta la industria representara en Brasil el 22% de toda la producción nacional.

A esta etapa del gobierno de Vargas también correspondió la propuesta de organizar una empresa estatal monopolística en el sector de hidrocarburos (Petrobras), creada finalmente, tras interminables debates parlamentarios, en octubre de 1953. En enero de 1952, también entraron en vigor las primeras disposiciones gubernamentales para contener la hemorragia de capitales –solo en 1951 se perdieron para el país 137 millones de dólares– por concepto de ganancias de las empresas extranjeras y, en noviembre de ese mismo año, se elevó el salario mínimo de los trabajadores.

Pero hacia los años de 1952 y 1953 la situación se complicó al surgir una inesperada y profunda crisis económica y política. Donde primero se manifestó fue en la producción fabril, al agotarse las posibilidades del proceso de «sustitución de importaciones» ante las limitaciones del mercado interno y la falta de capitales. Paralelamente se producía la caída de los precios de los tradicionales artículos de exportación –terminaba el *boom* creado por la guerra de Corea–, lo que repercutía en una significativa disminución del ingreso en divisas.

Por añadidura, continuaba la descapitalización del país por las empresas extranjeras con las constantes remesas de sus utilidades a las casas matrices, lo que provocaba endémicos déficits –468 millones de dólares en 1951 y 707 millones en 1952– en la balanza de pagos. La disyuntiva de conciliar con el capital foráneo o detener el ritmo de crecimiento fabril separó virtualmente los caminos del presidente Vargas y de la burguesía brasileña, lo que explica la manifiesta inclinación del mandatario a defender los intereses de las masas trabajadoras y a enfrentar al imperialismo norteamericano.

De ahí en adelante, Vargas endureció su política nacionalista, que ya no se limitó a la lucha contra la descapitalización, sino que también se encaminó a un acercamiento con el presidente argentino Juan Domingo Perón –proyecto de integración económica del ABC (Argentina, Brasil y Chile)–, la elaboración de un plan de reforma agraria (octubre de 1953) y de una empresa estatal (abril de 1954), semejante a la del petróleo, para el control de la electricidad (Electrobras).

Como en una relación causa-efecto, la crisis se trasladó de la economía al plano político. La oposición a Vargas se incrementó en el parlamento, la prensa y las asociaciones profesionales. En un lapso de pocos meses, varios ministros abandonaron el gobierno, mientras en el ejército caían en desgracia los sectores nacionalistas liderados por el propio ministro de la Guerra, que se había opuesto a los planes norteamericanos de enviar soldados brasileños a Corea.

La desestabilización económica propiciada por Estados Unidos tuvo por efecto una apreciable disminución del ritmo de crecimiento industrial, acompañado de un extraordinario agravamiento de la inflación dada las constantes emisiones monetarias. La incontenible alza de los precios continuó, mientras el costo de la vida se elevaba en un 40%, el doble de dos años antes. Para paliar la situación, que afectaba en primer lugar a los trabajadores, el ministro de Trabajo, el joven Joao Goulart, no solo no ponía coto a las huelgas obreras, sino que imponía en febrero de 1954 un aumento del 100% en el salario mínimo.

Desde ese instante, la casi totalidad de la burguesía se volvió en bloque contra el gobierno de Vargas. La prensa conservadora reaccionó acusando al presidente de querer implantar en Brasil una república sindicalista de estilo peronista, con Goulart al frente, y sacaron a la luz pública negocios sucios en que estaban implicadas personas cercanas al mandatario. Además, la agitación antigubernamental también llegó hasta las fuerzas armadas.

Presionado por los militares derechistas para que abandonara el poder, en la madrugada del 25 de agosto de 1954 el anciano caudillo se suicidó en su dormitorio del vetusto Palacio del Catete en Rio de Janeiro. En su patético testamento declaraba que había luchado

contra la explotación de Brasil, responsabilizaba de su muerte a la reacción interna y denunciaba a los «grupos económicos y financieros internacionales»,⁴ vaticinando que su sacrificio contribuiría a la liberación del pueblo brasileño.

APOGEO Y CAÍDA DEL PERONISMO

Casi un año después de la muerte de Vargas, en septiembre de 1955, el gobierno nacionalista de Juan Domingo Perón era derrocado por los militares derechistas argentinos, auspiciados por Estados Unidos. Para comprender las causas de este golpe de Estado hay que remontarse un poco atrás, a fines de la década del treinta, llamada en la historia de Argentina la «década infame».

En los años de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Ramón S. Castillo, un abierto simpatizante del fascismo europeo, había permitido el establecimiento en Argentina de un verdadero centro de propaganda y espionaje alemán. Mientras los círculos dirigentes oligárquicos defendían un interesado neutralismo, a fin de evitar complicaciones a la economía agroexportadora, las fuerzas populares, con el semi clandestino Partido Comunista a la cabeza, exigían que la nación se sumara, sobre todo después de la agresión nazi contra la Unión Soviética, a la coalición antihitleriana.

En un país dominado por el decadente imperialismo inglés y sometido a las crecientes presiones del norteamericano, las tendencias nacionalistas dentro del ejército se orientaban, aunque en forma contradictoria, cada vez más a impulsar una política de defensa de los intereses nacionales. El 4 de junio de 1943, una logia militar organizó el derrocamiento de Castillo y puso al frente del gobierno al general Pedro Pablo Ramírez.

En un breve lapso, el flamante dictador militar cerró el Congreso, clausuró diarios, intervino las universidades, disolvió los partidos políticos, implantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y detuvo o persiguió a militantes del Partido Comunista

⁴ «Testamento político de Getulio Vargas», en *Historia de América Latina (1917-1939)*, tercera parte, La Habana, Ministerio de Educación Superior, [s.f.], p. 732.

y dirigentes sindicales. Sin embargo, algunas medidas de fines de 1943 y primeros meses de 1944 evidenciaban la existencia de otra logia militar, en la que se destacaba el coronel Juan Domingo Perón, orientada a propiciar el desarrollo industrial e instrumentar un tipo de política diferente frente al movimiento obrero y los grandes problemas sociales, como la congelación de los alquileres urbanos y los arrendamientos rurales, la creación de un banco de crédito industrial y algunas tarifas arancelarias proteccionistas.

Designado jefe de la secretaría del Ministerio de Guerra, el coronel Perón escogió el menospreciado Departamento Nacional de Trabajo como centro para sus actividades políticas y sindicales. Tras ocupar su jefatura, consiguió que el 27 de noviembre de 1943 se convirtiera en Secretaría de Trabajo y Previsión con rango de ministerio.

A pesar de su relevante papel en la logia militar, Perón era en aquel instante casi un desconocido para la opinión pública. Con 48 años de edad, su biografía solo incluía algunas modernas ideas sobre la «defensa nacional» contenidas en sus escritos militares como profesor de la Escuela Superior de Guerra y una estancia de estudio en Europa.

Instalado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la carrera de Perón abandonó rápidamente el relativo anonimato y su imagen pasó a ocupar los primeros planos de la política nacional. En sus frecuentes recorridos por el interior del país y en su hábil participación como mediador entre patronos y obreros, Perón repetía incansablemente los dos principios que se convertirían en lema de su estrategia política: *independencia económica y justicia social*. Ya en diciembre de 1943 el gobierno militar, por gestiones de Perón, votó un crédito de 500 millones de pesos para la construcción de viviendas baratas.

Durante el mandato del general Edelmiro J. Farrell, que había sustituido al general Ramírez tras la crisis provocada por Estados Unidos (enero de 1944), en contra de la proclamada neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, Perón pasó a ocupar la vicepresidencia del país. Fue durante el gobierno de Farrell, para aplacar la presión norteamericana, que se declaró la guerra a las potencias del eje, el 27 de marzo de 1945, y se incautaron las propiedades alemanas y japonesas.

También en los años 1944 y 1945, Perón consiguió implantar un amplio sistema de seguridad social –que benefició a todos los trabajadores del país–, fueron aprobados numerosos aumentos salariales y solucionados muchos conflictos laborales al obligar a los empresarios a aceptar las demandas obreras. Esta política alcanzó su clímax con la proclamación del *Estatuto del peón*, el 18 de noviembre de 1944, que establecía jornales mínimos y otros beneficios sociales para los trabajadores agrícolas.

A la par, se alentaba la constitución de nuevos gremios leales al gobierno y se desplazaban a los dirigentes comunistas y socialistas en los sindicatos más combativos y organizados. La prosperidad argentina en los años de la Segunda Guerra Mundial, basada en sus grandes exportaciones de cereales y carnes hacia los países beligerantes, hizo posible la aplicación de los apreciables incrementos salariales y otras medidas en favor de los trabajadores que tanto contribuyeron a afianzar la popularidad de Perón y el papel de los sindicatos peronistas.

En estas circunstancias, Estados Unidos trazó un sinuoso plan de acción para derrocar al régimen militar argentino, que pese a sus obligadas concesiones seguía a regañadientes los dictados de la política norteamericana. El encargado de ejecutar esos proyectos era el embajador norteamericano Spruille Braden, quien desembarcó en Buenos Aires en mayo de 1945. Para complicar más las cosas, Perón fue forzado a renunciar a todos sus puestos en el gobierno por el general Eduardo Avalos y un grupo de oficiales descontentos con sus actividades (5 de octubre de 1945).

La noticia del arresto de Perón desorientó a sus partidarios, pero ya el 16 de octubre la Confederación General del Trabajo (CGT) exigía su libertad. Los colaboradores más fieles de Perón, encabezados por Eva Duarte, con quien poco tiempo después se casaría, movilizaron en pocas horas a decenas de miles de obreros del gran Buenos Aires y prácticamente se adueñaron de la capital, amenazando con incendiarla si el vicepresidente no era liberado.

La enorme multitud de los llamados *descamisados* o *cabecitas negras*, en alusión a su origen humilde y procedencia del interior mestizo, inundó la plaza frente a la Casa Rosada, sede del gobierno. Para

controlar al pueblo, el gobierno militar puso en libertad a Perón y le pidió que hablara a los manifestantes allí congregados y los aplacara.

La liberación de Perón fortaleció su candidatura a la presidencia, enarbolada por el recién creado Partido Laborista. Por su parte, los heterogéneos sectores de oposición, que aglutinaba organizaciones de izquierda y derecha, organizaron un frente político, la Unión Democrática, que postuló al médico José P. Tamborini, líder de una facción del debilitado partido Unión Cívica Radical.

El abierto respaldo de Spruille Braden a la propaganda de esta coalición, que enarboló la consigna antiperonista de *Tamborini o Hitler*, lanzada por el ahora secretario auxiliar de Estado norteamericano, hizo que pronto se popularizara la aguda respuesta del aspirante laborista: *Braden o Perón*. Unos comicios irreprochables, realizados en febrero de 1946, dieron la victoria al coronel Juan Domingo Perón con el 55% de los votos, virtual triunfador desde que fuera liberado de la prisión, haciendo abortar los planes de la alta oficialidad reaccionaria –en contubernio con Spruille Braden– dirigidos a sacarlo del escenario político.

Ya en el poder, el 9 de julio de 1946, en Tucumán, Perón emitió su célebre declaración de independencia económica, en la cual reclamaba el derecho del país a eliminar la tutela extranjera. En consonancia con ello, la deuda externa fue repatriada y, dos meses más tarde, se firmaba con la Gran Bretaña un acuerdo que establecía la continuación del abastecimiento de alimentos argentinos a Inglaterra, a cambio de que esta aceptara la prerrogativa del gobierno de Buenos Aires a adquirir las inversiones inglesas.

Luego, en octubre, se inició la ejecución del ambicioso primer plan quinquenal de desarrollo económico, y en diciembre el Estado se hizo cargo de ferrocarriles, hasta entonces propiedad del capital francés. En 1947 continuó la política peronista de reforzar la intervención estatal en las ramas básicas de la economía, y el 13 de febrero de ese año se firmó el contrato para nacionalizar, con las divisas bloqueadas en la Gran Bretaña por la crisis financiera de la posguerra, la gran red ferroviaria en poder de empresas británicas. A los norteamericanos, por su parte, se les compró la Unión Telefónica, mientras comenzaba el desarrollo de la flota mercante

nacional, que a fines del primer quinquenio ya poseía un millón 200 mil toneladas.

Mediante un fuerte apoyo crediticio estatal, el primer gobierno peronista estimuló en el ámbito interno la expansión industrial: uno de los objetivos principales de su política del capitalismo de estado. No obstante, este énfasis industrialista, realizado bajo fuerte protección impositiva y subsidios gubernamentales a la importación de insumos, tenía como contrapartida una modificación de los términos de intercambio interno en detrimento de los productos agropecuarios y una tendencia a la expansión meramente horizontal del sector industrial.

Lo primero significaba un descenso en la producción de alimentos, agravado por la rigidez de las estructuras agrarias; y lo segundo, la casi total dependencia del extranjero en la esfera del equipamiento fabril. A eso hay que sumar el estancamiento de la insuficiente producción petrolera, otro factor de presión sobre la capacidad de importar. Además, como el país obtenía casi todos sus ingresos de la comercialización de los cereales y las carnes, ambas circunstancias se reunieron para desestabilizar poco a poco su economía.

En 1949 se aprobó la carta magna que recogía los principios fundamentales del nuevo orden denominado justicialista: derecho al trabajo, a la salud, el bienestar, la protección de la familia y seguridad social, el mejoramiento económico y la defensa de los intereses profesionales. A la vez, el texto de la nueva constitución hablaba de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Sus postulados de más largo alcance eran los que reservaban al Estado la explotación de las fuentes de energía, los minerales y los servicios públicos, y prohibía su enajenación o concesión a particulares, fueran nacionales o extranjeros.

Ante la inflación y el deterioro del nivel de vida que se registraba a principios de los cincuenta, el régimen peronista apeló a controles de los salarios y los precios, que solo en forma limitada protegían la economía de los sectores populares. En consecuencia, se activó la lucha de clases y el papel de la ideología en la conducción de las masas pasó a ocupar los primeros planos de la actualidad nacional.

Convocados los nuevos comicios presidenciales, Perón anunció en una gran concentración popular, el 1 de mayo de 1951, la

nacionalización del periódico oligárquico *La Prensa*, uno de los últimos órganos opositores que aún se publicaban. Desde entonces, los sectores más reaccionarios del país arreciaron su actividad conspirativa, propiciando una sublevación militar rápidamente aplastada el 28 de septiembre de ese año.

El 11 de noviembre, todavía bajo el impacto del intento golpista de la reacción, se celebraron las elecciones presidenciales. Autorizado según la nueva constitución a reelegirse, Perón se presentó a los comicios junto al anciano Hortensio Quijano –fallecido en abril del siguiente año– como compañero de fórmula, defraudando las expectativas de los sectores más progresistas que esperaban la postulación de Eva Perón para la vicepresidencia. La candidatura opositora quedó integrada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, dirigentes ambos del llamado sector «intransigente» del radicalismo, facción que se había negado a incorporarse a la llamada Unión Democrática en 1945.

Consolidado el movimiento durante el sexenio anterior, la victoria justicialista fue ahora abrumadora. El peronismo acaparaba así todas las bancas en el Senado y 145 en la Cámara. El 4 de junio de 1952 Perón inició su segundo mandato y solo pocas semanas después, el 26 de julio, murió su popular esposa Evita.

Una serie de acontecimientos entre 1952 y 1955 demostrarían que el régimen argentino no había perdido aún sus ímpetus nacionalistas, a pesar de que las crecientes dificultades internas y la adversa situación internacional le hacían seguir una política cada día más errática y contradictoria. Fue una época de constantes virajes tácticos y búsqueda incesante de soluciones a la crisis económica.

Las posiciones progresistas del gobierno argentino en la arena internacional también se pusieron de manifiesto al resistir, en plena Guerra Fría, las exigencias norteamericanas de que el país enviara soldados a Corea y al negarse a sancionar los acuerdos contra Guatemala adoptados por la Conferencia Interamericana de Caracas (1954). Además, Perón firmó en 1955 un protocolo comercial complementario con la Unión Soviética (1955), que entre otras cosas permitió la celebración ese año en Buenos Aires de la primera exposición industrial de la URSS en el continente americano.

Estados Unidos, por su lado, utilizaba hábilmente la difícil situación –en 1952 el déficit comercial argentino se elevó a 3 mil 969 millones de pesos– para inclinar la balanza a su favor. En julio de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente de Estados Unidos, visitó Buenos Aires y en agosto ya comenzaban las negociaciones con las compañías petroleras norteamericanas. Simultáneamente, el Congreso aprobaba una ley que favorecía el ingreso y la radicación de capitales extranjeros en la industria y la minería del país.

En este caso se le permitía a las empresas foráneas transferir hasta el 8% de las utilidades, libres de impuestos, y repatriar el capital en cuotas anuales a partir del décimo año de realizada la inversión. A fin de aliviar la dependencia casi total en materia energética –Argentina compraba anualmente más de 300 millones de dólares en petróleo a compañías inglesas–, se iniciaron conversaciones con la California Oil Company, para que se hiciera cargo de las labores de prospección.

En medio del aumento de la oposición interna y externa, se produjo el enfrentamiento entre Perón y la Iglesia, que actuó como verdadero detonante del conflicto ya visible entre las clases dominantes y el justicialismo. El clero se había ido distanciando de las autoridades al mismo ritmo en que la gran burguesía asumía una actitud beligerante frente al peronismo.

Traicionado por sus tácticas y evasivas, Perón le hizo el juego a las maniobras provocadoras, acusando a la Iglesia de inmiscuirse en los asuntos políticos y sindicales. Así, la ofensiva anticlerical que lanzó a fines de 1954, culminó al año siguiente con la abolición de las exenciones impositivas a las propiedades eclesiásticas, la institución del divorcio y la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Los oficiales derechistas de las fuerzas armadas, y en especial de la marina –tradicionalmente ligada a los círculos oligárquicos–, arremetieron de ahí en adelante su actividad conspirativa. Aprovechando el impacto de la excomuniación de Perón, los militares complotados pasaron de las confabulaciones a los hechos: el 16 de junio de 1955 varios aviones bombardearon indiscriminadamente la zona donde se levanta la Casa Rosada, sede del gobierno.

Al mediodía, cuando miles de bonaerenses colmaban el centro de la ciudad, las aeronaves dejaron caer su carga homicida sobre la Plaza de Mayo y sus alrededores. El saldo definitivo no se conoce, pero se sabe que en las calles quedaron cientos de muertos y heridos.

En lugar de una acción enérgica contra los golpistas, Perón se limitó a suspender el abastecimiento de municiones a la marina de guerra, mientras algunos grupos progubernamentales se dedicaban a la quema de iglesias. La medida fue burlada por sus enemigos reabasteciéndose en las islas Malvinas, archipiélago ocupado ilegalmente por la Gran Bretaña desde hacía más de un siglo.

En definitiva, el 16 de septiembre de 1955, los militares opositores pusieron en marcha la sublevación que derrocó al régimen justicialista. Incapaz de actuar por encima de los intereses de la burguesía, el líder justicialista abandonó precipitadamente toda resistencia –las fuerzas leales obtenían ya los primeros éxitos contra los sublevados– y se marchó, tres días más tarde, a un largo exilio de 18 años. De forma sorpresiva y casi sin resistencia triunfaba la proclamada «revolución libertadora».

Tras el golpe de Estado fueron intervenidas todas las provincias, disuelto el parlamento y asaltados numerosos sindicatos por «comandos civiles revolucionarios», grupos de pistoleros armados por las autoridades y reclutados por elementos socialistas de derecha y viejos dirigentes amarillos, autotitulados «sindicalistas libres». La presencia de los tanques y la infantería en las calles dieron a las ciudades el aspecto de estar ocupadas por algún ejército invasor. El 24 de noviembre, un decreto proscribía al Partido Justicialista (peronista) y poco después comenzaba una verdadera depuración del aparato del Estado y el ejército.

LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA DE 1952

A contrapelo de la tendencia prevaleciente a principios de los cincuenta, en pleno apogeo de la Guerra Fría, cuando eran sofocados los gobiernos nacionalistas populistas de Perón en Argentina y

Vargas en Brasil y Estados Unidos derrocaba al gobierno revolucionario de Arbenz en Guatemala, se produjo el inesperado triunfo de una revolución popular en Bolivia el 9 de abril de 1952. En un proscenio adverso, caracterizado por el repliegue de las fuerzas progresistas y el dominio de la reacción, la revolución boliviana era un acontecimiento a contracorriente, resultado de una insólita insurrección de masas con amplia base obrera y campesino-indígena, capitalizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Tras la caída del gobierno de Villarroel, en junio de 1946, se desató una fuerte represión contra los miembros del MNR, liderado por Víctor Paz Estenssoro, y los militares comprometidos con el mandatario ejecutado. Gran parte de estos hombres, buscaron asilo en embajadas extranjeras, igual que el propio Paz Estenssoro, que terminó exiliado en la Argentina. La mitad de las escuelas rurales creadas durante el mandato de Villarroel fueron clausuradas y asaltados los sindicatos obreros vinculados al MNR.

El 5 de enero de 1947 se celebraron elecciones presidenciales en las que la vieja oligarquía minera, la *rosca* o los *barones del estaño* como se les conocía indistintamente, impuso a sus candidatos Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia, aunque el primero no tardó en renunciar a la primera magistratura ante el reinicio de las masacres obreras y para no aceptar la conversión de las minas en verdaderos campamentos militares (7 de mayo). Su sustituto, el vicepresidente Urriolagoitia, en cambio, se encargó de llenar de soldados los distritos mineros y de dar rienda suelta a la represión más brutal.

La violencia desatada contra los trabajadores contribuyó enseguida a elevar el prestigio del perseguido MNR. Coordinando sus acciones desde la Argentina, esta organización –junto con el Partido Obrero Revolucionario (POR)– se sublevó el 27 de agosto de 1949 y logró dominar las ciudades de Cochabamba, Potosí, Sucre, Vallegrande, Camiri y Santa Cruz. En esta última población, los insurrectos establecieron una junta de gobierno que se sostuvo durante veinte días. Al conservar en sus manos los centros neurálgicos del país –la capital y las minas–, el gobierno pudo aplastar a sus enemigos.

El 7 de octubre de 1950 elementos del MNR, del POR y del Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), crearon en Santiago de

Chile una efímera Coalición de Organismos Sindicales y Partidos de Izquierda (COSPI). Su programa contemplaba la nacionalización de las minas, reforma agraria, el control estatal del comercio exterior y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (URSS) y otros países socialistas.

Pero la dirección anticomunista del MNR, capitaneada por Víctor Paz Estenssoro, rechazó el pacto. Algo más tarde, el PIR entró definitivamente en crisis. Un grupo de jóvenes descontentos con la trayectoria reformista de la organización, que se definía marxista, se separó de ella y fundó el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Algunos de los más destacados representantes del PCB eran entonces Sergio Almaraz e Inti Peredo.

A las elecciones de 1951 se permitió asistir a todos los partidos, excepto al POR y al PCB. La derecha se presentó muy dividida, lo que aseguró el triunfo del candidato presidencial del MNR: Víctor Paz Estenssoro. Ante la derrota, Urriolagoitia se negó a reconocer los resultados, impidió el regreso del máximo líder del MNR al país, y entregó el poder a una junta militar derechista. Era el llamado *mamertazo*.

La junta militar nacida del *mamertazo* tropezó no solo con una firme oposición popular, sino con inesperadas dificultades a la hora de negociar la producción del estaño. Impotente para convencer a la Reconstruction Finance Corporation norteamericana, el gobierno se dividió, y uno de sus integrantes, el ministro de Gobierno, llegó a la conclusión de que la única salida era formar una junta cívico-militar con la participación del MNR.

Con esa finalidad se puso en contacto con el general Humberto Torres Ortiz, jefe del estado mayor, y con Hernán Siles Suazo, una de las principales figuras del MNR. Cuando parecía que aquel plan iba a naufragar, se inició la rebelión de los mineros encabezada por Juan Lechín. La iniciativa había pasado a manos del pueblo y eso cambió el curso de la lucha y en general de todos los acontecimientos.

Era el 9 de abril de 1952. Los carabineros se unieron a los obreros organizados en milicias armadas y entablaron combate con el ejército profesional. Los efectivos gubernamentales fueron barridos en Papel Pampa y San José de Oruco, mientras que en los

regimientos que avanzaban desde el sur eran paralizados y obligados a dispersarse. Después de tres días de encarnizadas batallas en la capital, el 11 de abril, el general Torres Ortiz tuvo que capitular en Laja, cerca de la Paz. Comenzaba la revolución boliviana.

El día 14 Víctor Paz Estenssoro arribó a Bolivia desde Argentina –en un avión piloteado por un joven oficial llamado René Barrientos–, y rodeado de obreros armados recibió de Hernán Siles, presidente provincial, los atributos del poder. Sin duda, esta victoria del MNR era fruto de su programa nacionalista, que le había conquistado una amplia base social, así como el respaldo del POR y el PCB.

La primera medida del nuevo gobierno fue la disolución del desprestigiado ejército. En su lugar se creó el Ejército de la Revolución Nacional, integrado en sus inicios con las milicias obreras y campesinas y los militares que habían prestado su apoyo al movimiento revolucionario. A continuación, se dictaron varias leyes de beneficio social, inspiradas en el justicialismo argentino, como un aumento salarial del 40% –con efecto retroactivo al primero de abril–, precios máximos para los productos de primera necesidad y la congelación de alquileres.

El triunfo popular prometió alcanzar la ansiada unidad sindical: se creó un solo sindicato por fábrica o mina, una sola federación por industria y una sola central obrera. Surgió así la Confederación Obrera de Bolivia (COB).

Con el ascenso del MNR, llegaba al poder un sector de la pequeña burguesía boliviana decidida a convertirse –aunque fuera a través del peculado y los negociados– en burguesía propiamente dicha. En realidad, los obreros y campesinos le habían entregado la dirección del Estado y ella respondería introduciendo una cuña entre los trabajadores de la industria y la agricultura. La presencia de tres ministros de extracción obrera en el gabinete –Minas, Obreras Públicas y Trabajo– y la ficción del «cogobierno», creaban la ilusión al proletariado que habían alcanzado el poder.

Siguiendo todavía la línea ascendente, en los primeros meses de la revolución, el MNR estableció relaciones diplomáticas con Checoslovaquia y Hungría, aun cuando no se atrevió a formalizarlas

con la URSS. Presionado por los dirigentes y ministros obreros, el 13 de mayo de 1952 el MNR tuvo que poner en marcha sus anunciados proyectos antiimperialistas.

En esa fecha, Paz Estenssoro aprobó un decreto creando una comisión que debía estudiar la futura nacionalización de las minas. El 21 de julio derogó el sistema oligárquico de «voto calificado», estableció el sufragio universal y otras transformaciones jurídicas, incluida más tarde una completa reforma educativa (1955) que extendió la escolarización en castellano a todo el mundo rural y que tendría entre sus objetivos la exaltación de una identidad nacional mestiza.

La tremenda fuerza del movimiento obrero hizo que el proceso de nacionalización de la gran minería se acelerara. El 2 de junio de 1952 fue decretado el monopolio estatal sobre la exportación de minerales y el 2 de octubre se fundó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Encargado de administrar la minería fiscal, el directorio de la COMIBOL quedó constituido por siete miembros seleccionados por el presidente de la República; aunque dos de ellos debían ser escogidos de una lista preparada por los sindicatos mineros.

El 31 de octubre, tras unos días de intervención, las principales empresas mineras fueron expropiadas. Así pasaron al ente estatal COMIBOL 16 grandes firmas, pertenecientes en su mayoría a los *barones del estaño*. En ellas el capital norteamericano tenía una participación de un 30%. Las restantes explotaciones mineras quedaron en manos privadas: eran unas 36 calificadas de medianas, y 500 de chicas, que producían el 20% del estaño boliviano.

Pese a que Paz Estenssoro firmó pomposamente la llamada *Acta de la Independencia Económica*, el país siguió dependiendo de las fundiciones de estaño que Patiño poseía en Inglaterra –la William Harvey–, o de la Wah Chang de Texas, Estados Unidos. La única excepción era una pequeña planta instalada en Oruro desde fines de los años treinta. En esas condiciones, los consorcios imperialistas lograron imponerle a la COMIBOL las cuotas y precios de exportación vigentes en los mercados internacionales.

En un momento cuando bajaban las cotizaciones del estaño, debido al fin de la guerra de Corea y a los rejuergos de Estados Unidos

con sus reservas estratégicas, el agotamiento de los viejos filones, la paralización de los trabajos de prospección, el debilitamiento de la disciplina laboral y la no renovación de la maquinaria, hicieron el resto. En 1958, el valor de las exportaciones de estaño boliviano había descendido a la mitad de lo que era en 1952,

Si la verdadera paternidad de la nacionalización minera no puede atribuirse al MNR, mucho menos lo fue en el caso de la reforma agraria. En cuanto cayó la junta militar, en abril de 1952, comenzaron a organizarse –fundamentalmente en las zonas rurales del altiplano– los primeros sindicatos y milicias campesinas, bajo la dirección de activistas obreros.

Los dirigentes sindicales mineros y urbanos salieron a los campos lanzando la consigna de la tierra a quien la trabaja, e incitando a los campesinos a ocupar las grandes propiedades territoriales. En los valles y zonas altas de Cochabamba, regiones densamente pobladas, el proceso alcanzó su mayor velocidad.

El sindicato indígena de Ucureña exigió ya el 9 de noviembre de 1952 la devolución de las parcelas que la organización adquiriera años atrás y que los terratenientes le habían usurpado. La negativa de los grandes propietarios acrecentó la agitación de los campesinos y estos se lanzaron a la ocupación armada de las haciendas, amenazando además con entrar a las ciudades y arrasar con los bienes de los privilegiados. Por sus proporciones, este movimiento se hizo incontrolable en las provincias de Cliza, Puñata y Tarata.

Desbordado por los acontecimientos, el MNR tuvo que el 20 de enero de 1953 una comisión para estudiar un proyecto de distribución de tierras. Unos meses más tarde, el 2 de agosto, fue firmada la ley de reforma agraria, en un acto celebrado en la propia población de Ucureña. Con su presencia, Paz Estenssoro se las arregló para aparecer ante las masas desposeídas como su auténtico redentor.

La ley agraria boliviana procuró crear una masa de pequeños propietarios, afectando solo una parte de las grandes haciendas, en lo fundamental aquellas donde sus dueños no hubieran invertido capital. Las entregas de tierras se realizaron en los primeros años, pero el proceso de titulación se eternizó, al ser diferido por los mecanismos burocráticos del Estado. Los datos oficiales de 1962 indican que

hasta esa fecha, aproximadamente 85 mil familias habían recibido dos millones novecientos noventa mil hectáreas, esto es, unos 500 mil campesinos, o sea, la quinta parte de la población rural boliviana.

Estas cifras no bastan para imaginar lo que sucedió con la reforma agraria. El campesino, antes explotado en un verdadero régimen de servidumbre, se vio convertido de pronto en propietario de una pequeña parcela –2.5 hectáreas en las regiones más pobladas–, sin semillas ni créditos, produciendo apenas lo imprescindible para su sustento. Por añadidura, hasta 1962 los campesinos beneficiados por la reforma agraria debían pagar el 2% anual del valor de su minúsculo patrimonio como indemnización al antiguo propietario.

Excluidos prácticamente del mercado, muchos de los antiguos *pejugaleros*, *agregados*, *arrimantes*, y otros peones rurales, tuvieron que contentarse con una economía de subsistencia, lo que agravó el problema de los suministros de alimentos a las ciudades. Por ello, aunque la ley otorgó al indio su condición de ciudadano, no contribuyó a elevar en forma real su nivel de vida.

Sin duda, la ley de reforma agraria ayudó a aliviar las tensiones sociales en el campo y permitió la aparición en 1954 de la Confederación Nacional de los Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), pero no pudo transformar las arcaicas estructuras del agro boliviano. A una parte de los campesinos que no habían obtenido tierras, el MNR le ofreció parcelas o trabajo en el despoblado oriente.

Para comprender la actitud de Estados Unidos hacia la revolución boliviana debe recordarse que en aquellos momentos el gobierno norteamericano confrontaba agudos problemas con la Guatemala de Arbenz. En la tierra del quetzal la reforma agraria, pese a que solo confiscaba las tierras incultas, hería directamente los intereses de un influyente monopolio norteamericano: la United Fruit Company.

En Bolivia, en cambio, los consorcios estadounidenses apenas habían sido afectados, debido a su participación minoritaria en la explotación del estaño y a las abundantes reservas estratégicas del gobierno federal. Además, el MNR se había comprometido a indemnizar «adecuadamente» a los antiguos accionistas de la gran minería y en el sector agrícola no existían propiedades de capitalistas norteamericanos.

Para justificar sus concesiones a los monopolios extranjeros, los dirigentes bolivianos adoptaron el lema: «Nos mantenemos firmes aquí para ceder allá, esto es más importante que aquello.»⁵ Y poco a poco fueron cediendo en todo. La visita de Milton Eisenhower permitió a la COMIBOL iniciar la venta de sus producciones a los Estados Unidos.

El 6 de noviembre de 1953 se firmó en Washington un Convenio de Asistencia Económica que hizo llegar al país, desde fines de ese propio año, las primeras remesas de la «ayuda» norteamericana. En reciprocidad, el MNR abandonó por completo la política petrolera nacionalista nacida al calor de la desastrosa Guerra del Chaco. En 1953 se entregó la primera concesión a la Glenn Mc Carthy, rompiendo tácitamente el monopolio estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las puertas se abrieron aún más el 26 de octubre de 1955, cuando fue aprobado el Código Davenport, que derogó la ley del 20 de junio de 1921 y dividió el país en tres zonas receptoras al capital extranjero, reservando solo un área para YPFB. El 23 de mayo de 1956, se otorgaron las concesiones a la Gulf Oil Corporation bajo el amparo del nuevo código. Luego siguieron las de la White Eagle, Royal Dutch e Internacional Oil Corporation.

A corto plazo, esta política económica, que entregaba el petróleo a firmas extranjeras, no promovía el desarrollo de un mercado interno y debilitaba a los pequeños productores mineros, daría por resultado el surgimiento de una élite corrupta, adherida a los nuevos organismos estatales e instituciones burocráticas: COMIBOL, YPFB, Corporación de Fomento, ministerios, Empresa Nacional de Ferrocarriles, etc. Actuando como grupo social privilegiado, estos nuevos burgueses se enriquecieron en forma rápida a la sombra de los recursos del país y los créditos norteamericanos. El control de este sector parasitario sobre el MNR fue una de las causas de la liquidación del «cogobierno» y del paso de la central obrera a la oposición.

En las elecciones del 17 de junio de 1956 ya se manifestó el predominio de la *nueva rosca* sobre los mecanismos partidarios del

⁵ Sergio Almaraz, *Bolivia, réquiem para una República*, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1960, p. 41.

MNR. En ella, la dirigencia derechista del movimiento logró imponer a su candidato: Hernán Siles Suazo, quien triunfó sin dificultades contra su oponente Oscar Unzaga de la Falange Socialista Bolivariana (FSB), agrupación defensora del antiguo régimen. Para seguir recibiendo los beneficios de la «ayuda americana», Estados Unidos impuso una nueva condición a los continuadores de la revolución de 1952: el plan de estabilización monetaria elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En virtud de este proyecto, en vigor desde el 15 de diciembre de 1956, Bolivia implantó una especie de neoliberalismo económico que facilitaba la penetración del capital extranjero y aumentaba sus posibilidades de lucro. Devaluada la moneda nacional, fue establecido un tipo único de cambio, se cancelaron los controles estatales del comercio exterior, se suspendieron los subsidios gubernamentales a las empresas privadas, se restringió el crédito y los sueldos de los trabajadores quedaron congelados. El salario real de los obreros descendió vertiginosamente, al mismo ritmo que crecía su penuria.

Además, durante el período del gobierno de Siles Suazo, de 1956 a 1960, se llegó al extremo de que el presupuesto estatal dependiera hasta en un 40% de los subsidios del Punto IV del gobierno de Estados Unidos. Hasta 1962, la república del altiplano recibió subsidios por 200 millones de dólares –aplicados en su mayor parte al pago de las llamadas «misiones técnicas»– y ciertas cantidades de los excedentes agrícolas norteamericanos. Esto último, paralizó la industria harinera boliviana, capaz de abastecer el mercado nacional en un 80% en 1953, y que vio reducida su participación a un 8% en 1962.

Al mismo tiempo, el país fue invadido por un enjambre de «asesores» norteamericanos que se introdujo en todos los organismos y empresas del Estado. A la vez, se estructuraba y fortalecía el nuevo ejército profesional. En tales circunstancias, el MNR trató de desviar los nuevos conflictos sociales incitando choques entre las milicias obreras y los campesinos.

En el mes de marzo de 1959 ocurrieron los primeros movimientos huelguísticos de envergadura. Grandes manifestaciones obreras –en La Paz, Cochabamba y Oruro– conmovieron al país, mientras el MNR sufría su primera división orgánica. El ala derecha del partido,

representante de la burguesía importadora y burocrática, contraria a una nueva postulación de Paz Estenssoro, había organizado el llamado Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico (MNRA). Pero su líder, Walter Guevara, no pudo impedir la victoria de la candidatura combinada Estenssoro-Lechín en las elecciones de 1960, pese al respaldo de los sectores reaccionarios y de Estados Unidos.

El triunfo de la candidatura MNR-COB, apoyada por el Partido Comunista, no varió el curso entreguista seguido por la dirigencia del MNR desde 1953. Ello hizo que el movimiento perdiera el apoyo de los mineros y determinó la creación en 1963 del Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN) por Juan Lechín.

Fue en su segundo período, cuando Estenssoro rechazó la oferta soviética para que el país se liberara de su dependencia del *trust* internacional del estaño; y cuando el gobierno boliviano rompió abiertamente con la revolución cubana. En pago, Bolivia fue incluida en los planes de la *Alianza para el Progreso*.

Sus continuos fracasos, y el deseo de conservar a toda costa el respaldo norteamericano, llevaron a Paz Estenssoro a desatar la represión contra las masas trabajadoras. Así llegó su gobierno a 1964, fecha de elecciones, atacado por la derecha y sin el apoyo de la izquierda. En medio de las huelgas de los maestros, los mineros, y las protestas estudiantiles, el presidente boliviano se dispuso a luchar por su reelección, pues la nueva constitución de 1961 se lo permitía.

La beligerante actitud de Lechín –influida por la desesperada situación de los mineros y la frustración de sus aspiraciones presidenciales–, más los signos de descontento que se detectaban en el ejército, hizo que Paz Estenssoro escogiera como compañero de fórmula a su antiguo piloto, el ahora general René Barrientos. A pesar de la fuerte oposición, Estenssoro fue reelecto el 31 de mayo de 1964 por los votos mayoritarios de los medios rurales todavía bajo su influencia.

De junio a noviembre, fecha esta última en que se produjo la caída de Paz Estenssoro, la situación del gobierno se tornó insostenible. La doble ofensiva dirigida por la derecha –agrupada en la Falange Socialista Boliviana (FSB)–, muy poderosa en Cochabamba y Santa Cruz, y por la izquierda, con centro en el distrito minero de

Oruro, más las acciones de las organizaciones estudiantiles, presagiaban un rápido fin para lo que quedaba del MNR.

En un último intento por controlar la oposición, Paz Estenssoro decretó el estado de sitio (octubre) y movilizó a las milicias campesinas adictas, contra los mineros y los estudiantes; acusó a los comunistas de ser responsables de los disturbios y rompió relaciones diplomáticas con Checoslovaquia. En ese momento, el vicepresidente Barrientos se retiró a la ciudad de Cochabamba e inició desde allí una hábil maniobra contra el jefe de Estado: anunció la formación de un llamado Comité Revolucionario, se solidarizó demagógicamente con los insurgentes y declaró que continuaría la lucha con los alzados.

Pronto se le sumaron la mayoría de las guarniciones del ejército y el general Alfredo Ovando Candía, quien al principio había asumido la posición de árbitro, terminó poniéndose a su lado y obligando a Víctor Paz Estenssoro a dimitir. El 6 de noviembre de 1964, una junta militar presidida por Barrientos se instaló en el gobierno, inaugurando una nueva etapa de opresión y terror en la historia de Bolivia y poniendo punto final a una revolución que hacía mucho rato había muerto.

El colapso final de la ya inexistente revolución boliviana tenía lugar cuando casi simultáneamente se estaba produciendo el nacimiento de la revolución cubana. El triunfo rebelde en la Mayor de las Antillas creó una situación revolucionaria sin precedentes en América Latina, poniendo en crisis la dominación casi absoluta que Estados Unidos había impuesto en el continente americano.

CAPÍTULO 12

LA REVOLUCIÓN CUBANA Y SU IMPACTO CONTINENTAL

La hegemonía imperialista norteamericana, consolidada en América Latina a principios de los años cincuenta mediante dictaduras militares y gobiernos entreguistas, fue alterada en forma radical desde el primero de enero de 1959 con la inesperada victoria de la revolución cubana. Los cambios generados desde entonces dieron lugar a una nueva etapa en la historia del continente, caracterizada por el avance del movimiento de liberación nacional y los desafíos a la dominación de Estados Unidos.

Sin duda el fin de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba fue el punto culminante de una fase de triunfos democráticos y revolucionarios que de alguna manera se venían atisbando en los países latinoamericanos desde fines de esa misma década. Como resultado de estallidos populares y democráticos, poco antes del triunfo de la revolución cubana habían sido derrocados los regímenes tiránicos enquistados en el poder en Perú, Haití, Colombia y Venezuela.

Momentos señalados de ese proceso de apertura democrática se registraron con el derrocamiento de las aborrecidas dictaduras de Manuel Odría en Perú (junio de 1956), Paul Magloire en Haití (diciembre de 1956), Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (mayo de 1957) y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (enero de 1958) —en esta relación puede incluirse el asesinato de Anastasio Somoza García en 1957, aunque no logró sacar del poder a sus herederos—, como resultado de motines, protestas populares, conspiraciones militares

y huelgas dirigidas, por regla general, por partidos tradicionales o movimientos reformistas. También debe agregarse el golpe militar que en octubre de 1956 derrocó en Honduras al odiado régimen de Julio Lozano Díaz, virtual dictador del país.

En otras partes hubo otros cambios que pueden inscribirse en esta misma dirección, pues llevaron consigo el ascenso de gobiernos de orientación liberal que restablecieron ciertas garantías ciudadanas, tal como ocurrió en Chile cuando el presidente Carlos Ibáñez, que gobernó de 1952 a 1958, en más de un sentido influido por el peronismo en este su segundo gobierno, derogó la «ley de defensa permanente de la democracia», legalizó al Partido Comunista, permitió la reconstitución de sindicatos e instauró reformas democráticas en el sistema electoral. En Argentina ocurrió el triunfo, en los comicios presidenciales de febrero de 1958, de Arturo Frondizi, gracias a la masiva votación en su favor del proscrito movimiento peronista.

LA REVOLUCIÓN DE FIDEL CASTRO

Los orígenes de la revolución cubana tienen que ver con el regreso al poder mediante un golpe militar de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952. El jefe castrense que dominaba la política de la isla desde mediados de los años treinta, después de las elecciones de 1944, había sido obligado a permanecer fuera del país, en el cómodo retiro de su amplia mansión de Daytona Beach en La Florida, durante los cuatro años del gobierno de Ramón Grau San Martín.

Pero su sucesor en la presidencia desde octubre de 1948, Carlos Prío Socarrás, autorizó lo que no había permitido su antecesor, el regreso a Cuba del recién electo senador Batista. Una vez instalado en su lujosa finca Kukine, en las afueras de La Habana, Batista se las arregló para reorganizar a sus partidarios con el propósito de recuperar el poder.

La imposibilidad de conseguirlo por la vía electoral en los comicios de 1952 –las encuestas lo ubicaban en tercer lugar–, hizo que aprovechara el malestar existente por el débil y corrupto gobierno

de Prío para dar un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, valiéndose de la inmensa influencia que conservaba en el ejército.

La asonada militar interrumpió el proceso electoral cuando apenas faltaban tres meses para los comicios presidenciales. Además de suspender la carta magna de 1940, que sustituyó por unos estatutos constitucionales elaborados a su conveniencia, disolvió el parlamento, destituyó las autoridades electivas provinciales y municipales que no se sometieron al mando castrense, pospuso las elecciones señaladas para el 1 de junio de 1952 y aumentó en más de una cuarta parte el sueldo de todas las fuerzas armadas, incluidos los soldados.

La llegada al poder de Batista significó un control estatal aún más férreo y antipopular, abriendo una etapa de terror, autoritarismo y entrega sin límites a los intereses norteamericanos. El establecimiento de un régimen de esta naturaleza en Cuba estaba no solo relacionado con las ambiciones de una inescrupulosa camarilla militar vinculada a Estados Unidos, sino también al clima *macarthista* y de Guerra Fría que entonces imperaba a escala internacional.

En esas condiciones solo quedaba la alternativa de la lucha armada para derrocar la aborrecida dictadura e impulsar una solución radical a los grandes problemas de la sociedad cubana. Un abogado de 26 años, Fidel Castro, fue el encargado de organizar la insurrección popular. Con un nutrido grupo de jóvenes, casi todos de origen humilde, entrenados clandestinamente, atacó el 26 de julio de 1953 los cuarteles militares de Bayamo y Santiago de Cuba, esta última considerada la segunda fortaleza militar de la isla.

Sorprendidos al intentar penetrar en el Cuartel Moncada, el centenar de hombres guiado personalmente por Fidel Castro debió replegarse, con solo una pequeña parte de esta fuerza, hacia las estribaciones de la Sierra Maestra. Cincuenta asaltantes que fueron capturados, o que se entregaron después del ataque, resultaron salvajemente asesinados por el ejército. La presión de la opinión pública y la oportuna movilización de la prensa y las autoridades eclesiásticas salvó la vida del resto de los revolucionarios, entre los cuales se encontraba el propio Fidel y su hermano Raúl Castro.

Condenado a quince años de cárcel, Fidel Castro dio a conocer desde la prisión su famoso alegato de defensa titulado *La historia me*

absolverá, convertido desde ese momento en el programa de la revolución en ciernes. Dos años después, debido a una amnistía general dictada por el gobierno de Batista para tratar de enmascarar una farsa electoral que convalidó su mandato, Fidel Castro salió de la cárcel y se vio obligado a marchar al exilio en México. Allí organizó a los sobrevivientes del Moncada y a nuevos partidarios en el Movimiento 26 de Julio (M-26-7).

A los pocos meses, el 25 de noviembre de 1956, el yate *Granma* salió de Tuxpan con 82 hombres decididos a reanudar la lucha contra la dictadura batistiana y cuyo arribo a la isla debía coincidir con la sublevación de la ciudad de Santiago de Cuba organizada por Frank País. Esta rebelión se produjo el 30 de noviembre, lamentablemente dos días antes del desembarco del *Granma*.

La falta de sincronía y la persecución gubernamental facilitó la dispersión de los expedicionarios en Alegría de Pío, por lo que solo un puñado de ellos, encabezados por Fidel Castro, pudo alcanzar la Sierra Maestra. A pesar de los duros reveses y la exigua tropa, con la ayuda campesina y la incorporación de nuevos combatientes, la guerrilla poco a poco se consolidó. Como prueba de ello, el 28 de mayo de 1957, el Ejército Rebelde se anotó un triunfo significativo en el combate del Uvero, mientras en las áreas liberadas de la Sierra Maestra se organizaba una sólida base logística que incluiría en poco tiempo hasta una emisora de radio.

En forma casi paralela, otro movimiento armado opositor, el Directorio Revolucionario, integrado fundamentalmente por jóvenes estudiantes, fracasó al intentar ejecutar a Batista y ocupar el Palacio Presidencial en La Habana el 13 de marzo de 1957, acción en la que murió su jefe, José Antonio Echeverría, también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Más adelante, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo (DR 13 M), dirigido ahora por Faure Chomón, fundó su propio frente guerrillero en el centro de la isla (Sierra del Escambray), mientras otras organizaciones como el Partido Socialista Popular (comunista), también se incorporaban a la lucha frontal contra la dictadura batistiana.

En la Sierra Maestra, después de la derrota de la ofensiva militar de la tiranía en la primavera de 1958 –desencadenada tras el fracaso

de la huelga del 9 de abril de ese año—, el Ejército Rebelde decidió invadir el resto de la isla. En cierta forma, ese proceso descentralizador de las fuerzas guerrilleras se había iniciado desde meses atrás cuando la columna guiada por Raúl Castro se estableció en las zonas montañosas del norte de la provincia de oriente.

La columna comandada por Camilo Cienfuegos abandonó la Sierra Maestra con la intención de llegar al extremo occidental del país, mientras otro destacamento similar, a las órdenes del argentino Ernesto, *Che*, Guevara, se dirigía a las elevaciones del Escambray. Estas dos vanguardias del Ejército Rebelde, tras recorrer pantanos y llanuras sorteando el hostigamiento enemigo, alcanzaron el centro de la isla a fines de 1958.

El punto culminante de la ofensiva revolucionaria se consiguió con la liberación de la ciudad de Santa Clara, capital de la provincia central, por la columna del Che Guevara, así como por el sitio de Santiago de Cuba y Guantánamo establecido por las fuerzas de Fidel y Raúl Castro, respectivamente. Estos acontecimientos precipitaron la huida de Batista el primero de enero de 1959. En esas circunstancias, los planes fraguados por el alto mando militar, en contubernio con la embajada norteamericana en La Habana, para impedir el triunfo absoluto de las fuerzas revolucionarias, se esfumaron ante la paralización total del país por una huelga general convocada por Fidel Castro.

En los primeros días de enero de 1959, tras el triunfo de la revolución, se constituyó un *Gobierno Revolucionario* presidido en un inicio por el magistrado Manuel Urrutia y en el cual Fidel Castro ocupó desde el 13 de febrero el cargo de primer ministro. En la alborada de la revolución en el poder, en medio de un extraordinario entusiasmo popular, fueron disueltos los órganos estatales y militares de la dictadura, juzgados los criminales de guerra y adoptadas un conjunto de medidas de amplio beneficio social.

Entre estas disposiciones pueden mencionarse la rebaja de un 50% de las rentas de viviendas, la apertura al pueblo de las playas exclusivas, expropiación de los bienes malversados por los funcionarios corruptos de anteriores gobiernos —que incluían fábricas de azúcar, hoteles, empresas de transportes, diarios, fincas y otros bienes de

Batista y su camarilla, rebajas de las tarifas telefónicas –intervenida incluso la llamada Cuban Telephone Company–, junto a la disminución en un 30% de los precios en los libros de textos escolares. Además, se impulsó el consumo de productos nacionales, la construcción de viviendas populares, la creación de nuevos empleos, y se mejoró sensiblemente la salud pública y la educación, mientras muchos cuarteles del ejército batistiano fueron convertidos en escuelas públicas, incluidos los dos más grandes: Columbia en La Habana y el cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

Sin duda, la medida más trascendente de esos primeros meses de la revolución en el poder fue la reforma agraria, dictada el 17 de mayo 1959, que benefició a cientos de miles de familias campesinas y fijó un máximo de 402 hectáreas en la posesión de la tierra. La promulgación de esta ley desencadenó las contradicciones clasistas en la sociedad cubana y aumentó el entonces naciente enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos, deslindando en el plano interno los campos entre partidarios y enemigos de la radicalización de la revolución.

En consecuencia, durante los meses de junio y julio de ese mismo año se produjo la renuncia del presidente Urrutia –sustituido por Osvaldo Dorticós– y varios de sus ministros, casi al mismo tiempo que se producían otras defecciones en distintas esferas gubernamentales, proceso que se completó en marzo de 1960 con la salida del gabinete de las últimas figuras opuestas al derrotero radical que tomaba la revolución.

Como parte de ese mismo proceso de definiciones, la política de Estados Unidos hacia Cuba pasó con celeridad de sus intentos de desviar el curso de las transformaciones a una agresión frontal y despiadada. A partir de ese momento se desataron, con la abierta complicidad de la burguesía, los terratenientes y otros sectores nacionales adinerados, toda una serie de actividades subversivas promovidas por la descarnada ayuda norteamericana.

En marzo de 1960 explotó en el puerto de La Habana el vapor *La Coubre*, con un saldo de setenta muertos y más de un centenar de heridos, mientras la Casa Blanca daba la orden de entrenar en la América Central un ejército de exiliados cubanos para invadir la isla. Los sabotajes a la industria azucarera y otros sectores claves de la

economía, el alzamiento de bandas armadas contrarrevolucionarias y los atentados terroristas se volvieron fenómenos cotidianos, a la vez que Estados Unidos se encaminaba a desestabilizar el *Gobierno Revolucionario* por diferentes vías, entre ellas la amenaza de cortar el suministro de combustible con el fin de paralizar el país.

La negativa de las refinerías extranjeras establecidas en la isla (Esso, Texaco y Shell) a procesar petróleo soviético, adquirido por Cuba para evitar esa posibilidad, tras la firma del primer convenio comercial con la Unión Soviética el 13 de febrero de 1960, condujo al *Gobierno Revolucionario* a expropiar esos consorcios. En represalia, Estados Unidos suprimió el 2 de julio la totalidad de la cuota azucarera cubana, con el propósito de arruinar al país al dejarlo sin su principal mercado.

La respuesta cubana fue entonces la nacionalización, entre agosto y octubre de 1960, de los principales intereses norteamericanos: bancos, grandes fábricas, minas, empresas de teléfonos, electricidad, ferrocarriles y otras muchas compañías. Estas medidas se complementaron, el 13 de octubre de ese mismo año, con la expropiación de otros grandes consorcios extranjeros y de los principales bienes de la burguesía cubana, situada ya abiertamente al lado de la contrarrevolución y de los Estados Unidos. Estas disposiciones pusieron en manos del Estado cubano a todas las empresas nacionales y foráneas con más de veinte y cinco trabajadores.

El acoso norteamericano a la revolución se complementó entonces con el bloqueo a Cuba, establecido el 19 de octubre de 1960, lo que fue respondido por el *Gobierno Revolucionario*, una semana después, con la nacionalización de otras ciento sesenta y seis compañías norteamericanas, lo que liquidó virtualmente todos los intereses de Estados Unidos en la isla. El 3 de enero del año siguiente, Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba y tres meses después despachó desde Nicaragua una expedición militar, integrada en su totalidad por contrarrevolucionarios cubanos exiliados, organizada por su propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala.

La invasión militar que desembarcó por Playa Girón, en la bahía de Cochinos, al centro sur de la isla, el 17 de abril de 1961, fue

derrotada en menos de setenta y dos horas por las milicias obreras y campesinas que habían comenzado a organizarse desde fines de octubre de 1959. Esta primera fase del proceso revolucionario cubano, concluyó con la proclamación por Fidel Castro, en vísperas del ataque enemigo en Playa Girón el 16 de abril de 1961, del carácter socialista de la revolución.

Durante los años siguientes, el *Gobierno Revolucionario* se dio a la compleja tarea de organizar un estado socialista y defenderlo, pues continuaron las agresiones externas y los alzamientos armados promovidos por Estados Unidos. En medio de esas tensiones, tuvo lugar en octubre de 1962 la crisis internacional nuclear más grande en la historia mundial, resuelta con la retirada unilateral de los misiles soviéticos desplegados en Cuba y la promesa verbal norteamericana de no intervenir en la isla.

Durante los años sesenta, la construcción de una nueva sociedad continuó adelante con la expropiación de la totalidad de la industria, de la propiedad inmobiliaria y de la enseñanza y mediante una segunda ley de reforma agraria (3 de octubre de 1963) que redujo a 67 hectáreas las extensiones máximas de tierras en manos privadas. De este modo, fueron echadas las bases para el desarrollo de la economía socialista, al ponerse en manos del estado los recursos necesarios para una elevación sustancial del nivel de vida de la población.

Gracias a ello, fue posible eliminar en muy poco tiempo el desempleo, los barrios marginales, la mendicidad, la discriminación racial, la prostitución, el vicio, liquidar el analfabetismo y establecer la educación y la asistencia médica gratuitas, la universalización del deporte y la cultura, así como una dieta balanceada y equitativa para todos los cubanos. Hitos en el proceso de institucionalización de la revolución fue la creación del Comité Central del Partido Comunista en 1965 –donde se completó la integración de las organizaciones que habían luchado contra la dictadura de Batista–, la celebración de su primer congreso diez años después y la aprobación en referéndum de una constitución socialista (1976), con la posterior elección de representantes a los gobiernos municipal, provincial y nacional.

REPERCUSIÓN DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

El triunfo de la revolución en Cuba, constituyó un viraje decisivo en la historia de América Latina. El profundo alcance social de la revolución cubana le permitió sobrepasar de manera vertiginosa –en medio del permanente acoso norteamericano– las metas antidictatoriales, democráticas y antimperialistas –junto a la plena recuperación de la soberanía nacional– para erradicar de raíz la explotación del hombre por el hombre y construir una sociedad más justa.

De esta manera, la revolución cubana transitó en forma muy breve del período democrático-popular, agrario y antimperialista al socialista, en pleno corazón del continente y a solo noventa millas de la potencia más poderosa del planeta. En buena medida, la consolidación de la revolución de Fidel Castro fue posible no solo por la valentía del pueblo cubano, sino también por el cambio ocurrido en la correlación internacional de fuerzas que, desde la segunda mitad de los años cincuenta, tuvo lugar con el fortalecimiento de la URSS y el campo socialista, el incremento de las luchas anticolonialistas en Asia y África, así como por el aumento de las contradicciones entre los países capitalistas desarrollados.

Esta nueva fase de la historia latinoamericana iniciada en 1959 se manifestó mediante una sucesión de explosiones de masas que abatieron dictaduras y gobiernos reaccionarios, propiciando en muchos lugares un retorno a la «democracia representativa». En varios países los trabajadores urbanos aprovecharon la liberación del régimen político para reconstruir sus sindicatos, en una situación análoga a la de 1944. Todos estos fenómenos coincidieron con el fracaso de la Guerra Fría y de la estrategia dirigida al aislamiento de la URSS y los demás países socialistas, así como la quiebra de la política de chantaje atómico practicada por Estados Unidos.

El derrocamiento de Batista por un movimiento revolucionario armado fue imitado de inmediato con el propósito de abatir odiadas dictaduras, como las de Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana o Stroessner en Paraguay.

Los integrantes de un grupo opositor conservador que habían formado un Directorio Revolucionario, encabezado por Pedro

Joaquín Chamorro y Adán Selva Ramírez, entraron a fines de mayo de 1959 en Nicaragua desde Costa Rica.

La inefectiva operación armada de Olama y Mojellones fue aplastada por los efectivos gubernamentales somocistas. Otro grupo más radical –integrado por socialistas y liberales independientes–, encabezado por Rafael Somarriba, que había formado en La Habana un Comité para la Liberación de Nicaragua, también penetró en el país desde Honduras el 24 de junio de ese mismo año.

Estos combatientes, agrupados en la «Brigada 21 de septiembre Rigoberto López Pérez» fueron aplastados en El Chaparral y entre los caídos estaba el comandante cubano Onelio Hernández. Entre los pocos sobrevivientes figuraba el joven estudiante Carlos Fonseca Amador, futuro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Casi a la par de los acontecimientos nicaragüenses, se produjo el desembarco en Constanza (República Dominicana), el 14 de junio de 1959, de una expedición antitrujillista, y el día 20 otras por las playas de Maimón y Estero Hondo, dirigidas por el Movimiento de Liberación Dominicana (MLD). El grupo revolucionario, integrado por exiliados dominicanos y combatientes de otros países, había salido de Cuba bajo el comando de Enrique Jiménez Moya. Pero los 180 combatientes fueron masacrados por los efectivos del dictador Trujillo y solo unos pocos lograron sobrevivir a la brutal represión, entre ellos el comandante cubano Delio Gómez Ochoa.

Aunque todas estas tentativas de derrocar a la dictadura trujillista fueron derrotadas, provocaron una conmoción nacional e impulsaron la organización de grupos clandestinos, como el vertebrado por Manuel A. Tavárez Justo y su esposa, Minerva Mirabal, en 1960 (Movimiento Revolucionario 14 de Junio). El notable crecimiento del descontento y de las actividades revolucionarias en su contra, obligaron a Trujillo a desatar una brutal represión –como el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de 1960–, que fue alejando del gobierno a la propia Iglesia católica, así como a numerosos sectores de la burguesía y las capas medias.

Los propios Estados Unidos, que temían la repetición de la revolución cubana, pasaron de presionar a Trujillo para que hiciera

concesiones democráticas a tomar medidas drásticas contra su régimen. El gobierno norteamericano suspendió la venta de armas y consiguió que la propia OEA, el 21 de agosto de 1960, adoptara sanciones colectivas contra la República Dominicana, incluyendo el rompimiento de las relaciones diplomáticas después del fracaso en Caracas de un atentado trujillista contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, el 24 de junio de ese año.

Ante la resistencia de Trujillo a dejar el poder, el gobierno norteamericano vertebró a través de la CIA el asesinato del dictador. El magnicidio fue ejecutado con éxito por un grupo de militares y políticos de los propios círculos trujillistas y fue tejido en torno a los generales Juan Tomás Díaz y José René, *Pupo*, Román Hernández.

En la noche del 30 de mayo de 1961, mientras viajaba en su automóvil fuera de la ciudad, hacia una de sus fincas, el dictador Trujillo cayó en una emboscada preparada por los conspiradores y ultimado a balazos. A continuación, la resistencia civil contra la prolongación del trujillismo sin Trujillo forzó un proceso paulatino de transición democrática que culminó, tras elecciones generales en 1962, con la entrega del poder al líder popular Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, y la promulgación de una nueva constitución.

Por su parte, en Paraguay surgieron en esa coyuntura el Movimiento 14 de Mayo, de inspiración liberal febrerista, y el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), comunista, que bajo el impacto de la revolución cubana intentaron sembrar guerrillas en la cordillera Ybytyruzú. Pero entre 1959 y 1960 fracasaron los brotes guerrilleros del Movimiento 14 de Mayo, constituido por exiliados paraguayos procedentes de la provincia argentina de Posadas, así como la invasión de la columna guerrillera Ytororó, del FULNA, auspiciada también por el Partido Comunista. Entre los caídos figuraba el legendario comandante Agapito Valiente, jefe de la columna Mariscal López.

El proceso de cambios fue acelerado en El Salvador por el golpe de Estado en noviembre de 1960 que echó por tierra al odiado régimen de José M. Lemus, instaurado en 1956. Detrás de este movimiento militar actuaba el Frente Nacional de Orientación Cívica, que reunió a varios partidos progresistas y fuerzas de izquierda,

asociaciones estudiantiles y sindicatos. Una junta democrática, en la que tenían sitio desde elementos burgueses hasta representantes populares, se encargó del poder imponiendo cambios de signo positivo, aunque de muy corta duración.

En México, se registraron en 1959 las más vigorosas movilizaciones obreras desde la época de Cárdenas. Además, durante el mandato de Adolfo López Mateos, entre 1958 y 1964, el gobierno asumió una política soberana. Una postura similar adoptó Brasil tras la llegada a la presidencia en enero de 1961 de Janio Quadros, quien impulsó una política exterior dinámica e independiente. En septiembre de ese mismo año, Cheddi Jagan volvió a ganar los comicios en Guyana y otra vez ocupó el gobierno local en la todavía colonia inglesa.

ASCENSO DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO CONTINENTAL

El incontenible ascenso de las luchas populares inaugurado por la revolución cubana condujo en corto plazo a un auge sin precedentes del movimiento de liberación en América Latina. La influencia emanada del ejemplo de Cuba desencadenó una oleada de luchas revolucionarias que estremeció al continente desde el río Bravo a la Patagonia, radicalizando a muchas organizaciones populares y ant imperialistas y cuestionando a las corrientes reformistas burguesas.

Fue ese el contexto en que se produjeron, desde principios de los años sesenta, desprendimientos en varios partidos de corte reformista e incluso en el seno de ciertas organizaciones de izquierda, como los partidos comunistas, remisos a adoptar la lucha armada. Así surgieron por todas partes nuevos movimientos revolucionarios que protagonizaron muchos de los acontecimientos que sacudieron al hemisferio.

En Venezuela Acción Democrática (AD), el partido del presidente Rómulo Betancourt, que gobernaba desde 1959, se dividió en mayo de 1960 por la creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de la Acción Revolucionaria Social (ARS),

descontentos con la postura anti cubana asumida por el mandatario adeco. Por la misma razón, la Unión Republicana Democrática (URD) salió de la coalición de gobierno en noviembre de 1960, después de la dimisión del canciller Ignacio Luis Arcaya, opuesto al voto de Venezuela contra Cuba en la reciente reunión de la OEA en San José de Costa Rica.

Fabricio Ojeda, el parlamentario más popular de la URD y destacado luchador contra la derrocada dictadura de Pérez Jiménez, no solo renunció a su puesto en el parlamento, sino que se incorporó a la lucha armada. El clímax de la crisis venezolana se alcanzó en 1962 con los alzamientos militares de Carúpano (mayo) y Puerto Cabello (junio), junto con los brotes guerrilleros aparecidos en Falcón, Sierra de San Luis y Portuguesa.

En febrero de 1963 varios frentes guerrilleros venezolanos se unieron en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y su brazo político el Frente de Liberación Nacional (FLN). Este último fue encabezado por Fabricio Ojeda hasta su encarcelamiento y posterior asesinato (22 de junio de 1966). La muerte de Ojeda facilitó, junto al paulatino abandono de las guerrillas por muchos de sus promotores, incluido el Partido Comunista, que la lucha armada comenzara a revertirse en las postrimerías del mandato del también adeco Raúl Leoni, extendido de 1964 a 1969.

Uno de los impactos causados en Perú por la revolución cubana fue poner en crisis la política reformista del APRA y su líder histórico Haya de la Torre. El ala izquierda de esta organización, encabezada por Luis de la Puente Uceda, se enfrentó a la desacreditada dirección del partido para finalmente separarse y crear el APRA Rebelde, devenido después en Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1965, en medio de una creciente agitación campesina –ya se habían producido los levantamientos dirigidos por Hugo Blanco entre 1960 y 1963–, aparecieron las primeras guerrillas organizadas por el propio MIR y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), este último encabezado por Héctor Béjar.

En Colombia, la resonancia de la revolución cubana condujo en corto plazo a un auge sin precedentes de las luchas populares que radicalizó a muchas organizaciones políticas y sociales, poniendo en

crisis a los propios partidos tradicionales. Esto último fue lo que ocurrió en el seno del Partido Liberal, donde un sector manifestó abiertamente sus simpatías por la Cuba de Fidel Castro y terminó creando, en el propio año 1959, bajo la dirección de Alfonso López Michelsen –hijo del ex presidente López Pumarejo–, el Movimiento de Recuperación Liberal (MRL). El MRL, luego redenominado Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), arrastraría consigo el 35% de la votación liberal a mediados de los sesenta.

Del MRL se desprendieron también sectores juveniles más radicales, enemigos del diálogo con la vieja dirigencia liberal, a la vez que aparecían otras agrupaciones de izquierda como el Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino y el Frente Unido de Acción Revolucionaria. Este último fue fundado en 1962 por Gloria Gaitán, hija del líder liberal cuya violenta muerte desencadenara en 1948 el *bogotazo*.

En ese contexto, las antiguas bandas armadas liberales, algunas de ellas degeneradas en simples grupos de asaltantes, lograron estabilizarse en el control de algunas áreas rurales, consolidando las llamadas zonas de «auto-defensas» campesinas –como en Tolima desde 1960–, administradas según las exigencias de un estado de guerra, llegando a proclamar leyes de tipo socialista, como ocurrió en Marquetalia y El Pato. Muchos de estos grupos armados se fueron institucionalizando como verdaderos ejércitos, convirtiendo a las antiguas guerrillas liberales de autodefensa campesina en auténticos movimientos armados de liberación nacional.

Ese fue el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –fundadas en 1966 luego de una conferencia de guerrilleros de los departamentos de Huila, Cauca y sur de Tolima–, ligadas en un inicio al Partido Comunista, encabezadas por Manuel Marulanda Vélez. En enero de 1965, teniendo por base jóvenes estudiantes y profesionales radicalizados, surgió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por Fabio Vázquez Castaño y con su zona principal de operaciones en el valle medio del Magdalena.

Al ELN se integraría después el sacerdote Camilo Torres –tras fracasar en su intento de unificar distintas organizaciones de izquierda en el Frente Unido–, caído en combate en 1965. En 1967, surgió

también el Ejército Popular de Liberación (EPL), de inspiración maoísta (Partido Comunista Marxista Leninista), que tenía por sede principal Antioquia y Córdoba.

Por su parte, en Guatemala, la lucha armada comenzó después del levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 contra el gobierno autoritario del general Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963), heredero del movimiento contrarrevolucionario que derrocara a Arbenz. Los sublevados, encabezados por los oficiales Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, terminaron creando el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y abriendo frentes guerrilleros en las montañas a principios de 1962.

A ellos se sumó el destacamento *20 de Octubre* organizado por los comunistas y el ala izquierda del Partido Revolucionario –una organización reformista fundada en 1957–, puesto a las órdenes del antiguo coronel arbencista Carlos Paz Tejada. A pesar de los reveses sufridos por las primeras guerrillas guatemaltecas, con su accionar se iniciaba la prolongada lucha armada en la tierra del quetzal.

En general, la década del sesenta inauguró una época de gran efervescencia social y política en América Latina, caracterizada por significativos combates revolucionarios y antimperialistas, poderosas luchas obreras, el despertar de importantes sectores campesinos, la elevación del espíritu combativo de las masas marginales y las amplias movilizaciones estudiantiles. A la par comenzaron a escucharse desesperados llamamientos de círculos burgueses en reclamo de un nuevo trato por parte de Estados Unidos. La Iglesia tampoco estuvo ajena a estas convulsiones sociales y en su seno no tardarían en florecer genuinas corrientes renovadoras pronunciadas por la lucha revolucionaria y la alternativa socialista (Teología de la Liberación).

El eco de la revolución cubana también se hizo sentir en una extraordinaria renovación de la cultura y las ciencias sociales latinoamericanas. Ejemplos de ello fueron el *boom* registrado por la novela del realismo mágico, en la cual se inscriben autores como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos y Julio Cortázar; la popularidad alcanzada por las nuevas canciones, con letras y ritmos que expresaban la más auténtica identidad de todo un continente estremecido por las luchas revolucionarias,

como las de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Chico Buarque y la llamada nueva trova cubana.

También se produjo una completa renovación de la cinematografía plasmada en películas de impronta social como las de Miguel Litín, Arturo Ripstein, Tomás Gutiérrez Alea, Jorge Sanjinés y otros muchos talentosos directores. Al mismo tiempo, surgía la teoría de la dependencia a partir de los trabajos de Theotonio dos Santos, Helio Jaguaribe y Fernando Henrique Cardoso, que abrió una rica discusión sobre los orígenes del subdesarrollo y contradujo ciertas conclusiones sociológicas –dualismo estructural, todas las variantes del funcionalismo y el desarrollismo– sobre el proceso histórico latinoamericano, así como las que procedían del marxismo stalinista.

Como telón de fondo de este pujante despertar de la conciencia revolucionaria y antimperialista de los pueblos latinoamericanos, se hallaba el continuo agravamiento de la crisis económica, que fue llevando la situación del continente a un verdadero atolladero.

Así, al incesante deterioro de los términos de intercambio y al drenaje de recursos provocado por las constantes remesas de utilidades del capital extranjero, se sumaron los intereses y amortizaciones de una deuda externa siempre creciente –en 1968 su servicio ya consumía el 37% de las exportaciones latinoamericanas–, que explican los graves problemas que aquejaron a los países de América Latina desde los años sesenta. Prueba de ello fue que de 1956 a 1963 se registró una brusca caída del producto nacional bruto per cápita y en el período de 1961 a 1965 ese índice se reduciría a la mitad en comparación con el de 1956 a 1960.

REPRESIÓN Y CONTRAINSURGENCIA: EL CHE GUEVARA Y EL AUGE GUERRILLERO

Ante la consolidación del socialismo en Cuba y su creciente impacto continental, Estados Unidos no solo redobló su hostilidad hacia la isla, sino también desencadenó una feroz ofensiva contrarrevolucionaria por todas partes dirigida a aplastar el menor indicio de intranquilidad popular. En el terreno diplomático trató de aislar

a Cuba de los países del hemisferio mediante su expulsión de la OEA en la Conferencia Interamericana de Punta del Este (1962), decisión que, salvo México, acataron al pie de la letra la totalidad de los gobiernos del área desde ese año y hasta 1964.

Las respuestas cubanas a todas estas acciones ofensivas y agresiones norteamericanas se expresaron en la I y II Declaración de La Habana, adoptadas el 2 de septiembre de 1960 y el 4 de febrero de 1962, respectivamente, y la de Santiago de Cuba (26 de julio de 1964), las cuales condenaban la política injerencista de Estados Unidos, la complicidad de los gobiernos latinoamericanos de entonces y proclamaban, en esta última, el derecho de los cubanos «a ayudar con todos los recursos a su alcance a los movimientos revolucionarios de todos los países que practiquen semejante intromisión en los asuntos internos de nuestra Patria».¹

El diseño de esta agresiva política contra Cuba comenzó en las postrimerías de la administración Eisenhower y se completó durante la de su sucesor, John F. Kennedy, quien en los comicios de noviembre de 1960 había derrotado por estrecho margen a su rival republicano, el vicepresidente Richard M. Nixon. Con el propósito de contrarrestar el ejemplo de la revolución cubana y ampliar las bases de su sistema de dominación, Kennedy y sus asesores diseñaron un programa para el desarrollo económico de América Latina que preveía la ampliación de los préstamos y la «ayuda» norteamericana.

Denominado *Alianza para el Progreso* contenía un conjunto de recetas «desarrollistas». Incluía la ampliación del crecimiento del producto nacional bruto, creación de una economía multirramal, reformas agrarias, liquidación del analfabetismo para 1970, universalización de la enseñanza primaria hasta sexto grado, construcción de viviendas, estabilización de los precios de las exportaciones latinoamericanas y apoyo a los proyectos de integración.

El programa norteamericano fue proclamado con derroche de propaganda en marzo de 1961 y presentado, en agosto de ese año, en una sesión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA celebrado en Punta del Este (Uruguay). En ese

¹ «Declaración de Santiago», *Cinco Documentos*, La Habana, Instituto del Libro, 1971, pp. 171-180.

mismo cónclave fue pronosticado su fracaso por el comandante Ernesto, *Che*, Guevara, al frente de la delegación cubana, ya que este no incluía transformaciones estructurales.

En virtud de este plan reformista, el gobierno de Estados Unidos dio su respaldo oficial a varios experimentos con objetivos claramente contrainsurgentes, como el que se llevó a cabo en Chile durante la presidencia del demócrata cristiano Eduardo Frei de 1964 a 1970. Hacia 1964 en este y en otros quince países latinoamericanos se aprobaron «leyes de reforma agraria» que en el mejor de los casos se limitaban a promover la colonización de tierras estatales baldías y la compra de algunas áreas no cultivadas de los grandes latifundios.

Hay que advertir, no obstante, que después del asesinato del presidente Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas), el apoyo norteamericano a los planes «desarrollistas» perdió fuerza, pues la estrategia de Estados Unidos, ahora gobernados por Lyndon B. Johnson, se inclinó cada vez más a favorecer los métodos abiertamente represivos por encima de los reformistas. Prueba fehaciente de este giro en la política norteamericana fueron las declaraciones que en marzo de 1964 formulara el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Thomas C. Mann, quien anunció sin ambages que lo importante era contar con aliados seguros en la lucha contra el comunismo, por lo cual Washington abandonó todo intento de distinguir entre regímenes dictatoriales y democráticos. Para cimentar esa postura, el presidente norteamericano se reunió con sus homólogos latinoamericanos en abril de 1967 en Punta del Este, Uruguay.

La política hacia América Latina de la administración Johnson se caracterizó por su postura pragmática, que estimuló –también convalidó– una nueva oleada reaccionaria en el continente que arrancó muchas de las conquistas alcanzadas por los pueblos latinoamericanos en sus luchas precedentes. Los gobiernos que lograron escapar a los golpes de estado debieron someterse a la tutela militar y a una sumisión descarnada a Estados Unidos. La hegemonía norteamericana y las dictaduras militares entreguistas volvieron a ganar espacio en América Latina.

Lo más característico de la contraofensiva derechista de los años sesenta fueron las asonadas militares «preventivas», que transformaron sustancialmente el panorama hemisférico, en consonancia con las medidas adoptadas por los círculos gubernamentales de Washington para defender sus intereses en la región. Ahora las fuerzas armadas latinoamericanas se convirtieron en los más eficaces instrumentos de la dominación norteamericana y en verdaderas tropas de ocupación de sus respectivos países. Para lograrlo, desde 1961, Estados Unidos comenzó a preparar en gran escala especialistas en «operaciones guerrilleras», y desde 1963, unidades especiales de «boinas verdes» se involucraron en forma directa en labores de contrainsurgencia en Guatemala, Colombia y Bolivia.

Eslabones de aquella cadena de golpes militares fueron los que tuvieron lugar en El Salvador, enero de 1961, y en Ecuador, en 1961 y 1963 –caída primero de Velasco Ibarra y después de su sucesor Carlos Julio Arosemena–, el derrocamiento de Frondizi en la Argentina, marzo de 1962, así como los cuartelazos de Guatemala, también en ese mismo mes, y Perú, julio de 1962, dirigidos no tanto contra los gobiernos establecidos de Miguel Ydígoras Fuentes y Manuel Prado Ugarteche, sino más bien para impedir el acceso al poder, en las cercanas elecciones presidenciales, de viejos caudillos reformistas que aún disfrutaban de cierta aureola popular: Arévalo y Haya de la Torre.

En esta misma secuencia de pronunciamientos militares pueden ubicarse el que derribó, el 25 de septiembre de 1963, al gobierno democrático de Juan Bosch en República Dominicana y el que tuvo lugar en Honduras en octubre de ese mismo año. La renuncia del presidente Janio Quadros de Brasil, en agosto de 1961, y la consiguiente crisis política que se desató para tratar de bloquear la sustitución constitucional –que correspondía al vice Joao Goulart– estuvo también motivada por la desembozada presión de las fuerzas armadas. Ya para entonces, el gobierno brasileño había trasladado su sede de Rio de Janeiro a Brasilia, ciudad recién construida siguiendo el diseño futurista del arquitecto Oscar Niemeyer.

El mantenimiento del bloqueo y la intensificación de las incursiones armadas contra Cuba, los golpes militares reaccionarios de Brasil (caída

de Goulart en abril de 1964), Bolivia (deposición de Paz Estenssoro en noviembre de 1964), Argentina (derrocamiento de Arturo Illia en junio de 1966), junto a la salida de Cheddi Jagan del gobierno de Guyana (diciembre de 1964) y la anulación de las leyes democráticas en Uruguay por el régimen de Jorge Pacheco Areco en diciembre de 1967, fueron otros momentos de este mismo proceso de derechización, en el que también debe incluirse la matanza de estudiantes mexicanos –más de 300 muertos y 2 mil heridos– por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) el 2 de octubre de 1968.

La contraofensiva encaminada a frenar el impetuoso avance de las fuerzas populares y de las luchas revolucionarias se aceleró desde 1964 en la medida en que se esparcía la rebeldía de los pueblos latinoamericanos. Los brotes guerrilleros más importantes de los años sesenta se produjeron en Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia, aunque prácticamente ningún país latinoamericano quedó al margen de ellos.

De un extremo al otro del continente se activó la lucha armada encabezada por organizaciones al estilo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4) en República Dominicana, el de las Forces Armées Revolutionnaires de Haití, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en Guatemala y el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Venezuela. A esta lista parcial debe agregarse el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, la Acción Libertadora Nacional (ALN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Brasil, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile y el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en Argentina, entre otras organizaciones revolucionarias surgidas en este contexto.

Al frente de estas organizaciones, que apostaron por la lucha armada por la liberación nacional, cayó una generación de jóvenes revolucionarios. Entre ellos pueden mencionarse a Fabricio Ojeda (Venezuela), Jacques Stéphen Alexis (Haití), Carlos Fonseca Amador (Nicaragua),

Jorge Ricardo Massetti (Argentina), Luis de la Puente Uceda (Perú), Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yón Sosa (Guatemala), Camilo Torres (Colombia), Carlos Marighela (Brasil), Miguel Enríquez (Chile), Inti Peredo (Bolivia), Manolo Tavárez y Francisco Caamaño (República Dominicana), así como muchos otros combatientes revolucionarios caídos, luchas simbolizadas en la epopeya del *Guerrillero Heroico*, comandante Ernesto, *Che*, Guevara, asesinado en Bolivia el 9 de octubre de 1967. En ese contexto, se celebró en La Habana, en agosto de 1967, la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de América Latina, que había sido propuesta en enero de 1966 en la propia capital cubana por el entonces senador chileno Salvador Allende en el marco de la Conferencia Tricontinental. Ellas dieron origen a la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) y la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Esta última, de efímera existencia, trató de articular e impulsar las luchas revolucionarias en el continente, en particular de aquellas que utilizaban la vía armada.

El fracaso de la *Alianza para el Progreso* y la plena ebullición del movimiento revolucionario a escala hemisférica, llevaron a Washington a formular lo que se llamó la doctrina Johnson, complemento de la Mann, que proclamó el supuesto derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier país en donde se consideraran amenazados sus intereses. Ella fue adoptada por una resolución del propio Congreso estadounidense en septiembre de 1965.

Esta política anacrónica, extrapolada de los tiempos del *big stick*, se habían hecho sentir cuando los *marines* yanquis masacraron al pueblo panameño, que reclamaba su soberanía en la zona del canal en enero de 1964. Pero, al año siguiente, fue llevada aún más lejos con la ocupación militar de Santo Domingo.

REVOLUCIÓN DE ABRIL EN SANTO DOMINGO Y MUERTE DE CAAMAÑO

El 24 de abril de 1965 estalló en República Dominicana un levantamiento cívico militar, liderado por un grupo de jóvenes oficiales, que

exigía el retorno de Juan Bosch al poder, derrocado por los oficiales trujillistas, con la complicidad de la Iglesia y los partidos tradicionales, el 25 de septiembre de 1963. El líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) había ganado las elecciones de diciembre del año anterior con más del doble de votos que todos sus contrincantes.

Durante los siete meses de su breve mandato, iniciado el 27 de febrero de 1963, Bosch revirtió al estado las extensas propiedades del régimen trujillista, inició repartos agrarios y, estableció una administración honesta y democrática, que incluía la libre actividad de las organizaciones de izquierda y la eliminación de gastos superfluos del gobierno. Además, puso en vigor la nueva constitución de 1963, que prohibía el latifundio, las propiedades de tierras en manos extranjeras y amparaba la reforma agraria.

Un Triunvirato, encabezado por Donald Reid Cabral, se encargó del Poder Ejecutivo, tras destituir al Congreso y derogar la nueva carta magna. Este gobierno fue reconocido por Estados Unidos unas pocas semanas después del asesinato de Kennedy. Además del respaldo del presidente Johnson, el otro apoyo al Triunvirato procedía del general Elías Wessin y Wessin, al frente de las tropas élites del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas (CEFA), verdadero poder tras el trono. El ex presidente Bosch, por su parte, debió exiliarse en Puerto Rico, mientras también eran obligados a abandonar el país otros líderes del PRD.

Tras el golpe militar reaccionario contra el presidente Bosch, la reacción más importante provino del principal partido de izquierda, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4), que aspiraba a profundos cambios sociales y económicos, pues las otras dos pequeñas organizaciones de izquierda, el Partido Socialista Popular (Comunista) y el Movimiento Popular Dominicano (MPD) –este último cada vez más inclinado al maoísmo–, estaban enredadas en querellas bizantinas. A fines de noviembre de 1963, el 1J4 organizó seis focos guerrilleros con cientos de hombres armados, los que fueron aplastados en poco tiempo por las fuerzas represivas del régimen, que incluso ejecutó sin juicio alguno a varios combatientes que se habían rendido, incluido su comandante Manolo Tavárez (21 de diciembre).

Liquidada la opción armada, el restablecimiento de la democracia y el regreso de Bosch al poder, convertido en todo un símbolo nacional, quedó en manos de los jóvenes oficiales constitucionalistas. Muchos de ellos estaban influidos por la prédica del prestigioso teniente coronel Rafael Fernández Domínguez, quien había sido director de la Academia Militar en la estratégica base aérea de San Isidro hasta que fue sacado del país.

En la mañana del 25 de abril de 1965 los militares rebeldes, encabezados por los coroneles Miguel Ángel Hernando Ramírez y Francisco Caamaño Deñó ocuparon el Palacio Presidencial y depusieron al gobierno de Reid Cabral. Enterado de estos acontecimientos, el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, llamó por la radio a la población capitalina a respaldar el movimiento revolucionario. Miles de personas se volcaron enseguida a las calles al grito de «¡Viva la revolución!».²

De inmediato se estableció un gobierno provisional dirigido por Rafael Molina Ureña, quien había sido presidente de la Cámara de Diputados hasta el golpe de Estado de 1963, en espera del regreso de Bosch. Pero el ex presidente no pudo retornar al país, pues fue retenido por las autoridades norteamericanas en Puerto Rico.

Por su parte, un sector derechista del ejército, atrincherado en la base aérea de San Isidro, bajo las órdenes del general Wessin y Wessin, se opuso al movimiento revolucionario y reclamó la intervención de Estados Unidos. El 26 abril la fuerza aérea bombardeó el Palacio Presidencial, con apoyo de la marina, lo que marcó el comienzo de los enfrentamientos armados entre los dos bandos militares en pugna.

Al día siguiente, el avance de las fuerzas blindadas de Wessin y Wessin hacia el Puente Duarte, que comunica con la ciudad de Santo Domingo, unido a la postura injerencista de la embajada norteamericana, que se negaba a aceptar el gobierno constitucionalista, sembró el desaliento entre los partidarios de Bosch. El propio presidente Molina Ureña renunció y pidió asilo en la embajada de Colombia, mientras la mayor parte de sus seguidores se refugiaban en sus casas o en las misiones diplomáticas extranjeras.

² Piero Gleijeses, *La esperanza desgarrada. La rebelión dominicana de 1965 y la invasión norteamericana*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011 p. 273.

Sin embargo, en la tarde de ese mismo día, la ofensiva de las tropas de Wessin y Wessin, que incluía equipos blindados, fue detenida por la resistencia espontánea de civiles armados, bajo la dirección del coronel Caamaño, nombrado ministro del Interior por el gobierno de Molina Ureña, y el capitán de navío Manuel Ramón Montes Arache. Esta victoria defensiva, que obligó a las fuerzas enemigas a replegarse, dio un nuevo impulso al movimiento constitucionalista.

En los días siguientes, los seguidores de Caamaño, devenido un verdadero héroe nacional, consolidaron su control sobre diversos puntos de la capital dominicana, incluyendo cuarteles de la policía y el fuerte Ozama, enclavado en la propia ciudad de Santo Domingo. Wessin, arrinconado con sus efectivos en la base de San Isidro, organizó apresuradamente una junta militar que pidió ayuda a Estados Unidos (28 de abril).

Ese mismo día, la Casa Blanca, temerosa de un triunfo revolucionario que creara una segunda Cuba en el Caribe, comenzó el desembarco por mar y aire de sus *marines*, que en dos semanas superaron los 20 mil efectivos. Al referirse a los objetivos de esta descarnada invasión militar a un país independiente, el presidente Johnson declaró sin tapujos que se trataba de impedir el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental. Para intentar legitimar estas descarnadas acciones contra la soberanía de la República Dominicana, Estados Unidos consiguió la creación, a toda velocidad, de una simbólica fuerza intervencionista de la OEA, a la vez que bloqueaba la mediación de las Naciones Unidas (ONU).

Dispuestos a resistir a los invasores norteamericanos, el Congreso dominicano, formado con los restos del que había sido disuelto en 1963, eligió el 4 de mayo de 1965 al coronel Caamaño como presidente constitucional. El nuevo mandatario conformó su gabinete con representantes del PRD, el 1J4, el PSP, el MPD y el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC).

Bajo la dirección de Caamaño, durante quince días se produjeron violentos enfrentamientos contra las tropas de Wessin y el propio ejército interventor estadounidense, hasta que los *marines* lograron dividir la capital en dos sectores. En uno de esos violentos choques, el 19 de mayo, cayó en combate el coronel Fernández Domínguez,

verdadero inspirador del movimiento constitucionalista dentro del ejército, que apenas una semana antes había regresado al país con un mensaje de Bosch para Caamaño.

Pero la abrumadora superioridad norteamericana, que les permitió desalojar a los constitucionalistas de una tercera parte del territorio que ocupaban los días 15 y 16 de junio, impuso finalmente una solución negociada en la llamada *Acta de Reconciliación* (31 de agosto). Mediante este acuerdo, ambas partes aceptaron como presidente provisional a un político protegido de Estados Unidos: Héctor García Godoy. Como parte del acuerdo, entre junio y septiembre regresaron del exilio Juan Bosch y Joaquín Balaguer, quienes debían disputarse la presidencia en los siguientes comicios.

Bajo el gobierno de García Godoy, iniciado el 3 de septiembre de 1965, comenzó el desarme de los constitucionalistas, que incluía la salida al exterior de los oficiales de los dos bandos. Ese proceso no estuvo exento de obstáculos y traiciones, como la emboscada sufrida por Caamaño y sus hombres en el Hotel Matum, el 19 de diciembre de ese año, que devino en un verdadero enfrentamiento armado. En definitiva, solo viajaron al exterior, en enero de 1966, los militares y civiles más comprometidos con la abortada revolución popular, incluido el propio Caamaño, enviado a Londres como agregado militar.

El 1 de junio de ese mismo año, bajo la supervisión y control de los ocupantes norteamericanos se celebraron los esperados comicios presidenciales. Las elecciones, celebradas en un clima de persecución e intimidación sobre los constitucionalistas, fueron un gigantesco fraude. Sin ningún recato se dio la victoria, con el 57% de la votación, al antiguo trujillista Joaquín Balaguer, mientras Juan Bosch, que no pudo salir de su casa por el acoso a que estaba sometido, solo se le reconoció el 39% de los sufragios. A partir de entonces, y hasta 1978, Balaguer se mantuvo ininterrumpidamente en el poder, con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos y los militares derechistas.

Fue precisamente para enfrentar el espurio régimen de Balaguer e impulsar cambios sociales y económicos de envergadura, que poco después el coronel Caamaño abandonó en forma secreta su puesto diplomático en Londres para entregarse a la organización de la lucha armada. Luego de una prolongada estancia en Cuba, el líder de la

revolución de abril y un puñado de sus fieles seguidores desembarcaron en tierra dominicana por playa Caracoles, el 2 de febrero de 1973. Tras los primeros choques con el ejército, la mayor parte de los expedicionarios, incluido el propio Caamaño, fueron capturados y asesinados.

NUEVOS GOBIERNOS MILITARES NACIONALISTAS

Las violentas conmociones sociales y políticas despertadas con el triunfo de la revolución cubana y avivadas por la crisis de las estructuras del capitalismo dependiente y la dominación imperialista de América Latina, llegaron a afectar también a una de las más viejas y sólidas instituciones tradicionales de poder en toda la región: el ejército. Lo ocurrido en República Dominicana, donde una parte de las fuerzas armadas tomó partido por la causa popular, fue una muestra de ello y no quedaría como un hecho insólito en la historia de América Latina.

Aunque después de la crisis económica de 1929 ya habían florecido en el seno de los ejércitos de América Latina corrientes nacionalistas, la tendencia se había invertido después de la Guerra Fría. Desde entonces, las fuerzas armadas del hemisferio fueron convertidos en instrumentos de la reacción y el imperialismo norteamericano contra los países socialistas y los movimientos revolucionarios, como ocurrió en Argentina y Brasil, por solo citar dos ejemplos.

Sin embargo, la crisis generalizada del sistema no tardó en reflejarse en el comportamiento patriótico de sectores de la oficialidad que se levantaron para luchar contra los gobiernos oligárquicos y reformistas, como se puso de manifiesto en Venezuela, República Dominicana y Guatemala. Además, dio lugar a movimientos más amplios dentro de las fuerzas armadas de algunas repúblicas con el propósito de recuperar las riquezas nacionales e intentar realizar las transformaciones sociales postergadas por los tradicionales partidos políticos.

Así, altos oficiales de ideas progresistas, como los generales Juan Velasco Alvarado en Perú y Omar Torrijos Herrera en Panamá ocuparon el gobierno en sus respectivos países, casi en forma simultánea, en octubre de 1968, y aplicaron entonces una política soberana basada en

audaces reivindicaciones sociales y antimperialistas, entre ellas rescate de los recursos naturales (petróleo), 200 millas de mar territorial, reclamación panameña del canal y una reforma agraria sin precedentes en Perú. Bajo la influencia de estas transformaciones, los generales Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador de 1972 a 1976, Juan José Torres en Bolivia, entre 1970 y 1971 y Osvaldo López Arellano en Honduras de 1972 a 1975, llevaron adelante en sus respectivos países morigeradas copias de las audaces medidas progresistas adoptadas por los gobiernos militares de Perú y Panamá.

Hay que subrayar que la novedosa e inesperada actitud asumida por estos militares nacionalistas crearon una situación extremadamente delicada a Estados Unidos, al cuestionar la ya tradicional fidelidad de los cuerpos armados de América Latina a los dictados de Washington. Sin duda los casos más significativos, por su postura soberana e independiente y sus propósitos de quebrar la dominación imperialista en sus respectivos países, fueron los mencionados de Perú y Panamá.

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA FUERZA ARMADA EN PERÚ

El progresivo deterioro de la situación política y la demostrada incapacidad del gobierno de Fernando Belaunde Terry, iniciado en 1963, para defender los intereses nacionales, decidió a actuar a la única fuerza capaz de conquistar el poder y asumir la dirección del Estado fuera del aprismo: el ejército. La acción militar del 3 de octubre de 1968 sorprendió a casi todos los observadores.

Las primeras declaraciones de sus líderes y sus primeras acciones de gobierno demostraban que no se trataba de un golpe militar de tipo tradicional. Además de que no invocaba, como era ya habitual, el «peligro comunista», sus llamados a rescatar la dignidad nacional apuntaban claramente a las groseras violaciones de la soberanía del país perpetradas por Estados Unidos. A continuación, 19 de noviembre de 1968, tropas del ejército ocupaban los yacimientos de hidrocarburos de la Brea y Pariñas y las instalaciones de Talara.

La cuestión del petróleo se había convertido en una verdadera reivindicación histórica, en un asunto que afectaba el honor y la integridad nacionales. Aunque el ejército peruano era considerado una de las instituciones castrenses de más acentuado espíritu de casta, oficiales de extracción humilde habían ido ocupando jefaturas importantes en el aparato militar. En ellos era visible la influencia de un grupo de teóricos, formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), fundado en 1952, partidarios de concepciones progresistas sobre el desarrollo económico y la seguridad nacional.

Desde octubre de 1968 se hizo evidente que estos oficiales estaban dispuestos a patrocinar un programa patriótico de renovación social y rescate de los recursos naturales, punto de partida de un vasto esfuerzo contra el atraso y el subdesarrollo. Estas ideas formaban parte del llamado *Plan Inca*, de orientación desarrollista y dirigido a redistribuir la propiedad, reformar la agricultura, implementar una comunidad industrial y nacionalizar las industrias básicas (petróleo, pesca, minería), y fundamentaron la presidencia del general Juan Velasco Alvarado.

En cumplimiento del *Plan Inca*, el gobierno militar peruano no se detuvo en lo que podían considerarse actos elementales de soberanía. El 24 de junio de 1969 vino la promulgación de la reforma agraria, que no excluyó los grandes complejos agroindustriales de la costa, comenzando por la poderosa Cerro de Pasco Corporation y las extensas haciendas señoriales de los Andes, lo que fue complementado con una ley de aguas. Se calcula que el 47% del área agrícola fue afectada y beneficiados directamente la cuarta parte de la población rural.

Otras medidas adoptadas por el gobierno del general Velasco Alvarado fueron la nacionalización de la mayor parte de la banca, la comercialización estatal de los recursos naturales, la reversión de los yacimientos mineros, mantenidos como reservas estratégicas por las empresas transnacionales y el comienzo de la explotación por parte del Estado de grandes minas y pozos petrolíferos, junto a la creación de la empresa estatal Petroperú. Además, se nacionalizaron servicios públicos esenciales, como la electricidad, ferrocarriles, telecomunicaciones, televisión, radio, teléfonos y prensa escrita (julio de 1974),

así como se formaron comunidades laborales y se dio prioridad al área de propiedad social dentro del conjunto de la economía.

A ello debe añadirse la firme defensa de la soberanía del país sobre las 200 millas de mar territorial y la creación de una serie de organismos e instituciones estatales de nuevo tipo, junto a leyes sociales que regularon la actividad laboral, los salarios y las jubilaciones. Por último, la política exterior peruana se proyectó soberana e independiente, hizo causa común con la del Tercer Mundo y restableció relaciones con Cuba.

Pero los militares nacionalistas peruanos, como otros regímenes semejantes surgidos en otras partes del continente, no pudieron sostener esta política durante mucho tiempo. En el caso específico de Perú, ello sobrevino después de la grave enfermedad que aquejó a Velasco Alvarado, quien finalmente falleció el 24 de diciembre de 1977, lo que facilitó con anterioridad su sustitución por el general Francisco Morales Bermúdez (29 de agosto de 1975), representante de la derecha del movimiento militar.

Desde ese momento se hizo evidente el retroceso político. El flamante mandatario militar firmó diversos acuerdos de estabilización económica de corte neoliberal con el FMI –que conllevaron alzas de precios de la gasolina y artículos de primera necesidad–, permitió la reaparición de la prensa tradicional y pasó a retiro a los oficiales de izquierda, entre ellos los generales Leónidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado.

Este corrimiento a la derecha no solo estaba asociado a la hostilidad oligárquico-imperialista, sino también a la propia factura socio-clasista del movimiento militar peruano. Nos referimos a los límites impuestos a las reformas sociales y medidas nacionalistas por sus propios promotores y a las debilidades en la movilización popular –la creación en 1971 del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) no dio los resultados esperados–, insuficiencias que no podían ser compensadas, ni con el sincero patriotismo de la oficialidad comprometida, ni tampoco con estériles alianzas con las fracciones más dinámicas de la burguesía.

Aislado de sus potenciales bases de apoyo popular por sus inconsecuencias y prejuicios de casta y clase, el régimen militar

nacionalista peruano, como otros movimientos castrenses similares, fue creando condiciones para su derrocamiento por la reacción, cediendo paulatinamente en sus programas originales de radicales transformaciones socioeconómicas. Este ciclo en Perú se completó en 1980 con la devolución del poder a Belaunde Terry, el mismo presidente derrocado por los militares peruanos doce años atrás.

TORRIJOS Y LA REIVINDICACIÓN PANAMEÑA DEL CANAL

Una evolución no muy diferente siguió el proceso militar nacionalista en Panamá. En la tierra istmeña el movimiento fue desencadenado por la política entreguista seguida por el presidente Arnulfo Arias, que ya había abandonado las veleidades reformistas de sus mandatos anteriores, sobre todo entre 1940 y 1941, y se mostraba cada vez más comprometido con la oligarquía y Estados Unidos.

Su proyecto de restringir el creciente poderío de la Guardia Nacional precipitó el golpe de Estado que puso fin a su efímero último gobierno, que solo duró los diez primeros días de octubre de 1968. Poco después, el 16 de diciembre de 1969, fracasó el contragolpe urdido por sus partidarios contra el triunvirato militar que lo sustituyó en el poder y emergió como figura indiscutida del escenario político panameño el carismático general Omar Torrijos Herrera, quien tomó en sus manos la vieja aspiración panameña sobre la soberanía del canal.

Estos acontecimientos expresaban, como muy pronto se comprobaría, que la Guardia Nacional comenzaba a abandonar su función tradicional de brazo armado de la oligarquía y Estados Unidos, aleccionada por los dramáticos acontecimientos de la violenta represión contra las manifestaciones populares antinorteamericanas de 1964. Prueba de ello fue la suspensión de los viejos partidos, la creación de nuevas instituciones, la promoción de un fuerte sector estatal productivo, el rescate de recursos naturales y la adopción de ciertas leyes sociales, algunas de las cuales fueron recogidas en la novedosa constitución torrijista de 1972.

Sin duda lo más trascendente fue la tesonera campaña diplomática dirigida a la recuperación de la soberanía panameña sobre

la zona del canal, que fue llevada por el gobierno de Torrijos a los principales foros internacionales, consiguiendo respaldo de los países latinoamericanos, el Movimiento de los No Alineados –Panamá envió una representación al foro de Argel en septiembre de 1973–, e incluso de las Naciones Unidas, que llegó a celebrar en la capital istmeña una reunión de su Consejo de Seguridad. En particular ante este cónclave, en marzo de 1973, el propio Torrijos fijó claramente la posición de su país cuando declaró «que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, estado asociado, colonia o protectorado, ni agregaremos una estrella más a la bandera de los Estados Unidos».³

El éxito de esta persistente lucha nacional se consiguió con la firma en septiembre de 1977 del Tratado Torrijos-Carter, que anuló el anterior e incluyó todo un plan para la entrega a la soberanía panameña, por etapas hasta el año 2000, de la zona del canal y de las bases militares norteamericanas. No obstante, el Senado de Estados Unidos, incumpliendo lo pactado en las negociaciones, introdujo enmiendas al acuerdo que le otorgaban el derecho de intervención, «en defensa del canal», más allá de esa fecha.

Este proceso cohesionó a los panameños y se conjugó con un programa de Torrijos para conseguir un orden social más equitativo, que incluía reforma agraria, mejoras en la educación, la explotación del cobre con criterio nacionalista y la búsqueda de mejores precios para el banano controlado por la United Fruit Company, ahora denominada United Brands. Con esa finalidad, Panamá impulsó la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB). Para completar este sintético balance del torrijismo, debe mencionarse el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, en agosto de 1974, y su apoyo al Frente Sandinista en su lucha contra la dictadura de Somoza.

Pero el 31 de julio de 1981 el general Torrijos falleció en un sospechoso accidente de aviación. A partir de entonces, una política poco coherente y con frecuencia errática, seguida por los militares que le siguieron al frente del proceso, en particular por el general Manuel Antonio Noriega, acusado por Estados Unidos de

³ *Bohemia*, La Habana, 23 de noviembre de 1973, p. 69.

narcotraficante, crearon las condiciones para la trágica intervención norteamericana de 1989 que liquidó los últimos vestigios del nacionalismo militar torrijista.

EL PARÉNTESIS NACIONALISTA DE JUAN JOSÉ TORRES EN BOLIVIA

Uno de los resultados de la presencia de la guerrilla del Che en Bolivia fue que sirvió de catalizador del desarrollo ideológico de algunos militares honestos de las Fuerzas Armadas. La principal figura de este reducido grupo de oficiales concientizados fue el general Juan José Torres, quien se convirtió en el eje fundamental a favor de la elaboración de un movimiento nacionalista, iniciando algunas transformaciones de la estructura socio-económica del país.

Después de la muerte del dictador, general René Barrientos en un accidente aéreo, el día 27 de abril de 1969, quedó al frente del país el anodino vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, jefe del minúsculo Partido Social Demócrata, compuesto por unos cuantos abogados de las compañías extranjeras. No obstante, las contradicciones entre el jefe civil del gobierno y el jefe militar, Alfredo Ovando, abrieron un período de relativa distensión represiva, que permitió a las organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas, irse recuperando lentamente.

Pero ello no significó el fin de la persecución contra los grupos revolucionarios. El 9 de septiembre fue sorprendido, por ejemplo, en su refugio de la clandestinidad, Inti Peredo, jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde la caída del Che. Su heroica muerte constituyó una pérdida irreparable para el movimiento revolucionario en Bolivia.

El 26 de septiembre de 1969, un golpe de los mandos militares llevó al Palacio Quemado al verdadero hombre fuerte desde la muerte de Barrientos: el general Alfredo Ovando. Lo más significativo en estos momentos era la aparición de una nueva tendencia nacionalista en el seno de las fuerzas armadas, opuesta al dominio de los militares reaccionarios que se habían destacado como incondicionales

instrumentos del imperialismo en la persecución de la guerrilla y el asesinato del Che.

Encabezado por el jefe de estado mayor, general Juan José Torres, el grupo de oficiales nacionalistas –influido sin duda por los acontecimientos que protagonizaban el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de Perú encabezado por el general Juan Velasco Alvarado–, logró que Ovando firmara el titulado *Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación*, donde se confundían los postulados nacionalistas con viejos clichés anticomunistas. A la hora de formar su gabinete, Ovando llamó a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a Alberto Bailey, destacados políticos nacionalistas.

El ambicioso sucesor de Barrientos dio un paso más para convencer a la opinión pública de la honestidad de sus «patrióticas» intenciones dirigidas a defender los recursos naturales del país. El 16 de octubre de 1969 derogó el *Código Davenport*, nacionalizó la Gulf Oil Corporation, que desde hacía tres años se había atribuido también la propiedad de los yacimientos de gas del oriente boliviano, más importantes que los de petróleo.

El general Juan José Torres fue encargado de ocupar militarmente las instalaciones de la empresa imperialista, y se organizó una concentración en la Plaza Murillo a fin de celebrar la medida. Ante la multitud allí congregada hablaron, por primera vez después de muchos años, los dirigentes obreros y universitarios –el régimen había abolido tiempo antes la odiosa «ley de seguridad del estado». Días más tarde, Ovando dictó un tímido control sobre las divisas.

La oposición de Estados Unidos no se hizo esperar. Enterados de la verdadera situación dentro del gobierno, los norteamericanos presionaron para que se expurgara el gabinete de elementos nacionalistas. En lo económico, el Banco Minero, controlado ahora por la Casa Morgan, se negó a colaborar con los planes gubernamentales, al tiempo que los norteamericanos estorbaban la colocación en el exterior del petróleo crudo nacionalizado. No hizo falta mucho más: Ovando se decidió enseguida a rectificar, en un nuevo giro oportunista, sus velocidades nacionalistas.

A partir de marzo de 1970, luego de la visita a La Paz de Charles A. Meyer, secretario auxiliar del Departamento de Estado

norteamericano se puso en evidencia el nuevo viraje político de Ovando: el general Torres fue apartado de la jefatura del ejército; Quiroga y Bailey, ministros de Minas y Petrolero, y de Información, respectivamente, tuvieron que renunciar, y la Gulf Oil recibió una invitación para entablar negociaciones. Los grupos clandestinos de derecha desataron, por su parte, una ola de atentados contra los sectores de izquierda.

En el campo revolucionario estos acontecimientos aceleraron la reaparición de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, comandadas ahora por Osvaldo, *Chato*, Peredo. Pero la inexperta guerrilla de Teoponte no había recogido las enseñanzas fundamentales de este tipo de lucha y fue destruida por las fuerzas gubernamentales en el breve plazo de dos meses. Los sobrevivientes, entre los que se encontraba el propio Chato Peredo, pudieron regresar a las ciudades gracias a la ayuda de los mineros.

El 4 de octubre de 1970, el general Rogelio Miranda, respaldado por el régimen derechista argentino, intentó deponer al contradictorio gobierno de Ovando. Este golpe militar fue apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB), partidos que nada tenían que ver ya ni con la revolución y mucho menos con el socialismo. Ambas agrupaciones habían llegado a coincidir en el forzado exilio político a que los había condenado el nuevo militarismo boliviano y eran rechazados por todos los sectores y grupos progresistas del país. La COB convocó de inmediato a una huelga general y se constituyeron algunos comités revolucionarios.

Al día siguiente, Ovando y Miranda se pusieron al habla para buscar una salida a la crisis, dejando finalmente el problema en manos de los oficiales de La Paz. Los militares capitalinos constituyeron un Triunvirato, integrado por los generales Efraín Guachalla, Fernando Satori y el contralmirante Alberto Albarracín. Pero la solución final correspondió a lo imprevisto.

Desde la base aérea de El Alto, el general Juan José Torres anunció su disposición de impedir la consumación de la intentona fascista, lanzando los aviones contra los refugios de los conspiradores. A continuación, solicitó el apoyo de los sindicatos obreros y de

las organizaciones progresistas. A su llamado respondió también el regimiento colorado de Bolivia, al mando del mayor Rubén Sánchez.

En tanto, la COB realizaba una huelga general indefinida bajo la orientación de Juan Lechín; estudiantes, campesinos y obreros, ocupaban las principales instituciones del país. Cuando los mineros amenazaron con marchar sobre La Paz, Oruro y Potosí, los asustados militares entregaron todo el poder a Torres. Era el 7 de octubre de 1970.

La audacia demostrada por el nuevo presidente nacionalista de Bolivia no le llevó tan lejos como para aprobar el programa de 21 puntos que le presentaron los trabajadores. Tampoco incluyó en su gabinete a representantes del Comando Político de la Clase Trabajadora, que todavía soñaba con un restablecimiento del extinto sistema de «cogobierno», vigente entre 1952 y 1956.

Por su lado, Torres dictó una serie de medidas progresistas y reformas económicas y sociales. A fines de 1970 restableció los salarios obreros según los niveles de mayo de 1965; revirtió al Estado las concesiones petrolíferas de la Bolivia Atlantic Corporation norteamericana, única empresa extranjera que continuaba operando en el sector de los hidrocarburos, y arrebató a la firma Grace el control de la comercialización del azúcar, entregado a una empresa estatal.

Además, en diciembre de ese año pudieron salir del país el periodista francés Régis Debray y cinco guerrilleros, presos desde 1967. Después, Torres nacionalizó las escandalosas concesiones de la International Mining Processing y, el 30 de abril de 1971, recuperó los yacimientos de la Phillips Brothers. Por último, expuso a los llamados «Cuerpos de Paz», que encubría a agentes de espionaje norteamericanos, y dispuso la participación obrera en la dirección de YPFB.

En agosto de 1971, como resultado de su sexto congreso, emergió a la cabeza de la confederación campesina una nueva generación de líderes sindicales que serían conocidos como kataristas –pues esgrimían como símbolo la figura del legendario Túpac Katari–, guiados por el aymara Genaro Flores. Los kataristas rechazarían la vieja alianza con los militares forjada por Barrientos y elaborarían un discurso de revaloración de los valores de los pueblos originarios.

En general, el gobierno de Torres pretendía dirigir, mediante la aplicación de la denominada Estrategia Nacional para el Desarrollo, la inversión de los capitales privados nacionales y vigorizar la participación de Bolivia en el Pacto Andino. Lo que más alarmaba a las clases privilegiadas, dentro del despliegue nacionalista del régimen, eran las sesiones del congreso obrero, al cual Torres no impedía sesionar públicamente en el antiguo parlamento de La Paz. Esta asamblea antimperialista, inaugurada el 22 de junio de 1971, creaba la impresión de que en el país funcionaba un doble poder.

La conspiración que liquidó el gobierno nacionalista de Torres, el 21 de agosto de 1971, fue preparada con la ayuda del embajador norteamericano en La Paz, y conocido agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), Ernest Siracusa. En ella desempeñaron un destacado papel los círculos oligárquicos de Santa Cruz, políticamente representados por la Falange Socialista Boliviana, y algunos viejos jefes del MNR, incluido Paz Estenssoro. Los principales dirigentes del movimiento sedicioso eran, al principio, Hugo Banzer –quien ya había intentado infructuosamente derrocar a Torres una vez–, Andrés Selich y Mario Gutiérrez –eliminados más tarde–, todos vinculados a la reacción cruceña.

Si en lo inmediato, los complotados buscaban impedir la apertura del segundo período de sesiones de la Asamblea Popular –convocada para el 7 de septiembre de 1971–, a largo plazo se proponían vincular más estrechamente los intereses de la burguesía boliviana al capital extranjero, cancelando de paso cualquier posibilidad de un triunfo revolucionario. Esta evolución de los acontecimientos acercó a Bolivia a los promotores del eje fascista que, partiendo de Brasilia, pretendió reunir en un solo haz reaccionario a los dos países más débiles de la región –Uruguay y Paraguay– con el Chile de Augusto Pinochet, surgido tras el golpe de Estado que había derrocado al gobierno popular en Chile.

SALVADOR ALLENDE Y LA UNIDAD POPULAR EN CHILE

Sin duda lo más sobresaliente del ascenso revolucionario y nacionalista que se abrió en América Latina a finales de la década del

sesenta, con la llegada al poder de los gobiernos militares nacionalistas como los de Perú y Panamá, fue el triunfo de la Unidad Popular en Chile. Esta poderosa coalición de izquierda había sido organizada en 1969 por los partidos Comunista y Socialista con el concurso del Partido Radical y otros sectores menores como la Izquierda Cristiana (IC) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), estos dos últimos, desprendimientos de la Democracia Cristiana (DC).

A diferencia del Frente Popular de la época de Aguirre Cerda, ahora se trataba de una amplia coalición política dirigida por la clase obrera a través de los comunistas y socialistas. Ella condujo en 1970 a Salvador Allende a la presidencia de Chile con un programa muy avanzado, que incluía una política exterior independiente y profundas transformaciones económicas y sociales de inspiración socialista.

A pesar de los intentos del llamado *Comité de los 40* –máximo órgano de seguridad nacional de Estados Unidos– y de la CIA por impedirlo, la popular figura de la izquierda unida, Salvador Allende, venció a los candidatos del Partido Nacional –surgido tras la fusión del Liberal y el Conservador– y a la Democracia Cristiana en las elecciones de octubre de 1970. El cómputo final de la votación arrojó los siguientes resultados: Salvador Allende 36.3%, Jorge Alessandri 35% y Radomiro Tomic 27.8%.

El segundo obstáculo a vencer por la Unidad Popular (UP) fue el complot de la derecha y el gobierno norteamericano –la International Telegraph and Telephone (ITT) y la CIA estaban directamente involucradas– para impedir la toma de posesión de Allende. Mientras el derechista Partido Nacional se inclinaba a las soluciones violentas, la reformista Democracia Cristiana se veía empujada a negociar por la similitud de su programa con el de Allende, su popularidad y el peligro de nuevas divisiones en su seno. La amplia movilización de masas a través de los sindicatos y los comités de Unidad Popular aseguraron la victoria, aun cuando la desesperación de la derecha provocó la muerte del general René Schneider, jefe del ejército, quien se había negado a sancionar las maniobras golpistas.

Por fin, el 4 de noviembre de 1970, el nuevo presidente de la República se instaló en La Moneda y comenzó a dar cumplimiento al programa revolucionario de las fuerzas populares. De inmediato,

Allende restableció las relaciones entre los gobiernos de Chile y Cuba. De un país sometido a la influencia imperialista, con una economía controlada por los grandes consorcios norteamericanos, la nación chilena iniciaba el rescate de su soberanía plena, de sus recursos naturales y de su futuro económico y político.

El gobierno de la Unidad Popular recorrió una primera etapa, de noviembre de 1970 a abril de 1971, caracterizada por el desconcierto de la oposición burguesa y el vigoroso avance de las primeras reformas decretadas por el gobierno. Las medidas económicas preliminares estuvieron dirigidas a disminuir el desempleo, redistribuir el ingreso y reanimar la actividad industrial.

A la par se iniciaban las transformaciones de mayor alcance: expropiación de 350 latifundios, compra de bancos, adquisición por parte del Estado de empresas monopólicas industriales (textiles, acero, cemento) y minerales (carbón, salitre). En lo político, estas conquistas se tradujeron en el espectacular éxito de la Unidad Popular en los comicios de abril de 1971, en las que obtuvo el 51% de los votos.

Sin recuperarse plenamente todavía de la derrota electoral sufrida, la derecha arreció su campaña contra el gobierno, acusándolo de sobrepasar la legalidad. Utilizando todos los medios de comunicación a su disposición –70% de la prensa escrita y 105 de las 115 emisoras de radio–, la gran burguesía intentó desorientar a los sectores medios y enfrentarlos al proceso.

Con el asesinato de un ex ministro de Frei el 8 de junio de 1971, la derecha logró el pretexto que buscaba para pasar a la ofensiva. Entretanto, continuaban las expropiaciones de latifundios, las requisas de las industrias que incumplían o saboteaban las disposiciones oficiales, y se lograba, con la irrecusable anuencia del Congreso, la más importante reivindicación patriótica: la nacionalización del cobre.

Entre agosto de 1971 y enero de 1972, la burguesía usó las más variadas tácticas, dentro de una creciente unidad de propósitos para debilitar, y si era posible derrocar, al gobierno de Salvador Allende. Fueron los meses de las campañas contra el «desabastecimiento» y la llamada «degradación de la democracia»; de las manifestaciones aristocráticas, cacerolas en mano, y las primeras tropelías de

las bandas fascistas denominadas Patria y Libertad, organización terrorista al servicio de la contrarrevolución y el imperialismo. Fue también el momento de la visita del comandante Fidel Castro, quien al recorrer el país pudo palpar la adhesión del pueblo chileno a la causa de la Unidad Popular.

De febrero a octubre de 1972 se produjo un paréntesis de crítica y autocrítica en las filas de la Unidad Popular, mientras los planes sediciosos se aceleraron tras las masivas concentraciones del 4 de septiembre, en las que el pueblo manifestó su respaldo al gobierno revolucionario. En este período, Allende formó un gabinete con representación sindical y militar, del que formó parte el general Carlos Prats. En los meses siguientes, de noviembre de 1972 a marzo de 1973, el acontecimiento más significativo fue el viaje del presidente Allende al exterior (México, URSS y Cuba) y su memorable discurso en la ONU donde denunció las agresiones del imperialismo a Chile y se pronunció en favor del derecho de los pueblos a recuperar y explotar sus recursos naturales.

Con la extraordinaria victoria electoral de marzo de 1973, la Unidad Popular salió fortalecida, con el 44% de la votación. Ello precipitó los planes golpistas de la burguesía. Desde el llamado tancazo del 29 de junio de ese año hasta las sucias maniobras que obligaron a la salida del general Carlos Prats del gobierno –sustituido en la jefatura del ejército por el traidor Augusto Pinochet–, todo hacía presagiar el amargo desenlace.

Este se produjo con los allanamientos, los ultrajes y asesinatos previos al golpe del 11 de septiembre de 1973, y las masacres, la xenofobia, el terrible espectáculo del Estadio Nacional, las agresiones a las misiones diplomáticas –especialmente a la cubana– que le sucedieron ese trágico día. Al suicidio del presidente Allende, tras resistir en La Moneda junto a un grupo de sus más leales compañeros, siguieron los crímenes de todos los que directa o indirectamente aparecían asociados a la Unidad Popular. Era el inicio del régimen fascista de Pinochet, que se extendería sin solución de continuidad hasta 1990.

OTROS CAMBIOS POSITIVOS DE PRINCIPIOS DE LOS SETENTA

El decisivo peso que tuvo en estos acontecimientos la clase obrera chilena y sus organizaciones –entre ellas el Partido Comunista– fue casi coincidente con el proceso mediante el cual el proletariado argentino –después de estremecedoras jornadas de lucha como las del cordobazo (mayo-junio de 1969)– asediaba al régimen militar e imponía una apertura democrática. Lo mismo puede decirse de las luchas que se desarrollaron en Bolivia y Uruguay, pues los aguerridos mineros impusieron una especie de gobierno propio en La Paz, mientras el pueblo oriental vertebraba una impresionante alianza poli clasista en la cual los trabajadores de Montevideo jugaban un papel central.

Especial significación cobró la estructuración en Uruguay, en febrero de 1971, del Frente Amplio, encabezado por el general Líber Seregni, que se vislumbró como alternativa potencial de poder aglutinando a comunistas, socialistas, democristianos y otras fuerzas. Así también las esperanzas de cambios que rodearon el regreso del peronismo al gobierno de Argentina, desde mayo de 1973, primero con Héctor J. Cámpora en la presidencia y desde octubre de ese año con el propio general Perón –obtuvo más del 60% de la votación–, frustradas con su muerte el 1 de julio de 1974.

Casi paralelamente se registraban apreciables avances de las fuerzas progresistas del Caribe, no solo al lograr su independencia Jamaica (1962), Trinidad Tobago (1962), Guyana (1966), Barbados (1966), Bahamas (1973), Granada (1974) y Surinam (1975), sino también debido al establecimiento por Forbes Burham, de la República Cooperativa de Guyana (marzo de 1970), el acceso al poder en Jamaica del líder socialdemócrata Michael Manley en 1971 –quienes intentaron rescatar sectores claves de la economía, buscando nuevos mercados y fuentes de financiamiento– y los notables adelantos de la integración económica en el área: surgimiento en 1968 de la Asociación Caribeña de Libre Comercio (CARIFTA), devenida después (1973) en Comunidad Económica del Caribe (CARICOM).

Ya para esa fecha, el gobierno de Allende, como se ha dicho, había restablecido los vínculos diplomáticos con La Habana (12 de

noviembre de 1970), ejemplo que seguirían Perú (julio de 1972), Argentina (mayo de 1973), Panamá (agosto de 1974), Venezuela (diciembre de 1974) y otros países del continente. En gran medida, gracias a los esfuerzos de estos gobiernos, la III Reunión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington (abril de 1973), aprobó el pluralismo ideológico como uno de los principios de las relaciones interamericanas, lo cual significaba el reconocimiento del derecho de cada nación a guiarse por sus propias concepciones. Poco después, en julio de 1975, en la XVI Reunión de Consulta de la OEA en San José de Costa Rica, 16 países del hemisferio consiguieron una resolución referente a la normalización de las relaciones con Cuba.

Por su parte, los gobiernos de México –en lo fundamental durante el mandato de Luis Echeverría de 1970 a 1976– y Venezuela –a partir de la llegada a la presidencia en 1974 de Carlos Andrés Pérez–, asumieron posturas nacionalistas de cierta relevancia, destinadas a fortalecer la independencia económica y a limitar la actividad de las corporaciones transnacionales. Una manifestación de esta política fueron las leyes firmadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, en agosto de 1975 y enero de 1976, que establecieron el control estatal sobre el petróleo y el hierro.

También en Colombia el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) puso fin al Frente Nacional, que legalizaba el reparto del poder entre los partidos Liberal y Conservador en base a los acuerdos de Benidorm (España) en 1956. El gobierno de López Michelsen se caracterizó también por su política independiente y la creación de un clima democrático interno de lo que fue expresión el nombramiento de un rector marxista en la Universidad Nacional y el reconocimiento oficial de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), surgida en 1964.

A estas manifestaciones positivas del nacionalismo latinoamericano hay que añadir la aparición de organismos subregionales que excluían o limitaban la penetración de los capitales norteamericanos o la presencia de Estados Unidos. Ejemplos de ello fueron el Pacto Andino (1969), que aglutinó a Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Venezuela, y el Sistema Económico Latinoamericano

(SELA) (1975). Otra expresión de este fenómeno fue una mayor presencia de América Latina en los No Alineados y en las organizaciones internacionales que surgieron en este período para defender los precios de las materias primas: banano, cobre, estaño, azúcar, café y bauxita.

No obstante, el proceso integracionista centroamericano fracasó definitivamente en estos años, acelerado por la llamada Guerra del Fútbol o de las Cien Horas, entre El Salvador y Honduras, que se prolongó del 14 al 18 de julio de 1969. Este conflicto fratricida, en el que murieron cerca de dos mil personas, estaba motivado por la expulsión de Honduras de decenas de miles de trabajadores salvadoreños que ya no eran necesarios en las plantaciones bananeras de las empresas norteamericanas United Fruit y Standard Fruit Company.

Entre los factores que precipitaron el colapso de esta fase de notable avance de los cambios nacionalistas, democráticos y revolucionarios, se debe mencionar la campaña desestabilizadora e injerencista promovida por Estados Unidos contra diferentes gobiernos populares, la que reveló toda su crudeza en los trágicos sucesos de Chile. Ello vino aparejado con nuevas ampliaciones del dominio del capital norteamericano en América Latina y el notable crecimiento de la deuda externa, que pasó de menos de 3 mil millones de dólares en 1945 a casi 17 mil millones en 1968.

Además, la participación de los países latinoamericanos en el mercado mundial descendió del 8.5% que representaba en 1955 a solo el 5.3% en 1970. Ya en este último año, la brecha entre el nivel de vida de los norteamericanos y el de los habitantes del resto del planeta se había convertido en un gigantesco abismo: con solo el 6% de la población mundial, Estados Unidos ya producía y gastaba más del 70% de los bienes de consumo del mundo.

LA OLEADA FASCISTA CONTRA EL MOVIMIENTO POPULAR Y DEMOCRÁTICO

Tras el descalabro de Vietnam, Estados Unidos, enfrentado a un adverso panorama mundial y a una desfavorable correlación de

fuerzas que se inclinaba cada vez más al socialismo y los movimientos de liberación, emprendió una brutal contraofensiva que tuvo en América Latina uno de sus principales teatros. La política reaccionaria desatada desde principios de la década del setenta, bajo la administración de Richard M. Nixon, se dirigía a liquidar los focos que en el continente disentían de las posiciones norteamericanas y a intentar frenar el incesante avance de las luchas populares que trataban de impulsar proyectos de desarrollo nacionalista y en algunos casos alternativas socialistas.

Regímenes de corte fascista, o que aplicaban ciertos métodos fascistas, surgidos en su mayoría de sangrientos golpes militares, se instalaron uno tras otro en diferentes países latinoamericanos, con su secuela de presos, torturados, asesinados o desaparecidos, haciendo gala de un absoluto desprecio por los derechos humanos y las libertades democráticas. Como parte de esta nueva ola autoritaria otra vez se derogaron las constituciones democráticas, cerrados parlamentos e ilegalizados partidos, organizaciones sindicales y estudiantiles.

En algunos lugares, la disolución de las clásicas instituciones de la «democracia representativa», no solo tenían un prioritario sentido antinsurgente, sino también estaba destinada a legitimar el nuevo bloque de poder constituido por la alta oficialidad derechista, la oligarquía tradicional y los emergentes círculos burgueses asociados al capital transnacional. En estos casos se trataba, en rigor, de la implantación de la dictadura terrorista de los grandes monopolios para doblegar a los pueblos e imponer un rígido programa económico en provecho de sus intereses.

En gran medida este proceso estuvo asociado a los desastrosos efectos de la endémica depresión económica de América Latina, que llevó a muchos gobiernos a la adopción de una ortodoxa política de estabilización monetaria en consonancia con los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para contener la inflación galopante, detener el crecimiento de la deuda externa y propiciar la expansión económica, se restringieron los salarios de los trabajadores, se liquidó el reformismo agrario auspiciado por los viejos planes de la *Alianza para el Progreso*, se recortaron en forma sustancial los créditos a las pequeñas empresas y los subsidios estatales a los productos

esenciales, aumentándose las tarifas en los servicios públicos y en otras ramas de la infraestructura.

Con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos, se redujeron las importaciones y se adoptó una completa liberalización cambiaria y de devaluación de la moneda, otorgándose mayores preferencias al capital foráneo. Como resultado de estas medidas entreguistas, en muchos países latinoamericanos se aceleró el proceso de concentración de capital y monopolización de los principales sectores económicos –junto a la internacionalización creciente de la industria–, pues las pequeñas empresas no estaban capacitadas para resistir los efectos combinados de la política neoliberal y los embates de los consorcios extranjeros.

De esta forma, en varias naciones de América Latina, sin romper el compromiso de clase con la oligarquía agroexportadora, se gestaron las condiciones para continuar la expansión de la gran burguesía monopólica criolla y transnacional. De esta manera, se inició el proceso de estructuración de una modalidad dependiente del capitalismo monopolista de estado.

La oscura época caracterizada por el predominio de regímenes fascistas y dictatoriales se abrió con el traicionero golpe contrarrevolucionario que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno popular de Salvador Allende. Ante la creciente concientización del pueblo chileno, y en especial del proletariado, la burguesía monopólica y los Estados Unidos reaccionaron con todo su furor y barbarie, imponiendo en Chile un régimen fascista. En este sentido, la dictadura de Augusto Pinochet estaba emparentada con la asonada castrense de Brasil, que casi diez años antes depusiera al presidente Joao Goulart.

El gobierno militar brasileño, inaugurado en abril de 1964, liquidó el reformismo *trabalhista* y fue el comienzo de una férrea y criminal dictadura de corte fascista que aplastó cualquier conato opositor. Desde esa perspectiva, el gobierno brasileño fue la primera experiencia latinoamericana de esta clase de régimen, aunque naciera con bastante anterioridad al ascenso del fascismo en América Latina de los años setenta, pues sus rasgos característicos se habían ido perfilando con la promulgación de las actas institucionales, que eliminaron los últimos vestigios democráticos. Así, el fascismo brasileño sirvió de vehículo para estrangular las protestas obreras y las

manifestaciones estudiantiles, y para combatir la creciente actividad de las guerrillas urbanas.

LA DICTADURA MILITAR BRASILEÑA

Tras el golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart, el poder quedó en manos de los jefes de las fuerzas armadas, que promulgaron, el de 9 de abril de 1964, la primera de una serie de leyes represivas: el *Ato Institucional* No. 1. Fueron suspendidas las garantías constitucionales y otorgadas amplias atribuciones al gobierno, entre ellas la facultad de anular los mandatos en puestos electivos y la suspensión de derechos políticos. Un congreso purgado legalizó la entrega de la primera magistratura al general Humberto Castelo Branco, quien representaba a una de las dos corrientes en que se dividían los actores de la asonada militar.

Los «castelistas», entre cuyos integrantes se ubicaban altos oficiales como Golbery de Couto e Silva –teórico de la geopolítica brasileña– y los hermanos Ernesto y Orlando Geisel, procuraban una conciliación con los viejos políticos y cultivar íntimas relaciones con los Estados Unidos. La otra tendencia militar, partidaria de medidas punitivas más fuertes contra la oposición, era la llamada línea dura o «costista», dominada por el ministro general Arthur da Costa e Silva. En materia económica, ambos sectores defendían un capitalismo neoliberal, apoyado por las inversiones extranjeras, aunque reservaban cierto papel a las empresas estatales y consideraban que «desarrollo económico» era sinónimo de «seguridad nacional.»

Entre las primeras disposiciones de Castelo Branco se inscribe la ilegalización de las huelgas y el control directo del gobierno militar sobre los sindicatos y sus actividades. Además, fue ratificado el acuerdo militar con los Estados Unidos, se rompieron relaciones con Cuba y se enviaron tropas a la República Dominicana, donde los marines norteamericanos habían desembarcado para impedir el triunfo del movimiento constitucionalista (abril de 1965).

A pesar de todas las medidas restrictivas contra la actividad de los partidos, en las elecciones directas para gobernadores, efectuadas

el 3 de octubre de 1965, los candidatos gubernamentales fueron derrotados en ocho estados. El revés electoral destruyó los planes destinados a modelar una apariencia democrática y provocó un endurecimiento del régimen.

El ala de «línea dura» implantó sus criterios a través del *Ato Institucional* No. 2, del 27 de octubre de 1965, que amplió la represión. De nuevo fueron suspendidas las garantías constitucionales, se volvieron a anular mandatos, a intervenir estados y municipios y canceladas las elecciones presidenciales. La prensa fue censurada y se le otorgó al Ejecutivo la facultad de disolver la legislatura nacional y de gobernar por decretos. Por un acta complementaria se disolvieron todos los partidos y se creó un sistema bipartidista integrado por la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el partido de oposición tolerada, Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La ARENA, dirigida por Adante Cardoso, reunió en sus filas a la mayoría de los parlamentarios de los antiguos partidos de derecha. Por su parte, el MDB, que apenas obtuvo un mínimo de bancas, aglutinó a los políticos moderados de los partidos políticos disueltos, como el Trabalhista, y quedó encabezado por los ex ministros André Franco Montero –del Partido Demócrata Cristiano (PDC)– y Ulysses Guimarães. Pese a que este partido se había creado para hacerle el juego al gobierno, desde su segundo congreso en 1967 se atrevió a manifestar ciertas críticas al régimen militar.

Las medidas dictatoriales de Castelo Branco cerraron el camino a los principales políticos tradicionales que habían propiciado el golpe de 1964, quienes comenzaron entonces a hablar de «la revolución desvirtuada». La respuesta del gobierno no se hizo esperar: en vísperas de los comicios parlamentarios de fines de 1966 el Congreso Nacional fue clausurado y las estaciones de radio y televisión ocupadas por el ejército, mientras las medidas punitivas se hacían extensivas a los antiguos opositores al gobierno de Goulart. A principios de 1967, una vez que el Legislativo fue depurado de los elementos considerados indeseables, el Congreso fue reabierto y se aprobó una nueva constitución destinada a perpetuar la dictadura militar.

La carta fundamental de 1967, confeccionada por un grupo de juristas entre los cuales se encontraba Francisco Campos –el mismo autor

de la constitución del *Estado Novo*—, otorgaba amplias atribuciones al Ejecutivo y limitaba las facultades del parlamento y la autonomía de los estados. A pesar de que predominaban los artículos antidemocráticos —restringía el derecho de huelga, la libertad de los partidos, etc.— y de corte fascista, la carta magna de Castelo Branco aún conservaba el principio de la inmunidad parlamentaria, la autonomía del poder judicial, el derecho de *habeas corpus* y otras garantías constitucionales.

Para detener la inflación —cuyo índice en 1964 fue de 91%—, contener el crecimiento de la deuda externa —unos 3,500 millones de dólares— y propiciar un nuevo ciclo de expansión industrial, se restringieron los salarios a los trabajadores, se liquidó el reformismo agrario, se recortaron sustancialmente los créditos a las pequeñas empresas y los subsidios estatales a los productos esenciales y se aumentaron las tarifas en los servicios públicos. Con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos, se redujeron las importaciones y se adoptó una completa liberalización cambiaria y de devaluación periódica del *cruzeiro* (1968).

Además, se otorgó un tratamiento preferencial al capital extranjero. En agosto de 1964 se derogó la ley del 10% de repatriación de capital y se firmó después un acuerdo con los Estados Unidos para garantizar sus inversiones. Solo entre 1964 y 1966, la dictadura recibió más de 1,500 millones de dólares provenientes de la *Alianza para el Progreso*.

En la sustitución del mariscal Castelo Branco triunfó la «línea dura», que impuso a su candidato el general Costa e Silva. En líneas generales, la gestión económica de su gobierno, iniciado el 15 de marzo de 1967, estuvo basada en el aumento de las exportaciones industriales, mediante la expansión del área de producción estatal y la creciente participación del capital extranjero. En el plano interno, se afianzaron los dispositivos represivos. El endurecimiento de la dictadura tenía que ver con el auge de la lucha popular.

La eclosión del movimiento de masas había comenzado el 28 de marzo de 1968 cuando la policía asesinó a un estudiante de Rio de Janeiro, al reprimir las protestas contra la política educacional y las medidas autoritarias del gobierno. El 26 de junio la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) organizó una gigantesca manifestación,

encabezada por Vladimir Palmeira, que arrastró a las calles de la capital del estado de Guanabara a cientos de miles de personas.

En julio de ese mismo año, la situación se complicó al sumarse a las protestas estudiantiles los paros obreros. Las huelgas proletarias se intensificaron en los estados de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Minas Geraes, particularmente en los cordones industriales paulistas donde dirigía la lucha el líder sindical José Ibraim.

En los meses siguientes, las protestas también se sintieron en el Legislativo, donde el diputado Marcio Moreira Alves condenó los desmanes gubernamentales. La dictadura lo acusó de injuriar a las fuerzas armadas y solicitó al Congreso la anulación de su inmunidad parlamentaria. Para sorpresa del gobierno, la cámara rechazó por mayoría la petición y se negó a permitir un proceso judicial contra Moreira Alves.

Con el objetivo de aplastar el auge del movimiento de masas e impedir nuevos desacatos, el presidente Costa e Silva dictó, el 13 de diciembre de 1968, el *Ato Institucional* No. 5. Mediante este decreto fascista se suspendió la constitución autoritaria que el mismo régimen se había dado y el Ejecutivo asumió poderes excepcionales, incluida la facultad de confiscar bienes y suspender el *habeas corpus*. El Congreso fue cerrado y decenas de figuras de la oposición fueron privadas de sus derechos políticos y tuvieron que abandonar el país.

En medio de ese clima de terror, se hizo sentir la reacción de las organizaciones revolucionarias armadas que se venían vertebrando desde 1967. Nos referimos fundamentalmente a la Alianza de Liberación Nacional (ALN) y a Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR).

La ALN, encabezada por Carlos Marighela y Joaquin Cámara Ferreira, tenía su origen en células paulistas separadas del Partido Comunista Brasileño (PCB) por discrepancias por su colaboración con el Frente Amplio Opositor, creado en 1966 por políticos tradicionales como el expresidente Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda. La ALN coordinaría su actividad con el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8), surgido a partir de disidencias juveniles del propio PCB en Sao Paulo y Guanabara, encabezadas por José Dirceu y Vladimir Palmeira.

También de las bases del PCB brotó el Partido Comunista Brasileño Revolucionario (PCBR), liderado por Mario Alves y Jacob

Gorender. Por su parte, la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) –a la que se incorporó espectacularmente el capitán Carlos Lamarca– era el producto de la integración de grupos disidentes de Política Obrera (POLOP) con antiguos miembros del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) fundado por ex gobernador Leonel Brizola en 1966 y que un año después fracasara en sus planes para establecer una guerrilla rural. El MNR se disolvió debido a la inconformidad de su militancia con la línea de Brizola, exiliado en el Uruguay junto a su cuñado Joao Goulart, mientras algunos de sus miembros generaban el Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7).

El ritmo de las acciones armadas, fundamentalmente realizadas por la ALN y la VPR, se intensificó en 1969. En esas circunstancias murió de una trombosis cerebral el presidente Costa e Silva y el alto mando militar asumió el poder, desconoció los derechos de sucesión del vicepresidente y adoptó nuevas medidas represivas, entre ellas la legalización de la pena de muerte.

La búsqueda de su sucesor se convirtió en un problema de «seguridad nacional», que causó choques, debates y enfrentamientos entre los militares. En definitiva, el vencedor en esta puja subterránea por el poder fue el general Emilio Garrastazu Médici, gracias a una componenda entre «castelistas» y «costistas», lo que le permitió ocupar la primera magistratura el 30 de octubre de 1969. Su elección fue confirmada por un congreso dócil –al frente figuraba el ex jefe de policía del *Estado Novo* Filinto Muller–, que con ese fin fue reabierto después de ser expulsados 6 senadores y 88 diputados.

En ese ínterin, se produjo la acción guerrillera más resonante de la época: el secuestro por comandos del MR-8 y la ALN, el 4 de septiembre de 1969, del embajador norteamericano Charles Burque Elbrick. La captura del representante de los Estados Unidos puso en crisis la dictadura y la obligó a acceder a todas las exigencias de los revolucionarios, entre ellas la liberación de varios importantes presos políticos y la lectura por los medios de comunicación de un manifiesto.

Pero el éxito de la acción se vio empañado con la muerte, el 4 de noviembre, en un enfrentamiento armado callejero, del veterano

dirigente de la ALN, Carlos Marighela. A pesar del duro revés, durante 1970 los guerrilleros urbanos llevaron a cabo otras importantes acciones armadas, como fueron los secuestros del cónsul japonés y de los embajadores de Alemania y Suiza.

Para combatir a las guerrillas urbanas, la dictadura militar formó una comisión nacional de seguridad, a la cual se le adscribió un poderoso aparato punitivo compuesto por todos los órganos represivos y los sanguinarios grupos paramilitares como el Escuadrón de la Muerte de Sergio Fleury. La campaña de aniquilamiento contra las organizaciones revolucionarias, unido a las dificultades para vertebrar un amplio apoyo de masas, terminó por hacerlas caer en manos de los cuerpos represivos.

El sucesor de Marighela al frente de la ALN, Cámara Ferreira, fue capturado y asesinado el 24 de octubre de 1970. Igual suerte corrieron a fines de ese año el comandante de las VPR, Eduardo Leite (Bucurí), y el líder del Movimiento Revolucionario Tiradentes, Devanir José de Carvalho. El 18 de septiembre de 1971, cayó en combate el ex capitán Carlos Lamarca.

La represión fascista, cuyo clímax se alcanzó entre 1969 y 1973, se combinó con una reaccionaria política exterior. Las posiciones internacionales de la dictadura militar se orientaron a fortalecer y propagar la contrarrevolución, especialmente en África y América Latina, como se puso al descubierto con el respaldo brindado por Garrastazu Médici al gobierno racista de Pretoria y los regímenes reaccionarios de Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por otro lado, la ambición de convertir a Brasil en una gran potencia atómica, condujo a la dictadura a elaborar un ambicioso plan para negociar sus abundantes reservas de uranio con Israel y la República Federal Alemana.

En las condiciones creadas por la represión fascista se produjo un acentuado crecimiento económico, denominado por sus apolo-gistas el «milagro brasileño». La economía volvió a reanimarse y se registraron altas tasas de crecimiento industrial y agrícola. El punto de partida de esa expansión fue la política del ministro Delfín Netto.

Así, se establecieron créditos flexibles y fue adoptado un sistema de regulación que permitía que los salarios se incrementaran en

menor proporción que los precios, lo que se tradujo en estímulos al mercado interno sin causar gran inflación (16% en 1973). Además, se elevaron los impuestos indirectos, junto a una redistribución de rentas en provecho de los empresarios privados y estatales. Las crecientes utilidades de las inversiones, unido a los abundantes créditos gubernamentales, atraieron al capital extranjero, y aumentaron la producción.

La gran afluencia de empresarios e inversiones foráneas –se elevaron de 2 mil millones de dólares (1963-1966) a 17 mil millones de dólares (1967-1973)– tuvo lugar en una coyuntura internacional favorable a las exportaciones. El vertiginoso ascenso de la producción fabril tuvo por eje a la industria de artículos de lujo y de bienes de consumo duradero. Entre 1968 y 1973 la industria duplicó su producción, especialmente en la electro-energética, metalúrgica, construcciones mecánicas, química y cemento. Ya en 1971 a la industria de Brasil correspondía el 28% de toda la producción fabril de América Latina.

En ese período, los índices del Producto Interno Bruto (PIB) llegaron al 10% anual. En el mismo lapso, la agricultura creció a un ritmo del 5.4% y la industria al 15%. El volumen del comercio exterior se triplicó, mientras las reservas monetarias alcanzaron los 6,400 millones de dólares.

Particular incremento registró la exportación de manufacturas, pues en 1964 apenas proporcionaba a la economía nacional unos 100 millones de dólares (7% del total) y ya en 1972 suministraba mil millones de dólares (25%). No obstante, el sector agropecuario siguió siendo determinante en la obtención de divisas, aun cuando el aporte del café cayó de un 50% en 1960 a un 12% en 1973.

También se incrementó la participación estatal en la economía, así como su asociación con compañías foráneas. Petrobras, Electrobbras, Siderbras, Telebras y otras pasaron a actuar como empresas típicamente capitalistas: obtuvieron grandes ganancias y contribuyeron a dinamizar la industria pesada y otras ramas básicas. El gobierno pasó a controlar el 38% de la banca, el 84% de los medios de transporte y las comunicaciones, el 65% de la siderurgia y el 54% petróleo y la minería. De las 582 empresas estatales que operaban a

principios de la década del setenta, casi la mitad se habían fundado después de 1964. Muy vinculado a la ampliación del área estatal de la economía estuvo el aumento de las inversiones gubernamentales en grandes obras de infraestructura.

Una faceta novedosa de la economía brasileña a partir de la década del setenta fue su tendencia a volcarse al exterior en busca de mercados, fuentes de materias primas y combustible. La presencia del capital y las mercancías de Brasil aumentó notablemente en algunos países limítrofes y en varias zonas de África. Además, el gobierno de Brasil firmó acuerdos económicos con diferentes naciones, entre ellas con Paraguay (1974), que permitieron la construcción de la gigantesca represa de Itaipú.

Sin embargo, estos cambios se hicieron a costa de excluir a las grandes masas de los beneficios de la acumulación y del progreso técnico, lo que se reflejó en el crecimiento de la población hambreada en el empobrecido *sertao* o en las sórdidas *favelas*. En un país que a principios de los setenta sobrepasaba los 110 millones de habitantes, más del 40% de su población vivía en condiciones de miseria y subalimentación.

En las ciudades, donde residían la mitad de los habitantes, ya había en esta época más de 10 millones de niños desamparados, mientras solo en Rio de Janeiro se estimaba un millón de personas marginadas en las villas miserias. El 20% de la población activa –unos 34 millones– estaba subempleada o sencillamente sin trabajo. Las condiciones de salubridad y educación eran de las peores del continente, pues Brasil pasó a ocupar, por el alto índice de mortalidad infantil, el nada honroso tercer puesto en América Latina, solo detrás de Haití y Bolivia.

La modernización de la agricultura –iniciada con el Estatuto de la Tierra de Castelo Branco– no acabó con los latifundios improductivos, aunque propició la aparición de grandes empresas agrícolas capitalistas. Los más perjudicados fueron los colonos, agregados, aparceros y arrendatarios, desalojados indiscriminadamente de sus valorizadas tierras y obligados a emigrar a las ciudades. Peor fue para los pueblos originarios, víctimas de sistemáticas campañas de exterminio promovidas por la voracidad de los latifundistas.

Con esos métodos, la agricultura de autoconsumo, e incluso ciertas áreas cafetaleras fueron desapareciendo, sustituidas por la ganadería, la soya o el trigo. Por su parte, la situación de los obreros agrícolas se volvió catastrófica: según el censo de 1970 el porcentaje de trabajadores rurales que recibió un salario inferior al mínimo legal oscilaba entre el 70% y el 95%. De esta manera, el «milagro brasileño» exhibido por la dictadura militar como un logro, no solo arrojó como balance un descomunal aumento de la deuda externa –13 mil millones de dólares en 1973– y el inicio de la desnacionalización de la industria, sino también un mayor abismo entre ricos y pobres.

OTROS REGÍMENES MILITARES DE DERECHA: LA *OPERACIÓN CONDOR*

El régimen militar fascista de Brasil fue el modelo que inspiró el sangriento golpe militar de Hugo Banzer en Bolivia, el 21 de agosto de 1971, que puso fin al gobierno nacionalista de Juan José Torres y cercenó las acaloradas sesiones del parlamento obrero que funcionaba en La Paz –verdadero «poder dual»–; así como la asonada contrarrevolucionaria de junio de 1973 en Uruguay, desatada cuando el presidente Juan María Bordaberry, en contubernio con los militares fascistas, dio un autogolpe de Estado, disolvió el Congreso y suspendió toda actividad política.

En sentido estricto, el golpe uruguayo no solo perseguía exterminar la lucha armada en las ciudades donde operaban los intrépidos tupamaros, organizados por Raúl Sendic. También pretendía anticiparse a un posible triunfo electoral del izquierdista Frente Amplio y su programa de cambios, que incluía una reforma agraria, la nacionalización de la banca y los principales sectores del comercio exterior.

El derrocamiento en marzo de 1976 del desprestigiado gobierno peronista de María Estela Martínez, y de su virtual «primer ministro», José López Rega, por los militares derechistas argentinos, aceleró el retroceso democrático que se vivía en este país sudamericano desde la muerte de su esposo el general Perón. El golpe en la Argentina marcó el principio de una tenebrosa dictadura terrorista, cuyo diagnóstico

resultó equivocado para algunas fuerzas de izquierda, internas, en particular el Partido Comunista, y externas, la Unión Soviética.

La dictadura militar argentina, encabezada hasta 1981 por el siniestro general Jorge Rafael Videla, se propuso ajustar cuentas al movimiento obrero y popular y al ala radical del peronismo, con la excusa de extirpar la subversión. Esto completó el dramático proceso de fascitización que tenía su centro neurálgico en el cono sur del continente. Con ello se creaban las condiciones indispensables a los monopolios transnacionales para un reordenamiento despiadado de las economías latinoamericanas en función de los requerimientos del sistema capitalista.

En forma paralela se vertebró una vasta operación represiva de carácter continental, articulada por los regímenes fascistas de la América del Sur y la CIA norteamericana, la llamada *Operación Cóndor*, dirigida al asesinato de más de 120 prominentes dirigentes populares y nacionalistas latinoamericanos. Entre las víctimas de esta tenebrosa conspiración internacional estuvieron Orlando Letelier, ex canciller chileno de la Unidad Popular, el ex presidente boliviano Juan José Torres, el político uruguayo Zelmar Michelini y el general chileno Carlos Prats, fiel aliado del derrocado gobierno de Allende en Chile.

A esta lista habría que agregar el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, por un individuo estrechamente vinculado a la *Operación Cóndor*, el mayor Roberto D'Aubisson. En medio de este clima terrorista sin precedentes se produjo también la voladura, el 6 de octubre de 1976, de un avión civil de la Compañía Cubana de Aviación, con decenas de personas a bordo, por un grupo contrarrevolucionario de Miami, vinculado a esta tenebrosa red terrorista continental.

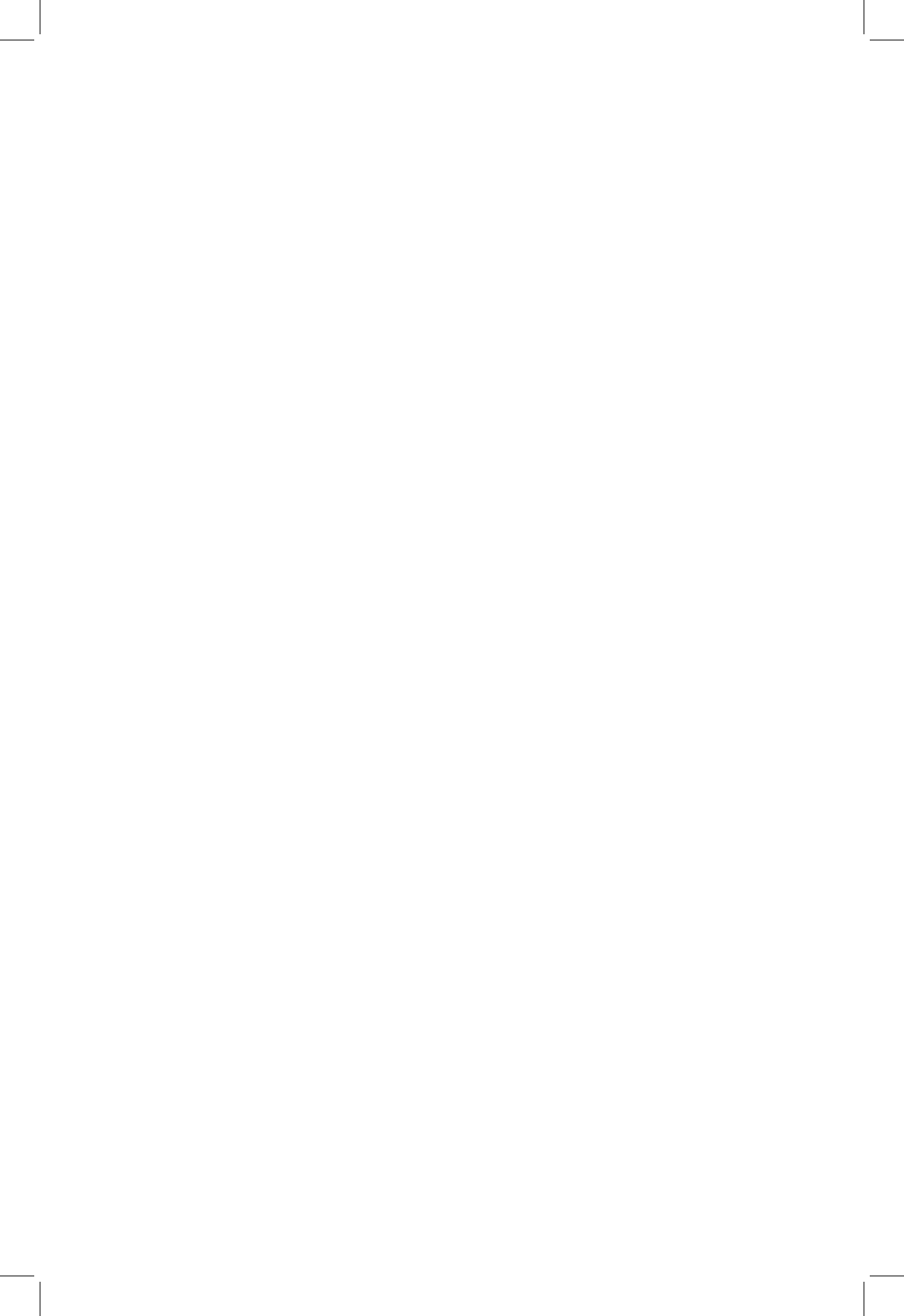
Como ya había ocurrido en Brasil, el camino recorrido por las dictaduras fascistas latinoamericanas para la reorganización estructural de la economía pasaba por imponer un vertiginoso descenso del nivel de vida de los trabajadores y una mayor entrega del país al capital foráneo. No obstante la similitud de sus objetivos, la política económica específica de cada uno de estos regímenes tuvo sus propias peculiaridades.

La dictadura militar brasileña, como se ha visto, reservó un papel importante al Estado en la esfera productiva y se proyectó un colosal crecimiento industrial, mientras en Chile y Uruguay tenían por fundamento las concepciones monetarias de la llamada escuela de Chicago. Por su parte, en Argentina se desarrolló una errática amalgama mediante la combinación de métodos de conducción económica monetarista, liberales y estatistas.

A diferencia de Brasil, donde se logró un crecimiento económico tan significativo como desigual y se preservó el área estatal, en los otros países se pretendió convertir al sector privado en el pivote del desarrollo económico. Para conseguirlo, aspiraban a que el mercado ejerciera automáticamente una función reguladora y estimulante sobre la economía, anticipando las disposiciones neoliberales que se pondrían de moda después.

Los gobiernos militares de derecha instalados en el poder en América Latina en los años setenta, estuvieron acompañados de la «modernización» al estilo fascista de antiguas tiranías como la de Stroessner en Paraguay, los Duvalier en Haití, los Somoza en Nicaragua y la de los altos oficiales genocidas guatemaltecos –Carlos Arana Osorio, Kjell Laujerud, Lucas Romero y Efraín Ríos Montt– y salvadoreños. Con la abierta complicidad de Estados Unidos, estos regímenes desataron una desembozada represión antipopular, fundamentada en el absoluto respaldo de sus fuerzas armadas y grupos paramilitares anticomunistas.

De esta forma, el panorama continental se ensombreció con la multiplicación de dictaduras fascistas y gobiernos reaccionarios –como los de Erik Gairy en Granada y Edward Seaga en Jamaica, quien en 1978 rompió incluso sus relaciones con Cuba–, prueba de como el *diktat* norteamericano se había vuelto a imponer plenamente. El triunfo momentáneo de la contrarrevolución fue un hecho consumado en casi todo el hemisferio, pero no duraría mucho tiempo.



CAPÍTULO 13

LA REVOLUCIÓN SANDINISTA Y EL OCASO DE LAS DICTADURAS

La dramática situación económica y social de América Latina, junto con el recrudecimiento de la represión y el ascenso de gobiernos fascistas y dictaduras militares, impulsó a fines de los setenta y principios de los ochenta nuevos brotes de lucha armada promovidos por organizaciones político-militares que se proponían alterar el injusto orden existente. En estas condiciones, y después de las derrotas sufridas en la primera mitad de los setenta por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, la Acción Liberadora Nacional en Brasil y los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina, por solo citar las más conocidas, aparecieron nuevas organizaciones político-militares.

Entres estas pueden mencionarse el Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombia (1973), el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) (1983) y Sendero Luminoso en Perú (1980), el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en Bolivia, Alfaro Vive Carajo (AVC) en Ecuador y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile (1984). Otras agrupaciones revolucionarias ya existentes se remodelaron o reorganizaron, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), surgiendo incluso agrupaciones unitarias de fuerzas guerrilleras como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. De todas ellas, la única que logró alcanzar el poder por la vía armada fue el Frente Sandinista.

LA REVOLUCIÓN NICARAGÜENSE

Después de la muerte de Anastasio Somoza García, la familia del dictador fundador siguió ampliando su dominio del país. Los hijos de Somoza extendieron los tentáculos del clan a las extracciones mineras –en sociedad con empresas de Estados Unidos– y a las exportaciones de carne. A principios de los años setenta, los Somoza eran uno de los tres grupos financieros más poderosos de Nicaragua, controlando ramas como cemento, textiles, láctea, líneas marítimas y aéreas, puertos, tabaco, mataderos, pesquerías, seguros, construcciones, y otras industrias y construcciones

Para combatir la dinastía somocista se había constituido en julio de 1961, bajo el influjo de la revolución cubana, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por los jóvenes Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge y el veterano coronel del ejército de Sandino, Santos López. Los primeros grupos guerrilleros sandinistas se organizaron en Río Coco y Boca, aunque tras sus primeros reveses las siguientes acciones armadas tuvieron lugar en Pancasán, en mayo de 1967.

Pero el 27 de agosto de ese año, el ejército liquidó la columna completa del FSLN comandada por Silvio Mayorga, y desde entonces la organización perdió fuerza, hasta que la coyuntura nacional cambió tras el devastador terremoto que sacudió Managua en 1972. La catástrofe natural fue utilizada por el dictador Anastasio Somoza Debayle para apoderarse de la ayuda que se recibía del extranjero y monopolizar importantes áreas de la economía, lo que trajo aparejado que desde entonces su régimen fuera perdiendo apoyo de la burguesía nicaragüense y de la Iglesia, así como de algunos sectores y grupos de poder en Estados Unidos.

Al agravamiento de las condiciones de vida de una parte apreciable de la población nicaragüense, que se profundizó en la segunda mitad de la década del setenta, se sumó el creciente descontento de sectores de la propia burguesía ante la insaciable voracidad económica de la familia Somoza. El ascenso de la oposición burguesa a la dictadura, combinado con el deterioro del nivel de vida de amplios sectores populares, creó las condiciones para el avance de la lucha

armada contra el régimen somocista. La propia brutalidad de la represión gubernamental, que afectó incluso a la propia clase dominante, terminaría por conducir a una situación revolucionaria y a la crisis definitiva del somocismo.

En este nuevo contexto, los primeros enfrentamientos de la burguesía nicaragüense con el régimen somocista se dieron en marzo de 1974, cuando tuvo lugar la Primera Gran Convención de la Empresa Privada de Nicaragua. En el foro, aparecieron síntomas del resquebrajamiento de la relación entre los empresarios y el somocismo, pues se hicieron reclamos sobre el uso ilegal de los recursos públicos por parte del gobierno. Además, para aumentar el descontento, Anastasio Somoza Debayle había sido elegido como presidente de la república para un período sin precedentes de siete años.

Ya en diciembre de 1974 se creó la Unión Democrática para la Liberación (UDEL), encabezada por el empresario y periodista opositor, Pedro Joaquín Chamorro, donde se agruparon partidos y asociaciones nacionales de cierta envergadura. Dos semanas después de la creación de la UDEL, el Frente Sandinista resurgió con gran vitalidad mediante dos resonantes acciones armadas.

La primera fue la ocupación de la residencia del jerarca somocista José María, *Chema*, Castillo, el 27 diciembre de 1974, donde se celebraba una fiesta en la que participaban relevantes figuras y familiares de régimen de Somoza. El exitoso secuestro permitió la liberación de más de una docena de dirigentes del FSLN que estaban encarcelados. A continuación, en enero del año siguiente, los sandinistas realizaron la más exitosa operación militar realizada hasta entonces cuando la guerrilla encabezada por Carlos Agüero atacó el cuartel de Waslala, lo que marcó el reinicio de la lucha armada en las zonas rurales del país.

A estas atrevidas acciones revolucionarias, la dictadura respondió implantando el estado de sitio, la ley marcial y la censura de prensa, medidas represivas que estuvieron vigentes hasta septiembre de 1977. De esta forma, se abrió un período coloreado por una sangrienta represión, que dejó un saldo de varios miles de muertos entre obreros, estudiantes y particularmente en la indefensa población campesina. Otro efecto de la represión fue la paralización por el momento de la actividad opositora de la burguesía no somocista.

El propio FSLN recibió fuertes golpes de la brutal reacción gubernamental. Como resultado de acciones militares o asesinatos cometidos por los órganos represivos de la dictadura, los sandinistas perdieron entonces a la mayoría de sus fundadores, entre ellos el propio Fonseca, su comandante en jefe, muerto en combate en las montañas de Zínica el 7 de noviembre de 1976. A esa altura, el FSLN ya se había dividido en tres tendencias.

Una era conocida como la Guerra Popular Prolongada (GPP), que sostenía a toda costa la lucha armada y mantenía a sus principales dirigentes dentro del país: Ricardo Morales Avilés y Oscar Turcios, asesinados en 1973, y luego Henry Ruiz y Tomás Borge. La llamada Tendencia Insurreccional (TI), o tercerista, encabezada por los hermanos Humberto y Daniel Ortega, así como por Víctor Tirado, sería la más activa desde el punto de vista militar en los momentos finales de la dictadura y era, según su programa, la más moderada en términos político-sociales. Por último, estaba la llamada Tendencia Proletaria, liderada por Jaime Wheelock, Luis Carrión y Carlos Núñez.

La represión somocista y el creciente descontento de la población allanaron el camino para la frágil alianza del sector privado y la oposición tradicional con el Frente Sandinista, tal como se puso de relieve con la creación, en octubre de 1977, del llamado Grupo de los Doce, integrado por destacadas personalidades intelectuales, profesionales y empresariales de Nicaragua. Desde ese instante, la revolución nicaragüense en ciernes adquirió un carácter pluralista y obtuvo un amplio respaldo popular, que incluía prácticamente todo el espectro político y social del país.

Este reagrupamiento de fuerzas opositoras coincidió con el asesinato, por orden del dictador, el 10 de enero de 1978, del conocido periodista opositor y dirigente de la UDEL Pedro Joaquín Chamorro, quien se había convertido en una amenaza para el régimen –eran frecuentes sus denuncias en su diario *La Prensa*– y en verdadera alternativa de poder. El cobarde asesinato fue la chispa que incendió la pradera, pues abrió la crisis final del régimen somocista que acabaría con un reinado dictatorial de casi medio siglo.

En repulsa por el asesinato de Chamorro, se produjeron espontáneas manifestaciones de protestas por todo el país, transformadas

el día 23 de enero de ese año en una huelga general nacional convocada por los empresarios opositores hasta lograr la renuncia de Somoza. El primer golpe de respuesta por el alevoso crimen provino del FSLN cuando sus fuerzas guerrilleras, comandadas por Germán Pomares, Víctor Tirado y Daniel Ortega, atacaron el campamento militar contrainsurgente en Santa Clara, mientras los seguidores de Camilo Ortega ocupaban la ciudad de Granada y los combatientes guiados por el cura guerrillero Gaspar García Laviana y Edén Pastora se apoderaban de Rivas.

Casi al mismo tiempo, en febrero de 1978, estalló en el barrio obrero de Monimbó, en la ciudad de Masaya, una impresionante insurrección indígena que duró toda una semana y en la que cayó combatiendo el comandante Camilo Ortega. El genocidio desatado por Somoza y la Guardia Nacional para ahogar la insurrección popular dejó, en esos primeros meses de 1978, un impresionante saldo de más de 5 mil muertos y 12 mil heridos.

Después de tres semanas de paro patronal, la huelga se mostró incapaz de provocar la caída del régimen, por lo que fue dejada sin efecto. Tras el fracaso de esta forma de protesta pacífica, surgió el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), encabezado por Alfonso Robelo, un rico empresario vinculado al capital norteamericano. El propio MDN fue el núcleo gestor, en mayo de 1978, del Frente Amplio Opositor (FAO), que sustituyó a la UDEL.

Pero el desconocimiento por parte de la FAO al FSLN, llevó en muy poco tiempo a que el Grupo de Los Doce se retirara de esta moderada alianza opositora, mientras el FSLN creaba, en julio de 1978, el Movimiento Pueblo Unido (MPU). El MPU era una alternativa popular a la FAO, con un carácter más popular y radical, que atrajo a organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, con un programa mucho más avanzado, pues incluía la desaparición de la Guardia Nacional y la nacionalización de las propiedades de los somocistas.

En ese ambiente, el 22 de agosto de 1978 se produjo el espectacular operativo sandinista en el Palacio Nacional, donde un comando guerrillero, dirigido por el comandante Cero (Edén Pastora) y la Comandante Dos (Dora María Téllez), se apoderó de

este emblemático edificio gubernamental. En la sede del Legislativo nicaragüense, el grupo armado retuvo a más de tres mil personas, muchos de ellos jefes del régimen, lo que obligó al gobierno de Somoza a negociar la liberación de medio centenar de prisioneros sandinistas y a permitir la lectura de comunicados del FSLN por la radio nacional.

Esta impresionante acción, fue seguida de alzamientos espontáneos de la población en Matagalpa. Ya a principios de septiembre de 1978, el propio FSLN lanzó la insurrección –denominada ofensiva final– en varias ciudades del país: Masaya, Chinandega, Diriamba, León, Jinotepe y Estelí.

En forma paralela, la FAO convocaba a una segunda huelga nacional, enseguida frustrada, y se registraba, a fines de ese mismo mes, el intento golpista del coronel Bernardino Larios para derribar la dictadura. La represión gubernamental fue tan brutal, que cerca de cincuenta mil personas huyeron del país a Costa Rica, Honduras y El Salvador, mientras la situación económica y social se deterioraba en rápida.

En esta crítica coyuntura se incrementó, como nunca antes, el apoyo internacional a la lucha contra la dictadura de Somoza. Ello explica que la insurrección sandinista, en la misma medida que crecía el repudio mundial a los crímenes del somocismo, recibiera un creciente respaldo no solo del gobierno revolucionario de Cuba, sino también el concurso de la socialdemocracia europea y de los presidentes Omar Torrijos de Panamá, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, José López Portillo de México e incluso, el más vacilante de Rodrigo Carazo de Costa Rica.

Este inusual respaldo internacional conseguido por los revolucionarios nicaragüenses se fundamentaba en el enorme desprestigio de la despiadada dictadura somocista y la habilidad del FSLN para impulsar una sabia y flexible política de alianzas, aprovechando la postura de defensa de los derechos humanos adoptada por la administración de James Carter (1977-1981), quien desde octubre de 1978 pasó a apoyar abiertamente la demanda empresarial de una salida negociada de Somoza. Otro factor que contribuyó a la victoria sandinista fue, sin duda, la reunificación de las tres tendencias en

que estaba dividido el FSLN desde mediados de los setenta y que se concretó el 7 marzo de 1979.

Este día, las tres corrientes en que se había fraccionado el FSLN anunciaron su unidad y el establecimiento de una Dirección Nacional conjunta, formada por tres miembros de cada grupo, con el rango de comandante de la revolución. Tras la reunificación de la dirección del FSLN, esta organización propició, en febrero de 1979, la fundación del Frente Patriótico Nacional (FPN) en el que ocuparon lugar el MPU, el Grupo de los Doce, así como varios partidos, sindicatos y otras organizaciones.

A renglón seguido, en los primeros meses de 1979, se desató la gran ofensiva militar final. Aunque se había previsto iniciarla en mayo por el sur –donde el comandante Humberto Ortega tenía ubicado el más grande contingente armado del FSLN, con su retaguardia en Costa Rica–, en la práctica las acciones bélicas sandinistas comenzaron en el mes de marzo por el norte, de forma conjunta al llamado a huelga general. A principios de abril, guerrilleros del FSLN iniciaron la insurrección de Estelí, que permitió ocupar la ciudad durante diez días, mientras estallaban levantamientos populares por todas partes, incluida la capital.

Ante la exitosa ofensiva y el amplio repudio internacional al régimen somocista –en junio la propia OEA aprobó una resolución que pedía la salida del dictador de Nicaragua–, Estados Unidos se vio obligado a exigir a Somoza su renuncia con el propósito de preservar la Guardia Nacional e impedir un triunfo aplastante del FSLN. A esa altura, ya las guerrilleras sandinistas habían liberado León y Matagalpa, la segunda y tercera ciudades más importantes del país, así como una docena de pueblos más pequeños.

El 16 de julio de 1979, el FSLN anunció en San José de Costa Rica la formación de un gobierno provisional y, al día siguiente, el dictador Somoza tuvo que renunciar en forma precipitada y huir a Miami. Después se refugiaría en Paraguay, donde fue ajusticiado, en septiembre de 1980, por un comando revolucionario argentino.

Su sucesor, Francisco Urcuyo, un congresista liberal, solo duró unas pocas horas en el poder y también tuvo que abandonar a toda carrera el país, mientras la desmoralizada Guardia Nacional rendía

sus armas. Ante ese resultado, nadie pudo impedir el exitoso asalto a la capital por las fuerzas sandinistas que completaron su victoria el 19 de julio de 1979.

El gobierno provisional, denominado Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, estaba formado inicialmente por Violeta Barrios, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Alfonso Robelo y Moisés Hassan. Entre las primeras disposiciones del gobierno revolucionario estuvo la abolición de la constitución somocista; la desaparición de la Guardia Nacional, la disolución de los desprestigiados partidos tradicionales vinculados a la dictadura; la confiscación de las propiedades de Somoza y sus allegados; la nacionalización del comercio exterior, las minas y demás recursos no renovables del país y otras medidas dirigidas a favorecer el desarrollo económico y social de Nicaragua.

En el período de julio a diciembre de 1979, la revolución sandinista contó con la participación de diferentes sectores de la burguesía que se habían opuesto a la dictadura de Somoza, como era el caso de Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo, miembros de la propia Junta de Gobierno, así como de varios ministros como el coronel Bernardino Larios. Pero en diciembre de ese año, una drástica reorganización gubernamental acentuó la presencia sandinista en el gabinete ministerial, pues Humberto Ortega sustituyó a Larios en el Ministerio de Defensa, Henry Ruiz se hizo cargo del de Planificación y Jaime Wheelock fue designado al frente del recién creado Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria.

La creciente presencia de los sandinistas en los órganos de poder desde fines de 1979, que indicaba una radicalización de la revolución, llevó a la salida del gobierno de figuras de la burguesía antisomocista como Robelo y Chamorro, que en abril de 1980 renunciaron a sus cargos en la junta y pasaron a la oposición. Para sustituirlos, fueron incorporados al gobierno Rafael Córdoba Rivas y Arturo Cruz, ambos del Partido Conservador Demócrata (PSD), los que tampoco estarían mucho tiempo apoyando el proceso sandinista.

A mediados de noviembre de 1980, envalentonados por el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien como era de esperar endurecería la política norteamericana hacia la revolución

sandinista, la mayor parte de los representantes de la burguesía se retiraron del Consejo de Estado, como preludio de la agresión externa que estaba a punto de iniciarse contra Nicaragua por parte del imperialismo norteamericano. Las conspiraciones de los integrantes de algunas de las agrupaciones empresariales y de otras fuerzas, incluido el propio Partido Comunista de Nicaragua, obligó al gobierno sandinista en octubre de 1981 a encarcelar a algunos de sus dirigentes, aunque en poco tiempo fueron liberados.

En forma vertiginosa, Estados Unidos pasó de las campañas mediáticas contra la nueva Nicaragua, la suspensión de programas alimentarios y el bloqueo de créditos de organismos financieros internacionales, al abierto financiamiento de la contrarrevolución. Además de asesoramiento técnico, los norteamericanos entregaron armas a las bandas contrarrevolucionarias de los ex guardias somocistas que operaban desde sus bases en Honduras, bajo el amparo del ejército de este país.

En febrero de 1981, como resultado de las defecciones que sufría la revolución sandinista y del creciente acoso norteamericano, la Junta de Gobierno quedó integrada por solo tres miembros, con Daniel Ortega como coordinador. Más adelante, en 1985, el proceso se institucionalizó mediante la creación de una asamblea nacional y la elección –con el 63% de la votación– a los máximos cargos ejecutivos de Daniel Ortega y Sergio Ramírez como presidente y vicepresidente respectivamente, responsabilidades que desempeñaron en muy difíciles circunstancias hasta 1990.

En ese lapso, se recrudeció la guerra de «baja intensidad» a que estuvo sometido el país por las bandas armadas contrarrevolucionarias sostenidas por Estados Unidos. No obstante todas las dificultades y agresiones, los sandinistas lograron impulsar la reforma agraria, se nacionalizó el sistema financiero, se creó una importante área de propiedad del pueblo con las empresas expropiadas a los somocistas y opositores al proceso revolucionario, se adoptó una nueva política tributaria, se impulsó la educación –incluida la alfabetización–, la salud pública y otras esferas de amplio beneficio popular.

Como parte de su estrategia de desarrollo nacional, el FSLN se propuso conjugar una economía mixta que combinara un Área de

Propiedad del Pueblo (APP) con una privada –Área Privada (AP)–, orientadas a superar el atraso económico, romper la dependencia y favorecer una redistribución del ingreso, en beneficio de las grandes mayorías. Pero este proceso de profundas transformaciones sociales y económicas se frustró por el agresivo cerco exterior y una guerra de desgaste que desangraba a la nación y que obligó incluso al FSLN a expropiar bienes a los que abiertamente se declaraban enemigos del proceso revolucionario, abandonaban el país y se alineaban con la contrarrevolución y los Estados Unidos.

Presionado por los procesos negociadores (Esquipulas, Contadora, etc.), y en el adverso clima internacional creado para los movimientos revolucionarios con la abrupta crisis de los países socialistas europeos, los sandinistas debieron concurrir a las elecciones presidenciales de febrero de 1990 en condiciones muy desventajosas. Una parte de la población de Nicaragua asociaba la reelección de Daniel Ortega y Sergio Ramírez con la prolongación de la guerra sucia impuesta por Estados Unidos, donde ahora gobernaba George Bush padre.

A debilitar la popularidad de los sandinistas también contribuyó la incapacidad del gobierno del FSLN para evitar que el mayor peso de la crisis económica y los terribles efectos de la guerra a que el país estaba sometido por los Estados Unidos recayera en los sectores populares. Muchas familias humildes eran diezmadas por los efectos del servicio militar obligatorio, implantado para luchar contra las bandas contrarrevolucionarias. En parte, eso explica la victoria obtenida en los comicios por la aspirante opositora Violeta Barrios de Chamorro, al frente de una heterogénea coalición de fuerzas políticas denominada Unión Nacional Opositora (UNO), quien gobernó hasta 1997, cerrando el ciclo revolucionario nicaragüense.

REVERDECER DE LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS

A pesar del desenlace negativo de la revolución sandinista a principios de los noventa, su triunfo veinte años atrás sobre la dictadura criminal de Somoza abrió, como antes hiciera la revolución cubana, una nueva fase de positivas transformaciones en la faz del

continente. En este sentido, la revolución nicaragüense asestó un duro golpe a la dominación norteamericana como parte de las luchas hemisféricas por su definitiva liberación y contribuyó a crear un clima de cambios positivos que hizo caer regímenes fascistas y añejas dictaduras a todo lo largo del continente, estimulando con su ejemplo el brote de nuevas fuerzas revolucionarias.

Importantes cambios tuvieron lugar en el escenario latinoamericano, al reaparecer un nutrido grupo de gobiernos civiles fruto de elecciones, de mayor o menor solidez, y de distinta proyección política. En la década de los ochenta la hegemonía de Estados Unidos entró en franco retroceso, no solo evidenciado por la aplastante victoria sandinista, sino también por la triunfante revolución que encabezara Maurice Bishop en la diminuta isla de Granada, el 13 de marzo de ese mismo año, y por las transformaciones democráticas ocurridas en la América del Sur.

En el área centroamericana, como en algunos otros escenarios del continente, el triunfo de la revolución sandinista dio nuevo impulso a la lucha armada. En Guatemala, el movimiento revolucionario se venía reorganizando desde principios de los años setenta, a pesar de los duros golpes recibidos en los años anteriores. El 19 de enero de 1972 apareció en las intrincadas selvas de El Quiché un puñado de combatientes, algunos de los cuales habían sido jefes guerrilleros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que, encabezados por el comandante Rolando Morán (Ricardo Ramírez), crearon el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

Casi al mismo tiempo, entre los años de 1972 y 1974, el Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), comunista, y las FAR, estas últimas guiadas ahora por Pablo Monsanto (Jorge Soto), daban pasos hacia la unidad y relanzamiento de la lucha armada. De gran resonancia en el desarrollo de la guerra revolucionaria en Guatemala fue la aparición pública, el 18 de septiembre de 1978, de una nueva organización político-militar que llevaba varios años de tenaz preparación y entrenamientos secretos: la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).

ORPA era dirigida por el comandante Gaspar Illom (Rodrigo Asturias), cuyo nombre de guerra lo tomó de un personaje de las

exitosas novelas de su padre, el afamado Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. De las agrupaciones guerrilleras existentes, ORPA fue la única que no se definió como marxista y su acción estaba dirigida a la liberación de los pueblos originarios, en contra de la discriminación racial, por la justicia social y la reconstrucción nacional.

En estas circunstancias, comenzó un incipiente proceso unitario, estimulado por el triunfo sandinista en Nicaragua, que propició en enero de 1982 la formación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que aglutinó al EGP, ORPA, FAR y al Núcleo de Dirección del PGT. A la par, quedó estructurado un Comité de Unidad Patriótica (CGUP) con destacadas personalidades políticas, estudiantiles, intelectuales y religiosas, que se pronunciaron en favor del proceso revolucionario, respaldando el programa de la URNG.

Hay que añadir que poco después, el 1 de mayo de 1981, el PGT también se manifestó a favor de la guerra revolucionaria, con lo cual se amplió el espectro de organizaciones que impulsaban la lucha armada. Además, el 14 de febrero de 1981, el Comité de Unidad Campesina convocó a los principales líderes indígenas a las ruinas de Itsimté donde hicieron un llamado a la rebelión en el documento *Los Pueblos Indígenas ante el Mundo*.

En esas condiciones, los militares guatemaltecos extremaron la represión, como ocurrió a principios de 1979 cuando fueron ametrallados, en una verdadera cacería por las calles de la capital, los dos dirigentes más importantes de la oposición socialdemócrata: Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. Mediante estos crímenes, perpetrados impunemente a lo largo y ancho de Guatemala, desaparecieron, o tuvieron que marchar al exilio, los principales políticos opositoristas y quedaron al frente de los partidos legalizados figuras dispuestas a hacerle el juego al gobierno.

Sin duda el crimen de mayor repercusión tuvo lugar el 31 de enero de 1980, cuando las huestes policiales asaltaron e incendiaron la embajada de España, ocupada por un numeroso grupo de campesinos e indígenas de El Quiché que protestaban por la sangrienta represión contra las áreas rurales. Muchos de los refugiados en la sede diplomática ibérica murieron quemados vivos, entre ellos el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lennox, el ex canciller Adolfo

Molina, el padre de Rigoberta Menchú y el propio cónsul español. Con la dictadura del general Efraín Ríos Montt, iniciada en marzo de 1982, la represión alcanzó nuevas cotas, sobre todo contra la indefensa población campesina e indígena.

En el caso de El Salvador el proceso de unidad de las organizaciones armadas que combatían los regímenes militares adueñados del país comenzó el 10 de octubre de 1980. En esa fecha cuatro agrupaciones nacidas en la primera mitad de la década de los setenta y proclamadas marxistas-leninistas, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL).

A esa altura, la lucha revolucionaria salvadoreña había cobrado una fuerza inusitada, como se comprobó con la gran ofensiva militar del FMLN en enero de 1981, estimulada por la victoria sandinista en la vecina Nicaragua, a lo que los militares respondieron con una mayor represión y el aumento de las desapariciones y asesinatos, obra de los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad. Ese accionar criminal, que se cobró miles de víctimas civiles inocentes, había comenzado con el alevoso asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980, seguido del de tres religiosas norteamericanas.

OLEADA CIVILISTA: EL RETORNO DE LOS MILITARES A LOS CUARTELES

En otros países, desde los años ochenta las masas trabajadoras volvieron a ganar las calles y el movimiento obrero se revitalizó, como parte de un proceso de apertura democrática, que en muchos lugares se conjugó con un rebrote del nacional reformismo, como ocurrió en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador. En las tres primeras naciones, las exigencias obreras y populares, las insoportables proporciones de la crisis económica, unidas a un inusual despunte de

la oposición liberal burguesa, obligaron a los regímenes militares a prever un cronograma de regreso a los sistemas electorales.

En el caso argentino la decisión fue precipitada por la aplastante derrota sufrida frente a Inglaterra en la fulminante Guerra de las Malvinas –de abril a junio de 1982–, que estremeció todas las estructuras de poder en este país sudamericano ya agobiado por la debacle económica. La aventura colonialista del envejecido imperio británico levantó una ola de solidaridad latinoamericana con la justa causa del pueblo argentino y de repudio al incondicional apoyo prestado por Estados Unidos al gobierno de Londres.

El descalabro de los militares, encabezados por el general Leopoldo Galtieri, llevó a la Casa Rosada, en enero de 1984, al dirigente radical Raúl Alfonsín, quien obtuvo casi el 52 % de la votación. Durante su mandato aprobó las llamadas leyes de impunidad, Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), que beneficiaron a más de mil represores de los terribles años de la dictadura militar (1976-1983).

Durante el mandato de Alfonsín también se produjo el desafortunado ataque armado al cuartel de la Tablada, por un comando del Movimiento Todo por la Patria, mientras el gobierno fracasaba en todos sus esfuerzos por sacar la economía de la persistente crisis (*Plan Austral*), de lo que fueron muestra los desesperados asaltos a supermercados de los sectores más humildes y marginados de la población argentina. En medio de la profunda crisis económica, Alfonsín fue sustituido en 1989 por el peronista Carlos Saúl Menen, que obtuvo el 47% de la votación, quien logró reelegirse en 1995 con un 2% más de los sufragios que en la ocasión anterior.

Con el propósito de alcanzar la presidencia, Menen prometió la reactivación económica y el retorno a la tradicional política laboral justicialista, pero una vez en el poder aplicó sin contemplaciones, durante los diez años de su mandato (1989-1999), las recetas neoliberales, a la vez que validaba el manto protector echado por su predecesor sobre los crímenes de los gobiernos militares. Para exigir el necesario ajuste de cuentas con la guerra sucia y en reclamo de justicia para los miles de desaparecidos, surgió el movimiento de las madres –y luego abuelas– de la Plaza de Mayo, convertidas en verdadero símbolo de los nuevos tiempos que reclamaba Argentina.

En circunstancias menos traumáticas se desarrolló el traspaso del poder a los civiles en Uruguay y Brasil. En la Banda Oriental, el general Gregorio Álvarez debió entregar el gobierno, en sus manos desde 1981, a los representantes de los dos partidos tradicionales, primero a Julio María Sanguinetti en 1985, a cuyas manos volvió en 1995 tras el interregno del gobierno de Luis Alberto Lacalle.

En Brasil, la apertura democrática dirigida por los militares fue desbordada en 1984 por manifestaciones populares sin precedentes que estremecieron el país en apoyo de la enmienda constitucional *Dante*, presentada por la oposición con el propósito de restablecer el sufragio universal directo. Aunque el proyecto fue rechazado por el Congreso, los adversarios del gobierno lograron el 15 de enero de 1985 que el colegio electoral pusiera fin a más de veinte años de dictadura militar al escoger a Tancredo Neves, prestigioso político opositor como sucesor del general Joao Baptista Figueiredo en la presidencia de la República Federativa del Brasil desde 1979.

Sin embargo, una repentina enfermedad impidió a Neves tomar posesión de su cargo. Su muerte, tras penosa agonía, llevó al Ejecutivo, el 15 de marzo de 1985, al vicepresidente electo por la Alianza Democrática, José Sarney, quien a pesar de su larga hoja de servicios en los gobiernos militares impulsó la democratización y una política exterior independiente. Prueba de ello fue el restablecimiento de las relaciones con Cuba, sus visitas a la URSS y Angola, la posición pragmática adoptada en Contadora, el Grupo de los Ocho y otros foros internacionales, así como el proyecto de integración económica con Argentina y Uruguay.

Otro elemento significativo del gobierno Sarney fue la convocatoria de una asamblea constituyente, inaugurada en 1987. En la convención, la lucha de la izquierda contra la alianza de los diputados del centro y la derecha se encaminó a reducir el mandato de Sarney, cambiar el sistema de gobierno y conseguir reivindicaciones populares, entre ellas una redistribución agraria.

A mediados de 1988, la constituyente se pronunció en definitiva por la extensión a cinco años del gobierno, por el régimen presidencialista y el mantenimiento del *status quo* agrario. Pese a estos resultados y a su condición de minoría –solo reunían el 30% de los

escaños–, los delegados progresistas y de izquierda obtuvieron, entre otras conquistas, el derecho de huelga y la reducción de la jornada laboral semanal.

PREARIO RESTABLECIMIENTO DEMOCRÁTICO EN BOLIVIA

Mucho más endeble fue el retorno a la democracia en Bolivia. Ante la aguda crisis económica y las crecientes presiones internacionales por las violaciones de los derechos humanos, el dictador Hugo Banzer se vio obligado a convocar a elecciones en noviembre de 1977 y dejar el poder ocho meses después. Su régimen fue seguido de inestables gobiernos civiles –los de Walter Guevara y Lidia Gueiler– que no pudieron evitar que en poco tiempo se abriera un breve paréntesis de sangriento autoritarismo militar entre 1980 y 1982.

Tras la obligada salida de la criminal dictadura militar del general Luis García Meza en 1981, vinculado al narcotráfico, una nueva etapa civilista comenzó en octubre de 1982 con el regreso al poder de los líderes históricos de la fracasada revolución boliviana de 1952: Hernán Siles Suazo –que gobernó hasta 1985–, respaldado por la Unidad Democrática Popular (UDP), integrada por la izquierda del MNR, el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); y Víctor Paz Estenssoro del viejo MNR, quien lo hizo hasta 1989. El gobierno de Siles fue incapaz de hacer frente a la asfixiante crisis económica, agravada por las demandas sindicales y los sabotajes empresariales, por lo que se vio obligado a adelantar las elecciones presidenciales, que darían paso a la eliminación de las últimas conquistas populares que aún sobrevivían de la revolución boliviana de 1952.

Ello fue una tarea del gobierno de Estenssoro, quien daría rienda suelta a las fórmulas neoliberales después de lanzar en 1985 un patético mensaje al país donde sentenciaba teatralmente: «Bolivia se nos muere».¹ Para acabar con una economía fundamentada en el predomi-

¹ Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (compiladores), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Buenos Aires, CLACSO Libros/Editorial El Colectivo, 2007, p. 6.

nio de las empresas públicas, que paradójicamente el mismo Víctor Paz había propiciado durante la revolución de 1952, puso en vigor el decreto 21060. Con el pretexto de combatir la hiperinflación, su gobierno adoptó sin tapujos un programa de corte neoliberal, con ajustes fiscales, privatizaciones masivas y desregulación de los mercados.

Una de las más significativas consecuencias de esta política fue el desmantelamiento de los centros mineros estatales, acompañados de despidos masivos, que obligaron a los obreros a emigrar a otros sitios en busca de empleo. Una parte de los antiguos trabajadores de las minas estatales se refugió en El Alto, ciudad periférica a La Paz, engrosando las filas del sector informal, mientras otros se trasladaban a las zonas del Chapare para dedicarse al cultivo de la coca. El fracaso de la llamada Marcha por la Vida de los mineros, en agosto de 1986, liquidó la última resistencia de los obreros y puso fin también a la hegemonía de la COB, hasta entonces la gran central sindical nacional.

En esas condiciones, el movimiento katarista se fortaleció con concepciones más radicales. Así sucedió con la aparición del Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA), dirigido por Luciano Tapia, que en contra de los partidarios de Genaro Flores esgrimió un programa de defensa de los pueblos originarios y de exaltación del nacionalismo aymara. Sin duda, un factor que contribuyó a movilizar al campesinado indígena y orientarlo a la lucha por el poder político fue la promulgación en 1988 por el presidente Paz Estenssoro de la ley 1008, que dio el marco legal para las políticas de erradicación indiscriminada del cultivo de la coca, principal sustento de la mayoría de la población rural.

Esta crítica coyuntura, la división del movimiento katarista entre los seguidores de Flores y los de Tapia, unido a los fracasos electorales del MITKA, llevó a fines de la década de los ochenta a que una de sus facciones adoptara como estrategia la lucha armada. Ese fue el caso de la aparición en 1989 del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), brazo militar de la organización Ofensiva Roja de los Ayllus Tupackataristas, que realizó varias acciones armadas hasta que muchos de sus dirigentes fueron arrestados, entre ellos Felipe Quispe y Álvaro García Linera.

Por su parte, el MRTK, convertido desde 1985 en MRTK de Liberación, quedó bajo la dirección del intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas, mientras su antiguo líder Genaro Flores pasaba a encabezar otra organización: el Frente de Unidad de Liberación Katarista (FULKA). Más adelante estas organizaciones se irían apagando en forma paulatina ante sucesivos reveses electorales.

A Paz Estenssoro le sucedió en la presidencia, en 1989, Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación surgida en los años setenta a partir de militantes revolucionarios exiliados en Chile. Lo más significativo de este gobierno fueron sus esfuerzos diplomáticos por sacar la coca de la lista de sustancias controladas por las Naciones Unidas (ONU), lo que avivó las contradicciones de Bolivia con el gobierno norteamericano.

LA COMPLEJA EVOLUCIÓN CIVILISTA EN PERÚ Y ECUADOR

En Perú y Ecuador el restablecimiento de gobiernos civiles se efectuó de manera muy diferente, ya que aquí no se trataba de sustituir dictaduras fascistas carcomidas, sino de remplazar gobiernos militares progresistas –el ecuatoriano bastante atemperado– cuyas expectativas se habían malogrado. El fracaso del reformismo militar en estos dos países andinos dio paso a regímenes civiles de diferente color político, proceso iniciado en Ecuador el 10 de agosto de 1979 con el ascenso a la presidencia de Jaime Roldós Aguilera y seguido, tras su muerte en un raro accidente de aviación, por el democristiano Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984), quien desarrolló una línea reformista que alarmó a la gran burguesía ecuatoriana.

El conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, ocupó la primera magistratura hasta 1988 con un amplio apoyo del empresariado nacional y una política de extrema derecha, lo que motivó que dos años después se produjera un conato de sublevación de la aviación encabezado por el general Frank Vargas Pazzos y se registraran las acciones del movimiento político militar Alfaro Vive Carajo (AVC). A Febres Cordero le sucedió Rodrigo

Borja Cevallos (1988-1992) de la Izquierda Democrática, y a este Sixto Durán Ballén (1992-1996), viejo líder socialcristiano respaldado por la efímera Unión Republicana, expresión en lo esencial de los intereses de la zona serrana de Ecuador.

En Perú, por su parte, el retorno al poder de los civiles comenzó con la promulgación de una nueva constitución en 1979 y las elecciones presidenciales de mayo del siguiente año, que devolvieron el poder a Fernando Belaunde Terry –el mismo mandatario derrocado precisamente por los propios militares doce años atrás–, aunque la alcaldía de Lima fue ganada en 1983 por la opositora Izquierda Unida (IU) en la persona de Alfonso Barrantes. En julio de 1985 ocupó la primera magistratura el nuevo líder del APRA Alan García, pues su mentor y fundador de esta organización había muerto en 1979 tras presidir la convención constituyente.

A pesar de que el joven mandatario aprista llegó al poder prometiendo superar la crisis económica y mejorar el nivel de vida de los peruanos –la reducción del servicio de la deuda a solo el 10% de los ingresos fue solo un paliativo–, su mandato terminó instrumentando tres ajustes estructurales en un vano intento por controlar la hiperinflación. Las medidas neoliberales de Alan García no lograron resolver la profunda crisis económica y, en cambio, generaron una vasta protesta social, de lo que fue expresión la creciente actividad terrorista y militar de Sendero Luminoso. Ese contexto facilitó el ascenso al poder en 1990 de Alberto Fujimori, tras derrotar en los comicios electorales al conocido autor de *La ciudad y los perros* (1963): Mario Vargas Llosa.

Como en Perú y Ecuador, esta etapa de la historia de los países latinoamericanos, iniciada en la década de los ochenta, caracterizada por el predominio de regímenes civilistas, vino acompañada de una primera oleada de ajustes económicos de tipo neoliberal, lo que empañó el clima de optimismo y las expectativas de prosperidad creadas en amplios sectores de la población con el traspaso del poder de las dictaduras militares a gobiernos electos.

El predominio de los gobiernos civilistas en América Latina en los años ochenta se vio fortalecido con la independencia obtenida por un grupo de pequeñas naciones del Caribe: Dominica (1978),

Santa Lucía (1979), San Vicente y Granadinas (1979), Antigua (1981), Barbuda (1981) y Belice (1981). Además, en varios países de la región ascendieron al gobierno fuerzas progresistas, como fue el caso de Desi Bouterse en Surinam (1980), Errol Barrow en Barbados (1986) y Michael Manley en Jamaica (1988).

No obstante, la intervención militar norteamericana contra la diminuta Granada, el 23 de octubre de 1983, aprovechando el suicidio de la revolución que significó el incalificable asesinato de Maurice Bishop ocurrido una semana antes, como parte del golpe de Estado orquestado por Bernard Coard, constituyó sin duda un sensible golpe para el movimiento revolucionario de la región. A pesar de la magnitud de este revés, el mismo tuvo lugar en un contexto regional caracterizado por los avances democráticos y progresistas.

A la par, los proyectos integracionistas o de concertación política de los países latinoamericanos fueron debilitándose o desaparecieron, con la excepción del SELA, el CARICOM y el grupo de Contadora, este último encaminado a buscar una solución política negociada al conflicto centroamericano. Para apoyar este esfuerzo, apareció también el denominado Grupo de Apoyo a Contadora y, desde 1986, el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro (Grupo de Río), que terminaría por aglutinar a la casi totalidad de los países latinoamericanos y lograr después la firma de los acuerdos de paz para la convulsa área de América Central (Esquipulas I y II).

FIN DE LA TIRANÍA DUVALIERISTA EN HAITÍ

El ocaso de las más viejas dictaduras del continente comenzó por el derrocamiento del régimen patrimonial establecido por François Duvalier, apodado *Papa Doc*, a fines de los años cincuenta y continuado desde 1971 por su hijo Jean Claude (*Baby Doc*). Los orígenes de esta satrapía tropical se remontaban a la endémica crisis económica y la inestabilidad política que laceraban Haití, agudizada en 1957, que hicieron posible el establecimiento de esta sangrienta dictadura duvalierista.

Antes de llegar al poder, Duvalier era un prestigioso médico negro que había sido ministro a fines de los años cuarenta del gobierno democrático de Dumarsais Estimé, del que se decía heredero político, y contaba con el respaldo de distintos sectores sociales negros, incluida la oficialidad del ejército y los siempre activos comerciantes extranjeros. Había sobresalido por su defensa de las creencias y valores del campesinado humilde.

Pero Papa Doc ascendió al gobierno aupado por el sector negro de la oligarquía, las capas medias y el propio ejército, encabezado por el general Antoine Kébreau, con el objetivo de impedir que, aprovechando la crisis existente, la élite mulata retornara al poder. Además, Duvalier contaba con el beneplácito de Estados Unidos, que en el apogeo de la Guerra Fría prefería contar en América Latina con gobiernos fuertes que impidieran levantar cabeza a las fuerzas de izquierda, especialmente a los socialistas y comunistas.

Por último, el ascenso a la primera magistratura de Papa Doc era también factible porque el ejército –debilitado por la represión desatada en apoyo a Magloire y sus propias divisiones intestinas– lo impuso en elecciones fraudulentas, organizadas por las propias fuerzas armadas, el 22 de septiembre de 1957. Gracias a estos respaldos, François Duvalier pudo hacerse cargo de la primera magistratura un mes después de los manipulados comicios.

El programa político de Duvalier proponía entonces realizar una revolución social en Haití, que eliminara el desempleo, la miseria y el hambre por medio de un aumento nacional de la producción y acabara con todas las formas de opresión y de sumisión del pensamiento y de las libertades civiles. El divorcio entre el discurso y la práctica fue rápido.

La dictadura de Papa Doc se caracterizó desde su arrancada por instaurar un régimen represivo. Los políticos, periódicos y partidos de oposición fueron perseguidos, incluyendo a sectores del clero católico. El ultraconservador arzobispo de la capital haitiana, el francés François Poirier, tuvo que irse del país, similar destino de los dos únicos obispos existentes y de numerosos sacerdotes.

Lo mismo sucedió con una buena parte de los sectores medios y la intelectualidad. Según algunos cálculos, hacia 1960, apenas tres

años después de iniciada la dictadura duvalierista, el 80% de los profesionales se había marchado al extranjero, el mismo año en que las protestas estudiantiles fueron acalladas con violencia extrema. Por su parte, la principal central obrera, la Unión Intersindical, fue disuelta luego de una huelga general en diciembre de 1963.

El 22 de septiembre de 1959, durante la conmemoración de su segundo año de gobierno, Duvalier marchó al lado de milicias civiles armadas, a las que otorgó el poder de mantener el orden. Se inició el reinado de los Tontons Macoutes, la policía secreta y personal de Papa Doc.

La tranquilidad social impuesta por la fuerza hizo que la burguesía negra, y también la mulata, aprovecharan las condiciones favorables de impunidad creadas por el régimen para hacer sus negocios sin ningún tipo de restricción. Este factor, unido a las amplias posibilidades de acumulación de capital abiertas por la corrupción y el contrabando, explican el respaldo de las élites a la dictadura.

La salvaje represión gubernamental, combinada con la declinante situación económica, estimuló la aparición de movimientos subversivos, muchos de ellos al calor del triunfo de la revolución cubana en 1959. Entre estos puede mencionarse la fundación ese mismo año del Partido de Alianza Popular, liderado por el doctor Jacques Stéphen Alexis, y el Partido Popular de Liberación Nacional.

Ambas organizaciones revolucionarias se fusionaron en el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos (1968), que defendió la línea de lucha armada popular. Una verdadera cacería montada contra los militantes comunistas, en los primeros meses de 1969, tuvo como resultado la muerte o el encarcelamiento de la mayoría de sus militantes.

El temor de los Estados Unidos a que se repitiera otra revolución cubana en el Caribe favoreció la consolidación de Duvalier en el poder. En los primeros seis años de su dictadura, Haití recibió del gobierno estadounidense más de cien millones de dólares y una generosa ayuda militar, que incluyó la instalación de una base en la bahía de San Nicolás.

Ya en 1964, Estados Unidos no puso objeción a que Papa Doc se convirtiera en presidente vitalicio de Haití, tras un manipulado

plebiscito acompañado de una reforma constitucional. La propia CIA facilitó información sobre las actividades revolucionarias de la opositora Joven Haití, cuyos integrantes fueron exterminados al desembarcar en territorio haitiano en agosto de ese año.

Para mantenerse en el poder, al margen de la política represiva, Duvalier construyó una imagen de líder predestinado, que hábilmente combinaba con una política demagógica y paternalista, así como con la exaltación de la negritud. La propaganda oficial lo presentaba como el mayor patriota de todos los tiempos, Emancipador de las Masas, Renovador de la Patria Haitiana, Campeón de la Dignidad Nacional y otros rimbombantes calificativos. Además, se promovía entre la población, en su inmensa mayoría analfabeta, supersticiosa y devota de los cultos de origen africano, la creencia de que Papa Doc poseía poderes espirituales excepcionales.

La década de los sesenta fue de descenso absoluto y relativo en todos los renglones de la actividad económica. Esta situación se refleja en los datos siguientes: el valor de las exportaciones pasó de 40 millones de dólares en 1955 a 33 millones en 1969; el PIB evolucionó en el mismo período de 316 en 1960 a 333 en 1964 y 350 en 1969, mientras que el ingreso per cápita pasaba de 76.3 en 1960 a 73.8 en 1969 y el ingreso gubernamental de 27.7 caía a 25.4 en 1969.

A principios de 1971, François Duvalier sufrió un inesperado infarto y poco después murió (22 de abril), dejando en el poder a su hijo Jean Claude Duvalier, *Baby Doc*, quien entonces solo tenía 19 años de edad. A pesar de que la constitución haitiana vigente establecía un mínimo de cuarenta años para ocupar la primera magistratura, Jean Claude asumió la presidencia tras ser modificado este punto con el aval de un amañando plebiscito, respaldado por el gobierno norteamericano.

Duvalier –que era un verdadero *play boy*, amante de los placeres mundanos– abrió su reinado con una política de relativa liberalización y de mayor acercamiento a Estados Unidos, sobre todo durante el mandato del presidente James Carter. Aunque en lo fundamental, el gobierno del segundo Duvalier no difería de la criminal tiranía de su padre, durante un cierto tiempo el heredero se las arregló para

maquillar su rostro, bajándole el tono a las prácticas autoritarias y corruptas del régimen de su padre.

Con esa finalidad, Duvalier hijo instituyó algunas reformas presupuestarias y judiciales, sustituyó algunos miembros ya mayores del gabinete de Papa Doc con hombres más jóvenes, liberó a algunos presos políticos y alivió la censura de prensa, prometiendo la democratización gradual de las instituciones. También debió enfrentar las ambiciones de su hermana Marie Denise y su esposo, el coronel Max Dominique, que ya habían tenido conflictos con su padre y que fueron alejados del país con puestos diplomáticos.

De todos modos, el proceso sucesorio no estuvo exento de obstáculos, a pesar de que la mayor parte de los sectores opositoristas estaban en el exilio y divididos. La acción más significativa contra la dictadura del segundo Duvalier ocurrió el 25 de enero de 1973 con el secuestro del embajador norteamericano Clinton Everett Knox –cuyo papel había sido decisivo en el traspaso del poder a Baby Doc y en el reconocimiento estadounidense– por un grupo armado que exigió la libertad de los presos políticos. También durante el mandato de Jean Claude Duvalier, el dictador sufrió diversos atentados: en 1981 resultó herido y en 1982 fracasó un intento de derrocarlo, por un grupo de exiliados al mando de Bernard Sansarico.

Para tratar de conseguir un mejoramiento de la estancada situación del país, abrió una estrategia desarrollista basada en la entrega total de los recursos nacionales al capital extranjero, que a cambio facilitó la concesión de préstamos, donaciones y créditos de Estados Unidos. A ello debe sumarse que los primeros años del gobierno de Duvalier II se desarrollaron en una coyuntura internacional más favorable –el café y el azúcar registraban altos precios– y existía un mayor interés de los capitalistas norteamericanos por invertir en Haití, un país con una mano de obra muy barata, donde no había sindicatos, ni legislación laboral, ni huelgas, ni prensa de oposición.

Lo más novedoso de la penetración del capital norteamericano durante el gobierno de Baby Doc, que mantenía su viejo interés en los enclaves mineros y agrícolas, así como en el turismo, fue el fomento de la manufactura ligera. De esta forma, surgieron pequeñas

fábricas o maquiladoras, dirigidas a surtir el mercado norteamericano en bienes semi elaborados o elaborados, sobre todo textiles, juguetes y piezas electrónicas. Se calcula que fueron instaladas, desde principios de los setenta, unas 300 maquiladoras, lo que permitió que el volumen del capital foráneo invertido en Haití pasara de 80 millones en 1968 a 125 millones en 1975. Ya en 1973 el 40% de las exportaciones haitianas eran de esas producciones emergentes.

También favoreció una cierta mejoría, el incremento de las remesas por las decenas de miles de inmigrantes haitianos radicados en Estados Unidos, escapados del clima de terror duvalierista y de la pavorosa miseria del país. El reinicio de la entrada de inversiones en forma relativamente significativa en Haití, unido a las remesas, produjo un cierto respiro al agobiado país, aunque de muy poca duración.

De todos modos, poco alivió al empobrecido pueblo haitiano, puesto que la enorme corrupción y la impericia gubernamentales frustraron toda posibilidad de despegue económico y social. En 1977 la economía se estancó y se agravó la endémica crisis. Una de sus expresiones fue la salida de miles de haitianos hacia Estados Unidos en endeble embarcaciones, mientras los que no lograban escapar o cruzar a la República Dominicana debían emplearse en condiciones de semiesclavitud con tal de sobrevivir.

A principios de los años ochenta, ante la fuerte presión internacional en su contra, Baby Doc ensayó algunos cambios formales, que incluyó la adopción de una nueva constitución, el reconocimiento de diferentes partidos de oposición y la convocatoria de elecciones legislativas (1984), proceso en el cual sus partidarios se agruparon en el Comité de Acción Jeanclaudista (CONAJEC). En esos comicios, el CONAJEC ganó sin dificultad, pues la mayor parte de los oponentes estaban en las cárceles o habían sido sacados de la palestra pública mediante bárbaras torturas o asesinatos.

A la intolerancia y la brutal represión gubernamental, se sumó el desprestigio de Duvalier II, que era un descarnado depredador de la hacienda pública con la ayuda de su joven esposa, Michèle Bennett, quien procedía de la élite mulata. La creciente importancia de la familia de su mujer atemorizó al sector negro de la propia

burguesía, preocupado por una posible recuperación del poder por parte del ala rival de la oligarquía haitiana.

Para complicar más el panorama nacional, se realizó un referéndum que reafirmó la presidencia vitalicia, pues según los resultados oficiales arrojó una votación favorable del 99.98%. En mayo de 1984, unas cuarenta personas murieron en grandes motines y protestas contra el gobierno, que se repitieron en noviembre del siguiente año. A continuación, en febrero de 1985, decenas de miles de jóvenes se manifestaron en las calles de la capital.

Ya en 1986 las airadas protestas contra la dictadura, nutridas de campesinos pobres, se habían extendido a cinco de los nueve departamentos del país, con epicentro en las ciudades de Gonaives y Petit-Goave. Las manifestaciones populares contra Duvalier hijo tenían cierto respaldo de la Iglesia católica, que se venía transformando desde hacía algunos años, pues habían surgido centenares de «comunidades de base», que luchaban contra la miseria y apoyaban a los empobrecidos campesinos.

Otra causa del descontento era la difusión de más de un centenar de sectas protestantes, provenientes de Estados Unidos, desplegadas por todo el país, desplazando a la Iglesia católica en muchas zonas de su tradicional influencia. También esas iglesias emergentes competían por los feligreses con los arraigados cultos religiosos de origen africano.

Las violentas manifestaciones en contra del régimen alcanzaron tal magnitud, que el 7 de febrero de 1986 Baby Doc tuvo que huir a Francia, después de haber conocido de la retirada del apoyo de Estados Unidos y del golpe militar que orquestaba el jefe del ejército Henri Namphy. En su apresurada partida, Jean Claude Duvalier fue acompañado de sus familiares y dos decenas de personas, todos enriquecidos a costa de la miseria del pueblo haitiano.

Tras su estampida, el dictador fue acusado de robarse 120 millones de dólares de los fondos públicos, que luego dilapidaría en la costa azul francesa en gastos suntuarios, juergas y caprichos. El país se adentró en un período más convulso todavía, dominado por grupos neoduvalieristas, que terminó con la intervención norteamericana de 1994 a 1996 y que conduciría al desarme de los grupos paramilitares y la disolución del ejército y la policía.

Pero la ya endémica crisis haitiana no logró ser superada por los sucesivos gobiernos que vinieron después amparados por el movimiento popular denominado Familia Lavalás, del carismático ex sacerdote católico Jean Bertrand Aristide –quien tuvo el poder unos meses en 1991 y de 1994 a 1996 con el respaldo de los sectores más pobres– y el de René Préval entre 1996 y 2001.

El regreso al poder de Aristide en el 2001, en medio de acusaciones de fraudes electorales por parte de la oposición, cuando su popularidad y los cambios democráticos prometidos se habían esfumado, restableció la ingobernabilidad de esta atribulada pequeña nación caribeña. A ello también contribuyó la labor en contra del mandatario de la llamada Plataforma Democrática y el Grupo de los 184.

Las manifestaciones populares antigubernamentales y la reaparición de grupos armados opositores dieron lugar, un tiempo después, cuando se conmemoraba el bicentenario de la independencia, al derrocamiento del presidente Aristide, sustituido por Boniface Alexandre, y a una nueva intervención extranjera en Haití. En esta ocasión tenía el aval de la ONU, la que finalmente llevó en 2006 al regreso de Préval a la primera magistratura. Fue durante este segundo mandato, extendido hasta 2011, que la capital haitiana fue devastada en enero de 2010 por un violento terremoto que dejó miles de víctimas y daños incalculables.

CAÍDAS DE LAS DICTADURAS DE STROESSNER Y PINOCHET

En la última década del siglo XX continuó también consolidándose en América Latina la tendencia al establecimiento de gobiernos electivos y de retorno de los militares a los cuarteles, proceso acompañado de la caída de aborrecidas dictaduras como la de Duvalier, a la que siguieron la Stroessner en Paraguay y Pinochet en Chile. El derrocamiento de la tiranía paraguaya fue el resultado de un cruento –dejó varias decenas de muertos según los cálculos más conservadores– movimiento militar encabezado por el propio consuegro de Stroessner, el general Andrés Rodríguez, segundo hombre fuerte del

país, que el 3 de febrero de 1989 puso fin a una de las dictaduras más longevas de América Latina.

La caída de Stroessner fue festejada con espontáneas manifestaciones de júbilo popular y el principal líder de la oposición, Domingo Laino, fue aclamado por las calles de la capital. A renglón seguido, comenzó una liberalización política y un cronograma de transición democrática que incluyó el reconocimiento legal a los principales partidos.

Entre los cambios ocurridos entonces estuvo la reincorporación al oficialista Partido Colorado del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), que lo había abandonado en 1959. Esta organización era una de los integrantes, junto al Partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Revolucionario Febrerista, del acuerdo nacional de 1979, la alianza opositora a la dictadura de Stroessner de mayor reconocimiento nacional e internacional.

En los comicios celebrados el primero de mayo de 1989 fue elegido el propio general Rodríguez, con el 73.3% de los sufragios, mientras su oponente Domingo Laino, del Partido Liberal Radical Auténtico, obtenía el 21.6%. Durante el mandato de Rodríguez se promulgó una nueva constitución, el 20 de junio de 1992, sobre la que fue elegido su sucesor, el civil Juan Carlos Wasmosy, quien ocupó la primera magistratura un año después para el período 1993-1998.

Pero el gobierno de Wasmosy fue víctima de los apetitos de poder de su vicepresidente Luis María Argaña, apoyado en el Partido Colorado y el ambicioso general Lino Oviedo, comandante militar del ejército. Muestra de ello fue la sublevación militar de abril de 1996 encabezada por el propio Oviedo a raíz de su pase a retiro por Wasmosy. Las protestas populares, unida al apoyo internacional que recibió el gobierno paraguayo, frenaron el golpe y Oviedo debió cumplir la orden presidencial, lo que fue interpretado como el puntillazo final a la larga hegemonía militar en el país que databa de 1936.

Además, Oviedo fue condenado a diez años de cárcel e impedido de presentarse a los siguientes comicios presidenciales que dieron la victoria al colorado Raúl Cubas Grau sobre Domingo Laino, respaldado por los liberales radicales y el Partido Encuentro Nacional.

El gobierno de Cubas Grau, iniciado el 15 de agosto de 1998, era rehén del general Oviedo, quien pretendía ser el verdadero poder del país, excarcelado dos días después por un cuestionado decreto presidencial.

Ante la inminente posibilidad de un juicio político en contra de Cubas Grau por sus inescrupulosos vínculos con el general Oviedo, orquestado por su vice Luis María Argaña, quien fue asesinado el 22 de marzo de 1999. El crimen generó manifestaciones y protestas populares, violentamente reprimidas por la policía, que obligaron al general Oviedo a exiliarse en Argentina y a Cubas Grau en Brasil, tras renunciar el 28 de marzo. Su lugar fue ocupado por Luis Ángel González Macchi, quien era el titular del Senado, en un gobierno de unidad nacional para salir de la inestabilidad política que sacudía al país.

También en Chile la participación popular sacó de sus carriles la transición democrática diseñada por las clases dominantes y el propio dictador Augusto Pinochet para perpetuar su régimen autoritario, quien con ese fin había puesto en vigor una constitución en 1980. La carta magna pinochetista preveía el abandono del poder por parte del dictador el 11 de marzo de 1990, mediante unas elecciones controladas que le garantizarían continuar como una especie de poder tras el trono.

Con ese propósito, y para aplacar el creciente rechazo nacional e internacional a la dictadura, Pinochet convocó a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, contemplado en la propia constitución de 1980. Pero la campaña desarrollada por la recién creada Concertación de Partidos por la Democracia, alianza de organizaciones que se pronunciaban por el voto negativo a la propuesta gubernamental, encabezada por demócratas cristianos y socialistas, resultó una derrota para Pinochet y forzó su repliegue, tras casi 17 años de poder absoluto. Así se abrió paso a la llamada transición a la democracia, en realidad a una democracia restringida neoliberal.

La apertura permitió el ingreso en La Moneda en 1990 del demócrata cristiano Patricio Aylwin, tras su victoria electoral con el 55% de la votación. Este triunfo fue también posible gracias al

concurso de la propia Concertación de Partidos por la Democracia, a la que se integraron otras fuerzas democráticas como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD), este último heredero del viejo radicalismo de la segunda mitad del siglo XIX.

A pesar del importante cambio político, todavía durante un tiempo Pinochet siguió al frente del ejército y gozando de una serie de privilegios, entre ellos el puesto de senador vitalicio. Esa condición también se la habían reservado a otros jefes castrenses en retiro, que además habían establecido la impunidad legal por los crímenes cometidos durante la dictadura, junto a un conjunto de restricciones constitucionales a la democracia.

No obstante, la imagen e influencia de Pinochet se fue erosionando rápidamente, como el propio sistema político restrictivo diseñado por los militares. Ya en octubre de 1998, el anciano ex dictador fue detenido en Londres, por más de un año, en cumplimiento de una orden de un juez español que le había abierto causa criminal. En su propio país también fue acusado de varios cargos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, los que logró evadir alegando problemas de salud. En 2006 falleció de muerte natural, sin haber sido procesado por sus múltiples crímenes.

Fuera de la Concertación quedaron algunas pequeñas organizaciones de izquierda, sobrevivientes de la brutal represión pinochetista, como el Partido Comunista, la Izquierda Cristiana y un sector del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En particular, el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un desprendimiento del Partido Comunista, se habían destacado, en los años más duros de la dictadura, por el enfrentamiento armado contra el gobierno y su aparato represivo. Incluso, entre las acciones del Frente Manuel Rodríguez estuvo el frustrado intento de ejecutar al dictador en septiembre de 1986.

Pese a todas sus promesas electorales, la Concertación continuó la política neoliberal de la dictadura e incluso realizó nuevas privatizaciones. Esta alianza logró repetir su triunfo con la elección a la primera magistratura del demócrata cristiano Eduardo Frei hijo, para el período de 1994 a 2000, y luego, en este último año, con

Ricardo Lagos. Este último procedía del mismo Partido Socialista de Salvador Allende, aunque purgado de su radicalismo de antaño y nutrido con cuadros procedentes de los restos del MIR y del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

A Lagos le sucedió en la presidencia en el 2006 la también miembro del Partido Socialista y ex ministra de Defensa en su gabinete, Michelle Bachelet, hija de un general asesinado por la dictadura pinochetista. En 2010, sin embargo, la Concertación fue derrotada en los comicios presidenciales, a lo que contribuyó en forma decisiva la importante escisión en la alianza gubernamental encabezada por Marco Enríquez Ominami, hijo del fundador y mártir del MIR en la lucha armada contra Pinochet, Miguel Enríquez, que consiguió el 20% de la votación.

La división de la alianza de centro-izquierda facilitó el triunfo al aspirante de la derecha Alianza por Chile, Sebastián Piñera, que ha conseguido durante su mandato provocar un fuerte rechazo de la ciudadanía, que según las encuestas supera el 65% de la población. Expresión de la oposición frontal a su gobierno han sido las protestas protagonizadas por los mapuches y la multitudinarias manifestaciones estudiantiles, en defensa de la educación pública, encabezadas por una nueva generación de dirigentes juveniles como la carismática Camila Vallejo, militante del Partido Comunista.

UNA «DÉCADA PERDIDA» PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

La mayoría de los nuevos gobiernos civilistas establecidos en los años ochenta en América Latina terminaron abandonando la retórica populista electorera que los había conducido al poder y aceptando la profundización del programa de libre mercado que, de una u otra manera, habían enarbolado los regímenes militares y las dictaduras defenestradas. De esta manera, comenzaron a aplicar las medidas y reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial.

Casi en todas partes al sur del río Bravo se comenzaron a dismantelar los programas de ayuda social, a limitar los derechos

sindicales y reducir el área estatal de la economía y los servicios, en detrimento del nivel de vida de la población y los planes de desarrollo económico y social. Las empresas públicas se abrieron a la privatización y se aseguró el pago de la onerosa deuda externa. Entre 1982 y 1990 se enajenaron por este concepto 773 mil millones de dólares y el monto de la deuda en ese lapso pasó de 220 mil millones a 441 mil millones de dólares.

Ahora, por primera vez en la historia latinoamericana, no solo la liberalización política se convirtió en una tendencia predominante en todo el hemisferio, con el consecuente fortalecimiento de la hegemonía de los sectores vinculados al mercado y al gran capital, sino que también las relaciones gubernamentales de América Latina con Estados Unidos alcanzaron un nivel de identificación y sintonía sin precedentes.

Como resultado de estas políticas neoliberales, antes de concluir sus mandatos la mayoría de estos gobiernos surgidos de procesos electorales debió enfrentar profundas crisis económicas. Ello se expresó en un creciente desempleo, alza de los precios de los productos básicos, caída de los salarios reales, aumento de las enfermedades, desnutrición de sectores importantes de la población, entre otros efectos negativos. En ciertos casos, este tétrico panorama se vio agravado por escándalos de corrupción que socavaron la credibilidad del restablecido sistema «democrático representativo».

En estos años ochenta, que los economistas denominaron la década pérdida, América Latina comenzó a padecer la crisis más profunda y prolongada desde el *crack* de 1929. Como prueba de ello, solo entre 1981 y 1991 el PIB per cápita de la región descendió 8.1%. En algunos países latinoamericanos el declive fue mucho más acentuado que el indicado por esta cifra promedio: 28% en Perú, 20% en Argentina y 17% en Venezuela.

Si en 1950 América Latina contribuía al 14% del PIB mundial, en 1998, incluido Brasil, representaba solo el 8.8% y en el mismo lapso su participación en el comercio mundial pasó del 12% al 3.5%. Las implicaciones sociales de este proceso de deterioro constante de la economía fueron verdaderamente alarmantes: en 1980 el 41%, esto es, 136 millones de latinoamericanos vivía en la pobreza, cifra elevada a 170 millones (43%) en 1986.

DE LA APERTURA CONTROLADA A LA NEGOCIACIÓN EN CENTROAMÉRICA

Otra característica de los años ochenta fue que Estados Unidos pretendió utilizar en provecho de sus planes contrainsurgentes la atmósfera civilista existente entonces en América Latina, fraguando para ello inconsistentes aperturas políticas, tal como indicaron las elecciones presidenciales diseñadas entonces para la convulsionada zona de Centroamérica y que llevaron a la presidencia a Roberto Suazo Córdoba en Honduras (1982-1986), a José Napoleón Duarte en El Salvador (1984-1989) y a Vinicio Cerezo en Guatemala (1986-1991).

En El Salvador el creciente desprestigio de las fuerzas armadas salvadoreñas por la flagrantes violaciones de los derechos humanos –el ejército bombardeó áreas densamente pobladas en 1989 y uno de sus batallones especiales cometió el brutal asesinato de seis académicos jesuitas de la Universidad Centroamericana–, obligó al Congreso de Estados Unidos a recortar en junio de 1990 la ayuda a este país. En estas condiciones, el gobierno salvadoreño, ahora en manos del sector más moderado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), encabezado por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), se vio compulsado a abrir negociaciones con el FMLN, en medio del empantanamiento del conflicto militar.

Dentro del FMLN, que había iniciado lo que sería su última gran ofensiva militar el 11 de noviembre de 1989, ya había desaparecido de su dirección, en los trágicos sucesos del 6 y 12 de abril de 1983, el sector más intransigente y dogmático en la aplicación de las tesis de la lucha armada. Ello fue resultado del asesinato de Mélida Anaya Montes, segunda jefa de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el suicidio de su jefe Salvador Cayetano Carpio, *Marcial*, quien era su principal sostén.

La expresión programática de la evolución política del FMLN hacia una negociación fue la adopción de la *Plataforma de Gobierno de Amplia Participación* (GAP), hecha pública el 31 de enero de 1984, que sustituyó a la más radical de cuatro años atrás denominada *Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario*. En

el nuevo programa se eliminaba la exigencia de la disolución de las fuerzas armadas y se abría la posibilidad de una negociación política para buscar una solución pacífica al conflicto.

Los antecedentes del proceso de paz en El Salvador estaban en las reuniones que en 1986 y 1987 celebraron los presidentes centroamericanos en Esquipulas I y II, aunque las negociaciones entre las partes solo comenzaron en México, en septiembre de 1989, con el patrocinio de la ONU. Ello permitió alcanzar el acuerdo de Ginebra en abril de 1990 y de México un año después.

Los pactos se concretaron finalmente mediante el Acuerdo de Paz de Chapultepec (México), el 16 de enero de 1992, que permitió abrir el proceso de desmovilización de las guerrillas, su reinserción en la sociedad y en la política salvadoreña. Los acuerdos incluían la depuración del ejército y la formación de una nueva policía y se reconocía al FMLN como partido político.

Para el caso de Guatemala, la apertura controlada partió de una asamblea constituyente (1984), que elaboró otra carta magna –reconoció ciertos derechos de los trabajadores– y propició el regreso de algunos exiliados, en particular de filiación socialdemócrata. También fueron aprobadas nuevas leyes electorales e instituciones (Corte Constitucional, Tribunal Supremo Electoral Independiente, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.). En ese ambiente, se realizaron los comicios presidenciales de noviembre y diciembre de 1985 que dieron el triunfo, en la segunda ronda, a Vinicio Cerezo Arévalo.

El gobierno de Cerezo, el primer presidente civil en veinte años, se inició el 14 de enero de 1986, aunque su política se vio afectada por la falta de recursos económicos, de créditos internacionales y por la enorme influencia del ejército. Esto último estaba en consonancia con los acuerdos que le permitieron a Cerezo llegar al poder, que concedían inmunidad a los militares comprometidos con los crímenes de guerra y creaban una democracia electoral formal, en la que las fuerzas armadas seguirían ejerciendo un verdadero control del país.

A pesar de su estrecho margen de maniobra, Cerezo pudo iniciar negociaciones con las organizaciones revolucionarias mediante

una Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), encabezada por monseñor Rodolfo Quezada Toruriño, surgida como parte del plan de paz para la región de Esquipulas II. Estos primeros contactos entre el gobierno y la guerrilla en más de un cuarto de siglo, aceptados por el ejército, permitieron la firma en Oslo, el 29 de marzo de 1990, de un acuerdo básico para la búsqueda de la paz en Guatemala suscrito por el CNR, los partidos políticos y la URNG.

Pero el avance de una verdadera democratización y del proceso de paz se vio limitado por la incontrolada represión del ejército en las zonas rurales y la incesante violación de los derechos humanos por la policía, las bandas paramilitares y escuadrones de la muerte

Su sucesor, el conservador Jorge Serrano Elías, cediendo a la intensa presión internacional, presentó una propuesta de *Plan Total de Paz*, el 3 de abril de 1991, que por primera vez reconocía a la guerrilla como contraparte y permitía el regreso de los refugiados.

Además, Serrano Elías reunió la primera comisión negociadora que incluyó a oficiales del ejército. Pero las conversaciones con los representantes de las guerrillas, a pesar de un acuerdo de reconciliación firmado en Querétaro el 25 de julio de ese año, se desarrollaron con altibajos y terminaron otra vez en un callejón sin salida, debido a los incumplimientos del gobierno y las fuerzas armadas, así como por sus constantes violaciones de los derechos humanos.

Además, el frágil gobierno de Jorge Serrano no lograba consolidarse, acorralado por la oposición parlamentaria y la agudización de la crisis económica. Para resolver la situación política, y creyendo contar con el respaldo incondicional de los altos mandos militares, el presidente dio un autogolpe de Estado el 25 de mayo de 1993, imitando el de Alberto Fujimori en Perú. Tras disolver el Congreso y derogar la constitución de 1985, la Corte Suprema y otras instituciones, estableció un precario régimen dictatorial que terminó por hacerle perder el respaldo militar, en medio de la oposición generalizada –incluida la de Estados Unidos y la Unión Europea–, obligándolo finalmente a buscar refugio en Panamá.

Para salir de la crisis institucional, el restablecido Congreso Nacional escogió como nuevo mandatario, el 5 de junio de 1993, a Ramiro de León Carpio, procurador de los derechos humanos, a

pesar de que no pertenecía a ningún partido ni contaba con una base política propia. El presidente Carpio, llegado al poder con cierta popularidad, emprendió, bajo la presión de los empresarios, una fuerte cruzada para limpiar el Legislativo y el Tribunal Supremo, órganos desprestigiados por la abierta corrupción.

Gracias a la mediación de la Iglesia, el nuevo mandatario pudo convocar a elecciones legislativas que permitieron el retorno de la legalidad y la renovación del parlamento el 14 agosto de 1994. A pesar de la extrema debilidad del gobierno de León Carpio, el principal logro de su mandato fue el avance conseguido en el proceso de paz, favorecido por la coyuntura internacional creada tras la caída del socialismo en Europa Oriental y por el consenso nacional existente a favor de una solución negociada con la URNG que permitiera estabilizar al país. En 1994 ello se concretó con la firma en México y Oslo de los acuerdos de derechos humanos (29 de marzo), de restablecimiento de personas desplazadas (17 junio), de esclarecimiento histórico (23 de junio) y sobre identidad y derechos indígenas (31 de marzo).

En definitiva, correspondió al gobierno de Álvaro Arzú, miembro de una familia de la vieja oligarquía guatemalteca, culminar con éxito en 1996 el proceso negociador, que había sido el eje de su campaña electoral. Este resultado fue posible debido a que el presidente Arzú contaba con un cierto consenso entre la burguesía y tenía mayor autoridad frente a las pretensiones de los militares que sus predecesores, como se comprobó en los primeros meses de su gobierno con la destitución de ocho generales y otros altos oficiales acusados públicamente de corrupción.

Otra prueba de su mayor fortaleza política fue el viaje secreto del mandatario guatemalteco a México, para reunirse con representantes de la guerrilla (25 de febrero de 1996) y que permitió que al mes siguiente la URNG determinara unilateralmente el cese al fuego. En definitiva, el 29 de diciembre de ese mismo año, se firmó de manera solemne el *Acuerdo de Paz Firme y Duradero*, que puso fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala.

Los mismos acuerdos permitían la desmovilización guerrillera, el regreso de los refugiados, la reducción del ejército en un

tercio de sus efectivos, la eliminación del poderoso Estado Mayor Presidencial y la creación de una policía civil. El fin de la guerra dejó como terrible balance una sociedad desgarrada, con más de 150 mil muertos y 50 mil desaparecidos, además de cientos de miles de refugiados en el exterior –fundamentalmente en México y Estados Unidos–, lo que ubicó a Guatemala en el primer lugar de los países afectados por la violencia.

La terminación de la sangrienta guerra civil en El Salvador y Guatemala tenía que ver de manera directa con el brusco giro que había tenido lugar a principios de la década del noventa en la correlación de fuerzas internacionales. Nos referimos a la crisis del socialismo europeo y la desintegración de la URSS, que en el plano regional estuvo acompañado de la derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y el recrudecimiento del bloqueo y el aislamiento de la revolución cubana.



CAPÍTULO 14

DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL A LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

A partir de los radicales cambios ocurridos con el desplome del socialismo en Europa oriental y la desaparición de la Unión Soviética, acontecimientos de profundas repercusiones a escala internacional, se abrió a principios de los noventa, otro período en la historia de América Latina. La nueva etapa histórica nació marcada por la conversión de Estados Unidos en única superpotencia, que vino acompañado de la imposición de un orden mundial, de signo unipolar, basado en la omnipresencia de mercado, el capitalismo salvaje, la desideologización y el pensamiento único neoliberal.

La época de auge revolucionario abierta con el triunfo de Cuba en 1959, marcada por los avances del movimiento de liberación nacional y de las luchas por un orden social y económico más justo, sufrió un duro revés en la última década del siglo XX, dando lugar a un significativo retroceso de las fuerzas progresistas. Sin embargo, con el inicio del nuevo milenio, la situación latinoamericana dio un giro inesperado, a partir de la revolución bolivariana en Venezuela, que despejó el camino a una serie de transformaciones democráticas, populares y sociales a nivel continental que han puesto en crisis la hegemonía liberal, cuestionando la dependencia de Estados Unidos.

AUGE DEL NEOLIBERALISMO Y DE LA HEGEMONÍA UNIPOLAR DE ESTADOS UNIDOS

En medio de un intolerante ambiente ideológico neoliberal y cuando comenzaba la crisis del socialismo europeo, este período histórico se inauguró en América Latina con la inescrupulosa agresión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989. La violenta invasión de los *marines* norteamericanos puso fin a los últimos vestigios del nacionalismo torrijista con el pretexto de la democratización y la lucha contra el «narcotráfico».

Sin embargo, la intervención de Estados Unidos en este estratégico territorio de nuestra América no pudo impedir que la importante vía interoceánica pasara finalmente a la soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento del Tratado Torrijos–Carter. Esta fue la primera intervención norteamericana en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo desprovista de la cobertura de la Guerra Fría y también la primera en que se usó el pretexto del narcotráfico para justificar la presencia militar de Estados Unidos en la región.

En cierto modo, la sorpresiva situación internacional creada por el cambio de la correlación de fuerzas, a raíz de la desaparición del campo socialista y la Unión Soviética, también repercutió en la derrota electoral del Frente Sandinista (FSLN) en Nicaragua el 25 de febrero de 1990. En los comicios presidenciales, la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Barrios de Chamorro ganó con el 51.5% de la votación al comandante sandinista Daniel Ortega, que solo consiguió el 38.4% de los sufragios, cuya popularidad se había debilitado, como se ha dicho, por los efectos de una guerra sucia de casi diez años promovida por Estados Unidos contra la revolución nicaragüense.

La desfavorable coyuntura histórica creada al movimiento revolucionario y de liberación nacional, junto a la imposición de un pensamiento único neoliberal, favorecieron también los planes norteamericanos para aislar e intentar destruir a la revolución cubana –enmienda Torricelli (1992), primero, y después, mediante la Ley Helms-Burton (1996)–, constituyendo la más grave amenaza a

su existencia desde 1959. A pesar de ello, el proceso cubano se logró mantener enhiesto y continuó los esfuerzos por seguir adelante con su singular proyecto revolucionario, en medio de dificultades económicas sin precedentes, provocadas también por la repentina pérdida de mercados y créditos al desaparecer el de los países socialistas, denominado Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), al que Cuba estaba asociado desde 1972, y la propia URSS.

En ese contexto, muchos de los gobernantes latinoamericanos coincidían entonces en promover el mismo tipo de economía «desregularizada» de mercado libre: privatización del patrimonio estatal, drásticos recortes del gasto social, franquicias sin límites a la extracción de utilidades por el capital extranjero, etc. Ello hizo de América Latina fácil presa de un mundo industrial fortalecido por la creciente globalización de la economía y la tendencia a la formación de macro bloques capitalistas.

El desmontaje del sector estatal de la economía por gobiernos de origen electivo que desarrollaron políticas en beneficio exclusivo de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y en perjuicio de las amplias mayorías, crearon un espectacular deterioro de las condiciones de vida de la población. El resultado fue el mismo en todo el continente: reconcentración de la riqueza, ampliación del número de marginados y acentuación de las deformaciones estructurales.

El incumplimiento de las expectativas de mejoramiento social y económico generadas en muchos países de América Latina con el ascenso al poder desde los años ochenta de gobiernos civilistas y constitucionales, junto al crecimiento de la corrupción administrativa y al desenfrenado robo de los fondos públicos, llevaron al descrédito de los gobiernos «democrático-representativos» y a la ingobernabilidad. Otra consecuencia de este proceso fue una marcada reprimarización y terciarización de la estructura productiva de América Latina, con la parcial excepción de Brasil.

El terrible cuadro de América Latina a comienzos del siglo XXI se desprende de los siguientes datos proporcionados por instituciones internacionales como la CEPAL y el FMI: en el 2002 el crecimiento del PIB por habitante fue negativo (-1.9%), por lo que la región acumuló media década de baja expansión (-0.3% del PIB). Además,

entre 1999 y el 2003, todos los países latinoamericanos registraron un decrecimiento del PIB –con las excepciones de México y Chile que registraron el 1% positivo en el mismo lapso–, siendo los casos más extremos los de Uruguay y Argentina (–2.6%) y Venezuela (–5%), aunque estos dos últimos países registraron significativos repuntes en este indicador al cierre del 2004, tras abandonar la catastrófica política neoliberal.

Como resultado de la desenfadada política neoliberal, a comienzos del siglo XXI el producto por habitante en América Latina era prácticamente el mismo que en 1980, por lo que puede hablarse de más de dos décadas perdidas para el desarrollo debido al ajuste y la política neoliberal. Además, según los datos de la propia CEPAL, 220 millones de latinoamericanos eran considerados como pobres –la mitad de ellos en condiciones de extrema pobreza– de una población total calculada, a comienzos del siglo XXI, en 500 millones, o sea casi la mitad del total.

A ello debe agregarse que el 9% de la fuerza de trabajo estaba desempleada, alcanzando en algunos países entre el 15% y el 18% (Argentina y Brasil). Para completar este cuadro desolador, la deuda externa de la región ya bordeaba en el 2002 los 725 mil millones de dólares.

En consecuencia, América Latina se convirtió en la región del planeta con la más marcada diferenciación entre ricos y pobres, estos últimos hacinados en tugurios o barrios precarios que solo les brindaban las condiciones mínimas para sobrevivir. Según las estadísticas, 227 millones, o sea el 44% de los latinoamericanos eran pobres al finalizar el siglo XX y de ese total 20% en condiciones de extrema pobreza, 14 millones más que los existentes a comienzos de los noventa. Además, si en 1950 América Latina contribuía con el 14% del PBI mundial, para 1998 la región solo representaba el 8%, mientras que su participación en el comercio mundial descendió en el mismo lapso del 12% al 3.5%.

De esta manera, el panorama latinoamericano se hizo más complejo y difícil como consecuencia del evidente fracaso del modelo económico neoliberal y de la redoblada agresividad del imperialismo norteamericano. En esa coyuntura, Estados Unidos se vio libre de

ataduras, compromisos y limitaciones legales para imponer su *diktat*, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, aprovechando los trágicos sucesos del World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Otra característica de la década del noventa, determinada en gran medida también por el contexto internacional de descalabro del socialismo europeo y de la nueva correlación internacional de fuerzas, fue la generalización de un clima de negociación entre fuerzas antagónicas de derecha e izquierda. Como resultado de estos procesos, en varios países latinoamericanos se puso fin a una persistente lucha guerrillera y a largos enfrentamientos civiles que parecían insolubles, como ocurrió en El Salvador (1992) y Guatemala (1996), y que fueron analizados en el capítulo anterior, aunque en el caso de Colombia no pudieron conseguirse entonces resultados equivalentes a los de América Central.

LA PERSISTENTE VIOLENCIA EN COLOMBIA

En esta agobiada nación norandina el proceso negociador registró también inicialmente ciertos progresos, del que fue principal protagonista el Movimiento 19 de Abril (M-19), organización político-militar de corte nacionalista. Esta agrupación había surgido como brazo armado de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido creado en 1965 por el ex dictador general Rojas Pinilla y conducido tras su muerte por su hija María Eugenia Rojas.

El M-19 aceptó abandonar la lucha guerrillera en marzo de 1990 después de perder a sus principales fundadores, Jaime Bateman e Iván Marino Ospina en 1983, convirtiéndose en un partido político más bajo la conducción de Antonio Navarro Wolf.

A esta desmovilización también se acogió el Movimiento Guerrillero Quintín Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), pero no abarcó a todos los movimientos armados.

La desmovilización de estas fuerzas, determinó la desaparición de la Coordinadora Guerrillera «Simón Bolívar», surgida en 1987

en el momento de mayor auge de la lucha armada en Colombia. Una parte minoritaria del propio EPL, así como las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguieron adelante con su estrategia militar para alcanzar el poder. Fruto de estas negociaciones fue también la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó en 1991 y que dio al país una nueva carta magna.

Pero ni el abandono de la lucha armada por un grupo de organizaciones político-militares ni tampoco la nueva carta magna pusieron fin a la violencia en Colombia. En gran parte era ocasionada por las actividades de los narcotraficantes, que siguió cobrando miles de víctimas, sobre todo entre dirigentes de la izquierda, como Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica, asesinado en 1990, y Carlos Pizarro del M-19, en 1991.

Entretanto, el gobierno de César Gaviria, extendido de 1990 a 1994, lograba anotarse ciertos triunfos espectaculares al desarticular en 1993 al más grande imperio de la droga con la muerte, a manos de la policía, de Pablo Escobar Gaviria, quien como jefe del cartel de Medellín había desatado una verdadera guerra contra el Estado colombiano. No obstante, los enfrentamientos gubernamentales con las guerrillas encabezadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), dirigidas hasta su muerte en 2008 por el veterano comandante Manuel Marulanda Vélez, *Tirofijo*, y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –que hoy encabeza el comandante Nicolás Rodríguez Bautista–, no se han detenido.

Pese a todas las negociaciones de paz y ofensivas militares desarrolladas por los siguientes mandatarios, Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006) –quien sancionó la polémica Ley de Conmoción Interior y otorgó facultades extraordinarias al ejército–, así como las amenazas norteamericanas de intervención directa (Plan Colombia) con el nuevo argumento de combatir el narcotráfico, las guerrillas colombianas –alzadas desde los años cuarenta– siguen activas hasta el presente.

La política de confrontación del presidente Uribe, reelegido en 2006 con el 62.5% de los votos tras aprobarse una reforma constitucional, convirtió a Colombia en el tercer receptor mundial de

ayuda militar de Estados Unidos. Ello le permitió al mandatario colombiano profundizar este viejo conflicto interno, agravado aún más cuando el propio Uribe calificó a sus antiguos interlocutores de terroristas, para que fueran incluidas en la cruzada mundial de la administración de George W. Bush (2001-2009).

En su incesante persecución a las guerrillas, el presidente colombiano ordenó atacarlas dentro del territorio de Ecuador el 1 de marzo de 2008, lo que ocasionó el bombardeo y la muerte de un pequeño grupo guerrillero de 17 combatientes encabezado por el comandante Raúl Reyes, uno de los jefes más conocidos de las FARC-ELP. La agresión al vecino país desató una crisis internacional de grandes proporciones, que solo logró ser sofocada por la reacción concertada de los países latinoamericanos en una reunión del Grupo de Río celebrada en Santo Domingo una semana después. Con posterioridad, otros jefes guerrilleros cayeron víctimas de la incesante persecución gubernamental, como fueron los casos de Víctor Julio Suárez, *Mono Jojoy*, y Alfonso Cano, en 2010 y 2011 respectivamente.

Fue durante el largo régimen de Uribe que se constituyó en 2005 el Polo Democrático Alternativo (PDA), que tuvo como antecedente la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón en 2002 y su posterior elección, dos años después, como alcalde de Bogotá. El PDA agrupó a diversas organizaciones de izquierda, entre ellas el Polo Democrático Independiente (PDI) –donde ocupaban sitio algunos sectores del M-19 y otros grupos guerrilleros desmovilizados y miembros de la Alianza Nacional Popular (ANAPO)– y Alternativa Democrática, este último integrado por comunistas, socialistas y agrupaciones defensoras de los derechos humanos. EL PDA logró en las elecciones presidenciales de 2006 el 22% de la votación con su candidato Carlos Gaviria.

Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos en 2010, y pese a sus antecedentes como ministro de Defensa de Uribe, la situación colombiana dio un giro inesperado. Gracias a los buenos oficios de Noruega, Cuba, Venezuela y otros países, se iniciaron conversaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-Ejército del Pueblo (EP),

ahora dirigidas por el comandante Rodrigo Londoño, *Timochenko*, que han abierto la esperanza –junto a la anunciada apertura de un proceso similar con el ELN– de conseguir a corto plazo, mediante una solución negociada, la paz en este agobiado país de nuestra América.

NEOLIBERALISMO EN PERÚ Y DERROTA DE SENDERO LUMINOSO

A la extinción en los noventa de los principales focos guerrilleros existentes en América Latina, como resultado de procesos negociadores, debió sumarse la casi completa derrota sufrida por Sendero Luminoso en Perú durante 1992 bajo los golpes del gobierno de Alberto Fujimori. El 5 de abril de ese año, con apoyo de los altos mandos del ejército, Fujimori suspendió todas las garantías constitucionales, disolvió el parlamento y el Poder Judicial, y puso en vigor una nueva carta magna que le permitió reprimir sin obstáculos legales a los senderistas –incluso capturar a su jefe Abimael Guzmán el 15 de septiembre de 1992– y legitimar su poder, a pesar del repudio internacional al autogolpe de Estado.

Gracias a una flamante constitución, y a los relativos éxitos de su política económica, iniciada con un sorpresivo «paquetazo» neoliberal en agosto de 1990, combinado después con algunos proyectos sociales y obras de infraestructura, Fujimori pudo conseguir que Perú alcanzara durante un tiempo un envidiable récord antinflacionario y un cierto crecimiento. Con ese aval se reeligió en abril de 1995.

Sin embargo, cinco años después su régimen cayó envuelto, tras una cuestionada tercera reelección presidencial, en medio del desprestigio provocado por las revelaciones, en septiembre de 2000, de las manipulaciones ilegales de su principal asesor para la seguridad y verdadero cerebro gris del presidente, Vladimiro Montesinos. Este individuo sobornaba a los opositores con fondos gubernamentales y fue el responsable, junto con el propio Fujimori, de una década de gobierno de mano dura con el irrestricto apoyo de los militares.

Una trágica muestra fue el asesinato, en abril de 1997, del comando de catorce militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que había capturado un nutrido grupo de rehenes en la embajada de Japón en Lima. A estos elementos, habría que sumar los efectos que a largo plazo trajo la «modernización» fundamentada en la apertura al libre mercado, que convirtió a Perú en uno de los países más pobres y desiguales de América Latina.

Tras el breve interinato de Valentín Paniagua, llegó al poder el 28 de julio de 2001 el líder opositor Alejandro Toledo –gracias a su origen humilde social y a un discurso cargado de promesas demagógicas–, quien en poco menos de un año debió enfrentar una grave crisis gubernamental por incumplir sus propuestas electorales con la privatización de empresas eléctricas del Estado. Ello despertó airadas manifestaciones populares en el sur peruano, a mediados del 2002, que echaron por tierra este controvertido acápite del proyecto neoliberal de Toledo y que se convirtieron en un punto de quiebre en su administración.

De ahí en lo adelante, la popularidad de este mandatario cayó en picada –bajó al 7%–, mientras se sucedían las protestas populares, las denuncias de corrupción y fraude electoral, que condujeron a prisión a la propia hermana de Toledo. A complicar el panorama peruano contribuyó el inesperado resurgimiento de los antiguos seguidores de Fujimori y, sobre todo, el nuevo despertar del indigenismo. En ese contexto, surgió la declarada aspiración de reconstruir la extinta nación aymará, en cuyo primer congreso participaron el antiguo líder campesino Hugo Blanco y el dirigente nacionalista Antauro Humala, quien había encabezado en 2005 una rebelión militar en Andahuaylas.

En 2006 regresó al poder Alan García, del Partido Aprista Peruano (APRA), tras derrotar a Ollanta Humala, hermano de Antauro, quien enarbó un programa nacionalista de corte social que le dio la victoria en la primera vuelta electoral 25.6% frente a 20.4%. Sin embargo, en la segunda ronda de los comicios, Ollanta Humala fue derrotado por el candidato aprista –52.6% frente a 47.3%–, apoyado por todas las fuerzas conservadoras y tradicionales del país.

El gobierno de Alan García desarrolló una política neoliberal sin cortapisas –firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos– que agravó la situación social del país, en particular tras la depresión que afectó la economía norteamericana desde 2008. Ello trajo aparejado huelgas y grandes manifestaciones en su contra, como las provocadas por los escándalos por los sobornos de la Discover Petroleum, que obligaron a la renuncia del primer ministro Jorge del Castillo.

En 2010 el recién creado Partido Nacionalista de Ollanta Humala, de composición y programa heterogéneo, formó con pequeñas organizaciones y movimientos de izquierda la Alianza Gana Perú, con el respaldo de Ciudadanos por el Cambio y Unidad de Izquierda, esta última integrada por el Partido Comunista, el Partido Socialista de Javier Diez Canseco y el Partido Socialista Revolucionario. Esta coalición electoral permitió el triunfo en las elecciones del 2011 del ex comandante Ollanta Humala.

Pero una vez en el poder, el flamante gobernante fue acosado por las élites y una feroz campaña mediática en su contra, tal como había ocurrido durante sus contiendas electorales. Como resultado de ello, y de los compromisos adquiridos para llegar al poder, el presidente Humala fue abandonando sus promesas, así como a sus aliados de izquierda, y aceptando un programa neoliberal, que le ha ido restando apoyo entre los sectores más humildes de la sociedad.

EL NEOLIBERALISMO EN BRASIL: DE COLLOR DE MELLO A CARDOSO

Uno de los países donde con mayor intensidad se hizo sentir la política neoliberal fue en Brasil. Según cifras oficiales, en 1987 los brasileños ubicados por debajo de los niveles de pobreza llegaban ya a 33 millones, o sea, el 25% de la población. En estas condiciones, contando con el respaldo de los sectores acaudalados y de los principales medios de difusión, y valiéndose de un programa social demagógico, Fernando Collor de Mello pudo vencer en 1990 al candidato opositor Luiz Inácio, *Lula*, da Silva del Partido de los Trabajadores

(PT), una organización popular surgida en 1980 para enfrentar la dictadura militar y que esgrimía una propuesta de cambios radicales para la sociedad brasileña.

Establecido en el poder, Collor de Mello olvidó su retórica electoral populista y lanzó un aparatoso programa económico neoliberal basado en la desregulación, en privatizaciones masivas y en la determinación de precios y salarios por parte del mercado. Como resultado de su política económica, en junio de 1992 el presidente brasileño no solo debió enfrentar el creciente descontento popular ante la persistente caída de la producción industrial y el continuado deterioro del nivel de vida, sino también una investigación parlamentaria por cargos de corrupción. En medio de su absoluto desprestigio, el presidente Collor de Mello debió entregar el poder a Itamar Franco, el 29 de diciembre de 1992, tras un juicio político en el congreso federal.

El nuevo ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, para paliar la grave situación de la economía y conseguir la estabilidad monetaria, implementó entonces el *Plan Real*, cuyo relativo éxito le abrió las puertas a la primera magistratura dos años después. Sin duda, la clave de la precaria estabilidad conseguida por el presidente Cardoso, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), residió, pese a visibles incongruencias, en el mantenimiento del apoyo gubernamental a las industrias competitivas, la protección de las exportaciones y una cierta resistencia a la completa liberalización comercial.

Ubicado en la presidencia desde 1996, Cardoso, pretextando medidas provisionales, enfrentó la huelga de los obreros del petróleo con fuerzas del ejército, suspendió el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la represión militar, liquidó la exoneración tributaria a una serie de asociaciones sociales y dejó desamparados a los jubilados. Además, llevó adelante un proceso de privatizaciones del sector estatal de la economía –entre ellas las telecomunicaciones y la venta de la mayor productora y reserva de minerales de América Latina, la Vale do Río Doce (VALE)–, en beneficio de los bancos y de las grandes empresas nacionales y extranjeras, cancelando los proyectos de apoyo a los campesinos para liquidar los 1500 asentamientos del vigoroso Movimiento de los Sin Tierra (MST).

No obstante, Cardoso logró reelegirse en los comicios de 1998 frente a Lula, de nuevo principal candidato opositor. Durante su segundo mandato, se deterioró la situación económica, pues la indiscriminada apertura comercial y financiera, unida a las privatizaciones, no dieron resultado. Para contener la acelerada fuga de capitales, Cardoso dictó una fuerte desvalorización del real y solicitó un nuevo préstamo al FMI, mientras la deuda pasaba de más de 148 mil millones de dólares (1994) a 241 mil millones (1999).

Como lamentable saldo de su administración, en Brasil –la décima economía del mundo– se acentuó la concentración de los ingresos –el 1% de la población poseía recursos equivalentes al 50% de los más pobres–, cuando contaba ya con unos 53 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza, 30 de ellos en condiciones paupérrimas. El descontento popular por la terrible situación se expresó en el 2002 mediante grandes movilizaciones para llevar a plebiscito el tema de la deuda y en contra de la firma del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), promovido por Estados Unidos.

EL ALCA: UNA PROPUESTA NEOPANAMERICANA DE ESTADOS UNIDOS

El ambiente neoliberal dominante llevó a la mayor parte de los gobiernos de América Latina a ir aceptando un tratamiento bilateral al problema de la deuda externa; cediendo ante las presiones de Washington en cuestiones vitales de soberanía –léase narcotráfico– y encaminando sus economías a la virtual absorción por la norteamericana –el caso de México y el Tratado de Libre comercio (TLC) firmado en 1993 con Estados Unidos y Canadá fue paradigmático–, en perjuicio de los viejos sueños bolivarianos de unidad latinoamericana. Con su renovada política panamericana, Estados Unidos buscaba articular a las débiles naciones de América Latina a su poderosa economía mediante acuerdos bilaterales y asimétricos, aunque limitando la «integración» al libre movimiento del capital, las mercancías y los servicios.

Para su incorporación a la propuesta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que pretendía abarcar desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, los países de América Latina debían cumplir una serie de exigencias formales, entre ellas el establecimiento pleno de la «democracia representativa» y las elecciones periódicas. Además, debían sacrificar sus producciones menos competitivas, abandonar los programas sociales y la defensa de sus valores culturales más autóctonos, así como ceder incluso en vitales cuestiones de soberanía.

A favor del ALCA actuaba la endémica dependencia financiera de América Latina respecto de Estados Unidos y el capital transnacional. También las expectativas económicas y comerciales despertadas por determinados proyectos de factura norteamericana, como el propio ALCA, y los tratados bilaterales de libre comercio.

El desarrollo del ALCA, verdadero proyecto neopanamericano, tuvo lugar a contrapelo de las tendencias integracionistas de América Latina que aún subsistían y que, a duras penas, persistían en alcanzar el ideal de una región unida e independiente, expresada sobre la base de una posible convergencia de diversos intentos de regionalización y de subregionalización. Este proceso, que había comenzado tímidamente en los sesenta con los llamados tratados de «primera generación» –Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Mercado Común Centroamericano (MCCA), Pacto Andino y Comunidad del Caribe– pasó en los ochenta y noventa a una nueva fase o «segunda generación», de lo que fueron exponentes el Mercado Unificado del Sur (MERCOSUR), la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Mercado Común Caribeño (CARICOM) y el G-3 (México, Venezuela y Colombia).

Pero este débil avance de los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe –contrapuesto a la tendencia de muchos gobiernos latinoamericanos a negociar su inmediato ingreso individual al ALCA–, puso el acento, con muy pocas excepciones, en el mercado y la libertad de comercio, menospreciando los aspectos políticos, sociales y culturales. Por estos motivos, el latinoamericanismo dominante se había expresado a fines del siglo xx y principios del XXI, como tendencia más generalizada, en proyectos de integración

basados en las reglas del mercado, la desregulación, la privatización y la liberalización comercial, que implícitamente proponían una modalidad subordinada a escala continental.

Desde el punto de vista político, los intentos de concertación regional, como las cumbres iberoamericanas, iniciadas en Guadalajara (México) en septiembre de 1991, ofrecieron solo algunos pocos resultados tangibles, pues carecieron del vigor y la voluntad para frenar el redespigüe agresivo de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno norteamericano impulsaba la celebración sucesiva de las llamadas cumbres de las Américas, celebradas en Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Quebec (2001), Monterrey (2004), Trinidad (2008) y Cartagena (2012). De todas ellas, Cuba fue excluida, aunque en las dos últimas cumbres, en el nuevo contexto creado en América Latina a partir del triunfo de la revolución bolivariana en Venezuela, se ha ido fortaleciendo el rechazo a las posturas hegemónicas de Estados Unidos junto a la exigencia de la participación cubana.

MÉXICO Y LOS NEFASTOS EFECTOS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Uno de los países donde más daño ha causado la desaforada política neoliberal es México, hundido cada vez más en una profunda crisis social, económica y política, tras el completo abandono de los viejos postulados nacionalistas y sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De alguna manera, ese proceso comenzó a advertirse con la salida del ala izquierda del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, en las postrimerías del mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988) y que llevó a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto último a raíz de la cuestionada elección presidencial de 1988.

Desde esa fecha y hasta finalizar el siglo xx, la adopción de desembizadas prácticas neoliberales por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), agravó los agudos problemas sociales de México y desestabilizó los mecanismos tradicionales de poder, reflejado en varios asesinatos políticos. Entre

ellos el del candidato presidencial del propio PRI a las elecciones de 1994, Luis Donaldo Colosio, lo que vino casi aparejado con la drástica devaluación de la moneda nacional en diciembre de ese mismo año.

La respuesta más inesperada provino del levantamiento guerrillero del hasta entonces desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) –que tiene de vocero al subcomandante Marcos– en la selva Lacandona en Chiapas, el 1 de enero de 1994. Tras la toma por los rebeldes indígenas chiapanecos de las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtan y Chanal, se emitió la *Declaración de la Selva Lacandona*, un sentido llamado a la lucha por la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos.

En estos hechos, como también se revelaría después en otros países latinoamericanos, con especial fuerza en Ecuador y Bolivia, se puso de relieve el papel protagónico adquirido por sujetos sociales aparentemente adormecidos, como el movimiento indígena. Los pueblos originarios reclamaron su lugar protagónico, con sus cuestionamientos implícitos o explícitos a la tradicional soberanía territorial de los estados y sus aspiraciones de autodeterminación para las etnias autóctonas, tras más de cinco siglos de dominación ininterrumpida.

Todos estos acontecimientos allanaron el camino para que en el 2000 se produjera, por primera vez desde la revolución mexicana de principios de siglo, la derrota del partido de gobierno (PRI) con el ascenso a la presidencia de Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional (PAN). Aunque Fox, como el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, fue calificado eufemísticamente por algunos politólogos como «neoliberales de segunda generación», por su declarada intención de combinar las recetas del FMI con ciertas preocupaciones sociales, en realidad este gobernante mexicano se inclinó cada vez más a la subordinación de su política a los intereses norteamericanos y a la aplicación de prácticas neoliberales.

Durante el gobierno de Fox se asentó en el poder una camarilla de ultraderecha, conocida como «el yunque», lo que facilitó se aprobaran leyes contra los derechos indígenas, se privatizaran más empresas estatales, se entregara la minería a grupos extranjeros y se

vendieran los dos mayores bancos del país a instituciones foráneas: el Citibank y el grupo español Bilbao Vizcaya (BBVA). Otro de sus proyectos a gran escala fue el Plan Puebla-Panamá (PPP), dado a conocer en el 2001, que contaba con el aval de poderosos organismos financieros internacionales y apuntaba a favorecer las operaciones e inversiones de las grandes corporaciones transnacionales y los grupos empresariales locales en toda Mesoamérica.

El principal contrapeso opositor a la política neoliberal de Fox, pues el PRD había ido moderando su tono y acomodándose como una fuerza parlamentaria más, provino del nuevo gobernador del super poblado DF, Andrés Manuel López Obrador. Distanciado de una parte de la dirigencia de su propio partido, el PRD –así como de sus sectores corruptos–, el gobernador de la capital atrajo a los opositores descontentos, benefició la acumulación de empresarios locales, atendió mediante el diálogo los complejos problemas de la ciudad y se convirtió en una verdadera fuerza social alternativa. Además, desarrolló un amplio programa de beneficio popular con el lema «Por el bien de todos, primero los pobres»,¹ que contribuyó también a convertirlo en el candidato natural del PRD a los comicios presidenciales del 2006.

La clase dominante, atemorizada por el esperado triunfo de un candidato popular que presumiblemente pondría límites a la política neoliberal e impediría la enajenación del patrimonio nacional, en particular en el ramo energético, convirtió a López Obrador en el enemigo a derrotar. Para conseguirlo, con el descarnado respaldo del presidente Fox, se abrió una sucia campaña en su contra por todos los medios masivos de comunicación, encaminada a desacreditarlo y erosionar su imagen, a la que incluso se prestó el propio subcomandante Marcos.

La apocalipsis anunciada por los medios si ganaba López Obrador, permitió al gobierno imponer al candidato oficial, Felipe Calderón, por una mínima diferencia de votos (35.89%), frente al 35.33% de su principal contrincante. Tras conocerse el apretado

¹ Raquel Sosa Elízaga, «La construcción del miedo. Episodios de la guerra contra el gobierno de la ciudad de México», en *Revista del Observatorio Social de América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, año V, 14, mayo-agosto de 2004, p. 310.

resultado electoral, y a pesar de las impresionantes multitudes que en protesta se volcaron a las calles de la ciudad de México, López Obrador no fue capaz de articular una respuesta contundente que paralizara a Fox y su camarilla.

La continuación por el gobierno de Calderón de las desembozadas prácticas neoliberales sin duda agravaron los agudos problemas sociales de México: reconcentración de la riqueza, ampliación del número de marginados y acentuación de las deformaciones estructurales. El balance, después de más de treinta años (1982-2012) de aplicación de la orientación neoliberal –reforzada con la puesta en funcionamiento del TLCAN–, es que no se ha generado crecimiento económico significativo en el país.

El ingreso per cápita aumentó solo el 0.3% y ello gracias a que en ese lapso emigraron más de diez millones de personas, mientras que se ha empeorado la distribución del ingreso, ahondando la prevaleciente injusticia social. Por otro lado, la aplicación indiscriminada del libre comercio de manufacturas y capital con Estados Unidos produjo una crisis estructural en el campo mexicano y su creciente empobrecimiento, lo que unido a las extraordinarias alzas de los precios mundiales de los productos agropecuarios y la caída del dólar, han puesto a la economía de México en una situación muy adversa.

A ello debe sumarse el fracaso de la estrategia de guerra a los carteles del narcotráfico desarrollada por Calderón, que hundieron al país en una espiral de violencia que despejó el camino en las elecciones de 2012 al regreso del PRI al poder por intermedio de su candidato Enrique Peña Nieto, que quedó en primer lugar en los comicios con el 38.1% de la votación. La victoria del candidato priista sobre su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador, más rezagado que en la anterior elección presidencial –esta vez solo obtuvo el 31.59% de los sufragios–, han llevado al líder opositor a cuestionar otra vez los resultados electorales y a organizar, como un nuevo partido de izquierda al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA REVUELTA ANTINEOLIBERAL EN ECUADOR

De agosto de 1996 a febrero de 1997 duró el brevísimo gobierno de Abdalá Bucaram, apodado el «loco» por sus excentricidades. Derrocado en medio de airadas manifestaciones populares con creciente participación de los indígenas, su caída era una manifestación más de la ya endémica crisis económica ecuatoriana y la ingobernabilidad de este país. Ecuador, había tenido cinco presidentes entre 1997 y el 2000, período en que además fue asesinado en febrero de 1999 el diputado Jaime Hurtado, líder del Movimiento Popular Democrático, y adoptada la efímera constitución de 1998.

Las protestas populares no pudieron ser detenidas, pues las nuevas medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Yamil Mahuad, iniciado el 10 de agosto de 1998, agravaron la situación. Nos referimos a la congelación de los depósitos en los bancos y la dolarización de la economía, pues el devaluado sucre, moneda nacional ecuatoriana creada en 1884, fue retirado de la circulación.

El continuado deterioro de la economía del país, precipitó la caída del gobierno de Mahuad, el 21 de enero del 2000, por un vasto movimiento que agrupó desde los indígenas –unidos en el Consejo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CONAIE)– hasta un grupo de coroneles y oficiales del ejército y la policía. Menos de 24 horas gobernó un Triunvirato en el que ocuparon sitio el líder indígena Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez y el político Carlos Solórzano, que abrió el denominado «proceso de reestructuración jurídica del Estado».²

Al día siguiente se produjo el contragolpe de los altos mandos del ejército, que llevó al gobierno al vicepresidente Gustavo Novoa, con el beneplácito de Estados Unidos, preocupado por la permanencia de su base militar de la ciudad de Manta, en la costa ecuatoriana, recién instalada para el combate contra el narcotráfico y las guerrillas colombianas. El restablecimiento de la «democracia representativa»

² Juan Paz y Miño, *Golpe y contragolpe. La «Rebelión de Quito» del 21 de enero del 2000*, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002, p. 11.

con el ascenso al poder del derechista Novoa, sin embargo, tampoco puso fin a la intranquilidad social, como se demostró después con nuevas manifestaciones indígenas y violentas protestas populares contra su política neoliberal.

El triunfo en el 2002 obtenido en las elecciones ecuatorianas del coronel Lucio Gutiérrez fue posible por el respaldo de fuerzas de izquierda, entre ellas el Partido Comunista y el Movimiento Popular Democrático (MPD), así como el movimiento indígena, fundamentalmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONNAIE) y su expresión política de el Movimiento Plurinacional Pachakutik, creado en 1995. La derrota de los partidos tradicionales pareció, en principio, un cambio positivo en la política ecuatoriana.

El nuevo régimen, iniciado en enero de 2003, mostró muy pronto no solo claras tendencias autoritarias, sino que se inclinó sumisamente ante los dictados del FMI y a forjar una estrecha alianza con Estados Unidos. Prueba de ello fueron sus planes para el ingreso del país en el Plan Colombia y en el ALCA, que le hicieron perder el apoyo del partido Pachakutik y de otras fuerzas. El resultado fue el estrepitoso derrocamiento de Gutiérrez en abril de 2005 –salió huyendo en un helicóptero del Palacio de Carondelet rumbo al aeropuerto–, como resultado de un levantamiento popular de grandes proporciones, en el cual jugaron un activo papel los llamados *forajidos*, que dominaron las calles de la capital.

EL CORRALITO Y LAS PROTESTAS POPULARES ARGENTINAS

La aplicación de una política neoliberal extrema en la Argentina, iniciada por el gobierno de Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1999, también condujo aquí, como en los otros países latinoamericanos, a la más profunda crisis económica de su historia. La magnitud del descalabro obligó al insolvente gobierno de Fernando de la Rúa, iniciado en 1999 –tras obtener la presidencia con el apoyo del 48% del electorado gracias al respaldo de la Unión Cívica Radical y el Frente del País Solidario (FREPASO)–, a dictar drásticas medidas

restrictivas. Ellas incluyeron la suspensión del pago a los ahorristas, llamado el «corralito» bancario, ideado como solución a la crisis por su ministro de Economía Domingo Cavallo.

En medio de un verdadero naufragio económico nacional estalló una espontánea revuelta popular nutrida no solo por la población más humilde –se calcula que más de la mitad de los 36 millones de argentinos estaba entonces por debajo de la línea de pobreza–, sino también de la deteriorada clase media urbana, que era probablemente la más numerosa de América Latina. Las protestas callejeras fueron respondidas por el presidente De la Rúa imponiendo el estado de sitio y una brutal represión –dejó un saldo de 33 muertos y miles de heridos–, hasta que debió renunciar y huir en un helicóptero desde la Casa Rosada el 21 de diciembre de 2001.

En unos pocos días se sucedieron en el gobierno, en medio de ruidosos «cacerolazos» de la ciudadanía y los nuevos brotes de ira popular, de lo que fue expresión el espontáneo movimiento de los llamados *piqueteros*, los presidentes Ramón Puertas, Adolfo Rodríguez Sa y Eduardo Camaño. Este último entregó la presidencia, a principios del 2002, al peronista Eduardo Duhalde.

El flamante mandatario argentino debió enfrentar todavía un agravamiento de la desastrosa situación, pues en el 2002 la devaluación del peso fue del 70%, el desempleo alcanzó al 25% de la población económicamente activa y la deuda externa se acercó a los 140 mil millones de dólares. Duhalde además debió soportar las reiteradas negativas del FMI a conceder nuevos préstamos financieros «de salvamento» si Argentina no cumplía con todas sus exigencias, aun cuando le habían sido concedidos entonces a los demás integrantes del MERCOSUR: 30 mil millones de dólares a Brasil, 1500 millones a Uruguay y 200 millones a Paraguay.

El resultado fue no solo la profundización de la crisis argentina –en el propio 2002 la caída del PIB resultó la más pronunciada de toda América Latina: 13%–, sino que ella comenzó a arrastrar a todos sus socios del MERCOSUR. En Brasil, Uruguay y Paraguay también se hicieron sentir los mismos calamitosos efectos argentinos y se repitieron algunas de las protestas y los asaltos a supermercados por sus habitantes más desesperados.

BANCARROTA NEOLIBERAL EN BOLIVIA Y ASCENSO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA

En Bolivia las reformas neoliberales, iniciadas a mediados de la década anterior, fueron completadas por el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), llegado a la presidencia en 1993. A este mandatario, que había sido educado en Estados Unidos y hablaba el español con acento norteamericano, le sucedió en 1997 Hugo Banzer.

Durante el segundo gobierno del viejo dictador –que no pudo concluir por una grave enfermedad que lo llevó a la muerte– se desarrolló, con apoyo de Estados Unidos, una política de represión a los cultivadores de la coca, a la vez que siguió adelante con las prácticas neoliberales de sus antecesores, sin lograr resolver ni paliar los cada vez más graves problemas económicos y sociales del país. A la par, los movimientos campesinos e indígenas siguieron fortaleciéndose.

Muestra de ello fue la llamada «guerra del agua» (2000) –también con los bloqueos y movilizaciones de septiembre-octubre de 2000 y junio-julio de 2001–, llevada a cabo en Cochabamba, contra la empresa privatizada Aguas del Tunari, una subsidiaria de la Bechtel Enterprises de Estados Unidos. Las protestas populares estuvieron acompañadas del cerco indígena de La Paz, encabezados por los comuneros aymaraes guiados por Felipe Quispe, líder del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) –organización surgida en 2000–, recién salido de la cárcel.

Otra muestra del sostenido desarrollo del movimiento indígena fue el vertiginoso ascenso político del dirigente cocalero Evo Morales, opuesto a la persistente campaña promovida por Estados Unidos para erradicar por la fuerza los tradicionales cultivos de coca. En 1994 tuvieron lugar las primeras marchas cocaleras, en defensa del cultivo de esta hoja, procedentes del Chapare profundo, las que irían creciendo con posterioridad, como expresión de la intensificación de las luchas reivindicativas del campesinado indígena. En 1995, los cocaleros bajo su dirección, y los campesinos del valle de Cochabamba, articulados en torno a Alejo Véliz, dieron vida a la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP).

Dos años después, en 1997, Evo Morales fue elegido diputado junto con otros tres dirigentes campesinos en el marco de la coalición Izquierda Unida, integrada principalmente por el Movimiento Bolivia Libre y el Partido Comunista. Separado más tarde de esta alianza electoral, Morales creó en 1998, con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

De alguna manera, esta agrupación fundada por Evo Morales era fruto de las contradicciones surgidas en el seno de la ASP con los seguidores de Véliz. Poco después, con el propósito de participar en los comicios, el IPSP se apoyó en un pequeño partido de izquierda llamado Movimiento al Socialismo (MAS)–, desprendido de la derechista FSB a fines de los ochenta.

Desde estas organizaciones, coligadas en enero de 1999, Morales fue tejiendo una red de alianzas con sindicatos, juntas vecinales y una diversidad de trabajadores y sectores populares que fueron la clave de sus seguidas victorias electorales. El éxito también se explica por la adopción de un programa indigenista más flexible y plural que el de los seguidores de Quispe, quienes reivindican la completa hegemonía indígena del país, a partir de la tesis de las dos Bolívias, que menosprecia a los sectores mestizos y blancos. En cambio, los partidos de Evo hicieron énfasis en el antimperialismo y el rescate de las riquezas nacionales, sin exclusión de las minorías étnicas.

En las elecciones presidenciales de 2002, para impedir el acceso al poder de líder indígena cocalero Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, debió pactar con el MIR, liderado por el ex presidente Jaime Paz Zamora, un cogobierno. Este se inició tras culminar el interinato de Jorge, *Tuto*, Quiroga (2001-2002), heredero político del fallecido Banzer.

Pero el segundo gobierno de Sánchez de Lozada continuó adelante con la desmedida política de liberalización económica, que terminó por provocar una verdadera insurrección nacional. Ya en febrero de 2003 se produjo el amotinamiento de la policía en protesta por nuevos impuestos que afectaban a los miembros de este cuerpo armado, huelga reprimida por el ejército con el saldo de 32 muertos.

La indiscriminada represión llegó aún más lejos en octubre de 2003 –cuando en solo nueve días fallecieron más de 70 personas y hubo unos 400 heridos–, lo que provocó la salida del gobierno de los ministros de Nueva Fuerza Republicana (NFR) y del MIR, así como el rechazo del vicepresidente Carlos Mesa. El día 17 de ese mismo mes, el presidente Sánchez de Lozada, acosado por la repulsa popular y la falta de apoyo de los propios partidos políticos que hasta entonces lo habían respaldado, se vio obligado a huir precipitadamente del Palacio Quemado y abandonar el país.

El descalabro del gobierno de Sánchez de Lozada no era solo resultado de la profunda recesión económica creada con la ortodoxa política neoliberal, sino también de las masacres cometidas contra la población civil –como la de Warisata (20 de septiembre de 2003)– y de los oscuros acuerdos para exportar el gas natural de los mega campos recién descubiertos en la región del Chaco –controlados por empresas trasnacionales–, a través de puertos chilenos, lo que reabrió las heridas no cicatrizadas de la Guerra del Pacífico.

La caída de Sánchez de Lozada, que huyó a toda prisa fuera del país, puso también en solfa el sistema político y a los propios partidos tradicionales, pues con la excepción del MAS-IPSP y de Pachakuti (MIP), todos las demás agrupaciones, incluido el MIR, se habían asociado en el parlamento en defensa del programa neoliberal. Además, formaban hasta entonces una especie de gran coalición que, bajo el pretexto de defender la llamada responsabilidad nacional, permitió que se sostuvieran en el poder todos los gobiernos neoliberales desde 1985. Por esa razón, los viejos políticos y sus respectivos partidos estaban comprometidos con la crítica situación y eran considerados por la gran mayoría de la población como una revivida *rosca* neoliberal, que había puesto a la nación al borde del precipicio.

Sustituido Sánchez de Lozada por el vicepresidente Carlos Mesa, quien carecía de fuerza parlamentaria alguna y apoyo partidario. El nuevo mandatario boliviano validó su política sobre los hidrocarburos con la victoria obtenida en el referéndum celebrado en julio de 2004. Pero las dificultades de Mesa para dar respuesta a las exigencias populares para implantar una política antineoliberal,

y de no solo impedir la exportación de gas a Chile sino también de nacionalizarlo –en marzo de 2005 el MAS le retiró su respaldo al gobierno–, junto a un nuevo ciclo de movilizaciones y protestas callejeras, obligaron finalmente al impotente mandatario a entregar, en junio de 2005, el poder a Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, encargado de convocar a nuevas elecciones.

Otra de las razones que precipitaron la salida de Mesa fueron los conatos secesionistas de matriz conservadora de la llamada Nación Camba, o de la media luna, porque incluye a todos los departamentos y provincias no andinas (Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando), o sea todo el oriente y el Chaco boliviano. En esta atribulada nación andina, a la habitual inestabilidad política y los problemas dejados por las prácticas neoliberales –entre ellos, que más del 90% de su población rural viviera en condiciones de extrema pobreza–, se sumaron entonces las aspiraciones autonómicas de la ciudad y el departamento de Santa Cruz.

Esta región, centro del poder hegemónico sustentado básicamente en torno a la expansión de los cultivos de soja y el crecimiento de la ganadería, así como de la extracción de gas y petróleo, se había convertido en la provincia más rica del país, gracias a que aportaba la mitad de las exportaciones y cerca del 30% del PIB. El surgimiento de fuerzas separatistas en Santa Cruz, era algo también inspirado por espurios intereses foráneos, motivado por las maniobras de los monopolios petroleros para obstaculizar el control nacional sobre los hidrocarburos bolivianos e impedir otros cambios económico-sociales.

Para la organización Nación Camba de Liberación, la región de Santa Cruz es una nacionalidad diferente a la del resto del país y por eso ha aspirado a la independencia, mediante la fórmula de una especie de estado libre asociado. Pero la élite cruceña no pretende separarse de Bolivia –el mercado andino le es indispensable–, sino marcar distancia de las decisiones procedentes del altiplano que podrían afectar sus intereses.

EL CARACAZO: PRINCIPIO DEL FIN DE LA CUARTA REPÚBLICA VENEZOLANA

En Venezuela, la aplicación irreflexiva de las fórmulas neoliberales, recomendadas por el FMI y el Banco Mundial, condujeron a la creación de una clásica situación revolucionaria, agravada por más de una década de estancamiento económico provocado por los bajos precios del petróleo y el pago de la onerosa deuda externa. A la crisis económica y financiera, se sumó el fracaso de los nuevos partidos reformistas para encontrar una salida a la crisis económica y política.

Ese era el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) –encabezado por los antiguos jefes guerrilleros Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, que en 1970 abandonaron el Partido Comunista– y La Causa Radical (LCR), esta última procedente a su vez de una escisión del MAS –denominada Venezuela 83–, encabezada por Alfredo Maneiro. A ello debe agregarse la falta de credibilidad de los tradicionales partidos Acción Democrática (AC) y el social cristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), envueltos en una desembozada corrupción.

Durante la década de los ochenta, el PIB de Venezuela había descendido un 3.8% y en 1989 cayó en más del 8%, mientras la inflación superaba el 81% y el desempleo y el subempleo se estimaban en 50%. Los cerros de Caracas, poblados de verdaderas villas miserias, siguieron creciendo en forma impresionante, como demostración palpable del creciente abismo que separaba a ricos y pobres, pues estos últimos pasaron de menos del 20% en 1980 al 40% en 1988. La visible erosión del nivel de vida de las clases trabajadoras y las capas medias, situaría en pocos años más al 60% de la población venezolana por debajo de la línea de pobreza.

En 1988 el líder de Acción Democrática –partido que desde hacia treinta años se alternaba en el poder con COPEI gracias al pacto de *Punto Fijo*–, Carlos Andrés Pérez, fue elegido otra vez a la presidencia con un 48% de la votación gracias a un programa que incluía el rechazo al pago de la gravosa deuda externa para evitar los costos sociales y económicos. Sin embargo, en febrero de 1989, implantó de manera sorpresiva un plan neoliberal salvaje, que

impuso aumentos masivos en el costo de la gasolina, en el transporte y los productos básicos. El paquete de medidas neoliberales incluía la reprivatización encubierta de la industria petrolera, nacionalizada por el propio presidente adeco quince años atrás

La airada e incontrolada respuesta popular a estas duras medidas gubernamentales fue un espontáneo levantamiento de la población humilde capitalina, denominado el caracazo, que estalló entre el 28 y el 29 de febrero 1989. La gigantesca protesta comenzó con el secuestro de autobuses y el despliegue de barricadas por parte del estudiantado y pronto devino en una verdadera sublevación masiva de la población humilde, que incluía asaltos a los comercios y destrucción de bienes. El caracazo fue reprimido de manera brutal por el ejército y la policía con un saldo de varios centenares de muertos y miles de heridos.

A la conmoción nacional dejada por estos trágicos sucesos ocurridos en la capital venezolana, se unieron después las denuncias sobre la corrupción gubernamental, que generaron nuevas manifestaciones populares y huelgas. La culminación de ese proceso, estimulado por el creciente desprestigio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue la inesperada insurrección militar que sacudió a Caracas y otras poblaciones venezolanas el 4 de febrero de 1992, bajo la dirección del comandante Hugo Chávez Frías al frente del hasta entonces desconocido Movimiento Bolivariano Revolucionario.

Aunque el comandante rebelde Francisco Arias Cárdenas logró el control en Maracaibo y otros oficiales comprometidos tomaron Valencia y Maracay, la rebelión militar fracasó en la capital, lo que obligó al propio Chávez a rendirse para evitar un mayor derramamiento de sangre –el enfrentamiento dejó 14 muertos y decenas de heridos. En una dramática declaración pública, transmitida a todo el país por la televisión, Chávez concluyó su llamado a deponer las armas con su famosa frase sugiriendo que continuarían con la lucha revolucionaria. Un segundo levantamiento militar, el 27 de noviembre de ese año, más cruento que el anterior, pues dejó más de 170 víctimas mortales, también fracasó, aunque sus objetivos eran más confusos que los de la revuelta anterior.

La crisis política generada por todos estos sucesos desembocó en la impugación del impopular presidente Pérez, en mayo de 1993,

acusado de corrupción, proceso que culminó con su enjuiciamiento y destitución. El desprestigiado mandatario adeco fue sustituido por el breve interinato del historiador Ramón J. Velázquez, en espera de nuevos comicios.

Celebradas las elecciones en diciembre de ese año, en ellas se impuso el anciano político Rafael Caldera, uno de los artífices del sistema bipartidista vigente –nacido en su propia residencia de *Punto Fijo*–, pero que habilidosamente había abandonado el cada vez más desacreditado partido social cristiano COPEI para situarse al frente de una heterogénea coalición, que incluía al MAS, conocida como Convergencia. Con un programa antineoliberal, Caldera obtuvo el 30% de la votación, seguido de Claudio Fermín, de Acción Democrática (AD) con el 23.6%, Osvaldo Álvarez Paz, de COPEI con el 22.7% y Andrés Velázquez, de La Causa R, con 22%, aunque el verdadero triunfador era la abstención: 40% del electorado.

Para paliar la crisis financiera, Caldera nacionalizó la banca en 1994. Pero el viejo caudillo democristiano, quien gobernó con grandes dificultades hasta 1999, no pudo revertir la desesperada situación económica y social venezolana y terminó aplicando las mismas medidas de ajuste estructural que había criticado en su programa electoral de 1993. De ello fue expresión el crédito de emergencia que en 1996 se negoció con el FMI y las disposiciones de corte neoliberal implementadas por su ministro de Economía y dirigente del MAS, Teodoro Petkoff, quien había dejado atrás los devaneos izquierdistas de su juventud.

El desastroso panorama nacional y la incesante presión popular determinó también la liberación de Chávez y sus compañeros en marzo de 1994, quien se dedicó a vertebrar una nueva organización de masas denominada Movimiento Quinta República (MVR), que el 19 de abril de 1997 realizó en forma exitosa su primer congreso. De ahí surgió la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela con el respaldo de su propia organización, el debilitado Partido Comunista, Patria para Todos –una facción liderada por Pablo Medina salida de La Caura R–, así como otros grupos de izquierda desprendidos del MAS, junto a otras organizaciones democráticas y populares.

En los comicios del 6 de diciembre de 1998 Chávez venció, con un programa para poner fin a las desastrosas políticas neoliberales y liquidar el corrompido sistema del *punto fijismo*, que le permitió obtener el 56% de los sufragios. El principal candidato derrotado fue Henrique Salas Römer, apoyado por los partidos tradicionales y otras fuerzas de centro derecha, defensoras del *status quo*, que obtuvo solo el 39.9 % de los sufragios. Junto con el milenio, toda una vieja época tocaba su fin, pues se iniciaba en Venezuela, y con ella en toda la América Latina, una nueva época de su historia.

LA REVOLUCIÓN CHAVISTA

El inicio del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el 2 de febrero de 1999, fue el comienzo de la revolución bolivariana, que marcó una nueva época histórica en la tierra del *Libertador*, de profundas consecuencias para el futuro del país. El ascenso del chavismo puso fin a política neoliberal de los gobiernos precedentes, que tanto perjuicio había causado a la población venezolana, y comenzó el ascenso del papel regulador del Estado y del desarrollo de una política de justicia social, junto a la recuperación de la independencia y soberanía de la nación.

La llegada al poder de Chávez inauguró también, desde el punto de vista internacional, una serie de cambios muy positivos en América Latina que terminarían creando las condiciones, desde los primeros años del siglo XXI, para un verdadero cambio de época a nivel continental. Sin duda alguna, de entre todas las esperanzadoras alternativas latinoamericanas que se abrieron a partir de entonces, la más significativa fue la venezolana, implementada por el comandante Hugo Chávez Frías, al frente de un movimiento revolucionario de inspiración bolivariana que abrió un singular proceso de profundas transformaciones sociales y políticas en la patria de Bolívar.

Desde el principio de su mandato, Chávez debió enfrentar las malintencionadas campañas de los medios de difusión, así como de la mayoría opositora del Congreso, elegida con anterioridad a los comicios presidenciales. A pesar de la enconada resistencia opositora,

entre los primeros aciertos de su gestión estuvo una activa negociación internacional, apoyada por su ministro de Energía y Minas, el ex guerrillero Alí Rodríguez Araque, para reactivar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y conseguir mejores precios para los hidrocarburos. A fines de 1999 estos esfuerzos dieron sus primeros frutos.

A la par, Chávez dio pasos firmes para sacar de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), el consorcio estatal petrolero creado en 1976 tras la nacionalización de los hidrocarburos, a la banda de tecnócratas corruptos que la habían puesto al servicio de la vieja élite política venezolana y los intereses de Estados Unidos. Otra de las prioridades de Chávez, en los primeros momentos de su gobierno, fue formar la prometida asamblea constituyente, encargada de modificar el anquilosado sistema político de la llamada cuarta república. Para lograr la autorización legal para convocar la convención, se celebró un referéndum el 25 de abril de 1999 que obtuvo la aprobación del 82% de los votantes.

A continuación, el 25 de julio de ese mismo año, se efectuaron las elecciones de diputados a la convención en la que los candidatos chavistas del Polo Patriótico obtuvieron 119 de los 131 curules, con el 67% de los sufragios. Como colofón de este proceso encaminado a dotar al país de una nueva carta magna que permitiera modificaciones más profundas del orden existente, en diciembre de 1999 los seguidores de Chávez volvieron a repetir sus triunfos, con el 71% de los votos, en otro referéndum, esta vez para ratificar la nueva constitución que fundaba la República Bolivariana de Venezuela.

En base a las estipulaciones de la flamante carta magna bolivariana, se convocaron nuevos comicios presidenciales –ahora el mandato ejecutivo se extendía a seis y se dejaba al congreso con una cámara única–, que Chávez volvió a ganar el 30 de julio del 2000 con el 59.7% de los sufragios. En esta ocasión, su contrincante era su ex compañero de armas, Arias Cárdenas, que debió conformarse con el 37.5 % de los votos.

En esos mismos comicios, el Polo Patriótico obtuvo una sustanciosa mayoría parlamentaria, así como buena parte de las gobernaciones y los poderes locales. A pesar de estas contundentes victorias,

la resistencia opositora impidió mediante diferentes artimañas que se llevaran adelante las promesas electorales y el avanzado articulado de la constitución. Eso explica que el presidente Chávez asumiera poderes especiales en noviembre de 2001, que le permitió promulgar 49 leyes habilitantes para impulsar buena parte de las transformaciones sociales y económicas que esperaba el país, incluyendo una ley de tierras, base de una futura redistribución agraria.

Las leyes habilitantes destaparon la violenta reacción de la burguesía venezolana. Para evitar la legislación revolucionaria chavista, la oposición hizo un primer intento de huelga general el 6 de diciembre de 2001, mientras aumentaban las confrontaciones callejeras y las sucias campañas mediáticas. En ese contexto, salió del gobierno el sector moderado del chavismo, representado por el viejo político y empresario Luis Miquelena, destituido por Chávez, el 24 de enero de 2002, a la vez que cesanteaba a la corrupta cúpula directiva de PDVSA.

La respuesta de la oposición derechista fue organizar en los primeros días de abril de 2002 un paro general, una marcha pública y una sangrienta provocación en las calles de Caracas. Era el preámbulo del golpe de Estado que depuso a Chávez el 11 de abril de ese año y situó en la primera magistratura al acaudalado Pedro Carmona Estanga, hasta entonces presidente de la gremial empresarial conocida por sus siglas como FEDECAMARAS.

Chávez, que se negó a renunciar, fue encarcelado por los golpistas –primero en el fuerte Tiuna, luego en Turiamo y finalmente en la isla de Orchila–, mientras el efímero dictador revelaba su verdadero rostro fascista con la disolución de los órganos de elección popular, la derogación de la nueva constitución y la represión contra las figuras más connotadas del chavismo, incluyendo el sitio a la embajada cubana. Apenas dos días después, las manifestaciones populares encolerizadas, encabezadas por dirigentes del Polo Patriótico como José Vicente Rangel y Aristóbulo Istúriz, junto a la enérgica reacción de los militares leales guiados por el general Jorge Luis García Carneiro, en ese momento comandante de la región militar de Caracas, revirtieron la intentona fascista y el líder de la revolución bolivariana tuvo que ser liberado.

Una nueva maniobra opositora comenzó el 2 diciembre de 2002 mediante un prolongado paro empresarial que tenía su centro en las instalaciones petroleras. Dos meses después, tras despedir a los gerentes, técnicos y trabajadores de PDVSA comprometidos con la reacción derechista y los intereses foráneos, la huelga fue revertida, gracias al indiscutible respaldo popular y la lealtad de las fuerzas armadas.

Pero el cambio decisivo en el pulso de fuerzas con la oposición se produjo el 15 de agosto de 2004, cuando el gobierno de Chávez obtuvo una contundente victoria en el referéndum revocatorio, donde alcanzó el 60% de la votación. A este impresionante triunfo siguió, el 31 de octubre de ese mismo año, el de los comicios parciales que le dieron a sus seguidores el poder en la gran mayoría de las alcaldías –270 de 337– y en todos los gobiernos de los estados, con la excepción de Zulia y Nueva Esparta.

Para redondear esta serie de resonantes victorias, en las elecciones presidenciales de 2006, Chávez volvió a imponerse a un candidato opositor, esta vez Manuel Rosales, con el 62.84%, mientras el aspirante derechista solo conseguía el 36.9%. Este significativo triunfo estuvo precedido por el total control chavista de la asamblea nacional, después que en los comicios legislativos de diciembre de 2005 la oposición cometiera el error de abstenerse.

En gran medida, la cadena de triunfos en las contiendas democráticas –donde la única excepción fue el revés chavista en el referéndum constitucional del 2 de diciembre de 2007, perdido por muy estrecho margen–, estaban basados en los exitosos resultados de la revolución bolivariana. En particular, los generosos programas sociales emprendidos por el presidente Chávez, entre ellos las diversas Misiones –Ribas, Sucre, Mercal, Barrio Adentro, Zamora, Vuelvan Caras, Robinson, Vivienda, Identidad, etc.–, la fundación de la Universidad Bolivariana, con recintos universitarios en todo el país, y los ambiciosos proyectos de largo aliento en el campo educativo, alimentario, productivo, de salud, vivienda y otros.

Todos ellos están dirigidos a beneficiar a amplios sectores populares, como los indígenas, campesinos, mineros y otros sectores marginados de la sociedad, con el objetivo de lograr, en el menor

plazo posible, la equidad y la superación de las desigualdades y las exclusiones culturales, sociales y políticas, como parte del proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI. Como resultado de esta política social, que también permitió la creación de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo, la revolución bolivariana consiguió disminuir la pobreza del 50% al 27.8% –la extrema pobreza descendió del 30% al 6%–, mientras el desempleo se redujo de un 15.2% a un 6.4% en 2012.

Según la CEPAL, Venezuela es el país de América Latina que más logros ha tenido en la erradicación del hambre y la tasa de desnutrición, que bajó del 21% en 1998 a menos del 3% en 2012, mientras la capacidad de producir alimentos para consumo interno, acorde a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), subió del 51% en 1999 al 71% en 2012. Además, Venezuela es el primer país del mundo al que la UNESCO le otorgo en 2010 la calificación de 96 puntos sobre 100 en mejora educativa, por las metas alcanzadas en materia de alfabetización, educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Como consecuencia de todo ello, entre los años 2000 y 2012 la revolución bolivariana mejoró en forma sustantiva el Índice de Desarrollo Humano del país, que en este período fue cuatro veces superior al de las dos décadas anteriores, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Entre los éxitos alcanzados debe subrayarse que más de un millón de personas fueron alfabetizados (Misión Robinson) en poco tiempo y se distribuyeron miles de toneladas de alimentos diarios a bajo precio. En gran medida esos resultados fueron posible por la solidaria colaboración cubana, en primer lugar por la presencia permanente de más de 20 mil médicos y personal de la salud que brindan atención gratuita en las zonas populares más pobres y aisladas del país.

También el gobierno bolivariano ha impulsado vigorosamente proyectos integracionistas con los demás países de la región, de lo que son muestra la Comunidad Sudamericana de Naciones –integrada por 12 países– y los acuerdos con Cuba, todos firmados en diciembre de 2004. Estos últimos fueron la base de la posterior creación de la

Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), verdadera respuesta al ALCA siguiendo el legado de los grandes pensadores latinoamericanos y las mejores tradiciones de nuestros pueblos. También debe mencionarse, dentro de los esfuerzos integracionistas impulsados por la revolución bolivariana, la fundación de Petrocaribe, que ha beneficiado a muchas naciones centroamericanas y caribeñas, así como la erección de un Banco del Sur en diciembre de 2007.

La última victoria electoral del comandante Hugo Chávez, al frente del recién creado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la obtuvo cuando ya estaba gravemente enfermo de cáncer –y después de haber sufrido varias operaciones sucesivas en los últimos meses–, en los comicios presidenciales de octubre de 2012. En esta ocasión, el líder de la revolución bolivariana obtuvo el 55.5% de la votación, derrotando a su rival derechista Henrique Capriles, que debió conformarse con el 44.3% de los sufragios.

A esta contundente victoria, siguió la obtenida por los chavistas en diciembre de ese mismo año, cuando ya el mandatario venezolano estaba hospitalizado en La Habana, al ganar una cómoda mayoría en la cámara y obtener la gobernación de todos los estados excepto tres. Este resultado fue más significativo, pues por primera vez en el período de la revolución bolivariana Chávez no pudo participar personalmente en una elección, pues ya se encontraba al borde de la muerte, lo que fatalmente ocurrió, tras larga agonía, el 4 de marzo de 2013.

Tras su apoteósico sepelio, que fue una extraordinaria manifestación de duelo popular que conmovió al mundo, se realizaron nuevos comicios. Ahora se enfrentaron el presidente designado por Chávez para que lo sustituyera y ex canciller Nicolás Maduro, postulado por el Gran Polo Patriótico –formado por el Partido Unido Socialista y otras agrupaciones aliadas– y el aspirante de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), que respondía a los intereses de la oposición derechista y los Estados Unidos, Henrique Capriles, a la sazón gobernador del estado de Miranda.

La apretada victoria electoral chavista del 14 de abril de 2013, esta vez 50.6% frente al 48.7% de su contrincante, junto a la desaparición física de Chávez, hicieron creer a la oposición que esta era la

oportunidad de derrocar por la fuerza al gobierno bolivariano. Para conseguirlo, desencadenaron una violenta ola de protestas y atentados callejeros que ocasionaron la muerte de varias personas, pero que no pudieron impedir la exitosa toma de posesión de Maduro cinco días después, encargado de dirigir, según lo establece la constitución vigente, los destinos de Venezuela hasta el 2019.

La continuación del legado de Hugo Chávez, ahora bajo la responsabilidad de Nicolás Maduro, abre un nuevo período en la historia de la revolución bolivariana. De seguro esta nueva etapa no estará exenta de dificultades y amenazas de toda índole, generados por la oposición burguesa y los Estados Unidos, que harán todo lo posible por revertir el proceso revolucionario en la patria del *Libertador*.

EL CAMBIO DE ÉPOCA

La revolución bolivariana fue el inicio de una nueva época en la historia de América Latina y el Caribe. El inicio de las radicales transformaciones en la redenominada República Bolivariana de Venezuela, fue seguido en otros países latinoamericanos de la llegada al gobierno, por la vía de elecciones democráticas, de destacados representantes de las fuerzas populares y progresistas, aupados al poder por las dramáticas consecuencias económicas y sociales del desenfreno neoliberal y la crisis de credibilidad de la mayoría de los partidos tradicionales.

La primera victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela (1998, luego reelecto en 2002, 2006 y 2012), fue continuada después con los triunfos democráticos de Luiz Inácio, *Lula*, da Silva (2003, reelecto en 2006) y Dilma Rouseff (2010), ambos líderes del Partido de los Trabajadores de Brasil; Néstor Kirchner en Argentina (2003) y luego de su esposa Cristina Fernández (2007, reelegida en 2011); Tavaré Vázquez (2005) y José Mujica (2009), ambos del Frente Amplio en Uruguay; Evo Morales en Bolivia (2006 y reelecto en 2009), así como Rafael Correa en Ecuador (2007, reelecto en 2009 y 2013). A estos indiscutible triunfos populares, que cambiaron como nunca antes el mapa político de América Latina, deben

sumarse los obtenidos por Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua (2007 y reelegido en 2012), así como los más precarios de Manuel Zelaya en Honduras (2006) –interrumpido con su derrocamiento en 2009 por los militares y la élite empresarial, encabezada por Roberto Micheletti– y de Fernando Lugo en Paraguay (2008), depuesto en forma arbitraria e ilegal por el legislativo paraguayo en 2012 dirigido por el ambicioso vicepresidente Federico Franco.

A este verdadero cambio de época también ha contribuido los diferentes gobiernos independientes del Caribe –algunos de ellos integrados al ALBA y/o Petrocaribe– y la resonante victoria electoral obtenida en El Salvador por Mauricio Funes (2009), candidato del Frente Farabundo Martí (FMLN), así como de otras fuerzas democráticas y progresistas en la región, que han marcado distancia de las viejas prácticas políticas y enarbolado una plataforma soberana e independiente. Pueden mencionarse los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fundado por Juan Bosch en la República Dominicana, en manos de los presidentes Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012) y Danilo Medina (2012-2016); los socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 y reelegida para el período 2014-2018, con un 62.2% de los sufragios); Álvaro Colom en Guatemala (2008-2012) y Michel Joseph Martelly en Haití, este último en la primera magistratura en este devastado país caribeño desde el 2011.

Sin duda, la profunda crisis económica, social y política a que fue llevada la América Latina con la implementación de un capitalismo salvaje han abierto en el continente inesperadas opciones y espacios, con nuevas alternativas, que antes apenas se esbozaban, que indican la apertura de una época diferente en la historia latinoamericana, signada por cambios muy positivos. En varios países de la región se ha vertebrado una nueva izquierda, purgada de errores, traumas y desencuentros del pasado, opciones inimaginables solo unos años atrás, después del dramático descalabro del socialismo europeo y del acorralamiento del marxismo por el pensamiento único. En última instancia, estos cambios tienen que ver con casi tres décadas de desenfrenado neoliberalismo que crearon las condiciones, necesidades y los

nuevos actores sociales para impulsar transformaciones radicales en una dirección diferente.

Síntoma de los nuevos tiempos es la inusitada fuerza del cuestionamiento a la validez ideológica y política del neoliberalismo y su modelo de estado mínimo, que fue deslegitimada en casi todas partes como paradigma de las estrategias gubernamentales latinoamericanas, al no poder reducir la pobreza y en su lugar aumentar la desigualdad. El creciente emplazamiento del neoliberalismo ya venía produciendo con anterioridad en América Latina un reverdecir de la retórica y la práctica antineoliberal.

Sus primeros síntomas afloraron en los discursos de varios mandatarios latinoamericanos en la Cumbre de Monterrey (México), realizada en enero de 2004, en abierta discrepancia con las propuestas del entonces presidente George W. Bush, centradas en el libre comercio, la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la implementación del ALCA. Desde entonces, cobraron un nuevo aire los proyectos integracionistas regionales y los acuerdos entre ellos.

Otra consecuencia, fue la modificación en las posiciones oficiales de algunos países latinoamericanos –sobre todo de la América del Sur– respecto al ALCA, cuestionándose algunos de sus principios generales, lo que en definitiva condujo a que no se concretara en la fecha y términos que proponía Estados Unidos. De ahí que desde mediados de 2003, Washington tuviera que buscar nuevas alternativas para imponerlos, en lo fundamental mediante la firma de tratados bilaterales, como los concretados con Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y algunos otros países del hemisferio.

Pero el fracaso norteamericano en la implementación del ALCA no impide que la red de tratados de libre comercio que ha ido tejiendo Estados Unidos pueda debilitar la posibilidad de una acción conjunta de los países latinoamericanos para negociar en bloque con el poderoso vecino del Norte. En contra de una acción concertada de América Latina también surgió, en el primer semestre de 2012, un convenio integracionista de claro cuño neoliberal y conservador, titulado la Alianza del Pacífico, que ha agrupado a México, Chile, Perú y Colombia.

LOS GOBIERNOS DEL PT EN BRASIL: DE LULA A DILMA

En Brasil el cambio de época comenzó con la llegada al poder Lula da Silva, el antiguo líder de los obreros metalúrgicos convertido en máxima figura del Partido de los Trabajadores (PT). Cuando el fracaso del segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso era ostensible, se produjeron los comicios presidenciales de 2002, a los que Lula se presentó como candidato por cuarta ocasión. Pero esta vez el líder del PT tenía mayor libertad para tejer alianzas y hacer compromisos, lo que explica que pudiera llevar como compañero de boleta al empresario Jose Alencar Gomes da Silva (fallecido en 2012).

A pesar de sus concesiones, debió enfrentar la propaganda atemorizadora de la reacción y los grandes medios de difusión, a las que respondió con la consigna de que «la esperanza se impondría al miedo» y con promesas de dar prioridad a los preteridos problemas sociales, oponiéndose al neoliberalismo. En la segunda ronda electoral, Lula contó, además del respaldo del Partido Comunista de Brasil (PCB), el Partido Comunista Brasileño (PCdoB) y el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) que había tenido en la primera vuelta, con el del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Con este amplio apoyo de las fuerzas de izquierda, Lula derrotó con el 61.35% de los sufragios a su principal adversario, José Serra, del partido de gobierno, que se quedó solo con el 23.2% de la votación. La elección del líder del PT fue vista por todos los movimientos populares y progresistas como una victoria propia y considerada como un punto de inflexión en la historia de Brasil, que daría paso a una política favorable a los legítimos intereses nacionales y de solución a los graves problemas sociales.

Pero las necesarias transformaciones radicales que se esperaban del gobierno de Lula, iniciado el 1 de enero de 2003 con el lema de *um outro Brasil é possível*,³ estuvieron constreñidas desde el principio

³ Gaudencio Frigotto: «Brasil e a politica economico-social: entre o medo e a esperença», *Revista del Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, CLASO, p. 98.

de su mandato por los límites impuestos por las estructuras tradicionales de poder aposentadas en el aparato judicial, el legislativo, los gobiernos estatales y altos mandos militares. Eso explica que la política económica del PT fuera de avances lentos y graduales, manteniendo como inercia prácticas del gobierno anterior, como por ejemplo, seguir destinando casi el 60% de la recaudación fiscal al pago de la deuda externa, lo que fue alejando a algunas organizaciones y movimientos sociales que lo habían respaldado.

No obstante, Lula intentó desmontar la política neoliberal, lograr beneficios sociales y reducir la vulnerabilidad externa, a la vez que inducía el crecimiento económico. Por eso desde el principio de su mandato, el presidente brasileño puso el acento en políticas sociales focalizadas, de tipo asistencial o de beneficencia pública, que le permitió disminuir ciertas tensiones sociales y mantener su popularidad –primero con su programa de *Hambre 0*, sustituido después por la más amplia *Bolsa Familiar*– postergando las esperadas transformaciones sustanciales que reclamaban sus partidarios más radicales. Gracias a esos amplios programas sociales, el número de personas ubicadas en el nivel de miseria se redujo en 2006 a seis millones de personas, lo que equivalió a una baja del 15.2% de la población total de Brasil (189 millones de habitantes).

En el campo de la política exterior, el gobierno de Lula marcó más distancia todavía del de su predecesor, en particular por su intensa campaña internacional a favor de un orden mundial más justo y en defensa de una nueva geografía comercial que pusiera fin a los subsidios agrícolas que hacen una competencia desleal a las producciones de los países más atrasados o subdesarrollados. También el mandatario brasileño puso énfasis en la integración regional, como se ejemplifica con los acuerdos firmados con los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela.

Al pasar la mitad de su mandato, la extraordinaria popularidad del carismático presidente Lula se fue erosionando, mientras se producían escisiones y expulsiones de sectores de izquierda del propio PT, pasados a la oposición. Diferentes grupos, incluido algunos parlamentarios radicales purgados del partido oficial, junto al Partido Comunista y Consulta Popular, vertebraron un Frente de

Izquierda con vistas a las elecciones de 2006, que llevó de candidata a Heloísa Helena, una ex diputada del partido de Lula. Al mismo tiempo, fueron reapareciendo algunas protestas populares, como las provocadas por la reforma del sistema de pensiones y prestaciones a los trabajadores (2004).

La denuncia de sobornos a varios diputados, conocida como la crisis del *mensalao* (mensualidades) en 2005, y otros escándalos similares, contribuyeron también a menguar la popularidad del mandatario y llevaron a la sustitución de influyentes figuras del PT en el gobierno, entre ellos José Dirceu –que en 2012 fue condenado a diez años de cárcel por su responsabilidad en la corrupción gubernamental– y el ministro de Hacienda Antonio Palocci. Dirceu, un antiguo combatiente contra la dictadura militar hasta entonces jefe del gabinete presidencial, fue sustituido en ese puesto clave por Dilma Rouseff, una ex guerrillera de VAR Palmares que había sufrido prisión y torturas, incorporada al PT solo cuatro años antes.

Las revelaciones fueron aprovechadas por la oposición y la mayoría de los medios masivos de difusión para intentar desprestigiar al presidente Lula e impedir a toda costa su reelección. A pesar de la caída de la popularidad de Lula y la deserción de algunos de sus partidarios –como los que fundaron el Partido Socialismo y Libertad (PSOL)–, muchos movimientos sociales consideraron que la situación del país sería peor sin él y decidieron apoyarlo en la nueva contienda presidencial. Los resultados de la primera ronda electoral, celebrada en octubre de 2006, alarmaron a Lula y al PT –solo obtuvo 48.64 % de los votos frente al 41.61% de su contrincante el socialdemócrata Geraldo Alckmin del PSDB–, ante la posibilidad de perder la segunda vuelta.

Pero el mandatario reaccionó vigorosamente y logró reelegirse –con el 60.8% de los votos válidos, equivalente a 58.3 millones de votantes– para otros cuatro años. Su victoria sobre el candidato opositor, que se tuvo que conformar con el 39% de los sufragios, fue festejada por todo el país.

Al final, las pérdidas del partido gubernamental en estas elecciones no fueron de la magnitud que se vaticinaba, pues el PT quedó como la segunda agrupación más numerosa de la cámara. No

obstante, los 83 representantes obtenidos por el PT en esta rama parlamentaria era inferior a los 91 diputados conseguidos en el 2002 y, entre los dos comicios presidenciales, los seguidores de Lula disminuyeron en dos millones de votos, mientras la abstención fue la más alta de los últimos años (23%).

A fin de cuentas, la clave de la nueva victoria electoral de Lula era su política social, que le permitió sortear con éxito ciertas tensiones y mantener su popularidad entre los sectores menos politizados, en gran medida gracias a la *Bolsa Familiar* que ya beneficiaba con una pequeña mensualidad a más de 11 millones de familias pobres. Aunque el gobierno del PT había relegado las prometidas transformaciones sustanciales de la sociedad, al final de su primer mandato la mejoría de los sectores más humildes era ostensible.

Durante su segundo gobierno, extendido de 2007 a 2011, Lula estuvo más a la izquierda que en el primer período presidencial. En esta etapa puso énfasis en la integración de América Latina. Los éxitos obtenidos y el crecimiento económico conseguido por Brasil, cada vez más una potencia emergente a nivel mundial, le permitieron a Lula abandonar el poder con un histórico 97% de aprobación a su gestión.

Con ese aval llegó su sucesora y correligionaria Dilma Rouseff al Palacio del Planalto en Brasilia, la primera mujer que alcanzaba tal responsabilidad en toda la historia de Brasil. En la campaña electoral, Dilma tuvo como principales rivales a José Serra y Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente que había abandonado el gabinete de Lula precisamente por un enfrentamiento con la ahora aspirante del PT. En estos comicios, Dilma obtuvo el 46.8% de los sufragios, seguidos por el 32.6% de Serra y el 19.3% de Silva. La presidente brasileña se ha propuesto eliminar la pobreza extrema y dedicar casi la mitad del PIB de Brasil a esa finalidad.

Una vez en el gobierno, la flamante mandataria dio continuidad a la política de su predecesor, aunque puso más énfasis en la defensa de los derechos humanos, para lo cual comenzó aprobando una ley de libre acceso a la información pública y creando una Comisión Nacional de la Verdad (CNV), para investigar las violaciones cometidas por los órganos represivos del Estado brasileño desde 1946.

También se distinguió por su política de *faxina*, esto es, limpieza de la administración pública, que ha llevado a la salida del gobierno y organismos del Estado a varios ministros y funcionarios, lo que se ha combinado con una política exterior de gran potencia emergente que exige un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y en otros foros internacionales.

A mediados de 2013, varias ciudades de Brasil fueron sacudidas por espontáneas manifestaciones populares provocadas por el aumento de los precios del transporte en Sao Paulo y exigiendo una profunda revisión de los gastos públicos. En particular, cuestionaban los millonarios fondos empleados en costosos eventos deportivos, como los empleados en la construcción de instalaciones para la Copa Mundial de Fútbol, Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. La inesperada crisis creada por las multitudinarias protestas callejeras condujo a la brusca caída de la popularidad de la mandataria, obligándola a reevaluar en forma crítica toda su política, para dar respuesta a las exigencias de la gran mayoría de la población brasileña.

PERONISMO KIRCHNERISTA EN ARGENTINA

En Argentina, los procesos de cambios fueron la reacción natural a una profunda crisis económica, creada por la aplicación del neoliberalismo, acompañada de una larga inestabilidad política y social. Según las cifras, la crítica situación argentina había llegado al extremo de que el 54% de la población se encontrara por debajo del límite de pobreza y la mitad de ella (27% del total), en condiciones de indigencia.

En esas difíciles condiciones, se efectuaron los comicios presidenciales del 27 de abril de 2003 que despejaron el camino a la Casa Rosada del abogado y ex gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. El aspirante peronista del llamado Frente de la Victoria –apoyado por el mandatario interino Ernesto Duhalde– quedó en segundo lugar en esas elecciones, con solo el 22.24 % del electorado, detrás de su principal oponente, el ex presidente y también peronista Carlos Menem, que había conseguido el 24.3% de los sufragios.

Pero la segunda ronda electoral no llegó a efectuarse, pues Menem, convencido de la victoria kirchnerista, pues las encuestas le daban más del 60% de las intenciones de votos, decidió retirarse de la contienda, evitando además una división peronista. De esa manera Kirchner, que en 1991 había sobresalido dentro del denominado peronismo renovador por su oposición a varios proyectos neoliberales del propio Menem, entre ellos la privatización de Aerolíneas Argentinas y la ley de hidrocarburos, llegó a la primera magistratura con la más baja votación registrada en la historia nacional.

El 25 de mayo de 2003 comenzó el gobierno de Néstor Kirchner. Desde los primeros momentos se distanció de las administraciones precedentes y comenzó a desarrollar una política posneoliberal, dirigida a cambiar en poco tiempo el desastroso panorama económico y cerrar el ciclo de ingobernabilidad abierto en 2001. Para lograr disminuir la pobreza y el desempleo, promovió nuevas fuentes de trabajo, la elevación del salario real y una mejor distribución de la riqueza, a lo que contribuyó el crecimiento de las construcciones, en particular de viviendas, y de la industria por sustitución de importaciones, que permitió hasta 2007 un crecimiento anual del 9%.

A ello debe añadirse una política a favor de la integración latinoamericana –en particular con Venezuela y Brasil–, y de rechazo al ALCA promovido por Estados Unidos. Incluso, Kirchner encabezó la oposición latinoamericana a los planes neopanamericanos del gobierno de Bush en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata (2005).

También el gobierno kirchnerista se distanció de los anteriores por su firme condena a las violaciones de los derechos humanos durante los regímenes castrenses de fines de los setenta y principios de los ochenta. Para acabar con la impunidad, anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos de los noventa, que habían impedido juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, además de renovar la anquilosada Corte Suprema de Justicia.

También el presidente impulsó la renegociación de la onerosa deuda externa, sacando a la Argentina de la más larga suspensión de

pagos de su historia, procurando que no pasara por encima de los intereses y demandas nacionales. En gran medida, ello fue factible con la ayuda solidaria del gobierno de Chávez, que le permitió pagar el total de la deuda externa al FMI, casi 10 mil millones de dólares.

Esta política soberana e independiente fue continuada por su esposa, la abogada Cristina Fernández –bajo cuyo gobierno Néstor Kirchner fue parlamentario y presidente del Partido Justicialista (peronista)–, que ganó las elecciones para el período 2007-2011 con el 45.28% de los sufragios. Durante los últimos dos años del mandato de su esposo, Cristina Fernández se había desempeñado como senadora en el Congreso Nacional.

Durante su primer gobierno, la mandataria debió enfrentar a la élite agrícola, cuya resistencia a las medidas gubernamentales alcanzó su punto culminante en 2008, cuando realizaron un paro que estuvo acompañado de bloqueo de carreteras, extendido durante 129 días. También afrontó la oposición de la derecha argentina, como la proveniente del poderoso grupo mediático *Clarín* –negado a cumplir la ley antimonopólica y promotor de una rabiosa campaña de prensa contra el gobierno kirchnerista–, que influyó en la derrota electoral de la mandataria en los comicios intermedios de 2009.

No obstante, entre los logros del primer gobierno de Cristina Fernández deben mencionarse la nacionalización del sistema de pensiones y jubilaciones, la recuperación de antiguas empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, la Fábrica Argentina de Aviones y Yacimientos Petrolíferos (YPF) –incluso fueron nacionalizadas el 51% de las acciones de la empresa española Repsol–, además de la ayuda económica masiva brindada para hijos de desempleados, que ya en 2012 beneficiaba a cuatro millones de personas. A todo ello debe sumarse la continuación de la lucha por los derechos humanos y de la política exterior soberana e integracionista iniciada durante el gobierno de su esposo, incluyendo la intensificación de la campaña diplomática para la recuperación de Las Malvinas.

En vísperas de nuevas elecciones, en la que todo parecía indicar que Néstor Kirchner se presentaría de nuevo como candidato del Frente para la Victoria, el líder justicialista falleció en forma repentina el 27 de octubre de 2010. La ola de duelo popular que estremeció

la Argentina impulsó la reelección de su viuda para un segundo mandato (2011-2015). En estas dramáticas condiciones, teniendo como base fundamental al peronismo y su alianza con partidos de centroizquierda, unidos en el Frente para la Victoria, Cristina Fernández viuda Kirchner obtuvo el 54.11 % de la votación, el más alto porcentaje obtenido por un aspirante presidencial desde 1983.

Entre las realizaciones del segundo mandato de la presidenta argentina se encuentran el plan Conectar Igualdad, basado en la entrega y puesta en funcionamiento de tres millones de mini lap tops con acceso a Internet a todas y todos los alumnos de escuelas públicas primarias y secundarias del país. Ello ha sido posible porque el presupuesto nacional de educación creció desde el 3.64% en 2003 al 6.81% en 2012, al mismo tiempo que las construcciones de centros educativos ha registrado la cifra más alta desde el primer gobierno de Perón.

Como resultado de los tres sucesivos gobiernos kirchneristas, la deuda en dólares de la Argentina descendió del 92% del PIB, que representaba en el 2003 a solo el 8.4% en 2012. Además la pobreza, según un informe de la CEPAL, se redujo en 2011 en relación al 2003, de 33.8% al 5.7%, ubicándose como la más baja en América Latina, por delante de Uruguay (6.7%). Por su parte, la indigencia disminuyó del 7.2 al 1.9%, siendo la segunda más baja de la región, mientras, según informes del Banco Mundial, entre 2003 y 2009 Argentina duplicó su clase media, pasando de 9.3 millones a 18.6 millones de personas, casi la mitad de toda su población, a lo que ha contribuido el sustancial incremento de las pensiones y jubilaciones. Pese a todos estos avances, la oposición y la prensa de la derecha hacen todo lo posible por entorpecer la labor gubernamental kirchnerista, con el propósito de revertir los logros alcanzados para la gran mayoría de la población argentina.

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La entrada al Palacio Quemado en La Paz de Evo Morales Ayma, el 22 de enero de 2006, formó también parte del cambio de

época registrado en América Latina a comienzos del siglo XXI. El popular líder indígena de origen aymara se alzó con una indiscutida victoria electoral en los comicios del 18 de diciembre de 2005, teniendo de compañero de fórmula electoral por el Movimiento al Socialismo (MAS)-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) a un destacado intelectual y ex guerrillero, Álvaro García Linera.

El programa de Evo Morales, que le atrajo el apoyo de los sectores más humildes del país, incluía demandas como la revalorización de la identidad indígena, la recuperación de los recursos naturales y la defensa de la cultura de la hoja de coca. Ello explica que obtuviera el 53.7% de la votación frente al candidato del Partido Poder Democrático Social (PODEMOS), del ex presidente Jorge Tuto Quiroga, quien solo consiguió el 28.59% de los sufragios.

Por primera vez en toda la historia de Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, los indígenas y campesinos llegaron al poder, controlando el Ejecutivo y buena parte del Legislativo (Cámara Baja). Por eso el primer gabinete del presidente Morales incluyó varios ministros indígenas, entre ellos David Choquehuanca en Relaciones Exteriores.

Entre las transformaciones llevadas adelante desde entonces por el gobierno de Evo Morales se encuentran el ingreso de Bolivia como miembro pleno del ALBA, que ha permitido el desarrollo de amplios programas de beneficio nacional, entre ellos el plan masivo de alfabetización *Yo sí Puedo* y operaciones médicas gratuitas, con el apoyo solidario de Venezuela y Cuba. Además, se han dado créditos a la microempresa y los campesinos por el Banco de Desarrollo Productivo, con vistas a lograr la modernidad rural, junto con la construcción de hospitales, carreteras y otras obras de infraestructura.

Al mismo tiempo, se han entregado fondos para los sectores humildes, como los bonos contra la deserción escolar –denominados *Juancito Pinto*– y para los ancianos, así como la reducción de las tarifas de electricidad y teléfono. Muchas de estas conquistas han sido posibles, en tan corto tiempo, porque el primer mandatario indígena en la historia de Bolivia, cumplió su promesa de campaña

de nacionalizar los hidrocarburos (1 de mayo de 2006), que de un plumazo permitió al Estado, a través del ente estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), controlar el 82% de los ingresos por este concepto. Con posterioridad, el Estado boliviano ha extendido su dominio a otros sectores estratégicos, entre ellos la minería, la electricidad, la fabricación de cemento y las telecomunicaciones.

Como parte de un amplio plan de cambios de beneficio popular deben incluirse las transformaciones agrarias. La reforma, puesta en marcha el 2 de agosto de 2006, se encaminó a entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos pobres, en particular indígenas, como parte de un plan más ambicioso que contempla en el futuro la expropiación de latifundios.

Gracias a muchas de estas disposiciones sin precedentes, el PIB boliviano creció un promedio anual del 5.2%. En 2008, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento registrado con un 6.2% según datos del FMI. En 2009 el país siguió creciendo en forma inusitada, al extremo que al año siguiente el Banco Mundial sacó a Bolivia de la lista de países de bajos ingresos y lo ubicó en el grupo de ingresos medios.

El 10 de diciembre de 2007 fue aprobada en Oruro, luego de un dilatado proceso de discusión por las maniobras opositoras de la reacción, la nueva constitución de Bolivia, definido desde entonces como un Estado Plurinacional, abriendo causas a una mayor participación popular y multiétnica en la sociedad boliviana. A continuación, el 25 de enero de 2009, se celebró el referendo para ratificar la nueva carta magna, que fue aprobada por el 61.43% de los votantes, ocasión en que se registró la mayor participación de todas las consultas realizadas en la historia de Bolivia: 90.26% de los ciudadanos inscritos.

El avance del proceso revolucionario en Bolivia, sin embargo, no ha estado exento de escollos, internos y externos, como los planes desestabilizadores de 2008, el llamado «gasolinazo» de diciembre de 2010, provocado por el aumento de los precios de los combustibles, y las manipuladas protestas indígenas de fines de 2011 por la construcción, por empresas brasileñas, de una

autopista cuyo trazado implica atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboró-Sécure (TIPNIS), entre Cochabamba y Beni. En estas condiciones, sometido a referéndum revocatorio el 10 de agosto de 2008, el popular mandatario indígena obtuvo un resultado favorable del 67.43%.

A pesar de todas las dificultades y obstáculos, el gobierno de Evo Morales, reelegido en su cargo en los comicios presidenciales del 6 de diciembre de 2009 –obtuvo el 64.22% de la votación–, que ha dado en 2013 nuevo impulso a la campaña diplomática para la recuperación de una salida al mar, persiste en su objetivo de abrir paso a profundas transformaciones sociales y económicas que consoliden la participación de las grandes mayorías indígenas como principales protagonistas del proceso de refundación de la gran nación del altiplano, que se encamina a pasos firmes hacia su liberación definitiva como verdadero Prometeo de los Andes.

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA DE RAFAEL CORREA EN ECUADOR

Otro país que experimentó un giro radical en su historia ha sido Ecuador, que le permitió superar la inestable situación de fines del siglo XX y principios del XXI, provocada por la irresponsable aplicación de las medidas neoliberales de ajuste y reestructuración de la economía, junto a una creciente militarización del país, tras el fin del conflicto armado con Perú (1998). En un ambiente enrarecido por estas políticas nefastas, una profunda crisis económica y la falta de credibilidad ciudadana en el sistema político existente, fue que comenzó a sobresalir Rafael Correa Delgado.

Este joven economista, había realizado estudios universitarios en Estados Unidos y Bélgica, donde estuvo en la Universidad de Lovaina y conoció de cerca la Teología de la Liberación. Una de las primeras cosas que llamaron la atención de Correa fue su renuncia a su puesto de ministro de Economía y Finanzas en el gabinete del gobierno provisional de Alfredo Palacio (2005-2007), quien había sido el vicepresidente del defenestrado Lucio Gutiérrez, en franco

desacuerdo con la postura neoliberal del gobierno, que aceptaba las exigencias del FMI, y la firma del TLC con Estados Unidos.

Situado en la oposición, Rafael Correa comenzó a vertebrar una propuesta de cambios radicales para la sociedad ecuatoriana, que denominó *revolución ciudadana*, con un acabado plan antineoliberal y nacionalista, que puso énfasis en la educación y la salud popular y el rescate de la soberanía nacional. Al frente del un movimiento recién fundado, Alianza País Altiva y Soberana, y con el concurso de Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático, el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Partido Comunista, el Partido Socialista e Izquierda Democrática, Correa logró vencer a sus adversarios en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2006.

El principal adversario en la segunda vuelta electoral era el banquero Álvaro Novoa, del Partido Renovador Institucional, defensor de la privatización de todas las empresas públicas y el desmontaje de las leyes laborales. Pero en la ronda final, Novoa solo sacó el 43% de los sufragios frente al 56.67% obtenido por el líder de la propuesta de *revolución ciudadana*.

Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, 15 de enero de 2007, se puso de relieve que en Ecuador no se había producido un cambio de gobierno más, sino un verdadero cambio de época, como proclamó el propio mandatario. El principal escollo que el nuevo presidente debió enfrentar fue la tenaz oposición parlamentaria al proceso de transformaciones, pues Alianza País no tenía representación en el Legislativo y Correa exigía una sustancial reforma constitucional.

Eso explica que la estrategia transformadora de Correa comenzara por someter a referéndum la necesidad de una convención constituyente. Efectuado el 15 de abril de ese mismo año, la propuesta gubernamental obtuvo el aval del 81.7% del electorado. A continuación, en las elecciones a ese cónclave, los partidarios de Correa, obtuvieron 78 escaños de los 130 escaños, lo que permitió elaborar una nueva carta magna que permitiera modificar en forma sustantiva el orden neoliberal heredado y el desprestigiado y corrupto sistema político, al que Correa denominó la *partidocracia*.

Debido a la puesta en vigor de la nueva constitución –aprobada el 28 de septiembre de 2008 por el 63.93% de los votantes–, que

establecía nuevas elecciones generales, Correa debió someterse a nuevos comicios, en los que la amplia ventaja –consiguió el 51.99% de los votos– hizo innecesaria la segunda ronda. Por este motivo, volvió a tomar posesión de su alto cargo el 10 de agosto de 2009, en medio del entusiasmo popular y la conmemoración del bicentenario de la independencia.

Entre los primeros éxitos de la *revolución ciudadana* deben anotarse la disminución de los salarios de los altos cargos gubernamentales, el desalojo de la base militar norteamericana en Manta, la renegociación de los contratos petroleros, el cese de las relaciones con el FMI y la promoción de la integración latinoamericana, incluido el ingreso de Ecuador al ALBA en junio de 2009. También debe mencionarse el desarrollo de importantes obras públicas, los subsidios otorgados a las poblaciones más vulnerables –como los de desarrollo humano y los de viviendas–, la significativa disminución del desempleo y la elevación de salarios. A ese listado de realizaciones debe sumarse la liquidación, en una hábil maniobra financiera, aplaudida hasta por la oposición, del 91% de la deuda externa –a un costo mínimo de 35 centavos por dólar– previamente declarada ilegítima.

Pero el gobierno de Correa ha debido desarrollarse enfrentando constantes intentos de la reacción y Estados Unidos por derrocarlo. Uno de ellos fue el intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre de 2010, que tuvo por basamento un manipulado motín policiaco que dejó un saldo de ocho muertos y dos centenares de lesionados.

En la misma dirección se inscriben las marchas opositoras en marzo de 2012 de una de las organizaciones indígenas del país, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONNAIE). Esta agrupación, que se ha ido convirtiendo, tras su apoyo a Lucio Gutiérrez en una fuerza conservadora, y su expresión política Pachakutik en un partido tradicional más, también apostó infructuosamente por la desestabilización del país.

El creciente prestigio y la popularidad nacional e internacional del presidente Correa, cimentados en una palpable elevación del nivel de vida de la población y de la dignidad nacional, ha propiciado el retorno de miles de emigrados ante el sustancial mejoramiento de la situación económica de Ecuador. Esos avales le permitieron al líder

de la *revolución ciudadana* reelegirse, con holgado margen (57.17%), el más alto porcentaje obtenido por un candidato en la historia reciente de Ecuador, en la primera vuelta en las elecciones efectuadas el 17 de febrero de 2013, lo que augura un futuro venturoso para el pueblo ecuatoriano.

DERROCAMIENTO DE LOS GOBIERNOS POPULARES DE HONDURAS Y PARAGUAY

No obstante las buenas perspectivas que se abrieron en el siglo xx a la izquierda latinoamericana para acceder al poder por la vía electoral, estos procesos de cambios no han estado libres de obstáculos de todo tipo. Incluso en dos países las fuerzas de la reacción y el imperialismo lograron revertirlos, como ocurrió con los dramáticos acontecimientos ocurridos en Honduras y Paraguay, donde en forma abrupta las fuerzas reaccionarias azuzadas por Estados Unidos lograron derrocar al gobierno del ex obispo católico Fernando Lugo y al del hacendado Manuel Zelaya.

En Honduras la sucesión del mandatario conservador Ricardo Maduro, en lo que parecía una sucesión tradicional de poder en la élite hondureña, devino de manera inesperada en una radicalización de la política nacional. El autor de ese giro fue el rico hacendado del Partido Liberal, José Manuel, *Mel*, Zelaya Rosales, elegido en la presidencia de Honduras tras ganar los comicios del 2005 a su contrincante del oficialista Partido Nacional, el conservador Porfirio Lobo con el 50.79% de los sufragios.

El gobierno de Mel Zelaya, iniciado el 27 de enero de 2006, desarrolló una política que hizo énfasis en el desarrollo social, así como en la integración con los países latinoamericanos, alejándose de la postura pronorteamericana de los gobiernos precedentes. Prueba de ello fue su ingreso a Petrocaribe en 2008 y, posteriormente, al ALBA, así como el auspicio a la reunión de la OEA celebrada en San Pedro Sula, los días 2 y 3 de junio de 2009, que revocó las sanciones contra Cuba y abrió el camino para su reingreso en la organización panamericana en caso que deseara hacerlo.

La política soberana e independiente del gobierno de Zelaya, la aprobación del salario mínimo y en particular su propuesta de convocar un plebiscito para reformar la constitución, desataron la cólera de reacción interna, apoyada bajo cuerda por los Estados Unidos. El 28 de junio de 2009, el presidente Zelaya fue derrocado por un golpe militar, legitimado por el parlamento, y expulsado del país.

En su lugar ocupó el poder Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Congreso Nacional, quien ante las airadas protestas populares contra la ruptura del orden democrático –secundadas por gran parte de la comunidad internacional–, respondió con una mayor represión. Las medidas gubernamentales no pudieron impedir el crecimiento de la oposición democrática ni tampoco el regreso del mandatario derrocado, que se alojó en la embajada de Brasil en Tegucigalpa el 22 de septiembre de 2009, de donde salió de nuevo al exterior el 27 de enero de 2010 con un salvoconducto del nuevo mandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa.

El posterior retorno de Zelaya a Honduras fue favorecido por el *Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras*, suscrito con el propio presidente Lobo, gracias a la mediación de los gobiernos de Hugo Chávez de Venezuela y José Manuel Santos de Colombia. Tras el regreso definitivo de Zelaya a Honduras, el 28 de mayo de 2011, se ha ido vertebrando un gran movimiento opositor, denominado Frente Nacional de Resistencia Popular, que cuenta con un extraordinario respaldo ciudadano, encabezado por la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, que se vislumbra con grandes posibilidades de romper el tradicional sistema bipartidista que ha dominado al país a todo lo largo de su historia.

En Paraguay, por su parte, el derrotero no fue muy diferente al hondureño. Fernando Lugo llegó al poder luego del fracaso del gobierno del colorado Nicanor Duarte, iniciado el 15 de agosto de 2003, durante cuyo mandato se incrementaron las sangrientas confrontaciones sociales protagonizadas por los movimientos campesinos, en particular los despertados contra el «modelo sojero», la utilización de los agrotóxicos y los «tarifazos» contra los pagos de la deuda externa.

Como obispo de la diócesis de San Pedro del Paraná en Itapúa, entre 1994 y 2005, una de las zonas más pobres del Paraguay, Fernando Lugo había sobresalido por su apoyo a los campesinos sin tierra y el impulso dado a la organización de Resistencia Ciudadana. Esta era una agrupación de los principales partidos políticos de la oposición, las cinco centrales sindicales y más de un centenar de asociaciones civiles surgidas contra el intento de violación de la constitución nacional por parte del entonces presidente Nicanor Duarte.

Para buscar un cambio en la situación del país, el Obispo de los Pobres, como se le llamaba a Lugo, anunció su candidatura presidencial con una propuesta que incluía una reforma agraria —el 3% de la población paraguaya ocupa el 85% de las mejores tierras del país—, el mejoramiento de la justicia, lograr la salud universal gratuita y la recuperación de la soberanía energética. Su victoria electoral en las elecciones del 20 de abril de 2008, fue posible en gran medida por la conformación de la Alianza Patriótica por el Cambio, cuya principal fuerza era el Partido Liberal Radical Auténtico. En esos comicios, Lugo derrotó por más de un 10% de los votos a Blanca Ovelar, la candidata del oficialista Partido Colorado, que llevaba más de seis décadas en el poder y había sido el sostén de la larga dictadura de Stroessner.

El gobierno de Lugo, iniciado el 15 de agosto de 2008, desde su inicio se mostró muy limitado en la satisfacción de los reclamos populares, entre ellos la reforma agraria, la liquidación del corrupto sistema político, el combate al contrabando, la eliminación de la pobreza extrema y otros problemas sociales. Dada su endeble base política, pues carecía de un partido propio, el mandatario paraguayo debió resistir casi en solitario los golpes de la reacción, los recortes presupuestarios y obstáculos de toda especie levantados por los poderes constituidos, dominados por las fuerzas políticas tradicionales, el Partido Colorado y su propio aliado el Liberal Radical Auténtico, junto al capital extranjero.

Pese a estas grandes limitaciones, el antiguo obispo consiguió de Brasil el reconocimiento de la soberanía energética paraguaya, el 6 de abril de 2011, que significó un ingreso adicional de 360 millones de dólares anuales para el país, así como ciertas mejoras en

el campo de la salud pública y la educación. De este modo, durante 2010 y 2011 el país registró tasas récord de crecimiento económico, generadas en gran medida por el aumento de las exportaciones y la expansión del sector comercial, industrial y de la construcción, alcanzando picos históricos de crecimiento de 14.5%, una de las mayores tasas de América Latina.

A estos significativos logros de su política, debe sumarse la organización en marzo de 2010 del Frente Guasú, que quiere decir Grande –agrupó a una veintena de pequeños partidos y movimientos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista–, con el propósito de participar en las elecciones presidenciales de 2013. Pero las campañas difamatorias de la oposición y la aparición del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que comenzó acciones armadas en las zonas rurales, fueron debilitando al gobierno, lo que facilitó su fácil derrocamiento mediante un burdo golpe parlamentario el 12 de junio de 2012. El pretexto utilizado por los legisladores, encabezados por el propio vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico, para deponer al mandatario fue la masacre de campesinos y la muerte de varios policías ocurrida en Curuguaty.

El gobierno de Franco concluyó el mandato de Lugo. En las elecciones del 21 de abril de 2013 se impuso el candidato del Partido Colorado, el millonario Horacio Cartes, quien obtuvo el 45.9% de la votación sobre el aspirante liberal Efraín Alegre, que solo alcanzó el 36.93%, iniciando su gobierno a mediados de agosto del propio año. En esos mismos comicios el ex presidente Lugo fue elegido senador por el Partido Frente Guasú, cuando según cifras oficiales la pobreza alcanza al 40% de la población paraguaya y el 19% de ella se encuentra en total indigencia.

En ambos casos las transformaciones democráticas y populares iniciadas por los mandatarios Zelaya y Lugo en Honduras y Paraguay, respectivamente, dos de los países más pobres del hemisferio, fueron cercenadas en forma abrupta por sendos golpes de Estado realizados en 2009 y 2012. La asonada militar hondureña y el golpe parlamentario de Paraguay permitieron interrumpir las expectativas de cambios a que estaban abocados ambos países y, mediante fórmulas muy semejantes, tras el breve interinato de los gobiernos golpistas

de Micheletti y Franco, se realizaron comicios presidenciales que sirvieron para devolver el poder a los sectores tradicionales y con ello poner fin al rechazo internacional y recuperar la plena participación de estos gobiernos en los foros y organizaciones mundiales de los que habían sido excluidos.

ASCENSO DE OTROS GOBIERNOS POSNEOLIBERALES

La oleada antineoliberal que se expandió por América Latina tras el triunfo de la revolución bolivariana en Venezuela, a comienzos del siglo XXI, incluyó también al fortalecimiento de dos agrupaciones de origen guerrillero: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, llegados al poder por sendas victorias electorales de sus candidatos Daniel Ortega en 2007 y Mauricio Funes en 2009.

En el caso de Nicaragua, el resurgimiento del sandinismo se produjo a contrapelo del desgaste a que fue sometido el FSLN y de las campañas de desprestigio lanzadas en su contra por la propaganda derechista, como las orquestadas en torno a «La Piñata». Con este término festivo se alude al proceso ocurrido tras la pérdida electoral en 1990, cuando los sandinistas, antes de entregar el poder a la oposición, legalizó los bienes expropiados a la oligarquía —tierras, casas, etc.— y que habían sido repartidos entre la población humilde, incluyendo las propiedades que pasaron a la propia organización revolucionaria y a sus dirigentes a título personal.

También como consecuencia de la salida del poder, la unidad del FSLN se fue resquebrajando hasta que en el Congreso Nacional, celebrado en 1994, un prestigioso sector del sandinismo, encabezado por destacadas figuras históricas como Sergio Ramírez, Víctor Tirado y Luis Carrión, abandonó la organización y crearon el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La división sandinista facilitó que en las siguientes elecciones parlamentarias, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el principal partido de la derecha, obtuviera el 51% de la votación,

mientras el FSLN debía conformarse con el 38% y el MRS con apenas el 2%.

Otra decisión controvertida del FSLN fue los acuerdos electorales y parlamentarios a que se llegó más adelante con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para lograr cierta gobernabilidad en el país, lo que fue muy criticado por el otro sector sandinista. Pero el entendimiento con los liberales constitucionalistas permitió cierta estabilidad política y creó las condiciones para el retorno al poder del FSLN; aunque en lo inmediato facilitó al candidato del PLC, Arnoldo Alemán, ganar los siguientes comicios presidenciales con el 52.5% frente al 37.8 % obtenido por Daniel Ortega.

El período de Alemán, extendido de 1997 a 2002, se caracterizó por la continuación de la política neoliberal implantada por su antecesora, Violeta Barrios de Chamorro, a lo que añadió la descarnada corrupción administrativa y el nepotismo, lo que más tarde determinó que fuera acusado ante los tribunales y la opinión pública. En los siguientes comicios presidenciales, el candidato del FSLN volvió a ser derrotado por un exitoso empresario vinculado al FMI y al Banco Mundial, Enrique Bolaños, quien obtuvo el 56.3% de la votación frente al 42.3% de Ortega.

El continuo deterioro de la situación económica, social y política del país durante el mandato de Bolaños, extendido hasta 2007, derivados de un desenfrenado neoliberalismo, permitió al FSLN ganar la alcaldía de Managua y conseguir la mayoría parlamentaria en el Congreso. Además, mediante una hábil política de alianzas, el FSLN vertebró un gran frente nacional electoral denominado «Gran Unidad Nicaragua Triunfa».

La histórica victoria sandinista en las elecciones del 3 de noviembre de 2006, con un 38.59 % de la votación, fue también posible por los acuerdos previos con el PLC, que establecieron que se reconocía vencedor al aspirante presidencial que obtuviera la mayoría, sin necesidad de segunda vuelta, lo cual había ocurrido ahora al quedar en el segundo puesto el liberal Eduardo Montealegre con el 30.9%. Con esta victoria electoral, el FSLN, encabezado por su líder histórico, Daniel Ortega, regresó al poder a partir del 10 de enero de 2007.

El retorno de los sandinistas abrió una nueva época en el país al poner fin a la desenfrenada política neoliberal aplicada por los gobiernos precedentes y dar inicio a la recuperación económica del país, rescatando el papel del Estado en la economía y los programas sociales de amplio beneficio social implantados por la revolución tras su triunfo en 1979. Muchos de estos programas educativos, de salud y otros se han visto favorecidos con la ayuda solidaria del ALBA, a la que Nicaragua se incorporó de inmediato.

Los éxitos de los sandinistas y el ostensible mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, explican la nueva victoria en los comicios de 2011, cuando Daniel Ortega se reeligió con 62.46% de los sufragios, mientras que su principal contrincante, Francisco Gadea, solo obtenía el 31%. Esta resonante segunda victoria electoral ha permitido a un fortalecido FSLN mantenerse en el poder y rescatar las conquistas de la revolución sandinista, beneficiado por las nuevas circunstancias históricas que vive hoy América Latina a principios del siglo XXI.

Por su parte, la victoria de los antiguos guerrilleros del FMLN en los comicios de 2009 en El Salvador, estuvo precedida de divisiones internas y frustrantes reveses electorales tras su desmovilización militar. En 1994 abandonaron el FMLN las cúpulas de dos de sus organizaciones fundadoras, la Resistencia Nacional (RN) –encabezada por Fermán Cienfuegos– y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este último dirigido por Joaquín Villalobos, responsable confeso del asesinato del poeta guerrillero Roque Dalton en 1975.

Las expectativas de cambio esgrimidas por el candidato del FMLN, el prestigioso líder comunista comandante Shafik Handal –fallecido el 24 de enero de 2006–, se vieron insatisfechas con la elección, por el 57% de la votación, de Antonio Elías Saca de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). De esta forma, Saca sucedió en la presidencia, en 2004, al también neoliberal Francisco Flores, quien gobernaba desde 1999.

Pero en los siguientes comicios, celebrados el 15 de marzo de 2009, triunfó el periodista Mauricio Funes, candidato del FMLN, sobre el aspirante de la Alianza Republicana Nacional (ARENA), Rodrigo Ávila, antiguo director de policía. Esta victoria electoral

permitió a la antigua organización guerrillera ocupar la primera magistratura tres meses después e iniciar transformaciones sociales y democráticas en la vida del país.

Mención aparte merecen los sostenidos y significativos avances electorales en Uruguay del Frente Amplio-Encuentro Progresista, este último surgido en 2004. Su representante, el médico Tavaré Vázquez, que ya había estado a punto de vencer en la segunda vuelta electoral en 1999 a Jorge Batlle, candidato de la derecha Blanco-Colorado forzada por primera vez a coligarse para mantener el poder, ganó en forma espectacular, con el 50.45% de los sufragios, en los comicios de 2004.

El 1 de marzo de 2005 con la toma de posesión de Tavaré Vázquez se inició una nueva etapa histórica en la patria de Artigas que se continuó después con el ascenso al poder del ex guerrillero tupamaro José Mujica, aunque a diferencia de su antecesor solo obtuvo el 47.9% de los sufragios y debió concurrir a una segunda vuelta. Entre los logros de estos dos gobiernos seguidos del Frente Amplio en Uruguay pueden anotarse los beneficios salariales a los trabajadores y sustanciales mejoras en las condiciones laborales y de nivel de vida de su población.

ÚLTIMOS AVANCES DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Aunque algunos analistas clasifican a estos nuevo gobiernos, que han transformado radicalmente el panorama político de América Latina, en populistas de centroizquierda (Argentina, Brasil y Uruguay, incluyendo El Salvador, Honduras y Paraguay, estos últimos antes de ser revertidos por la fuerza), o nacionalistas revolucionarios (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), todos tienen más coincidencias que divergencias. En primer lugar, sus aspiraciones por un orden social más justo y en el desarrollo de una política internacional verdaderamente soberna e independiente.

Varios de estos gobiernos son muy críticos del capitalismo y aspiran a cambios radicales. Incluso se han propuesto la construcción

de una nueva sociedad, en un proyecto que se ha denominado socialismo del siglo xx, y todos coinciden en impulsar, como nunca antes, la integración de América Latina y el Caribe desde una perspectiva solidaria e inclusiva.

El cambio de época que indudablemente vive hoy el continente ha venido acompañado de lo que pudiera considerarse un segundo impulso de la integración latinoamericana, nacida al calor de la lucha por la independencia continental a fines del siglo xix y principios del xx. Muestra de este reverdecir es la aparición en 2004 de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, (ALBA-TCP), la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) en 2008 y la fundación, en diciembre de 2011, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En particular, esta última es una agrupación política de 33 países de nuestra América que representa a 540 millones de personas y 20 millones de kilómetros cuadrados. La CELAC tiene sus antecedentes en el Grupo Contadora, formado en 1983 por Colombia, México, Venezuela y Panamá, para buscar una solución pacífica al conflicto armado que entonces assolaba la región centroamericana, y el llamado Grupo de Río, creado en 1990 como mecanismo de consulta y concertación política de los gobiernos de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos.

La CELAC agrupa a países con orientaciones políticas muy diversas, algunos de ellos todavía atados a pactos, compromisos y tratados de libre comercio con los Estados Unidos –como son los casos de México, Panamá, Colombia, Costa Rica, Chile y desde 2012 Guatemala– hasta los países que componen el ALBA y otros con gobiernos progresistas que son resultado de una crítica radical al neoliberalismo y el orden social injusto, cuya participación ha sido fundamental para avanzar hacia una posición común basada en el respeto a la soberanía de nuestros pueblos frente al coloso del norte.

Las perspectivas que se abrieron con el siglo xxi a nuevas modalidades de unidad latinoamericana y caribeña han puesto a la orden del día propuestas integracionistas de matriz bolivariano que aspiran a crear las condiciones para conformar una confederación política moderna, que preserve y consolide la independencia de América

Latina y resista la embestida de la integración neopanamericana. Prueba de ello ha sido el creciente emplazamiento al neoliberalismo y los proyectos de libre comercio promovidos desde Estados Unidos, que ha permitido relanzar los proyectos integracionistas regionales y llegar a acuerdos entre estos, como los firmados entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina, así como la fundación en 2008 de la Comunidad Sudamericana de Naciones –formada en sus inicios por 12 países–, también conocida como Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

En particular, MERCOSUR ha logrado consolidarse como el primer bloque comercial de América Latina y el Caribe. Su radio de acción y esferas de actividad se han ido ampliando y hoy abarcan también acciones en salud, defensa, energía, economía y finanzas, desarrollo social, infraestructura y planeamiento, educación, cultura, ciencia e innovación. Expresión de ello fue la reciente creación del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), con sede en Buenos Aires, cuyo objetivo es crear una doctrina sudamericana en materia de defensa y el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), así como el impulso dado al Banco del Sur, que aspira a romper la tradicional dependencia financiera del Banco Mundial y el FMI.

Un papel muy destacado en la promoción de la unidad latinoamericana y caribeña le ha correspondido a la República Bolivariana de Venezuela bajo la dirección del desaparecido presidente Hugo Chávez, en gran medida responsable del vigoroso impulso dado a los proyectos integracionistas de nuevo tipo con los demás países de la región, de lo que son muestras el ingreso de Venezuela en diciembre de 2005 al MERCOSUR –proceso dilatado por la resistencia de congresistas conservadores de Paraguay–, la creación de Petrocaribe y, muy en particular, con la fundación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), hoy denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos).

El ALBA, verdadera respuesta revolucionaria al ALCA y los tratados de libre comercio con Estados Unidos, acogida con todo calor por la revolución cubana –que se ha propuesto la actualización

de su sistema socialista—, se inscribe también en este empeño de retomar el sueño del *Libertador* y darle cima a comienzos del siglo XXI. Al ALBA, surgido el 14 de diciembre de 2004 por acuerdos entre los gobiernos de Venezuela y Cuba, han ido sumándose posteriormente otras naciones del continente: Nicaragua (2007), Honduras (2008), Bolivia (2006), Ecuador (2009), Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, estos tres pequeños estados caribeños entre 2008 y 2009.

El ALBA se fundamenta en un ideal integracionista que hace énfasis en el desarrollo social y humano de los pueblos latinoamericanos y caribeños, siguiendo el legado de los grandes pensadores de este continente y las mejores tradiciones de Nuestra América. Por ello, entre sus objetivos figuran unir en colaboración, complementación política, social y económica a sus integrantes, para lograr sociedades más justas, cultas, participativas y solidarias.

Puntos importantes en su desempeño, encaminado a consolidar una zona de seguridad económica para sus miembros, han sido la fundación del Banco del ALBA y el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), que aspira a crear en un futuro una moneda común, así como las diferentes misiones sociales, educativas y de salud. Tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, el ALBA se ha convertido en el segundo bloque integracionista de la América Latina y el Caribe.

A pesar de los peligros de desestabilización, mayor dependencia y creciente ingobernabilidad que siguen acechando a los países de América Latina a comienzos del siglo XXI, el ideal de la segunda independencia reclamada por José Martí desde fines del siglo XIX va ganando la conciencia de las amplias mayorías de este continente como demuestran la apertura de muchos de estos procesos, y muy en especial el venezolano, que auguran cambios inevitables en el futuro, los cuales más temprano que tarde darán al traste con la *pax* norteamericana que las administraciones de Estados Unidos persisten en imponer en el nuevo milenio a todo el planeta.

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA, Joseph de. *Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan de las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas, y los ritos, y ceremonias, leyes y gobierno de los indios*. México, Fondo de Cultura Económica, 1962.
- AGUILAR MONTEVERDE, Alonso. *El Panamericanismo. De la doctrina Monroe a la doctrina Johnson*, México, Cuadernos Americanos, 1965.
- ALENCAR, Francisco, Lucia Carpi y Marcus Vinicio Ribeiro. *Historia da sociedade brasileira*. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1979.
- ALMARAZ, Sergio. *Bolivia, réquiem para una República*. Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1960.
- ANDERLE, Adam. *Los movimientos políticos en el Perú*. La Habana, Casa de las Américas, 1985.
- Antología de la independencia del Perú*. Lima, Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1972.
- ARANGO JARAMILLO, Mario. *El proceso del capitalismo en Colombia*. Medellín, Ediciones Hombre Nuevo, 1977.
- AYALA, Enrique (editor). *Nueva historia de Ecuador*. Varios tomos, Quito, Corporación Editora Nacional-Grijalbo, 1989.
- _____. *Resumen de Historia del Ecuador*. Quito, Corporación Editora Nacional, 2003.
- AYERBE, Luis Fernando. *Los Estados Unidos y la América Latina. La construcción de la hegemonía*. Santa Fe de Bogotá, Premio Casa de las Américas, 2002.

- BARCIA, María del Carmen. *Primeras sociedades de clase y modo de producción asiático*. La Habana, Edición Revolucionaria, 1971.
- BELENKI, A. *La intervención extranjera en México, 1861-1867*. México, Ediciones de Cultura Popular, 1976.
- BETHELL, Leslie (editor). *Historia de América Latina*. Varios tomos, Barcelona, Cambridge University Press/Editorial Crítica, 1991.
- BENITES, Leopoldo. *Ecuador: drama y paradoja*. México, Fondo de Cultura Económica, 1950.
- Benito Juárez: pensamiento y acción*. La Habana, Casa de las Américas, 1975
- BERMÚDEZ, José Alejandro. *Compendio de Historia de Colombia*, Bogotá, Editorial Cromos, 1934.
- BEYHAUT, Gustavo y Helene Beyhaut. *América Latina. De la independencia a la Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Siglo XXI, 1985.
- BOHÓRQUEZ MORÁN, Carmen L. *Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina*. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello/Universidad del Zulia, 2002.
- BOLÍVAR, Simón. *Obras Completas*. Dos tomos, Caracas, Editorial Piñango, [s.f.].
- BOSCH, Juan. *De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial*. La Habana, Casa de las Américas, 1981.
- BRADING, David A. *Orbe Indiano. De la monarquía católica a la República criolla 1492-1867*. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- BRITO FIGUEROA, Federico. *Historia económica y social de Venezuela*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973.
- BUSHNELL, David y Neile Macaulay. *El nacimiento de los países latinoamericanos*. Madrid, Editorial Nevea, 1989.
- CABALLERO, Manuel. *La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana*. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1987.
- CACCIATORE, Giuseppe y Antonio Scocozza (compiladores). *El Gran Majadero de América, Simón Bolívar: pensamiento político y constitucional*. Nápoles, La Città del Sole, 2008.
- CAETANO, Gerardo (compilador). *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2006.

- CAICEDO ZURRIAGO, Jaime. *Plan Colombia y ALCA un mismo modelo*. Bogotá, Ediciones Izquierda Viva, [s.f.].
- CARDOZA Y ARAGÓN, Luis. *Guatemala: las líneas de su mano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
- _____. *La revolución guatemalteca*, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1956.
- CASSÁ, Roberto. *Historia social y económica de la República Dominicana. Introducción a su estudio*. Dos tomos, Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1979.
- CASTAÑEDA, Jorge G. *La utopía desarmada*. México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1993.
- CASTOR, Susy. *La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias*. México, Siglo XXI, 1971.
- CHIAVENATO, Julio José. *Genocidio Americano. La Guerra del Paraguay*. Asunción, Carlos Schauman Editor, 2008.
- CÉSPEDES, Guillermo. *América Latina colonial hasta 1650*. México, Sep Setentas, 1976.
- Cinco Documentos*. La Habana, Instituto del Libro, 1971.
- CORONEL, Bernardo. *Breve interpretación marxista de la historia paraguaya (1537-2011)*. Asunción-Paraguay, ARANDURA Editorial, 2011.
- CUÉ CÁNOVAS, Agustín. *Historia social y económica de México (1521-1854)*. La Habana, Edición Revolucionaria, 1971.
- CUEVA, Agustín. *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. México, Siglo XXI, 1977.
- CUEVAS MOLINA, Rafael. *De Banana Republic a Repúblicas Maquileras. La cultura en Centroamérica en tiempos de globalización neoliberal*. San José, C. R. EUNED, 2012.
- CHANG-RODRÍGUEZ, Eugenio. *Opciones políticas peruanas*. Trujillo-Perú, Editorial Normas Legales S.A., 1987.
- CHÁVES, Julio César. *Compendio de Historia Paraguaya*. Buenos Aires, Talleres Gráficos Lumen, 1958.
- DÍAZ-CALLEJAS, Apolinar. *Colombia Estados Unidos. Entre la autonomía y la subordinación de la independencia a Panamá*. Santa Fe de Bogotá, Planeta, 1997.

- DÍAZ DE ARCE, Omar. *Ensayos latinoamericanos*. La Habana, Instituto del Libro, 1971.
- _____. *El proceso de formación de los estados nacionales en América Latina*. La Habana, Universidad de La Habana, 1980.
- DÍAZ DE ARCE, Omar y Armando Pérez Pino. *México: revolución y reforma*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1982.
- DÍAZ LACAYO, Aldo. *La Segunda Independencia 1810-2010. Bicentenario*. Managua, Aldilá y Cia. Ltda., 2010.
- ELÍAS, Antonio (compilador). *Los gobiernos progresistas en debate, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay*. Buenos Aires, CLACSO, 2006.
- ELLIOT, John H. *El Viejo y el Nuevo Mundo (1492-1650)*. Madrid, Alianza Editorial, 1972.
- _____. *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*. Madrid, Taurus, 2006.
- Enciclopedia del Paraguay*. Tomo I, Barcelona, Grupo Editorial Océano, [s.f.].
- ESCALANTE, Pablo, et al. *Nueva historia mínima de México*. México, El Colegio de México, 2004.
- FAULKNER, Harold U. *Historia económica de los Estados Unidos*. Dos tomos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.
- FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto. *Pensamiento de nuestra América. Autorreflexiones y propuestas*. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2006.
- FLECHA, Víctor-Jacinto. *Breve historia del Paraguay*. Asunción, FONDEC, 2012.
- FLORESCANO, Enrique. *Memoria mexicana*. México, Editorial Joaquín Mortiz, 1987.
- FRANCO, José Luciano. *Historia de la revolución de Haití. La batalla por el dominio del Caribe y el Golfo de México*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2010.
- FRANCO PICHARDO, Franklin. *Historia del pueblo dominicano*. Santo Domingo, Editorial Mediabyte, S. A., 2009.
- GALÁN, José María. *Guerras de independencia en Hispanoamérica (1810-1825)*. La Habana, Pueblo y Educación, 1971.
- GALAZO, Norberto. *Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín*. Buenos Aires, Editorial Colihue, 2000.

- GALEANA, Patricia (coordinadora). *Historia comparada de las Américas. Sus procesos independentistas*. México, Siglo XXI, 2010.
- GALICH, Manuel. *Nuestros primeros padres*. La Habana, Casa de las Américas, 1981.
- GONZÁLEZ, Eurídice. *Chile, de la independencia a la dominación imperialista*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2011.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (compilador). *América Latina: historia de medio siglo*. Dos tomos, México, Siglo XXI, 1977.
- GLEIJESES, Piero. *La Esperanza Destrozada. La Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2004.
- _____. *La esperanza desgarrada. La rebelión dominicana de 1965 y la invasión norteamericana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011.
- GREZ TOSO, Sergio. *De la "Regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*. Santiago de Chile, Ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile, 1998.
- _____. *Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924)*. Santiago, LOM Ediciones, 2011.
- GILLY, Adolfo. *El cardenismo, una utopía necesaria*, México, Cal y Arena, 1994.
- _____. *La revolución interrumpida*. México, Ediciones Era, 2002.
- GUERRA Y SÁNCHEZ, Ramiro. *La expansión territorial de los Estados Unidos. A expensas de España y de los países hispanoamericanos*. La Habana, Editora del Consejo Nacional de Universidades, 1964.
- GUERRA VILABOY, Sergio. *Luchas sociales y partidos políticos en Guatemala*. La Habana, Universidad de La Habana, 1985.
- _____. *Historia y revolución en América Latina*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.
- _____. *Paraguay: de la independencia a la dominación imperialista (1811-1870)*. Asunción, Carlos Schauman Editor, 1991.
- _____. *El dilema de la independencia, Las luchas sociales en la emancipación latinoamericana (1790-1826)*. Santa Fe de Bogotá, Universidad Central, 2000.

- _____. *Los artesanos y la revolución latinoamericana. Colombia 1849-1854*. Santa Fe de Bogotá, Universidad Central, 2000.
- _____. *Historia mínima de América*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2001.
- _____. *Jugar con fuego. Guerra social y utopía en la independencia de América Latina*. La Habana, Premio Casa de las Américas, 2010.
- _____. *Cronología del Bicentenario*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2010.
- GUERRA VILABOY, Sergio, Alberto Prieto y Omar Díaz de Arce. *Crónicas latinoamericanas. La región surandina. Chile, Perú y Bolivia*. La Habana, Casa de las Américas, 1977.
- GUERRA VILABOY, Sergio y Omar Díaz de Arce. *La colonización española I y II*. Serie encuentro de dos mundos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991.
- GUERRA VILABOY, Sergio y Alejo Maldonado Gallardo. *Laberintos de la integración latinoamericana. Historia, mito y realidad de una utopía*. Caracas, có mala.com, 2006.
- _____. *Historia de la Revolución Cubana*. Navarra, Txalaparta, 2009.
- GUERRA VILABOY, Sergio y Germán Rodas Chávez (coordinadores). *Forjadores del pensamiento crítico latinoamericano. Biografías de luchadores y pensadores revolucionarios de América Latina y el Caribe siglos XIX y XX y cronología histórica (1850-1939)*. Quito, Ediciones La Tierra, 2011.
- HALPERIN DONGHI, Tulio. *Historia contemporánea de América Latina*. Madrid, Alianza Editorial, 1972.
- HERRERA PEÑA, José. *Hidalgo a la luz de sus escritos. Estudio preliminar, cuerpo documental y bibliografía*. Morelia, Michoacán. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003.
- Historia de América Andina*. Cinco tomos, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2001-2003.
- Historia de Cuba. La Colonia. Evolución socio-económica y formación nacional. De los orígenes hasta 1867*. La Habana, Editora Política, 1994.
- Historia de Cuba. Las luchas por la independencia nacional y las transformaciones estructurales 1868-1898*. La Habana, Instituto de Historia de Cuba, 1996.

- Historia de Cuba. La neocolonia. Organización y crisis. Desde 1899 hasta 1940.* La Habana, Instituto de Historia de Cuba, 1998.
- Historia general de México.* México, El Colegio de México, 2009.
- Historia y perspectiva de la integración latinoamericana.* México, Asociación por la Unidad de Nuestra América-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2000.
- IBARRA CUESTA, Jorge. *Cuba 1898-1921: partidos políticos y clases sociales.* La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1992.
- _____. *De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX) el proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo).* Tomo I, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, 2012.
- JOBET, Julio César. *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile.* Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1955.
- KATZ, Claudio. *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina.* Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2008.
- KLEIN, Herbert S. *Historia de Bolivia.* La Paz, Editorial "Juventud", 1996.
- KONETZKE, Richard. *América Latina II. La época colonial.* México, Siglo XXI, 1971.
- KOSSOK, Manfred. *El virreinato del Río de la Plata. Su estructura económico-social.* Buenos Aires, Editorial Futuro, 1959.
- _____. *La revolución en la historia de América Latina.* La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.
- La Independencia de México.* Tres tomos, México, Secretaría de Educación Pública, 1985.
- LAINO, Domingo. *Paraguay: de la independencia a la dependencia. (Historia del saqueo inglés en el Paraguay de la posguerra).* Asunción, Ediciones Cerro Cora, 1976.
- LEÓN PORTILLA, Miguel. *Visión de los vencidos.* La Habana, Casa de las Américas, 1972.
- LE RIVEREND, Julio. *La República. Dependencia y Revolución.* La Habana, Editora Universitaria, 1966.
- LEWIN, Boleslao. *La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación americana.* La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.

- LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. *Los grandes conflictos económico-sociales de nuestra historia*. Varios tomos, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1973.
- _____. *Bolívar*, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1979.
- LIPSCHUTZ, Alejandro. *El problema racial en la conquista de América y el mestizaje*. Santiago de Chile, Editora Austral, 1963.
- LÓPEZ CIVEIRA, Francisca, Oscar Loyola y Arnaldo Silva. *Cuba y su historia*. La Habana, Editorial Gente Nueva, 1998
- LORENZO, José L. «Poblamiento del Continente americano», *Historia de México*. Tomo I, México, Ed. Salvat, 1974.
- LYNCH, John. *Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826*. Barcelona, Ariel, 1985.
- LUMBRERAS, Luis Guillermo. *Los orígenes de la civilización del Perú*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1987.
- MAGUIDOVICH, Iosif P. *Historia del descubrimiento y exploración de Latinoamérica*. Moscú, Editorial Progreso, [s.f.].
- MALDONADO GALLARDO, Alejo, Sergio Guerra Vilaboy y Roberto González Arana. *Revoluciones latinoamericanas del siglo XX. Síntesis histórica y análisis historiográfico*. México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.
- MALDONADO GALLARDO, Alejo y Sergio Guerra Vilaboy. *La Revolución Mexicana: una lucha que cambió la historia de un pueblo, 1910/1940*. México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Universidad de La Habana, 2010.
- Manual de Historia de Colombia*. Varios tomos, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1982.
- MARTÍ, José. *Obras completas*. Dos tomos, La Habana, Editorial Lex, 1953.
- MARTÍNEZ PELÁEZ, Severo. *La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca*, Guatemala, Editorial Universitaria, 1970.
- MEDINA CASTRO, Manuel. *Estados Unidos y América Latina siglo XIX*. La Habana, Casa de las Américas, 1968.
- MEDINA, Medófilo. *Historia del Partido Comunista*. Tomo I, Bogotá, Centro de Estudios de Investigaciones Sociales, 1980.

- MELÉNDEZ, Carlos. *Historia de Costa Rica*, San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1985.
- MÉNDEZ R., Salvador. *Las élites criollas de México y Chile ante la Independencia*. México, Centro de Estudios sobre la Independencia de México, 2004.
- MIDENCE, Carlos. *Cambios y aportes históricos del Sandinismo al devenir nacional. De las visiones indígenas a la Revolución Sandinista en sus dos etapas*. Managua, Editorial Universitaria UNAN-León, 2011.
- MITRE, Bartolomé. *Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana*. Dos tomos, Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos Rosso, 1950.
- MONASTERIOS, Karin, Pablo Stefanoni y Hervé do Alto (editores). *Reinventando la nación en Bolivia. Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad*. La Paz, CLACSO Libros/Plural Editores, 2007.
- MONTENEGRO, Carlos. *Nacionalismo y coloniaje*. Buenos Aires, Pleamar, 1967.
- MORA, Carlos Alberto y Margarita Peña. *Historia socioeconómica de Colombia*. Bogotá, Editorial Norma, 1985.
- MORALES BENÍTEZ, Otto. *Revolución y caudillos*. Bogotá, Ed. Printer Colombiana, 1983.
- MOREIRA DE LIMA, Lillian J. *La evolución del hombre y la sociedad comunitaria en la Antigüedad*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2000.
- MOYA PONS, Frank. *Manual de Historia Dominicana*. Barcelona, Industrias Gráficas M. Pareja, 1978.
- _____. *Historia del Caribe, azúcar y plantaciones en el mundo atlántico*. Santo Domingo, Ediciones Ferilibro, 2008.
- _____. (coordinador). *Historia de la República Dominicana*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Academia Dominicana de la historia/Ediciones Doce Calles, 2010.
- NAVARRO GARCÍA, Luis (coordinador). *Historia de las Américas*. Cuatro tomos, Madrid, Universidad de Sevilla, 1991.
- NOVAES, Adauto (compilador). *A crise do estado-nação*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
- Nueva historia general del Perú*, Lima, Mosca Azul, 1980.

- NÚÑEZ SÁNCHEZ, Jorge. *Historia del país de Quito*. Quito, Eskeletra Editorial, 1999.
- _____. *El Ecuador en el siglo XIX. Ensayos históricos*. Quito, ADHILAC-Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2002.
- OCAMPO ALCÁNTAR, Rigoberto y Juan Cristóbal Cruz Revueltas (coordinadores). *México, una centuria. Estudios sobre el siglo XX mexicano*. México, Publicaciones Cruz O., 2012.
- OLIVA DE COLL, Josefina. *La resistencia indígena ante la conquista*. México, Siglo XXI, 1974.
- OPORTO, Mario. *De Moreno a Perón. Pensamiento argentino de la unidad latinoamericana*. Buenos Aires, Planeta, 2011.
- OSTRIA GUTIÉRREZ, Alberto. *Un pueblo en la cruz. El drama de Bolivia*. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956.
- OTS CAPDEQUÍ, José María. *El estado español en las Indias*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975.
- OVANDO SANZ, Jorge Alejandro. *La invasión brasileña a Bolivia en 1825*. La Paz, Librería Editorial Juventud, 1986.
- PARRY, J. H. *El Imperio Español de Ultramar*. Madrid, Aguilar, 1970.
- PAZ Y MIÑO, Juan. *Golpe y contragolpe. La «Rebelión de Quito» del 21 de enero del 2000*. Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002.
- _____. *Eloy Alfaro. Políticas económicas*. Quito, Ministerio de la Coordinación de la Política Económica, 2012.
- _____. *La Revolución Juliana en Ecuador (1925-1931), Políticas Económicas*. Quito, Ministerio Coordinador de Política Económica, 2013.
- Pensamiento político venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio*. Tomo 6, Caracas, Congreso de la República, 1983.
- PÉREZ BRIGNOLI, Héctor. *Breve historia de Centroamérica*. Madrid, Alianza Editorial, 1985.
- PETRAS, James. *América Latina. De la globalización a la revolución latinoamericana*. Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1999.
- PICÓN SALAS, Mariano. *De la conquista a la independencia*. México, Fondo de Cultura Económica, 1958.
- _____. *Miranda*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.
- PIVIDAL, Francisco. *Bolívar, pensamiento precursor del anticolonialismo*. La Habana, Casa de las Américas, 1977.

- PRADO JUNIOR, Caio. *Historia económica del Brasil*. Buenos Aires, Editorial Futuro, 1960.
- PRIETO ROZOS, Alberto, Omar Díaz de Arce y Sergio Guerra Vilaboy. «Argentina contemporánea», *Historia de América Latina IV*, La Habana, Ministerio de Educación Superior, 1982.
- PRIETO ROZOS, Alberto y Sergio Guerra Vilaboy. *Breve historia de Brasil*. La Habana, Editora Política, 1991.
- QUESADA MONGE, Rodrigo. *Recuerdos del Imperio. Los ingleses en América central (1821-1915)*. Heredia, C.R, EUNA, 2002.
- _____. *Ideas económicas en Costa Rica (1850-2005)*. San José, C.R., EUNED, 2008.
- RABY, Diana. *Democracia y revolución: América Latina y el socialismo hoy*. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2008.
- RAFUL, Tony. *De Trujillo a Fernández Domínguez y Caamaño, El azar como categoría histórica (1930-1965)*. Santo Domingo, Editora Búho, 2013.
- RAMA, Carlos M. *Historia social del pueblo uruguayo*. Montevideo, Editorial Comunidad del Sur, 1972.
- RAMÍREZ NECOCHEA, Hernán. *Historia del Imperialismo en Chile*. La Habana, Edición Revolucionaria, 1966.
- RAMOS, Jorge Abelardo. *Historia de la Nación Latinoamericana*. Dos tomos, Buenos Aires, A. Peña Lillo Editor, 1968.
- REGALADO, Roberto. *América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda*, México, Ocean Sur, 2006.
- _____. *Los gobiernos de izquierda en América Latina*, México, Ocean Sur, 2008.
- _____. (coordinador). *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*. México, Ocean Sur, 2012.
- Revista del Observatorio Social de América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, año V, No. 13, 14 y 15 de 2004.
- REY TRISTÁN, Eduardo y Pilar Cagiao Vila (coordinadores). *Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo*. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2011.
- ROCA, José Luis. *1809. La Revolución de la Audiencia de Charcas en Chuquisaca y en La Paz*. La Paz, Plural Editores, 1998.

- RODRÍGUEZ GELFFENSTEIN, Sergio. *Se ha prendido la hierba en todo el continente. Relatos de nuestra América*. Mérida, Venezuela, Talleres Gráficos Universitarios ULA, 2012.
- RODAS, Germán. *La izquierda ecuatoriana en el siglo xx. Aproximación histórica*. Quito, Abya Yala, 2000.
- ROEDER, Ralph. *Juárez y su México*. México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
- ROJAS MIX, Miguel. *Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón*. Barcelona, Editorial Lumen, 1991.
- ROMERO, Roberto A. *La revolución comunera. Su doctrina política*. Asunción, Imprenta Leguizamon, 1995.
- RUZ LHUILLIER, Alberto. *La civilización de los antiguos mayas*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.
- SADER, Emir e Ivana Jinkings (coordinadores). *Enciclopedia Contemporánea da América Latina e do Caribe*. Rio de Janeiro, Laboratorio de Políticas Públicas/Boitempo Editorial, 2006.
- SÁNCHEZ OTERO, Germán. *Cuba desde Venezuela*. Caracas, Consejo Nacional de la Cultura, 2004.
- SANTANA, Adalberto. *El pensamiento de Francisco Morazán*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
- SAXE FERNÁNDEZ, Eduardo E. *La nueva oligarquía latinoamericana*. Heredia, Costa Rica, EUNA, 1999.
- SEJOURNÉ, Laurette. *América Latina I. Antiguas culturas precolombinas*, México, Siglo XXI, 1971.
- SELSER, Gregorio. *Sandino, general de hombre libres*. Dos tomos, La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1960.
- SEMO, Enrique (coordinador). *Historia económica de México*. Varios tomos, México, UNAM/Océano, 2003-2006.
- SILVA HERZOG, Jesús. *Breve historia de la revolución mexicana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1969.
- SIXIREI PAREDES, Carlos. *La violencia en Colombia (1990-2002), Antecedentes y desarrollo histórico*. Vigo, Universidad de Vigo, 2011.
- SOLER, Ricaurte. *Idea y cuestión nacional latinoamericanas, de la independencia a la emergencia del imperialismo*. México, siglo XXI, 1980.

- SOTO, Lionel. *La revolución del 33*. Tres tomos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977.
- SUÁREZ SALAZAR, Luis. *América Latina y el Caribe: medio siglo de crimen e impunidad (1948-1998)*. Nafarroa-Navarra, Zambon Iberoamericana/Editorial José Martí, 2000.
- _____. *El siglo XXI. Posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2000.
- SVAMPA, Maristella y Pablo Stefanoni (compiladores). *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*. Buenos Aires, Libros CLACSO/Editorial El Colectivo, 2007.
- TABANERA, Nuria, Joao del Alcazar y Gonzalo Cáceres. *Las primeras democratizaciones en América Latina: Argentina y Chile, 1880-1930*. Valencia, Universitat de Valencia, 1997.
- TABARES DEL REAL, José A. *La revolución del 30: sus dos últimos años*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975.
- TINDALL, George B. y David E. Shi. *Historia de los Estados Unidos*. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993.
- TORRES-CUEVAS, Eduardo y Oscar Loyola. *Historia de Cuba 1492-1898. Formación y liberación de la Nación*. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001.
- TORRES GALARZA, Ramón (compilador). *Eloy Alfaro. Memoria Insurgente*. Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 2011.
- TRÍAS, Vivian. *Los caudillos, las clases sociales y el Imperio*. Montevideo, Cámara de Representantes, 1988.
- VILAS, Carlos. *La revolución sandinista*. Buenos Aires, Legasa, 1987.
- VITALE, Luis. *Interpretación marxista de la historia de Chile*. Varios tomos, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1969-1972.
- _____. *De Martí a Chiapas. Balance de un siglo*. Santiago de Chile, Editorial Síntesis y CELA, 1995.
- WARREN, Harris Gaylord. *Paraguay y la Triple Alianza. La década de posguerra: 1868-1878*. Asunción, Intercontinental Editora, S. A., 2009.
- WHITE, Richard Alan. *La primera revolución popular en América (1810-1840)*. Asunción, Carlos Schauman Editor, 1989.
- ZANETTI, Oscar. *Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales/Ruth Casa Editorial, 2012.

- _____. *Historia mínima de Cuba*. México, El Colegio de México, 2013.
- ZEUSKE, Michael. *Francisco de Miranda y la modernidad en América*. Madrid, Fundación Mapfre Tavera y Ediciones Doce Calles, S. L., 2004.
- ZIMMERMANN, Matilde. *Carlos Fonseca Amador. Bajo las banderas de Che y de Sandino*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2004.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

- Aarhus, Manuel 265
Abadía Méndez, Miguel 400
Abarca de Bolea, Pedro Pablo (X conde de Aranda) 123, 136
Abascal, José Fernando de 174
Acciol y de Vasconcelos, Zenobio 118
Acosta, Cristóbal 166
Acosta, Joseph de 29, 687
Acosta, Santos 302
Agramonte, Ignacio 354
Agüero, Carlos 591
Aguilar Monteverde, Alonso 687
Aguirre Cerda, Pedro 470
Aguirre, Indalecio Liévano 241
Aguirre, Lope de 88
Ahuítzotl 50
Alamán, Lucas 250, 287
Albarracín, Alberto 566
Alberdi, Juan Bautista 270
Albizu Campos, Pedro 428, 435-436, 497
Albuquerque, Matías de 115
Alcántara 80
Alcazaba, S. de 82
Alcazar, Joao del 699
Alckmin, Geraldo 665
Aldama, Juan 179, 181
Aldao, José Félix 243
Alegre, Efraín 679
Alegoría, Ciro 445
Alejandro VI 68, 102
Alemán, Miguel 495
Alemán Lacayo, Arnoldo 681
Alencar, Francisco 687
Alessandri, Arturo 469
Alessandri, Jorge 569
Alexandre, Boniface 615
Alexis, Jacques Stéphen 552, 610
Alfaro Delgado, Eloy 293, 302, 324-326, 360
Alfaro Siqueiros, David 445
Alfonsín, Raúl 602
Allende, Ignacio 179-181
Allende, Salvador 470, 553, 569, 576
Almagro, Diego de 77-80, 82-83
Almagro hijo, Diego de (el Mozo) 80
Almaraz, Sergio 524, 529, 687
Almazán, Juan Andrew 446
Almoína Mateos, José 507
Almonte, Juan Nepomuceno 314

- Alto, Hervé do 695
 Alvarado, Jorge de 76
 Alvarado, Pedro de 73, 75-76, 79
 Alvarenga Peixoto, Ignacio José de 152
 Alvares Cabral, Pedro 66
 Álvarez, Gregorio 603
 Álvarez, Juan 307-308
 Álvarez de Arenales, José Antonio 218
 Álvarez Paz, Osvaldo 653
 Alvear, Carlos María de 202
 Alvear, Carlos María de 267-268
 Alvear, Marcelo T. de 389
 Alves, Mario 580
 Amado, Jorge 427, 451
 Ambrosio Pisco 147
 Ameghino, Florentino 30
 Ampíes, Juan de 87
 Ampudia, Pedro 278
 Anaya Montes, Mélida 621
 Anderle, Adam 687
 Andrade, Ignacio 363
 Andrade y Silva, José Bonifacio 236
 André, Armando 415
 Ángeles, Felipe 387
 Antepara, José María de 170
 Antequera, José de 145-146
 Antoñanzas, Eusebio 192
 Antonelli, Juan Bautista 113
 Apaza, Julián (Julián Túpac Katari) 151
 Apodaca, Juan Ruiz de 232
 Aponte, Carlos 428
 Aponte, José Antonio 167
 Aramayo, Carlos Víctor 493
 Arana Osorio, Carlos 587
 Arana, Francisco Javier 482-483
 Arango Jaramillo, Mario 147, 687
 Arango Vélez, Carlos 461
 Arango y Parreño, Francisco de 136, 173
 Araujo, Arturo 431
 Arbenz, Jacobo 482-487, 511, 523, 528
 Arboleda, Julio 300
 Arcaya, Ignacio Luis 545
 Arcaya, Pedro M. 408
 Arce, Manuel José 234, 265
 Arce, Mateo 146
 Arcos, Santiago 24
 Areche, José Antonio de 150
 Arenas, Dámaso 494
 Arévalo, Emilio 409
 Arévalo, Juan José 481-484, 508, 551
 Arévalo González, Rafael 407
 Argaña, Luis María 616-617
 Argüello, Leonardo 504
 Arias, Arnulfo 562
 Arias, Desiderio 367, 506
 Arias, Tomás 361
 Arias Cárdenas, Francisco 652, 655
 Arismendi, Juan Bautista 192, 194, 222
 Arista, Mariano 278
 Aristeguieta, Pedro Elías 411
 Aristide, Jean Bertrand 615
 Aristóteles 62
 Arosemena, Carlos Julio 551
 Arosemena, Justo 23, 301-302
 Arráiz, Antonio 410
 Arriaga, Ponciano 308
 Arroyo del Río, Carlos Alberto 487
 Artigas, José Gervasio 199-201, 203-204, 216-217, 243, 245, 267-269, 683

- Arzú, Álvaro 624
Assis Figueiredo, Alfredo Celso (vizconde de Ouro Preto) 349
Asturias, Miguel Ángel 336, 600
Atahualpa 58-59, 78-79
Austin, Stephen 277
Avalos, Eduardo 517
Avendaño, Álzate 459
Ávila, Rodrigo 682
Ávila Camacho, Manuel 489
Axayácatl 50
Ayala, Enrique 687
Aycinena, Antonio de 265
Aycinena, Mariano de 233, 265
Aycinena, Pedro 319
Aycinena, Rafael 395
Ayerbe, Luis Fernando 687
Aylwin, Patricio 617
Ayolas, Juan de 89
Azuela, Mariano 445
Azurduy, Juana de 243
- B
- Bachelet, Michelle 619, 661
Bachiller y Morales, Antonio 24
Báez, Buenaventura 273-274, 366
Bahkle (familia) 503
Bailey, Alberto 565-566
Baitía, Ramón 368
Balaguer, Joaquín 508, 557
Balbín, Ricardo 520
Balbuena, Bernardo de 111
Balmaceda (los) 443
Balmaceda, José Manuel 340, 346-347, 376
Banzer, Hugo 585, 568, 604, 647-648
Baquijano, José 136
Barata, Cipriano 236
Barbusse, Henri 434
Barcia, María del Carmen 688
Baro, Rodolfo 118
Barradas, Isidro 275
Barrantes, Alfonso 607
Barreira, Cândido 330
Barreto, Manuel (Búfalo) 438
Barrientos, René 525, 531-532, 564-565, 567
Barrios, Gonzalo 487
Barrios, Justo Rufino 292, 318-323, 394
Barrios viuda Chamorro, Violeta 596, 598, 628, 681
Barrow, Errol 608
Barrundia, José Francisco 234, 265
Bastidas, Micaela 151
Bastidas, Rodrigo de 66, 69, 84
Bateman, Jaime 631
Batista, Fulgencio 439-442, 468, 489-490, 511, 533-536, 540
Batlle, Jorge 683
Batlle y Ordóñez, José 390, 443
Batrville, Benoti 372
Bauer Paiz, Alfonso 483
Bautista Antonelli, Juan 77
Bayona Chacón, José (conde de Casa Bayona) 144
Bazaine, Francisco 315
Beauvais, Vincent de 159-162
Béjar, Héctor 545
Belair, Charles 161, 163
Belaunde Terry, Fernando 559, 562, 607
Belehet-Tzi 75
Belenki, A. 688
Belgrano, Manuel 196, 199-202, 215, 217
Beltrán, Manuela 147

- Benalcázar, Sebastián 79
 Benalcázar, Sebastián de 86
 Benavente, Toribio de (Motolinia) 104
 Benavides, Oscar R. 438
 Bencosme, Cipriano 506
 Benites, Leopoldo 688
 Bennett, Michèle 613
 Berardi 63
 Berbeo, Juan Francisco 147
 Bering, Vítus 67
 Bermúdez, José Alejandro 222, 226, 302, 688
 Bermúdez, José Francisco 192, 194
 Bermúdez, Juan 68
 Bernabelillo 142
 Berro, Bernardo 328-329
 Betancourt, Rómulo 410, 487-488, 499, 508, 543-544
 Bethell, Leslie 688
 Beyhaut, Gustavo 688
 Beyhaut, Helene 688
 Bianchi, Giuseppe 192-193
 Biassou, George 159-161
 Bilbao, Francisco 25
 Bishop, Maurice 599
 Bishop, Maurice 608
 Bismarck, Otto von 317
 Blanco Encalada, Manuel 263
 Blanco Fombona, Rufino 410
 Blanco, Hugo 545, 635
 Bliss Lane, Arthur 434
 Bobadilla, Francisco 65
 Bobadilla, Tomás 273
 Bobo, Rosalvo 371
 Bohórquez Morán, Carmen L. 169, 688
 Bolaños, Enrique 681
 Bolívar, Simón 22, 27, 155, 185-186, 190-193, 195, 211-212, 221-229, 234, 238-243, 245-246, 253, 255-262, 268, 299, 301, 304, 325, 411, 654, 688
 Bolognesi, Francisco 344
 Bonaparte, Napoleón 162, 171-172, 202
 Boone, Daniel 276
 Bordaberry, Juan María 585
 Borge, Tomás 590, 592
 Borja Cevallos, Rodrigo 607
 Borrego, Manuel 269
 Bosch, Juan 433, 543, 551, 554-555, 557, 661, 688
 Botelho de Magalhaes, Benjamín Constant 349
 Boukman 159
 Bouterse, Desi 608
 Boves, José Tomás 192-194
 Bowie, James 277
 Boyd, Federico 361
 Boyer, Jean Pierre 162, 228, 272
 Braden, Spruille 517-518
 Brading, David A. 688
 Braganza (los) 201, 267, 348
 Braganza, Pedro de 236
 Bravo, Nicolás 182
 Brión, Luis 222, 224
 Brito, Pedro 410
 Brito Bloise, Giovanni 18
 Brito Figueroa, Federico 688
 Brito y Almeida, Luiz de 117
 Brizola, Leonel 581
 Browder, Earl 491
 Brown, William 213
 Buarque, Chico 548
 Bucaram, Abdalá 644

- Buchanan, James 282
Bulnes, Manuel 263
Buneau-Varilla, Philippe 361
Burham, Forbes 572
Burque Elbrick, Charles 581
Busch hijo, George 661, 633, 668
Busch, George 598
Busch, Germán 423, 428, 465-468
Bushnell, David 688
Bustamante, Carlos María de 183
Bustamante Rivero, José Luis 492, 498
- C
- Caballero y Góngora, Antonio 148
Caballero, Bernardino 330
Caballero, Manuel 688
Caboto, Giovanni 66
Caboto, Sebastián 66, 89
Cacciatore, Giuseppe 246, 688
Cáceres, Andrés Avelino 345
Cáceres, Gonzalo 699
Cáceres, Ramón 367
Cáceres Lennox, Eduardo 600
Caetano, Gerardo 688
Caffery, Jefferson 440
Cagiao Vila, Pilar 697
Caicedo Zurriago, Jaime 689
Caicedo, Domingo 260-261
Cajigal, Juan Manuel 191
Calancha, Antonio de la 104
Calatayud, Alejo de 142
Caldera, Rafael 653
Calderón Guardia, Rafael Ángel 499
Calhoun, John C. 282
Calicuchima 78
Calixto III 68
- Calles, Plutarco Elías 433
Calvo, Carlos 25, 364
Calvo, Miguel 417
Camacho, Eliodoro 344
Caamaño Deñó, Francisco Alberto 553, 555-558
Camaño, Eduardo 646
Cámara Ferreira, Joaquín 580
Campero, Narciso 344
Cámpora, Héctor J. 572
Campos, Francisco 452
Caneca, fray Joaquín 237
Cano, Alfonso 633
Cano, María 399
Caonabo 68
Capriles, Henrique 659
Carazo, Rodrigo 594
Carbó, Sergio 439
Cárdenas, Bernardino de 145
Cárdenas, Cuauhtémoc 640
Cárdenas, Lázaro 444, 446-450, 473, 544, 495
Cárdenas, Román 408
Cárdenas, Víctor Hugo 606
Cardoso, Adante 578
Cardoso, Fernando Henrique 548, 636-638, 641, 663
Cardoza y Aragón, Luis 479, 689
Carias, Tiburcio 479
Carlos III 123-124, 140
Carlos IV 133
Carlos V 72, 80, 82, 87, 96
Carmona Estanga, Pedro 656
Caro, José Antonio 170
Carpentier, Alejo 165, 272, 405, 547
Carpi, Lucia 687
Carranza, Venustiano 375, 382-383, 385-387, 444
Carrera (hermanos) 214

- Carrera, Rafael 205-207, 249, 266, 318-319
 Carrillo, Fernao 119
 Carrión, Luis 592, 680
 Carter, James 594, 611
 Cartes, Horacio 679
 Cartier, Jacques 71
 Carvalho, Devanir José de 582
 Casas, Bartolomé de las 105
 Cassá, Roberto 689
 Castañeda, Jorge G. 689
 Castelli, Juan José 196-199
 Castellón, Francisco 283
 Castelo Branco, Humberto 577-579, 584
 Castilla, Ramón 284, 341
 Castillo, Eusebio 395
 Castillo, Jorge del 636
 Castillo, José María (Chema) 591
 Castillo Armas, Carlos 486, 511
 Castillo y Rada, Manuel 195
 Castor, Susy 689
 Castro, Cipriano 325-326, 359, 363, 375, 406, 411
 Castro, Fidel 534-536, 540, 546, 571
 Castro, Julián 305
 Castro, Miguel de 143
 Castro, Raúl 535, 537
 Castro, Xiomara 677
 Caupolicán 83
 Cavallo, Domingo 646
 Cayetano Carpio, Salvador 621
 Cedeño, Manuel 223-224
 Cedillo, Saturnino 446, 449
 Celedonio, Vicente 188
 Cerda, Aguirre 470, 569
 Cerezo Arévalo, Vinicio 621
 Cerna, Vicente 319
 César, Francisco 85
 Céspedes, Augusto 427
 Céspedes, Carlos Manuel de (hijo) 439
 Céspedes, Carlos Manuel de 293, 354-355
 Céspedes, Guillermo 689
 Chamorro, Emiliano 369, 504
 Chamorro, Frutos 283
 Chamorro, Pedro Joaquín 541-542, 591-592, 596
 Chang-Rodríguez, Eugenio 377, 689
 Chantoyer, Joseph 165
 Chaves, Julio César 418, 689
 Chávez Frías, Hugo 652-660, 669, 677, 685
 Chevalier, Michel 24
 Chiavenato, Julio José 689
 Chinchilla, María 480
 Chirino, José Leonardo 166
 Chomón, Faure 536
 Choquehuanca, David 671
 Christophe, Henri 158, 160-163, 272
 Churchill, Winston 455
 Cienfuegos, Camilo 537
 Cienfuegos, Fermán 682
 Cisneros Betancourt, Salvador 356
 Clark, George Rogers 276
 Clavijero, Francisco Xavier 138-139
 Coard, Bernard 608
 Cobo, Bernabé 104
 Cobos Batres, Manuel 395
 Cochrane, Thomas 218, 220
 Codio, Ismael 371
 Codovilla, Vitorio 377

- Cole, Byron 283
Collor de Mello, Fernando
636-637
Colom, Álvaro 661
Colom Argueta, Manuel 600
Colón, Bartolomé 64-65
Colón, Cristóbal 59, 62-66, 70
Colón, Hernando 65
Colosio, Luis Donaldo 641
Comonfort, Ignacio 307-310, 314
Condorcanqui, José Gabriel (Túpac
Amaru II) 143, 148, 150-151,
205, 215
Condorcanqui, Juan Bautista 215
Connor, David 278
Contreras, Hernando 97-98
Contreras, Pedro 97-98
Coolidge, Calvin 415
Cordeiro de Farias, Osvaldo 456
Córdoba, Francisco Hernández de
70
Córdova, José María 259
Córdoba Rivas, Rafael 596
Coronel, Bernardo 689
Coronel, Erasmo 401
Correa Delgado, Rafael 660,
673-675
Cortázar, Julio 547
Cortereal, Gaspar 67
Cortereal, Miguel 67
Cortés Vargas, Carlos 401
Cortés, Hernán 59, 72-76, 78,
102, 310,
Cortés, Martín (marqués del Valle)
98
Cortés, Pedro 129
Cortés Campomanes, Manuel 169
Cos, José María 183
Cosa, Juan de la 66, 69
Costa, Claudio Manuel da 152
Costa e Silva, Arthur da 577, 580
Couto e Silva, Golbery de 577
Crisóstomo Gómez, Juan
(Juancho) 410
Cristiani, Alfredo 621
Cristóbal, Diego (Túpac Amaru
III) 151
Crookett, David 277
Crowder, Earl 413
Cruz, Arturo 596
Cruz, Juana Inés de la 111
Cruz, Serapio 319
Cruz Revueltas, Juan Cristóbal 696
Cuadra Pasos, Carlos 504
Cuadra, José de la 427
Cuadros, Janio 551
Cuauhtémoc 73
Cubas Grau, Raúl 616-617
Cué Cánovas, Agustín 689
Cuero y Caicedo, José 190
Cuervo, Luis A. 401
Cueva, Agustín 689
Cuevas Molina, Rafael 689
Cuitlahuac 73
Cúneo, Dardo 468
Cunha Barbosa, Januario da 236
Cuxart, José 415
- D
- D'Aubisson, Roberto 586
d'Ailhaud, Départ 159
Dalton, Roque 682
Dantas, Lucas 166
Dartiguenave, Sudre 371
Dávila, Carlos 430
Dávila, Pedrarias 69-70, 97
Davis, Jefferson 282

- Daza, Hilarión 343-344
 Debray, Regis 567
 Decoud, Juan José 330
 Degollado, Santos 310-312
 Delgadillo, José 147
 Delgado Chalbaud, Carlos 487
 Delgado Chalbaud, Román 407, 411
 Delgado, José Matías 234
 Delgrés, Louis 167
 Depons, Francois 139
 Dessalines, Jean Jacques 160-164,
 272
 Deus, Joao de 166
 Díaz de Arce, Omar 690, 692, 697
 Díaz de Solís, Juan 68, 70, 89
 Díaz del Castillo, Bernal 74
 Díaz Lacayo, Aldo 690
 Díaz, Adolfo 369-370, 433
 Díaz, Félix 382
 Díaz, Juan Tomás 543
 Díaz, Modesto 275
 Díaz, Porfirio 311, 318, 336, 379-
 383, 448
 Díaz-Callejas, Apolinar 363, 689
 Diez Canseco, Javier 636
 Dios Romero, Juan de 399
 Dirceu, José 580, 665
 Doblado, Manuel 314
 Dominici, Santos 410
 Dominique, Max 612
 Doniphan, Alexander W. 278
 Dorticós, Osvaldo 538
 Drago, Luis 364
 Drake, Francis 112
 Duarte, José Napoleón 621
 Duarte, Juan Pablo 272-273
 Duarte, Nicanor 677-678
 Duarte de Perón, Eva (Evita) 517,
 520
 Ducharne, Horacio 409
 Duhalde, Eduardo 646
 Duhalde, Ernesto 667
 Durán, Diego 104
 Durán, Justo L. 359
 Durán Ballén, Sixto 607
 Dutra, Eurico Gaspar 456, 489
 Duvalier, François (Papa Doc) 587,
 608-611
 Duvalier, Jean Claude (Baby Doc)
 608, 611-614
 Duvalier, Marie Denise 612
 Duvergé, Antonio 273
- E
- Echandía, Darío 460-461, 500
 Echeandía, Manuel María 304
 Echeverría, Esteban 250, 270
 Echeverría, José Antonio 536
 Echeverría, Luis 573
 Eguiara y Eguren, Juan José de 138
 Ehinger, Ambrosius 87
 Eisenhower, Dwight D. 511-512,
 549
 Eisenhower, Milton 521, 529
 Elcano, Juan Sebastián 70
 Elías, Antonio 690
 Elías Calles, Plutarco 445-446
 Elío, Francisco Javier 200
 Elliot, John H. 72, 690
 Enciso, Martín Fernández de 69
 Enríquez, Miguel 553
 Ercilla, Alonso de 84
 Escalante, Pablo 690
 Escamilla, Emilio 395
 Escobar Gaviria, Pablo 632
 Escobedo, Mariano 311, 317
 Ecurrra, Juan A. 330

- España, José María 169
Espinosa, Betsabé 398
Esquivel, Juan de 65
Estigarrabia, José Félix 422-423, 464
Estimé, Dumarsais 489, 609
Estrabón 62
Estrada, José María 283
Estrada, Juan J. 370
Estrada Cabrera, Manuel 336, 394, 397
Estrada Palma, Tomás 412
Estrella Ureña, Rafael 369
Estrella Ureña, Rafael 505
Etienne, Oscar 371
Eutiquio Timoté, 457
Evangelista, Vicente 368
Everett Knox, Clinton 612
- F
- Fajardo, Francisco 87
Falcón, Juan Crisóstomo 305-306
Fallas, Carlos Luis 427
Farrel, Edelmiro J. 516
Faulkner, Harold U. 690
Faustino, Manuel 166
Febres Cordero, León de 305, 606
Federman, Nicolás de 86-87
Fédon, Julien 165
Feijó, Diego Antonio 347
Feliciano Ama, José 432
Felipe II 77, 112, 115
Felipe V 122, 144
Fermín, Claudio 653
Fernández de Kirchner, Cristina 660, 669-670
Fernández de Lizardi, José Joaquín 139
Fernández de Lugo, Pedro 82
Fernández Domínguez, Rafael 555-556
Fernández Maldonado, Jorge 561
Fernández Retamar, Roberto 26, 690
Fernández, Leonel 661
Fernando II de Aragón 102
Fernando VII 172-175, 177, 179, 181-182, 188, 190, 201-202, 205, 207-208, 230-231, 242
Ferreira, Benigno 330
Ferrer, Fermín 284
Ferrer, Fidel 368
Figueiredo, Joao Baptista 603
Figueroes, José 499
Filísola, Vicente 234
Finlay, Carlos J. 362
Flecha, Víctor Jacinto 463, 690
Fleury, Sergio 582
Flores, Cirilo 265
Flores, Genaro 567, 605-606
Flores, Juan José 260-261, 287
Flores, Venancio 329
Flores Magón, Enrique 380
Flores Magón, Ricardo 380-382, 391
Florescano, Enrique 690
Fonseca, Manuel Deodoro da 349
Fonseca Amador, Carlos 542, 552, 590, 592
Fortuny, José Manuel 480
Foster Dulles, John 511
Fox, Vicente 642
Francia, José Gaspar de 199, 203-204, 243, 249-250, 327
Franco Montero, André 578
Franco Pichardo, Franklin 690
Franco, Federico 661, 679-680

- Franco, Francisco 503
 Franco, Itamar 637
 Franco, José Luciano 690
 Franco, Rafael 423, 428, 463
 Frei, Eduardo 550, 570
 Frei hijo, Eduardo 618
 Freire Andrade, Francisco de Paula 153
 Freitas da Cunha, Joao de 119
 Fremont, John C. 278
 Freyre, Gilberto 376
 Frigotto, Gaudencio 663
 Frobisher, Martin 71
 Frondizi, Arturo 520, 534, 551
 Fructuoso Rivera 200
 Fuentes, Carlos 547
 Fuentes Mohr, Alberto 600
 Fugger (alemanes) 80
 Fujimori, Alberto 607, 623, 634-635
 Funes, Gregorio 198
 Funes, Mauricio 680, 682
 Furtado de Mendoza, Luis Antonio 153
- G
- Gabaldón, José Rafael 409, 411
 Gadea, Francisco 682
 Gainza, Gabino 207, 233-234
 Gairy, Erik 587
 Gaitán, Gloria 546
 Gaitán, Jorge Eliécer 402, 460, 499-500
 Galán, José Antonio 147-148
 Galán, José María 690
 Galazo, Norberto 690
 Galbaud, Francois Thomas 159
 Galeana, Hermenegildo 182
 Galeana, Patricia 691
 Galich, Manuel 7, 480, 691
 Galíndez, Jesús de 507
 Gallegos, Rómulo 376, 488, 498
 Galtieri, Leopoldo 602
 Gálvez, José de 140, 142
 Gálvez, Mariano 250, 266
 Gamarra, Agustín 238, 257, 263
 Ganga Zumba 119
 Garay, Juan de 90
 García Calderón, Francisco 345
 García Carneiro, Jorge Luis 656
 García de Moguer, Diego 89
 García de Toledo, José María 189
 García, Alan 607
 García, Alan 635-636
 García, Calixto 355-356
 García, José Manuel 304
 García, Vicente 355
 García Godoy, Héctor 557
 García Granados, Miguel 319-320
 García Laviana, Gaspar 593
 García Linera, Álvaro 605, 671
 García Márquez, Gabriel 359, 405, 547
 García Menocal, Mario 412, 416
 García Meza, Luis 604
 García Moreno, Gabriel 324
 García Oñez de Loyola, Martín
 García Pumacahua, Mateo 150, 205
 Garibaldi, Giuseppe 254
 Garrastazu Médici, Emilio 581
 Gasca, Pedro de la 97
 Gavia, Carlos 633
 Gavia, César 632
 Geisel, Ernesto 577
 Geisel, Orlando 577
 Gil Fortoul, José 408

- Gil Gilbert, Enrique 427
Gil, Diógenes 461
Gilly, Adolfo 691
Ginés de Sepúlveda, Juan 105
Giraldo, Torres 399
Gleijeses, Piero 555, 691
Godoy, Juan Silvano 330
Godoy, Manuel 173
Gomes da Silva, Jose Alencar 663
Gomes, Eduardo 393
Gomes, Eduardo 455
Gómez, José Miguel 412, 416
Gómez, José Vicente 410
Gómez, Juan Gualberto 357
Gómez, Juan Vicente 336, 363,
405-409-412, 428, 488
Gómez, Laureano 459, 461,
501-502
Gómez, Máximo 275, 354-356
Gómez, Miguel Mariano 416,
441-442
Gómez Farías, Valentín 250, 275,
307-308
Gómez Morín, Manuel 449
Gómez Ochoa, Delio 542
Gonneville, Paulmier de 66
Gonzaga das Virgens, Luis 166
Gonzaga, Tomás Antonio 152
González, Eurídice 691
González, Florentino 298, 300
González, José Caridad 166
González, Pablo 382-383,
386-387
González, Rubén 408
González Arana, Roberto 694
González Casonota, Pablo 691
González Dávila, Gil 70
González de Ávila, Alonso 98
González de Ávila, Gil 98
González Macchi, Luis Ángel 617
González Ortega, Jesús 311-312,
314, 316
González Videla, Gabriel 496
González von Marees, Jorge 469
Gorender, Jacob 580-581
Goulart, Joao 514, 551-552, 576-
578, 581
Grau, Miguel 343-344
Grau San Martín, Ramón 440,
489-491, 496, 508, 534
Graviere, Jaurien de la 313
Grez Toso, Sergio 691
Grijalva, Juan de 72, 76
Grove, Marmaduke 428, 430
Guachalla, Efraín 566
Gual, Manuel 169
Guardiola, Santos 283
Guarionex 68
Guayasamín, Oswaldo 428
Guaynabá 68
Guazo, Gregorio 145
Guazú Ruvichá 89
Gueiler, Lidia 604
Guelatao, Pablo 310
Güemes, Martín 208, 215, 243
Guerra Sánchez, Ramiro 691
Guerrero, Manuel Amador 361
Guerrero, Vicente 182, 230-231,
243, 245, 275, 309
Guevara, Ernesto (Che) 537, 548,
553, 564
Guevara, José 104
Guevara, Walter 531, 604
Guillén, Nicolás 376
Guimaraes, Ulysses 578
Güiraldes, Ricardo 376
Guiteras, Antonio 416-417, 428,
440-441

- Gutiérrez Alea, Tomás 548
 Gutiérrez de Piñeres, Gabriel 188, 195, 222
 Gutiérrez de Piñeres, Germán 188, 195, 222
 Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco 146-147, 195, 222
 Gutiérrez, Eulalio 383
 Gutiérrez, Lucio 644-645, 673, 675
 Gutiérrez, Mario 568
 Gutiérrez, Víctor Manuel 484
 Guzmán, Abimael 634
 Guzmán, Antonio Leocadio 301-302, 304-306
 Guzmán, León 310
 Guzmán, Martín Luis 445
 Guzmán, Nuño de 74
 Guzmán Blanco, Antonio 292, 305, 336
- H
- Habsburgo, Maximiliano de 312, 315-318
 Hall, Adolfo 323
 Halperin Donghi, Tulio 692
 Handal, Shafik 682
 Harrison, C. K. 283
 Hassan, Moisés 596
 Hatuey 68
 Hawkins, John 112
 Haya de la Torre, Víctor Raúl 377, 437-438, 545, 551
 Helena, Heloísa 665
 Henríquez y Carvajal, Francisco 367-368, 375
 Henríquez, Camilo 205
 Henry, O. 404
 Heras, Juan Gregorio de las 268
 Heredia, Francisco de 399
 Heredia, Pedro de 84-85
 Hernández de Córdoba, Francisco 72, 76
 Hernández Girón, Francisco 97
 Hernández Martínez, Maximiliano (El Brujo) 431, 479-480
 Hernández, José 250
 Hernández, Onelio 542
 Hernando Ramírez, Miguel Ángel 555
 Herrán, Antonio 301
 Herrera Peña, José 692
 Herrera, Alberto 439
 Herrera, Benjamín 359-361, 399
 Herrera, Carlos 396-397
 Herrera, Olaya 460
 Hertzog, Enrique 523
 Heureaux, Ulises 366
 Heyn, Piet 112
 Hidalgo, Miguel 177, 179-184, 230-231, 243
 Hitler, Adolfo 451
 Hoover, Herbert C. 404, 471
 Horhemut, Horge 87
 Hostos, Eugenio María de 23, 25
 Hualcopo Duchicela 58
 Hualpa Cápac 79
 Huamachuco 58
 Huáscar 58, 78-79
 Huayna Cápac 58
 Hudson, Henry 71
 Huerta, Victoriano 382
 Hugo, Víctor 317
 Hugues, Víctor 165
 Humala, Antauro 635-636
 Humala, Ollanta 635

- Humboldt, Alexander von 24, 139, 479
Hurtado Larrea, Osvaldo 606
Hurtado, Jaime 644
Hutten, Felipe von 87
- I
- Ibáñez, Carlos 429, 534
Ibarra Cuesta, Jorge 693
Ibarra, Francisco de 74
Ibraim, José 580
Icaza, Jorge 445
Iglesias, Aracelio 496
Iglesias, José María 318
Illia, Arturo 552
Illom, Gaspar (Rodrigo Asturias) 599
Infante, Joaquín 230
Ingenieros, José 377, 391
Ingenieros, José
Irigoyen, Hipólito 389-390, 443
Irisarri, Antonio José de 206
Irisarri, José María 288
Isabel I de Castilla 102
Istúriz, Aristóbulo 656
Iturbide, Agustín de 229-232, 234, 264, 277, 315
Itzcóatl 49
- J
- Jacinto Canes 142
Jagan, Cheddi 511, 544, 552
Jaguaribe, Helio 548
Jara, Heriberto 388
Jara, Víctor 548
Jaramillo, Bernardo 632
Jecker 313
- Jerez, Máximo 283
Jimenes, Juan Isidro 367
Jiménez, Miguel 146
Jiménez, Pérez 545
Jiménez de Quesada, Gonzalo 85-86
Jiménez Moya, Enrique 542
Jinkings, Ivana 698
Joao III 91
Jobet, Julio César 693
Johnson, Lyndon B. 550, 554, 556
Jorge Velho, Domingo 119
Juan Calixto (Muni) 142
Juan Cipriano 142
Juan Santos Atahualpa II 149
Juan VI 235-236
Juárez, Benito 292-293, 315-316, 306-314, 318-320, 379
- K
- Kabal Xook 46
Kan Balam 46
Katari, Dámaso 149-150
Katari, Nicolás 149-150
Katari, Tomás 149-151
Katz, Claudio 693
Kearny, Stephen W. 278
Kebreau, Antoine 609
Keith, Minor C. 372
Kemmerer, Edwin 396, 400
Kennedy, John F. 549-550, 554
Kino, Eusebio 74
Kirchner, Néstor 660, 667-669
Klein, Herbert S. 693
Knapp, Harry. S. 368
Konetzke, Richard 693
Kossok, Manfred 7, 693
Kubitschek, Juscelino 580
Kundt, Hans 422

L

- Labastida, Pelagio Antonio de 314
 Lacalle, Luis Alberto 603
 Lacayo Sacasa, Benjamín 504
 Lacerda, Carlos 455, 580
 Lafferté, Elías 429
 Lagos, Ricardo 619, 661
 Laino, Domingo 616, 693
 Lamarca, Carlos 581-582
 Lambaré 89
 Landa, Diego de 104
 Lander, Tomás 304
 Lanza, José Miguel 243
 Larancuent, Alberto 506
 Laredo Brú, Federico 442, 489
 Larios, Bernardino 594, 596
 Larraín, Joaquín 205-206
 Larrave, Miguel 396
 Larrea, Luis A. 428
 Latorre, Lorenzo 336
 Latrille, Charles Ferdinand (conde de Lorencez) 314
 Laujerud, Kjell 587
 Laurent, Emilio 417
 Lautaro 83
 Lavallo, Juan 269
 Lavalleja, Juan Antonio 268
 Lavaud, Frank 488
 Laveaux, Etienne 161
 Le Riverend, Julio 693
 Leal Spengler, Eusebio 27
 Lebrón, Lolita 497
 Lechín, Juan 524, 531, 567
 Leclerc, Georges Louis (conde de Buffon) 138
 Leclerc, Victor Emmanuel 162-163
 Leconte, Cincinatus 370
 Lee, Robert E. 282
 Leguía, Augusto B. 436
 Leite, Eduardo (Bucurí) 582
 Lempira 77
 Lemus, José M. 543
 León Carpio, Ramiro de 623-624
 León de la Barra, Francisco 381
 León Portilla, Miguel 693
 León, Carlos F. 399
 León, Miguel 298
 Leoni, Raúl 487, 545
 Lerdo de Tejada, Miguel 307-308, 318
 Lerdo de Tejada, Sebastián 380
 Lescot, Elie 488
 Lesseps, Ferdinand de 358
 Levelt, Antoine 488
 Lewin, Boleslao 693
 Liévano Aguirre, Indalecio 694
 Lima, José Miguel 396
 Linares Alcántara, Francisco 409
 Lincoln, Abraham 288
 Lipschutz, Alejandro 694
 Lisboa, Antonio Francisco (Aleijadinho) 132
 Litín, Miguel 548
 Lleras Camargo, Alberto 462
 Lleras Restrepo, Carlos 460, 502
 Lobo Sosa, Porfirio 676-677
 Lombardo Toledano, Vicente 446, 495
 Londoño, Rodrigo (Timochenko) 634
 López, Alfredo 415
 López, Ambrosio 298
 López, Carlos Antonio 327-328, 421
 López, José Hilario 259-261, 292, 298, 300
 López, Narciso 228, 282, 354

- López, Santos 590
López Arellano, Osvaldo 559
López Civeira, Francisca 694
López Contreras, Eleazar 411, 488
López de Mesa, Luis 460-463
López de Santa Anna, Antonio 249, 275, 277, 306-307, 311
López Mateos, Adolfo 544
López Michelsen, Alfonso 546, 573
López Obrador, Andrés Manuel 642-643
López Pérez, Rigoberto 505, 542
López Portillo, José 594
López Pumarejo, Alfonso 457-459, 502, 546
López Rayón, Ignacio 182-183
López Rega, José 585
López y Fuentes, Gregorio 445
Lorenzo, José L. 694
Lorenzo, Victoriano 361
Losada, Diego de 87
Louverture, Toussaint 157, 159-163, 221
Lovera, Tomás de 146
Loyola, Oscar 694, 699
Lozano Díaz, Julio 534
Lozano y Lozano, Juan 459
Lozano, José Tadeo 188
Lozano, León María 501
Lugo, Fernando 661, 676, 677-679
Luis XVI 159-160
Lumbreras, Luis Guillermo 694
Luna Pizarro, Francisco Javier 238
Luna, Alfonso 432
Luperón, Gregorio 274, 366
Luque, Hernando de 78
Luz, Román de la 175
Lynch, John 218, 694
- M
- Macaulay, Neile 688
Maceo, Antonio 354-356
Machado, Eduardo 409
Machado, Gerardo 336, 405, 412, 414-418, 428, 439, 505
Machado, Gustavo 409-410, 428
Machain, Facundo 330
Mackenna, Juan 206-207
Madero, Francisco I. 375, 381-384
Madrid, Miguel de la 640
Madriz, José 370
Maduro, Nicolás 659-660
Maduro, Ricardo 676
Magallanes, Fernando de 70
Magloire, Paul 488, 497, 511, 533, 609
Maguidovich, Iosif P. 64, 694
Mahan, Alfred T. 352-353
Mahecha, Raúl Eduardo 399, 401
Mahuad, Yamil 644
Maldonado Gallardo, Alejo 22, 692, 694
Malintzin (Malinche) 73, 98
Mallarino, Manuel María 300
Manco Cápac 56, 79-80
Manco Cápac II 79-81
Maneiro, Alfredo 651
Manley, Michael 572, 608
Mann, Thomas C. 550
Mar, conde José la 220, 238, 257, 262
Marcano Álvarez, Félix 275
Marcano Álvarez, Francisco 275
Marcano Álvarez, Luis 275
Mariátegui, José Carlos 378, 392
Marighela, Carlos 489, 553, 580, 582
Mariño, Santiago 191-193, 222-224

- Mármol, Miguel 432
 Márquez, Leonardo 311-312, 318
 Márquez, Pompeyo 651
 Márquez, Tomás Uribe 399
 Márquez Bustillos, Victorino 407
 Marroquín, Alfonso 480
 Marshall, George C. 495
 Martelly, Michel Joseph 661
 Martí, Agustín Farabundo 428, 432, 451
 Martí, José 25-27, 355-356, 367, 686, 694
 Martín, Nicolás 142
 Martínez de Irala, Domingo 89
 Martínez de Rozas, Juan 205
 Martínez Peláez, Severo 694
 Martínez Villena, Rubén 414, 417, 428
 Martínez, Julio 409
 Martínez, María Estela 585
 Marulanda Vélez, Manuel (Tirofijo) 546, 632
 Marx, Carlos 38, 313, 378
 Massetti, Jorge Ricardo 553
 Mata, José María 308
 Matamoros, Jesús 409
 Matamoros, Mariano 182
 Maurepas, Jacques 163
 Mayorga, Martín de 129
 Mayorga, Silvio 590
 Maza, Margarita 310
 McCarthy, Glenn 529
 McCarthy, Joseph 495
 McKinley, William 353, 357
 Médici, Garrastazu 582
 Medina, Danilo 661
 Medina, José Antonio 174
 Medina, Medófilo 500, 694
 Medida, Pablo 653
 Medina Angarita, Isaías 488
 Medina Castro, Manuel 694
 Meiggs, Henry 372
 Mejía, Tomás 311-312, 318
 Meléndez, Carlos 65, 695
 Melgarejo, Mariano 341
 Mella, Julio Antonio 377, 392, 414-415
 Mella, Matías Ramón 273
 Melo, José María 297, 299
 Mena, Juan de 146
 Mena, Luis 370
 Menchú, Rigoberta 601
 Méndez, Miguel 310
 Méndez Montenegro, Julio César 480
 Méndez Montenegro, Mario 480, 483
 Méndez R., Salvador 140, 695
 Mendieta, Carlos 416, 440-441
 Mendieta, Jerónimo de 105
 Mendoza, Antonio de 75, 107
 Mendoza, Pedro de 82
 Menem, Carlos Saúl 602, 645, 667-668
 Menéndez, Jesús 496
 Mercado, Manuel 355
 Mesa, Carlos 649
 Meyer, Charles A. 565
 Micheletti, Roberto 661, 677, 680
 Michelini, Zelmar 586
 Michimalonco 83
 Midence, Carlos 695
 Mier, fray Servando Teresa de 230
 Miltos, Cayo 330
 Mina, Francisco Javier 230
 Miquelena, Luis 656
 Mirabal, María Teresa 542
 Mirabal, Minerva 542

- Mirabal, Patria 542
Miramón, Miguel 309, 311-313, 318
Miranda, Francisco de 21-22, 27, 167-170, 172, 184-186, 188, 255
Miranda, Rogelio 566
Mistral, Gabriela 445
Mitre, Bartolomé 271, 329, 695
Moctezuma 72-73
Moctezuma Ilhuicamina (el viejo) 49
Moctezuma Xocoyotzin (huey tlatoani) 50
Molina, Adolfo 601
Molina, Gerardo 460
Molina Ureña, Rafael 555-556
Mompox, Fernando de 146
Monagas, José Gregorio 304
Monagas, José Ruperto 306
Monagas, José Tadeo 223, 304-305
Monasterios, Karin 695
Moncada, José María 434
Moñino y Redondo, José (I conde de Floridablanca) 123
Monsanto, Pablo (Jorge Soto) 599
Montalvo, Juan 25
Montaña Cuellar, Diego 399
Monte, Jesús del 144
Monteagudo, Bernardo 202, 228
Monteagudo, Matías 231
Montealegre, Eduardo 681
Monteiro, Goes 456
Montejo (los) 76-77
Montenegro, Carlos 468, 695
Montes Arache, Manuel Ramón 556
Montes, Félix 407
Montes, Toribio 190
Montesinos, Vladimiro 634
Monteverde, Domingo 185-186, 191
Montilla, Mariano 226
Montoya, Ruiz de 104
Montt, Jorge 347
Montt, Manuel 340
Montúfar, Carlos 190, 195
Mora, Carlos Alberto 695
Mora, Juan Rafael 284
Morales, Francisco Tomás 192, 194, 224, 226, 228
Morales, Juan 278
Morales, Nicolás 165-166
Morales Avilés, Ricardo 592
Morales Ayma, Evo 647-648, 660, 670-672
Morales Benítez, Otto 695
Morales Bermúdez, Francisco 561
Morán, Rolando (Ricardo Ramírez) 599
Morazán, Francisco 265-267, 394
Moreira Alves, Marcio 580
Moreira de Lima, Lillian J. 695
Moreira, Gonzalo 119
Morelos, José María 179, 182-184, 230-231, 243
Moreno, Mariano 196-199, 243
Morgan, Charles 283
Morgan, Henry 112-113
Morillo, Pablo 194, 196, 208, 224-226
Morínigo, Higinio 491, 498
Morones, Luis N. 446
Mosquera, Joaquín 260
Mosquera, Tomás Cipriano de 292, 297-303
Moya Pons, Frank 404, 695
Moyse 161
Mujica, Francisco J. 388

Mujica, José 660, 683
 Muñoz del Monte, Francisco 24
 Muñoz Marín, Luis 497, 499
 Murcia, Salvador 399
 Murillo, Pedro Domingo 174-175
 Murillo, Toro Manuel 300, 303
 Mussolini, Benito 452, 467

N

Namphy, Henri 614
 Ñande Ru 89
 Napoleón III 25, 313-315, 317
 Narciso, Gil 161
 Nariño, Antonio 170, 188-189,
 194, 226, 258
 Narváez, Pánfilo de 68, 73
 Nativa, Ramón 368
 Navarro García, Luis 142, 695
 Navarro Wolf, Antonio 631
 Nel Ospina, Pedro 462
 Neruda, Pablo 19, 496
 Netto, Delfín 582
 Netzahualpilli 75
 Neves, Tancredo 603
 Nicolás V 68
 Nicolás, Avellaneda 271
 Niemeyer, Oscar 551
 Niño, Pedro Alonso 66
 Nixon, Richard M. 511, 549, 574
 Noé 29
 Noriega, Manuel Antonio 563
 North, John Thomas 346
 Novaes, Adatao 695
 Novoa, Álvaro 674
 Novoa, Gustavo 644-645
 Núñez, Carlos 592
 Núñez, Rafael 303-304
 Núñez Cabeza de Vaca, Alvar 74, 89

Núñez de Balboa, Vasco 69
 Núñez de Vela, Blasco 97, 107
 Núñez Sánchez, Jorge 325, 696

O

O'Higgins, Bernardo 170, 245,
 205-208, 213-214
 O'Donojú, Juan 229, 232
 Obando, José María 259-261,
 299-300
 Obregón, Álvaro 382-383, 385,
 409, 444-445
 Ocampo Alcántara, Rigoberto 696
 Ocampo, Melchor 307-308, 310,
 312
 Och Chan Yopal 46
 Odría, Manuel A. 511
 Ogé, Vincent 158, 165
 Ojeda, Alonso de 66, 69
 Ojeda, Fabricio 545, 552
 Olaya Herrera, Enrique 402
 Olid, Cristóbal de 70, 74
 Oliva de Coll, Josefina 696
 Ominami, Marco Enríquez 619
 Oporto, Mario 696
 Orbegoso, Luis José de 262
 Ordaz, Diego de 88
 Ordóñez 443
 Orellana, Francisco de 88
 Orellana, José María 396-397
 Oribe, Manuel 268, 271
 Orozco, José Clemente 445
 Orozco, Pascual 381
 Ortega, Camilo 593
 Ortega, Daniel 592-593, 596-598,
 628, 661, 680-682
 Ortega, Humberto 592, 595-596
 Ortiz Rubio, Pascual 445

- Ortiz, Daniel 361
Ortiz, Fernando 376
Ortiz, Silverio 395
Ospina, Iván Marino 631
Ospina, Mariano 499-501
Ospina, Nel 400
Ospina Pérez, Mariano 462
Ospina Rodríguez, Mariano 300, 462
Ostria Gutiérrez, Alberto 492, 696
Otero Silva, Miguel 411
Ots Capdequí, José María 696
Ovando Candia, Alfredo 532
Ovando Sanz, Jorge Alejandro 267, 696
Ovando, Alfredo 564-566
Ovando, frey Nicolás de 65
Ovelar, Blanca 678
Oviedo, Lino 616-617
Oxeham, John 112
Oxib-Quieh 75
- P
- Paccha 58
Pachacútec 56-57
Pachamira, Eugenio de 143
Pacheco Areco, Jorge 552
Padilla, José 228
Páez, José Antonio 223, 225-226, 249, 256, 260-261, 304-305
País, Frank 536
Paiva, Félix 464
Pakal 46
Palacios, Alfredo L. 377, 673
Palés Matos, Luis 376
Palmeira, Vladimir 580
Palocci, Hacienda Antonio 665
Paniagua, Valentín 635
Papillón, Jean Francois 159-161
Pardo, Manuel 341
Pareja, Antonio 207
Parra, Aquileo 301
Parry, J. H. 696
Pastora, Edén 593
Pastrana, Andrés 632
Paulmier de Gonneville, Binot 91
Pauw, Cornelio de 138
Paz Estenssoro, Víctor 466, 492-493, 523-527, 531-532, 552, 568, 604-606
Paz Tejada, Carlos 547
Paz y Miño, Juan 644, 696
Paz Zamora, Jaime 606, 648
Pedro I 237, 347
Pedro II 336, 347-348, 392
Peguero, Martín 368
Peña Gómez, José Francisco 555
Peña Nieto, Enrique 643
Peña, Margarita 695
Peñaloza, Juan Pablo 409
Peñaranda, Enrique 422
Peñuela, Matías 409
Peralta, Gastón de 98
Peralte, Chalemagne 372, 375
Peraza, Francisco 416
Perdomo, Nicolás 361
Peredo, Inti 524, 553, 564
Peredo, Osvaldo (Chato) 566
Pereira, Astrogildo 392, 451
Pérez, Carlos Andrés 573
Pérez, Carlos Andrés 594, 651-652
Pérez, Constantino 409
Pérez, José Joaquín 340
Pérez, José Miguel 415
Pérez, Juan Bautista 407
Pérez, Santiago 302-303

- Pérez Brignoli, Héctor 322, 696
 Pérez Jiménez, Marcos 487, 511, 533
 Pérez Pino, Armando 690
 Perón, Juan Domingo 513-522, 572, 585, 670
 Petion, Alexandre 160, 162-163, 221, 228, 243, 272
 Petkoff, Teodoro 651, 653
 Petras, James 696
 Peynado, Francisco J. 508
 Piar, Manuel 192, 222-224
 Picado, Teodoro 499
 Picón Salas, Mariano 172, 696
 Picornell, Juan Bautista 169
 Pierce, Franklin 282, 284
 Piérola, Nicolás de 346
 Pimentel, Luis Rafael 409
 Pino Suárez, José María 382
 Pinochet, Augusto 568, 571, 576, 615, 617-619
 Piñol y Batres, José 395
 Pinzón, Martín Alonso 62
 Pinzón, Vicente Yáñez 66, 68
 Pirela, Javier 167
 Pividal, Francisco 7, 696
 Pizarro, Carlos 632
 Pizarro, Francisco 72, 77-80
 Pizarro, Gonzalo 80, 82-83, 88, 97, 219
 Pizarro, Hernando 80
 Pizarro, Juan 79-80
 Plata, Salvador 147
 Plaza, Salvador de la 409
 Pocaterra, José Rafael 410
 Poirier, François 609
 Polvérel, Etienne 159
 Pomares, Germán 593
 Ponce de León, Juan 68
 Ponce, Federico 481-482
 Ponsonby, John 269
 Portales, Diego 250, 262
 Portes Gil, Emilio 445
 Portilla, Pedro de la 142
 Pozo, José del 169
 Pozzo Toscanelli, Paolo de 62
 Prado Junior, Caio 697
 Prado Ugarteche, Manuel 551
 Prat, Arturo 343
 Prats, Carlos 571, 586
 Prestes, Luis Carlos 377, 393-394, 451, 489
 Préval, René 615
 Price-Mars, Jean 488
 Prieto Rozos, Alberto 692, 697
 Prieto, Guillermo 310, 316
 Prieto, Joaquín 214
 Prim, Juan 313
 Prince Lara, Guillermo 410-411
 Prío Socarrás, Carlos 496, 534-535
 Puello, José Joaquín 273
 Puente Uceda, Luis de la 553
 Puertas, Ramón 646
 Pueyrredón, Juan Martín de 213, 216-217
- Q
- Quadros, Janio 544
 Quesada, Manuel de 355
 Quesada Monge, Rodrigo 697
 Quezada Toruriño, Rodolfo 623
 Quijano, Hortensio 520
 Quintana Roo, Andrés 183
 Quipa-Hipa 58
 Quiroga, Jorge (Tuto) 648, 671
 Quiroga, Juan Facundo 269
 Quiroga, Vasco de 104

- Quiroga Santa Cruz, Marcelo 565
Quispe, Felipe 605, 647-648
Quitman, John A. 279, 282
Quizquiz 78
- R
- Raful, Tony 697
Raja, Vicente 144
Rama, Carlos M. 697
Ramírez Necochea, Hernán 351, 697
Ramírez, Pedro Pablo 515-516
Ramírez, Sergio 596-598, 680
Ramos, Graciliano 427
Ramos, Jorge Abelardo 697
Rangel, José Vicente 656
Raynal, Guillaume Thomas François 138
Reagan, Ronald 596
Recabarren, Luis Emilio 392
Regalado, Roberto 697
Reid Cabral, Donald 554-555
Remesal, Antonio de 105
Revueltas, José 427
Rey Tristán, Eduardo 697
Reyes, Bernardo 380, 382
Reyes, Raúl 633
Ribas, José Félix 191, 193-194
Ricaurte, Joaquín 195
Riego, Rafael 225
Rigaud, André 158-162
Riggs, Elisha Francis 436
Ríos Montt, Efraín 587, 601
Ripstein, Arturo 548
Riva Agüero, José de la 228, 238
Rivadavia, Bernardino 201-202, 268-269
Rivas, Patricio 283-284
Rivera, Diego 445
Rivera, Fructuoso 268, 271
Rivera, José Eustacio 376
Rivière-Hérard, Charles 273
Roa Bastos, Augusto 327, 547
Robelo, Alfonso 593, 596
Roca, José Luis 137, 697
Roca, Julio A. 271
Rocafuerte, Vicente 22
Rodas Chávez, Germán 692, 698
Rodríguez, Abelardo 445
Rodríguez, Andrés 615-616
Rodríguez, Leónidas 561
Rodríguez, Manuel 205, 213-214, 243
Rodrigues da Fonseca, Hermes 393
Rodríguez Araque, Alí 655
Rodríguez Bautista, Nicolás 632
Rodríguez Carrasco, Francisco 142
Rodríguez de Campomanes y Pérez, Pedro (I conde de Campomanes) 123
Rodríguez Gelffenstein, Sergio 698
Rodríguez Lara, Guillermo 559
Rodríguez Sa, Adolfo 646
Rodríguez Veltzé, Eduardo 650
Roeder, Ralph 316, 698
Rojas, Diego de 84
Rojas, María Eugenia 631
Rojas Mix, Miguel A. 25, 698
Rojas Pinilla, Gustavo 502, 511, 533, 631
Roldán, Francisco 64
Roldós Aguilera, Jaime 606
Román Hernández, José René (Pupo) 543
Román y Reyes, Víctor M. 504
Romero, Lucas 587
Romero, Oscar Arnulfo 586, 601

- Romero, Pedro 188, 195
 Romero, Roberto A. 698
 Rondeau, José 200-201, 203, 209, 269
 Roosevelt, Frankliyn Delano 371, 404, 417, 435, 441, 455, 457, 471-474
 Roosevelt, Theodore 353, 358, 362, 364-365, 369
 Rosales, Manuel 657
 Rosas, Juan Manuel de 249-250, 262, 269-271, 327
 Rouseff, Dilma 660, 663, 665-666
 Rúa, Fernando de la 646
 Ruiz, Henry 592, 596
 Ruiz, Manuel 310
 Rumiñahui 79
 Russo, José 401
 Ruz Lhuillier, Alberto 46, 698
- S
- Saca, Antonio Elías 682
 Sacasa, Juan Bautista 434, 502
 Sader, Emir 698
 Sáenz, Manuela 259
 Salamanca, Daniel 420
 Salanueva, Antonio de 310
 Salas, Manuel José de 169
 Salas, Mariano 314
 Salas Römer, Henrique 654
 Salazar, Bernabé 395
 Salazar, Juan de 89
 Saldívar Villagra, Fabián 498
 Salgado, Plinio 469
 Salgar, Eustorgio 301
 Salinas de Gortari, Carlos 640
 Salvatierra, Juan María de 74
 Sam, Vilbrum Guillaume 371
 Sámanez Ocampo, Elías 437
 Samper, Ernesto 632
 Samper, José María 23
 San Martín 211-215-220, 228-229, 231, 238-239, 245, 262
 San Martín, José de 201-202, 218
 Sánchez Cerro, Luis M. 437-438
 Sánchez de Lozada, Gonzalo 647-649
 Sánchez de Orellana, Jacinto (marqués de Villa Orellana) 190
 Sánchez Otero, Germán 698
 Sánchez, Francisco del Rosario 273-274
 Sánchez, Rubén 567
 Sandino, Augusto César 375, 377-378, 428, 432-435, 451, 471, 503
 Sandoval, Alonso de 104
 Sanguily, Manuel 357
 Sanguinetti, Julio María 603
 Sanjinés, Jorge 548
 Sansarico, Bernard 612
 Santa Anna 279
 Santa Cruz y Espejo, Francisco Eugenio de 137, 139
 Santa Cruz, Andrés de 238, 256-257, 261-263
 Santana, Adalberto 698
 Santana, Pedro 273-274
 Santana, Ramón 273
 Santander, Francisco de Paula 222-223, 225, 227, 240, 256, 258-259
 Santos Zelaya, José 293, 318, 325-326, 369, 375
 Santos, Eduardo 460
 Santos, Felipe dos 132, 152
 Santos, José Manuel 633, 677

- Santos, Theotonio dos 548
Sapa Inca 56
Sarmiento, Domingo Faustino 250, 271, 317
Sarney, José 603
Sarratea, Manuel de 201
Satori, Fernando 566
Savendra, Bautista 419, 422
Savendra, Cornelio 196-200
Savitski, Silvestre 399
Saxe Fernández, Eduardo E. 698
Sayri Túpac 81
Schneider, René 569
Scocozza Antonio 246, 688
Scout, Winfield 278-279
Seaga, Edward 587
Segundo, José 330
Sejourné, Laurette 698
Selich, Andrés 568
Selser, Gregorio 698
Selva Ramírez, Adán 542
Semo, Enrique 698
Sendic, Raúl 585
Seregni, Líber 572
Serna, José de la 229
Serpa, Diego de 88
Serra, José 663, 666
Serrano Elías, Jorge 623
Serviez, Manuel 195
Shi, David E. 63, 699
Sigüenza y Góngora, Carlos de 137
Siles Salinas, Luis Adolfo 564
Siles Suazo, Hernán 524-525, 530, 604
Siles, Hernando 419-420
Silva Bernardes, Artur da 393
Silva Herzog, Jesús 698
Silva, Luiz Inácio da (Lula) 636, 638, 660, 663-666
Silva Xavier, Joaquín José da (Tiradentes) 143, 152-153
Silva, Arnaldo 694
Silva, José Laurencio 305
Silva, Marina 666
Siquiera Campos, Antonio 393
Siracusa, Ernest 568
Sixirei Paredes, Carlos 698
Siyaj Kak 43
Sloat, John D. 278
Smith, Alberto 410
Smythe, Percy C. S. (vizconde de Strangford) 200
Solano López, Francisco 328-330
Soler, Ricaurte 288, 698
Solórzano, Carlos 644
Somarriba, Rafael 542
Somoza Debayle, Anastasio 405, 505, 590
Somoza Debayle, Luis 405, 505, 590
Somoza García, Anastasio 405, 435, 489, 502-505, 511, 533, 540, 563, 587, 590-591, 593-595, 598
Sonthonax, Felicité 159-161
Sores, Jacques de 112
Sosa Elízaga, Raquel 642
Sosa, Mercedes 548
Soto, Hernando de 68, 74
Soto, Lionel 699
Soto, Marco Aurelio 318
Soubllette, Carlos 222, 228
Soulé, Pierre 282
Soulouque, Faustin 273
Sousa, Thomé de 92
Souza, Martín Alonso de 89
Stefanoni, Pablo 604, 695, 699
Stobnicza, Jan 67
Stroessner, Alfredo 511, 540, 587, 615-616, 678

- Suárez Rendón, Gonzalo 86
 Suárez Salazar, Luis 699
 Suárez, Joseph Francisco 167
 Suárez, Víctor Julio 633
 Suazo Córdoba, Roberto 621
 Guillén Vicente, Rafael Sebastián
 (subcomandante Marcos) 641-642
 Sucre, Antonio José de 192, 227,
 239-240, 245, 257, 260, 267
 Svampa, Maristella 604, 699
- T
- Tabanera, Nuria 699
 Tabares del Real, José A. 699
 Tabeada, Rufino 330
 Tacón, Miguel 190
 Taft, William H. 353, 365, 369
 Tagle, José Bernardo (marqués de
 Torre Tagle) 218-220, 226,
 238-239
 Tamayo, Pío 410
 Tamborini, José P. 518
 Tapia, Luciano 605
 Tavárez Justo, Manuel A. 553, 542
 Taylor, Zachary 278
 Tecún Umán 75
 Tejada Sorzano, José 464-465
 Tejada Sorzano, Luis 420
 Téllez, Dora María 593
 Tello de Sandoval, Francisco 98
 Teresa de Mier, Servando 137
 Thomassin, Antoine de (conde de
 Peynier) 158
 Tindall, George B. 63, 699
 Tirado, Víctor 592-593, 680
 Tisquesusha (el Zipa de Bacatá) 85
 Títu Cusi Yupanqui 81
 Tizoc 50
 Tlacaélel 49
 Toledo, Alejandro 635
 Toledo, Francisco de 81
 Tolomeo 62
 Tomic, Radomiro 569
 Toriello, Guillermo 485
 Toro, David 428, 465, 468
 Torquemada, Tomás de 104
 Torre, Miguel de la 211
 Torres Caicedo, José María 25
 Torres Galarza, Ramón 699
 Torres Giraldo, Ignacio 399
 Torres Ortiz, Humberto 524-525
 Torres, Camilo 137, 188-189,
 546, 553
 Torres, Gumersindo 408
 Torres, Juan José 559, 585-586,
 564-568
 Torres, Ramón 410
 Torres-Cuevas, Eduardo 699
 Torriello, Jorge 482
 Torriente Brau, Pablo de la 470
 Torrijos Herrera, Omar 558, 562-
 563, 594
 Tounens, Aurelie Antoine de 288
 Trejo, Rafael 417
 Trías, Vivian 269, 699
 Tristán, Pío 262
 Troncoso de la Concha, Manuel
 de Jesús (Pipí) 508
 Trotsky, León 447
 Trujillo Martínez, Rafael Leónidas
 (Ramfís) 508
 Trujillo, Héctor Bienvenido (Negro)
 508
 Trujillo, Rafael Leónidas 368-
 369, 489, 505-508, 511, 540,
 542-543

- Túpac Amaru 81, 149
 Túpac Amaru II (Condorcanqui, José Gabriel) 143, 148, 150-151, 205, 215
 Túpac Amaru III (Cristóbal, Diego) 151
 Túpac Inca Yupanqui 57-58
 Túpac Katari 567
 Turcios Lima, Luis Augusto 547, 553
 Turcios, Oscar 592
 Tutul Xiú 77
- U
- Ubico, Jorge 479-481
 Unzaga, Oscar 530
 Urbina, Rafael Simón 410, 428
 Urcuyo, Francisco 595
 Urdaneta Arboláez, Roberto 501
 Urdaneta, Rafael 191, 260
 Uribe Uribe, Rafael 359-360, 398
 Uribe, Álvaro 632-633
 Uribe, Jorge 399
 Urquiza, Justo José de 271, 327
 Urraca 70
 Urriolagoitia, Mamerto 523
 Urrutia Lleó, Manuel 538
 Ursúa Pedro de
 Urzúa, Martín de 77
- V
- Vaca de Castro, Cristóbal 80
 Vadillo, Juan 85
 Valdivia, Pedro de 83
 Valencia, Gabriel 279
 Valiente, Agapito 543
 Valle, José del 150
 Valle, Leandro 312
 Vallejo, Camila 619
 Vallejo, César 427
 Vallenilla Lanz, Laureano 408
 Vanderbilt, Cornelius 282-283
 Vargas Llosa, Mario 392, 405, 607
 Vargas Pazzos, Frank 606
 Vargas Santos, Gabriel 359-360
 Vargas, Antonio 644
 Vargas, Getulio 444, 450-456, 469, 489, 512-515, 523
 Varona, Enrique 415
 Vasconcelos, José 377, 445
 Vázquez Bello, Clemente 417
 Vázquez Castaño, Fabio 546
 Vázquez de Coronado, Francisco 74
 Vázquez, Horacio 366, 369, 505
 Vázquez, Tavaré 660, 683
 Vega, Garcilaso de la 81
 Vega, José María 298
 Vela de Córdova, Juan 143
 Velasco Alvarado, Juan 558, 560-561, 565
 Velasco Ibarra, José María 487, 496, 551
 Velasco, José Miguel de 262-263
 Velasco, Juan de 138
 Velasco, Luis de 98
 Velásquez, Diego 68, 72-73
 Velázquez, Andrés 653
 Velázquez, Ramón J. 653
 Véliz, Alejo 647-648
 Verrazano, Giovanni de 71
 Vespucio, Américo 66-67
 Victoria, Guadalupe 230, 241, 275
 Vidales, Luis 457
 Vidaurre, Santiago 318
 Videla, Jorge Rafael 586
 Vieira, Gilberto 501

- Vilas, Carlos 699
- Villa, Francisco (Pancho) 381-383, 385-388
- Villa, Pancho 444
- Villalba, Jóvito 410
- Villalba, Juan de 142
- Villalobos, Joaquín 682
- Villar, Isidoro 243
- Villarroel, Gualberto 492-494, 523
- Villate, J. B. 160-162
- Villegas, Silvio 459
- Vinicio Ribeiro, Marcus 687
- Viscard, Juan Pablo 21
- Viscardo y Guzmán, Juan Pablo 137-138
- Vitale, Luis 699
- Vivanco, Manuel Ignacio 263
- W
- Waldsemüller, Martín 67
- Walker, William 280, 282-288
- Walter, William 23
- Warnes, Ignacio 243
- Warren, Harris Gaylord 699
- Washington, George 181
- Wasmosy, Juan Carlos 616
- Welles, Benjamín Sumner 417-418, 439
- Wellesley, Arthur Colley 172
- Welser (los) 87
- Wessin y Wessin, Elías 554-556
- Wheelock, Jaime 592, 596
- White, Richard Alan 699
- Whitney, Eli 276
- Wilson, Woodrow 353, 364
- Winship, Blanton D. 436
- Wyke, Charles 313
- Y
- Yáñez, José 193
- Yax Kuk Mo 46
- Yax Nuun Ayiin 44
- Yax Pac 46
- Ydígoras Fuentes, Miguel 547, 551
- Yegros, Fulgencio 199, 204, 217
- Yon Sosa, Marco Antonio 547, 553
- Yuknoom 46
- Yuknoom el Grande 46
- Yupanqui, Atahualpa 548
- Z
- Zaldívar, Rafael 318
- Zaldúa, Francisco Javier 301
- Zamora, Ezequiel 304-305
- Zanetti, Oscar 144, 699
- Zapata, Emiliano 381-383, 386-388, 391, 444
- Zapata, Mario 432
- Zaragoza, Ignacio 311, 314
- Zayas, Alfredo 412-413
- Zedillo, Ernesto 640
- Zelaya Rosales, José Manuel (Mel) 661, 676-677, 679
- Zeledón, Benjamín 370
- Zeuske, Michael 700
- Zimmermann, Matilde 700
- Zuloaga, Félix 309, 312
- Zuloaga, Pedro 409
- Zumárraga, fray Juan de
- Zumbí 119-120
- Zúmeta, César 408
- Zúñiga, Miguel 409

Publicaciones del Archivo General de la Nación

- Vol. I *Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846.* Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1944.
- Vol. II *Documentos para la historia de la República Dominicana.* Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I, C. T., 1944.
- Vol. III *Samaná, pasado y porvenir.* E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945.
- Vol. IV *Relaciones históricas de Santo Domingo.* Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, C. T., 1945.
- Vol. V *Documentos para la historia de la República Dominicana.* Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1947.
- Vol. VI *San Cristóbal de antaño.* E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1946.
- Vol. VII *Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir).* R. Lugo Lovatón, C. T., 1951.
- Vol. VIII *Relaciones.* Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y notas por R. Lugo Lovatón, C. T., 1951.
- Vol. IX *Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850.* Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1947.
- Vol. X *Índice general del «Boletín» del 1938 al 1944,* C. T., 1949.
- Vol. XI *Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América.* Escrita en holandés por Alexander O. Exquemelin, traducida de una famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A. Rodríguez; introducción y bosquejo biográfico del traductor R. Lugo Lovatón, C. T., 1953.
- Vol. XII *Obras de Trujillo.* Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956.
- Vol. XIII *Relaciones históricas de Santo Domingo.* Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957.
- Vol. XIV *Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros. 1795-1802.* Edición de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.

- Vol. XV *Documentos para la historia de la República Dominicana.* Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.
- Vol. XVI *Escritos dispersos. (Tomo I: 1896-1908).* José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
- Vol. XVII *Escritos dispersos. (Tomo II: 1909-1916).* José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
- Vol. XVIII *Escritos dispersos. (Tomo III: 1917-1922).* José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
- Vol. XIX *Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005.* Edición de E. Cordero Michel, Santo Domingo, D. N., 2005.
- Vol. XX *Lilí, el sanguinario machetero dominicano.* Juan Vicente Flores, Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXI *Escritos selectos.* Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXII *Obras escogidas 1. Artículos.* Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXIII *Obras escogidas 2. Ensayos.* Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXIV *Obras escogidas 3. Epistolario.* Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXV *La colonización de la frontera dominicana 1680-1796.* Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXVI *Fabio Fiallo en La Bandera Libre.* Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2006.
- Vol. XXVII *Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la bahía de Samaná.* Manuel Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXVIII *Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño.* Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXIX *Pedro Francisco Bonó. Textos selectos.* Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXX *Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia fundacional del Nuevo Mundo.* Miguel D. Mena, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXI *Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501.* Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXII *La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes en la provincia).* Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXIII *La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de la provincia post Restauración).* Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007.

- Vol. XXXIV *Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII*. Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXV *Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos*. Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXVI *Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922*. Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXVII *Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894)*. Tomo I. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXVIII *Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894)*. Tomo II. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XXXIX *Una carta a Maritain*. Andrés Avelino, traducción al castellano e introducción del P. Jesús Hernández, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XL *Manual de indización para archivos*, en coedición con el Archivo Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño, Jorge Macle Cruz, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XLI *Apuntes históricos sobre Santo Domingo*. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XLII *Ensayos y apuntes diversos*. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XLIII *La educación científica de la mujer*. Eugenio María de Hostos, Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. XLIV *Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546)*. Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. XLV *Américo Lugo en Patria. Selección*. Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. XLVI *Años imborrables*. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. XLVII *Censos municipales del siglo XIX y otras estadísticas de población*. Alejandro Paulino Ramos, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. XLVIII *Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel*. Tomo I. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. XLIX *Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel*. Tomo II. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. L *Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel*. Tomo III. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.

- Vol. LI *Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquulinarias.* Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LII *Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos.* Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LIII *Prosas polémicas 3. Ensayos.* Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LIV *Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana.* José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LV *Relatos de Rodrigo de Bastidas.* Antonio Sánchez Hernández, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LVI *Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LVII *Textos reunidos 2. Ensayos.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LVIII *Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LIX *Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LX *La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961).* Tomo I. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXI *La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961).* Tomo II. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXII *Legislación archivística dominicana, 1847-2007.* Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXIII *Libro de bautismos de esclavos (1636-1670).* Transcripción de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXIV *Los gavilleros (1904-1916).* María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXV *El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones económicas.* Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXVI *Cuadros históricos dominicanos.* César A. Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXVII *Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas.* Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXVIII *Escritos 2. Ensayos.* Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.

- Vol. LXIX *Memorias, informes y noticias dominicanas.* H. Thomasset. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXX *Manual de procedimientos para el tratamiento documental.* Olga Pedierro, et. al., Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXXI *Escritos desde aquí y desde allá.* Juan Vicente Flores. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXXII *De la calle a los estrados por justicia y libertad.* Ramón Antonio Veras (Negro), Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. LXXIII *Escritos y apuntes históricos.* Vetilio Alfau Durán, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXIV *Almoína, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista.* Salvador E. Morales Pérez, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXV *Escritos. 1. Cartas insurgentes y otras misivas.* Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXVI *Escritos. 2. Artículos y ensayos.* Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXVII *Más que un eco de la opinión. 1. Ensayos, y memorias ministeriales.* Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXVIII *Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885.* Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXIX *Más que un eco de la opinión. 3. Escritos, 1886-1889.* Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXX *Más que un eco de la opinión. 4. Escritos, 1890-1897.* Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXXI *Capitalismo y descampesinización en el Suroeste dominicano.* Angel Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXXIII *Perlas de la pluma de los Garrido.* Emigdio Osvaldo Garrido, Víctor Garrido y Edna Garrido de Boggs. Edición de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXXIV *Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el patrimonio documental.* Sofía Borrego, Maritza Dorta, Ana Pérez, Maritza Mirabal, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXXV *Obras, tomo I.* Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXXVI *Obras, tomo II.* Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. LXXXVII *Historia de la Concepción de La Vega.* Guido Despradel Batista, Santo Domingo, D. N., 2009.

- Vol. LXXXIX *Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana.* Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XC *Ideas y doctrinas políticas contemporáneas.* Juan Isidro Jimenes Grullón, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCI *Metodología de la investigación histórica.* Hernán Venegas Delgado, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCIII *Filosofía dominicana: pasado y presente.* Tomo I. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCIV *Filosofía dominicana: pasado y presente.* Tomo II. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCV *Filosofía dominicana: pasado y presente.* Tomo III. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCVI *Los Panfleteros de Santiago: torturas y desaparición.* Ramón Antonio, (Negro) Veras, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCVII *Escritos reunidos. 1. Ensayos, 1887-1907.* Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCVIII *Escritos reunidos. 2. Ensayos, 1908-1932.* Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. XCIX *Escritos reunidos. 3. Artículos, 1888-1931.* Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. C *Escritos históricos.* Américo Lugo, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. CI *Vindicaciones y apologías.* Bernardo Correa y Cidrón. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. CII *Historia, diplomática y archivística. Contribuciones dominicanas.* María Ugarte, Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. CIII *Escritos diversos.* Emiliano Tejera, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CIV *Tierra adentro.* José María Pichardo, segunda edición, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CV *Cuatro aspectos sobre la literatura de Juan Bosch.* Diógenes Valdez, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CVI *Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio en la República Dominicana.* Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CVII *Cristóbal Colón y la construcción de un mundo nuevo. Estudios, 1983-2008.* Consuelo Varela, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

- Vol. CVIII *República Dominicana. Identidad y herencias etnoculturales indígenas.* J. Jesús María Serna Moreno, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CIX *Escritos pedagógicos.* Malaquías Gil Arantegui. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CX *Cuentos y escritos de Vicenç Riera Llorca en La Nación.* Compilación de Natalia González, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXI *Jesús de Gañdez. Escritos desde Santo Domingo y artículos contra el régimen de Trujillo en el exterior.* Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXII *Ensayos y apuntes pedagógicos.* Gregorio B. Palacín Iglesias. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXIII *El exilio republicano español en la sociedad dominicana* (Ponencias del Seminario Internacional, 4 y 5 de marzo de 2010). Reina C. Rosario Fernández (Coord.), edición conjunta de la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXIV *Pedro Henríquez Ureña. Historia cultural, historiografía y crítica literaria.* Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXV *Antología.* José Gabriel García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXVI *Paisaje y acento. Impresiones de un español en la República Dominicana.* José Forné Farreres. Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXVII *Historia e ideología. Mujeres dominicanas, 1880-1950.* Carmen Durán. Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXVIII *Historia dominicana: desde los aborígenes hasta la Guerra de Abril.* Augusto Sención (Coord.), Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXIX *Historia pendiente: Moca 2 de mayo de 1861.* Juan José Ayuso, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXX *Raíces de una hermandad.* Rafael Báez Pérez e Ysabel A. Paulino, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXI *Miches: historia y tradición.* Ceferino Moní Reyes, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXII *Problemas y tópicos técnicos y científicos.* Tomo I. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXIII *Problemas y tópicos técnicos y científicos.* Tomo II. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXIV *Apuntes de un normalista.* Eugenio María de Hostos. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

- Vol. CXXXV *Recuerdos de la Revolución Moyista (Memoria, apuntes y documentos)*. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXXVI *Años imborrables (2^{da} ed.)* Rafael Albuquerque Zayas-Bazán, edición conjunta de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXXVII *El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo*. Tomo I. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXXVIII *El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo*. Tomo II. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXXIX *Memorias del Segundo Encuentro Nacional de Archivos*. Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXX *Relaciones cubano-dominicanas, su escenario hemisférico (1944-1948)*. Jorge Renato Ibarra Guitart, Santo Domingo, D. N., 2010.
- Vol. CXXXI *Obras selectas*. Tomo I, Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXII *Obras selectas*. Tomo II. Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXIII *África y el Caribe: Destinos cruzados. Siglos xv-xix*, Zakari Dramani-Issifou, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXIV *Modernidad e ilustración en Santo Domingo*. Rafael Morla, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXV *La guerra silenciosa: Las luchas sociales en la ruralía dominicana*. Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXVI *AGN: bibliohemerografía archivística. Un aporte (1867-2011)*. Luis Alfonso Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXVII *La caña da para todo. Un estudio histórico-cuantitativo del desarrollo azucarero dominicano. (1500-1930)*. Arturo Martínez Moya, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXVIII *El Ecuador en la Historia*. Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXXIX *La mediación extranjera en las guerras dominicanas de independencia, 1849-1856*. Wenceslao Vega B., Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXL *Max Henríquez Ureña. Las rutas de una vida intelectual*. Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2011.

- Vol. CXXI *Yo también acuso.* Carmita Landestoy, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXIII *Más escritos dispersos.* Tomo I. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXIV *Más escritos dispersos.* Tomo II. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXV *Más escritos dispersos.* Tomo III. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXVI *Manuel de Jesús de Peña y Reinoso: Dos patrias y un ideal.* Jorge Berenguer Cala, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXVII *Rebelión de los capitanes: Viva el rey y muera el mal gobierno.* Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXVIII *De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial.* Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CXXIX *Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1547-1575).* Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CL *Ramón –Van Elder– Espinal. Una vida intelectual comprometida.* Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CLI *El alzamiento de Neiba: Los acontecimientos y los documentos (febrero de 1863).* José Abreu Cardet y Elia Sintés Gómez, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CLII *Meditaciones de cultura. Laberintos de la dominicanidad.* Carlos Andújar Persinal, Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. CLIII *El Ecuador en la Historia* (2^{da} ed.) Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLIV *Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe (1789-1854).* José Luciano Franco, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLV *El Salvador: historia mínima.* Varios autores, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLVI *Didáctica de la geografía para profesores de Sociales.* Amparo Chantada, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLVII *La telaraña cubana de Trujillo.* Tomo I. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLVIII *Cedulario de la isla de Santo Domingo, 1501-1509.* Vol. II, Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLIX *Tesoros ocultos del periódico El Cable.* Compilación de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLX *Cuestiones políticas y sociales.* Dr. Santiago Ponce de León, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

- Vol. CLXI *La telaraña cubana de Trujillo*. Tomo II. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXII *El incidente del trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944*. Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXIII *Historia de la caricatura dominicana*. Tomo I. José Mercader, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXIV *Valle Nuevo: El Parque Juan B. Pérez Rancier y su altiplano*. Constanancio Cassá, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXV *Economía, agricultura y producción*. José Ramón Abad. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXVI *Antología*. Eugenio Deschamps. Edición de Roberto Cassá, Betty Almonte y Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXVII *Diccionario geográfico-histórico dominicano*. Temístocles A. Ravelo. Revisión, anotación y ensayo introductorio Marcos A. Morales, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXVIII *Drama de Trujillo. Cronología comentada*. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXIX *La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939)*. Tomo I, volumen 1. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXX *Drama de Trujillo. Nueva Canosa*. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXI *El Tratado de Ryswick y otros temas*. Julio Andrés Montolío. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXII *La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939)*. Tomo I, volumen 2. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXIII *La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961)*. Tomo III, volumen 5. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXIV *La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961)*. Tomo III, volumen 6. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXV *Cinco ensayos sobre el Caribe hispano en el siglo XIX: República Dominicana, Cuba y Puerto Rico 1861-1898*. Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXVI *Correspondencia consular inglesa sobre la Anexión de Santo Domingo a España*. Roberto Marte, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXVII *¿Por qué lucha el pueblo dominicano? Imperialismo y dictadura en América Latina*. Dato Pagán Perdomo, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXVIII *Visión de Hostos sobre Duarte*. Compilación y Edición de Miguel Collado, Santo Domingo, D. N., 2013.

- Vol. CLXXXIX *Los campesinos del Cibao: Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960.* Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXX *La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949).* Tomo II, volumen 3. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXXI *La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949).* Tomo II, volumen 4. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXXII *De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX): el proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo).* Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXXIII *La dictadura de Trujillo (1930-1961).* Augusto Sención Villalona, San Salvador-Santo Domingo, 2012.
- Vol. CLXXXIV *Anexión-Restauración.* Parte 1. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXXV *Anexión-Restauración.* Parte 2. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXXVI *Historia de Cuba.* José Abreu Cardet, *et. al.*, Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. CLXXXVII *Libertad Igualdad: Protocolos notariales de José Troncoso y Antonio Abad Solano, 1822-1840.* María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CLXXXVIII *Biografías sumarias de los diputados de Santo Domingo en las cortes españolas.* Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CLXXXIX *Financial Reform, Monetary Policy and Banking Crisis in Dominican Republic.* Ruddy Santana, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXC *Legislación archivística dominicana (1847-2012).* Departamento de Sistema Nacional de Archivos e Inspectoría, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCI *La rivalidad internacional por la República Dominicana y el complejo proceso de su anexión a España (1858-1865).* Luis Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCII *Escritos históricos de Carlos Larrazábal Blanco.* Tomo I. Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCIII *Guerra de liberación en el Caribe hispano (1863-1878).* José Abreu Cardet y Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCIV *Historia del municipio de Cevicos.* Miguel Ángel Díaz Herrera, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCV *La noción de período en la historia dominicana.* Volumen I, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013.

- Vol. CXCVI *La noción de período en la historia dominicana. Volumen II*, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCVII *La noción de período en la historia dominicana. Volumen III*, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCVIII *Literatura y arqueología a través de La mosca soldado de Marcio Veloz Maggiolo*. Teresa Zaldívar Zaldívar, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CXCIX *El Dr. Alcides García Lluberes y sus artículos publicados en 1965 en el periódico Patria*. Compilación de Constanancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CC *El cacóismo burgués contra Salnave (1867-1870)*. Roger Gaillard, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCI *«Sociología aldeana» y otros materiales de Manuel de Jesús Rodríguez Varona*. Compilación de Angel Moreta, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCII *Álbum de un héroe. (A la augusta memoria de José Martí)*. 3^{ra} edición. Compilación de Federico Henríquez y Carvajal y edición de Diógenes Céspedes, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCIII *La Hacienda Fundación*. Guaroa Ubiñas Renville, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCIV *Pedro Mir en Cuba. De la amistad cubano-dominicana*. Rolando Álvarez Estévez, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCV *Correspondencia entre Ángel Morales y Sumner Welles*. Edición de Bernardo Vega, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCVI *Pedro Francisco Bonó: vida, obra y pensamiento crítico*. Julio Minaya, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCVII *Catálogo de la Biblioteca Aristides Incháustegui (BAI) en el Archivo General de la Nación*. Blanca Delgado Malagón, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCVIII *Personajes dominicanos. Tomo I*, Roberto Cassá. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCIX *Personajes dominicanos. Tomo II*, Roberto Cassá. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo, D. N., 2013.
- Vol. CCX *Rebelión de los Capitanes: Viva el rey y muera el mal gobierno*. 2^{da} edición, Roberto Cassá. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXI *Una experiencia de política monetaria*. Eduardo García Michel, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXII *Memorias del III Encuentro Nacional de Archivos*. Santo Domingo, D. N., 2014.

- Vol. CCXIII *El mito de los Padres de la Patria y Debate histórico.* Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXIV *La República Dominicana [1888]. Territorio. Clima. Agricultura. Industria. Comercio. Inmigración y anuario estadístico.* Francisco Álvarez Leal. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXV *Los alzamientos de Guayubín, Sabaneta y Montecristi: Documentos.* José Abreu Cardet y Elia Sintés Gómez, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXVI *Propuesta de una Corporación Azucarera Dominicana. Informe de Coverdale & Colpitts.* Estudio de Frank Báez Evertsz, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXVII *La familia de Máximo Gómez.* Fray Cipriano de Utrera, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXVIII *Historia de Santo Domingo. La dominación haitiana (1822-1844).* Vol. IX. Gustavo Adolfo Mejía-Ricart, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXIX *La expedición de Cayo Confites.* Humberto Vázquez García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación, de República Dominicana y la Editorial Oriente, de Santiago de Cuba, Santo Domingo, D. N., 2014.
- Vol. CCXX *De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX): El proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo).* Tomo II, Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2014.

COLECCIÓN JUVENIL

- Vol. I *Pedro Francisco Bonó. Textos selectos.* Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. II *Heroínas nacionales.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. III *Vida y obra de Ercilia Pepín.* Alejandro Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N., 2007.
- Vol. IV *Dictadores dominicanos del siglo XIX.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. V *Padres de la Patria.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.
- Vol. VI *Pensadores criollos.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.

- Vol. VII *Héroes restauradores*. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. VIII *Dominicanos de pensamiento liberal: Españillat, Bonó, Deschamps (siglo XIX)*. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2010.

COLECCIÓN CUADERNOS POPULARES

- Vol. 1 *La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte*. Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. 2 *Mujeres de la Independencia*. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, D. N., 2009.
- Vol. 3 *Voces de bohío. Vocabulario de la cultura taína*. Rafael García Bidó. Santo Domingo, D. N., 2010.

COLECCIÓN REFERENCIAS

- Vol. 1 *Archivo General de la Nación. Guía breve*. Ana Félix Lafontaine y Raymundo González. Santo Domingo, D. N., 2011.
- Vol. 2 *Guía de los fondos del Archivo General de la Nación*. Departamentos de Descripción y Referencias. Santo Domingo, D. N., 2012.
- Vol. 3 *Directorio básico de archivos dominicanos*. Departamento de Sistema Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2012.

Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente, de Sergio Guerra Vilaboy, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora ZZZZZZZZZZ, S.R.L., en febrero de 2015, con una tirada de 1,000 ejemplares.

